

Piñeiro, Diego E. En busca de la identidad. La acción colectiva en los conflictos agrarios de América Latina. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentina.  
Colección Becas CLACSO-ASDI. 2004. ISBN: 987-1183-08-9.

## PRESENTACIÓN

ESTE LIBRO es el resultado de una investigación llevada a cabo durante los años 2001 y 2002 con el apoyo de una beca del Programa Senior de Movimientos Sociales Agrarios instituido por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) con la cooperación de la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI).

El estudio de las organizaciones y los movimientos sociales agrarios en el cono Sur de América Latina gira en torno a algunas ideas centrales desarrolladas a lo largo del libro. La presencia pública en años recientes de una serie de movimientos como el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil, el EZLN en México y el movimiento indígena en Ecuador, para nombrar sólo a los más conocidos y presentes en los medios masivos de comunicación, sugería que estaban ocurriendo cambios en las formas de la acción colectiva. A mediados del siglo XX dominaron la escena los grandes sindicatos y organizaciones agrarias, que jugaron un papel clave en el impulso y el sostén político de las reformas agrarias y los procesos de modernización que ocurrieron en muchos países del continente. Sin embargo, años después estas organizaciones se habían debilitado por su proximidad con el poder estatal, se habían constituido en organizaciones de cúpulas, y en algunos casos la cooptación de los partidos políticos y la corrupción las había

deslegitimizado. En otros casos las dictaduras militares de la década del setenta terminaron por desarticularlas y dispersarlas.

Durante las décadas del setenta y el ochenta, campesinos, pequeños y medianos agricultores y ganaderos, trabajadores rurales y trabajadores sin tierra, con tozudez y determinación, vuelven a ensayar formas de organizarse. En un medio la mayor parte de las veces muy hostil, lo hacen desde abajo, desde el tejido social primario, desde los vecindarios, desde las proximidades, construyendo organizaciones barriales, clubes de madres, policlínicas populares, cooperadoras escolares, asociaciones de productores, comités de base, grupos religiosos, etc., con una diversidad y una riqueza inusitada que no existía en las organizaciones anteriores. Pero los criterios organizativos también cambiaron. No sólo había organizaciones productivas que reivindicaban el acceso a la tierra y al trabajo. También reclamaban como productores el acceso al sistema crediticio, a los canales de comercialización, a la tecnología, etcétera. Como ciudadanos, el acceso a la educación, a la atención de la salud, a la vivienda, al derecho a la expresión, a la participación política. Pero también se organizaban los jóvenes y las mujeres, con sus reclamos específicos. Las poblaciones originarias, despojándose de su carácter de campesinos, irrumpían en la escena con reclamos de carácter étnico. Hoy queda claro que la década del ochenta no fue una “década perdida”. Por el contrario, en ella se sentaron las bases para la reconstrucción de las organizaciones y movimientos sociales agrarios que aparecerán ya en la escena pública durante la década del noventa.

Estas organizaciones y movimientos sociales agrarios son muy distintos de los que habían predominado en épocas pasadas. En primer lugar, porque fueron construidos desde abajo y en general tienen un modelo organizacional en el que las organizaciones de base constituyen el soporte y se integran en la organización mayor. En segundo lugar, porque las organizaciones son profundamente heterogéneas en su constitución social: son los campesinos y los pequeños y medianos agricultores, pero no son sólo ellos: se integran las mujeres y los jóvenes, los trabajadores rurales con o sin tierra, los medianeros, los arrendatarios, los *posseiros*, los desplazados por las grandes obras del Estado, los expulsados de la tierra por el cambio técnico y la concentración del capital. Algunos de ellos no tienen inserción ninguna, y como dijera Castel (1997), son los nuevos “inútiles para el mundo”. A veces ni siquiera son ellos, los campesinos, como cuando la organización responde a otros clivajes: el de género cuando se organizan las

mujeres, y el étnico cuando se organizan los pueblos originarios reclamando un lugar en su sociedad. Sorprende también el repertorio de la acción colectiva, por la imaginación que expresan, por la frescura, por el diseño de alternativas diferentes, porque están a la vanguardia de las acciones y jaquean continuamente a sus adversarios. No se desdén ningún instrumento: desde las ocupaciones de tierras hasta la activa presencia en Internet y en los medios de comunicación masiva, pasando por los campamentos, las marchas, las asambleas, las concentraciones, la negociación con el poder político, etcétera. Las organizaciones y movimientos sociales agrarios actuales saben que la lucha es política y que se libra en varios frentes. Es de destacar el carácter pacífico que tienen la mayoría de estas acciones colectivas a pesar de la violencia que impera en las relaciones sociales y aún la violencia física que frecuentemente se obtiene como respuesta.

Pero si la constitución social de quienes integran las organizaciones y movimientos sociales agrarios es heterogénea, ¿qué es lo que los mantiene unidos? ¿Cuál es la amalgama, el cemento que une a individuos que están en distintas posiciones sociales? ¿Cómo se construye la identidad de aquellos que los integran? Estas han sido las preguntas centrales que nos planteamos con esta investigación y a las cuales se intenta dar respuesta a lo largo de este libro. Sin embargo, el investigador nunca sale de la inmersión que implica una investigación como la que hicimos sólo con la respuesta a las preguntas iniciales. En el transcurso de la misma vi cosas que antes no me imaginaba, comprendí mejor otras que sólo intuía, y en todo caso no salí del proceso de investigación igual que al iniciarlo. Estas ideas y discusiones están sintetizadas en el Capítulo VII de este libro y constituyen un intento de aportar al amplio tema de las organizaciones y movimientos sociales agrarios en nuestro continente.

Cabe explicar al lector las razones de la elección de las organizaciones y movimientos estudiados. Por un lado, queríamos estudiar organizaciones campesinas o de pequeños y medianos productores, es decir aquellas que estaban centradas en reivindicaciones que eran propias de una clase social, aunque reconociendo las limitaciones de este concepto debido a la heterogeneidad interna en su composición social. Por otro lado quisimos estudiar a movimientos que, siendo rurales, reivindicasen la condición de género o la identidad étnica como forma de mostrar los nuevos carriles por los que corren los movimientos del campo en la actualidad.

Con la intención de acotar los márgenes de variabilidad y de hacer empíricamente posible el estudio, redujimos la elección de los posibles casos a los cinco países del cono Sur de América Latina. En esta decisión hubo razones sustantivas. Estos países tienen una historia agraria con algunos puntos en común, a pesar de que también tienen diferencias. Pero tal vez en lo que más se parecen es en haber estado inmersos en procesos políticos, económicos y sociales muy parecidos en la segunda mitad del siglo XX. Estos países adhirieron a los procesos de industrialización sustitutiva de importaciones y a las políticas agrarias modernizadoras de mediados de siglo. Durante las décadas del setenta y el ochenta modificaron sus políticas públicas instrumentando procesos de ajuste estructural, estabilización económica y desregulación estatal. Para hacerlo, los sectores dominantes impusieron dictaduras militares. El retorno a los gobiernos constitucionales, el estímulo a los procesos de integración regional con la construcción del MERCOSUR, la profundización de la apertura comercial y la desregulación estatal, la reinserción en los mercados internacionales, la desindustrialización, el predominio de la agricultura empresarial y de los complejos agroindustriales, etc., signaron un camino común durante la década del noventa. Por lo tanto fue posible analizar las organizaciones y movimientos sociales agrarios en un contexto político, económico y social que guardaba muchas semejanzas y algunas diferencias. En términos de Tarrow (1997) intentamos, de esta manera, reducir la variabilidad del contexto para analizar la estructura de oportunidades en que se desarrollaron los movimientos sociales.

Con estas delimitaciones decidimos estudiar las siguientes expresiones de la acción colectiva en el medio rural: el Movimiento de los Sin Tierra en el Brasil; el movimiento campesino paraguayo en sus dos principales expresiones organizativas, la Federación Nacional Campesina y la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas; el movimiento mapuche en Chile; el Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha en la Argentina; y la Mesa Coordinadora de Gremiales Agropecuarias en el Uruguay. El estudio de cada una de estas organizaciones o movimientos ocupa un capítulo del libro, extendiéndose entonces del Capítulo II al Capítulo VI.

Para realizar el estudio de los procesos de acción colectiva arriba mencionados fue primeramente necesario construir las herramientas teóricas y metodológicas para analizarlos. Por ello en el Capítulo I de este libro se desarrolla una discusión sobre las principales vertientes teóricas de la acción colectiva, que nos permite realizar una opción

teórica y una construcción metodológica que aplicamos para el estudio de los cinco casos. Haber analizado todos los casos con la misma metodología es lo que habilita a una comparación entre los mismos que se realiza en el capítulo final.

En todos los casos los estudios fueron realizados a partir de material secundario. La tarea de recolección fue realizada personalmente, pero en tres casos conté con el apoyo de ayudantes contratados en cada país, cuyos nombres figuran al pie de cada estudio. En dos casos se trabajó también con información primaria recolectada por el autor: en el caso de Uruguay, donde por razones obvias el estudio básico es de mi autoría, y en el caso de Paraguay, en que debí realizar una visita a Asunción y mantener varias entrevistas con líderes campesinos, con técnicos próximos a las organizaciones campesinas y con académicos para poder captar el proceso en toda su magnitud. En el caso del estudio realizado en Argentina del Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha, dada mi escasa versación en la cuestión de género, el artículo ha sido escrito en co-autoría con mi compañera, María Elena Lournaga, quien también realizó la tarea de recolección de información en Buenos Aires. Con ella compartimos muchas horas de discusión en torno a la investigación, y me aportó muchas veces miradas diferentes a un tema que permite muchas lecturas.

Finalmente quisiera agradecer a todas aquellas personas e instituciones que con su apoyo, su estímulo, su aporte generoso de conocimientos, han hecho posible esta investigación y la han hecho disfrutable.

En Paraguay conté con la diligente colaboración de María de la Paz Bareiro, del Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos. En dicha institución también conté con el apoyo de su Director, el Dr. Luis Galeano, y del personal de la biblioteca de dicha institución para realizar las búsquedas bibliográficas. Tomas Palau, Carlos Bareiro, Ramón Fogel, Quintín Riquelme, Dionisio Gauto y Víctor Bareiro me brindaron sus conocimientos del movimiento campesino y soportaron largas entrevistas. Los dirigentes campesinos Marcial Gómez, de la Federación Nacional Campesina, y Belarmino Balbuena, de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, pudieron hacerme un lugar en sus agendas y mantuvieron largas entrevistas aportándome su conocimiento y su perspectiva como principales actores del movimiento campesino.

En el caso de Argentina debemos agradecer a la Directora del Grupo de Estudios Rurales, la Profesora Norma Giarracca, quien

generosamente puso a nuestra disposición la documentación reunida sobre el MMAL. A ella y a Karina Bidaseca también debemos agradecerles las conversaciones que mantuvimos sobre esta organización, así como a Ruth Corcuera, asesora del MMAL, que con su aguda percepción nos orientó en algunas ideas claves para comprender las motivaciones de estas mujeres rurales.

Para el caso de Brasil debo agradecer la colaboración inicial prestada por mi ayudante de investigación en el departamento de Sociología, la Lic. Carina Nocetti, en la búsqueda de información en Internet preparatoria de mi visita a la Universidad Federal de Río Grande do Sul. En esta Universidad debo agradecer la colaboración prestada por el Director del Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas, el Dr. José Vicente Tavares dos Santos, quien además de honrarme con su amistad me facilitó el acceso a la Biblioteca del Instituto, me abrió su nutrida biblioteca personal y me orientó en largas conversaciones sobre el fascinante proceso de construcción de las organizaciones sociales rurales en su país. También debo agradecer al Profesor Zander Navarro una provechosa entrevista y el haberme facilitado un artículo suyo sobre el MST que todavía no había visto la luz.

En Uruguay tengo que agradecer al Lic. Emilio Fernández, que me ayudó con las ocho entrevistas a dirigentes de la MCGA, y que construyó la cronología de acciones de 1999 a 2001 a partir de información periodística y documentos originales de la MCGA. También debo agradecer a los ocho dirigentes de la MCGA que fueron entrevistados, pero especialmente al Dr. Roberto Xavier y a Ubaldo Delgado, que aportaron su entusiasmo y sus conocimientos detallados de la materia que estábamos estudiando para contribuir a que pudiésemos construir una imagen objetiva de la MCGA.

Para el estudio del movimiento mapuche en Chile conté con la eficaz ayuda de la Lic. Patricia Troncoso y la colaboración desinteresada del Profesor Claudio González Parra de la Universidad de Concepción.

Al departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y al Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Agronomía, los dos lugares donde trabajo como docente e investigador, debo agradecerles haberme permitido concentrar mis esfuerzos en esta investigación. Agradezco igualmente al equipo de bibliotecarias de la Biblioteca del Departamento de Sociología, que en todo momento me apoyaron en la búsqueda de bibliografía para poder cumplir con mis objetivos.

Aunque ellos no lo sepan, tengo una deuda con Jose Bengoa y con Bernardo Mançano Fernandes. El primero es autor de tres libros sobre los mapuches y la cuestión indígena que fueron mi guía para penetrar en un tema que me era absolutamente desconocido. Por su estilo y su perspicacia, estos libros me instruyeron y me permitieron disfrutar de horas de una amena lectura. El segundo es autor de dos documentados libros que, por transmitir la perspectiva de la organización social, fueron mi referencia básica para el estudio del MST. En ambos casos espero haber dejado claro, ya que los cito frecuentemente, mi deuda intelectual con ellos.

Quisiera agradecer a CLACSO por haber instituido este Programa de Becas de Investigación que permite a investigadores latinoamericanos reflexionar sobre la realidad de su continente sin los sobresaltos económicos y las discontinuidades que son comunes en nuestras instituciones académicas. A Bettina Levy, quien supervisa el Programa desde CLACSO, que tuvo la paciencia para esperar a que esta investigación estuviese terminada. A ASDI, por el apoyo económico que hizo posible la creación del Programa de CLACSO, y mediante el mismo, el desarrollo de esta investigación.

Finalmente quiero agradecer a mi familia, a María Elena, ahora en rol de esposa, y a mi pequeño Agustín, a mis hijos y nietos, el aliento en los momentos difíciles que tiene cualquier investigación y el apoyo afectivo sin el cual la tarea intelectual no hubiese sido posible.

Montevideo, agosto de 2003

CAPÍTULO I  
PRIMERA PARTE

EL DESARROLLO AGRARIO  
LATINOAMERICANO Y LAS FORMAS  
DE LA ACCIÓN COLECTIVA

EN LA PRIMERA PARTE de este capítulo se realizará una revisión de las distintas etapas por las que pasó el desarrollo agrario latinoamericano y se discutirán las distintas formas que fue adquiriendo la acción colectiva de los grupos subordinados del campo<sup>1</sup>. La primera etapa es el período que se conoce como la modernización conservadora y toma desde la última mitad del siglo XIX hasta 1930, reconociendo los antecedentes históricos que en la época colonial dieron lugar a la matriz agraria predominante. La acción colectiva en este período ha sido conceptualizada por algunos autores como de carácter pre-político. La segunda etapa abarca las décadas del '40 al '60 y se conoce en América Latina como el período de sustitución de importaciones o de "crecimiento hacia adentro". La acción colectiva rural en este período ya adquiere un marcado propósito político. La última etapa es la que abarca las tres décadas del siglo XX. La década del setenta signada por la ruptura del orden institucional y por el disciplinamiento de la sociedad impuesto por la fuerza es la bisagra que permite articular

---

<sup>1</sup> El autor quisiera añadir que el recorrido histórico que se realizará provendrá de una mirada que intenta ser latinoamericana, pero dados el tema y las limitaciones propias, posiblemente tenga un énfasis mayor en el Cono Sur del continente.



con un nuevo orden económico social y político que cubre las últimas dos décadas. Los procesos de acción colectiva que se estudian en este libro transcurren en este período, y su accionar será desplegado en los cinco capítulos siguientes.

## PRIMERA ETAPA: HASTA 1930

Cuando españoles y lusitanos conquistaron las nuevas tierras americanas, se encontraron con un vasto territorio poblado por civilizaciones indígenas. Si bien el principal interés estuvo colocado en la explotación de los metales preciosos, de acuerdo con las ideas mercantilistas de la época, la explotación de las tierras no tardó en constituirse en la segunda actividad en importancia. El objetivo inicial de la explotación de la tierra fue proveer alimentos a la creciente población de origen europeo y también a los indígenas que eran obligados a trabajar en las minas. También cobró importancia la producción de animales de tiro, con el fin de trasladar la producción minera hasta los puertos de salida hacia Europa.

El principal problema con que se encontraron los conquistadores europeos fue la escasez de mano de obra para realizar los durísimos trabajos en las minas y para cultivar la tierra. La población indígena, allí donde la había, se resistió de muchas maneras a la sujeción laboral y fue, además, rápidamente diezmada por los agotadores trabajos y por las enfermedades traídas por los conquistadores. Las formas de organización del trabajo de la tierra reflejaron esta escasez de mano de obra servil.

El sistema de producción más importante por su extensión y perdurabilidad fue la *hacienda*. Este sistema de organización de las relaciones sociales y de dominación política consistía en la propiedad extensiva de la tierra por europeos y criollos terratenientes, y la sujeción de la fuerza de trabajo indígena y campesina por sus vínculos con la misma. En primer lugar hubo un proceso de apropiación de las tierras de las comunidades indígenas por los terratenientes, quienes luego permitieron que los indígenas despojados se asentaran en las tierras de la hacienda pero a cambio de aportar trabajo en las tierras hacendales. La hacienda producía para los mercados internos. Este sistema fue predominante en América Latina y de él se derivó el complejo latifundio-minifundio característico del siglo XIX, pero que persistió en muchos países hasta mediados del siglo XX.

El sistema hacendal dio lugar a una estructura social propia, constituida por el hacendado en el tope de la escala, los mestizos con tierras propias, los mestizos con tareas de control en las haciendas, y los indígenas semiesclavos en tierras hacendales. Esta estructura social dio lugar a profundas diferencias de clase, a la escasa circulación del dinero ya que el pago era en productos, a un fuerte poder político de los hacendados, y a relaciones de paternalismo, compadrazgo y peonaje que tiñeron la vida social y política del continente (Chonchol, 1994).

En diversas partes de la América tropical se desarrolla el sistema de *plantación*. Este tendrá un gran desarrollo en Brasil y en algunas otras partes del continente como Venezuela, Colombia, la costa del Perú y partes de Centro América, principalmente para el cultivo de la caña de azúcar, del algodón, y más tarde del banano y del café. Este sistema será también aplicado en el sur de Norteamérica en las colonias inglesas, especialmente para el cultivo del algodón. La plantación como sistema consiste en una gran propiedad rural, en la cual con aplicación de fuertes sumas de capital y con trabajo esclavo (generalmente esclavos de origen africano), en una región tropical, con propietarios de origen europeo, se produce un cultivo cuyo producto es destinado principalmente a la exportación.

Este sistema de producción dio lugar a sociedades con fuertes diferencias sociales, sumamente conflictivas, en cuyo pináculo estaban los propietarios o concesionarios de las tierras, generalmente europeos, y en la base la población esclava de origen africano, mientras en el medio apenas medraban débiles estratos de pequeños propietarios, trabajadores calificados de la plantación y artesanos. Los recursos naturales eran deteriorados por el monocultivo que se trasladaba hacia nuevas tierras fértiles cuando se habían agotado las primeras. La seguridad alimentaria de la población era un problema serio debido a que las tierras eran empleadas en el cultivo de exportación, habiendo poco interés por parte de los propietarios en emplearlas en la producción de alimentos para el mercado interno, prefiriendo más bien importar alimentos, creando así una aguda dependencia alimentaria. Finalmente, la producción para la exportación a mercados generalmente europeos creaba una fuerte dependencia del sistema de plantación de las fluctuaciones de aquellas economías y de los vaivenes de los precios en el mercado internacional (Chonchol, 1994).

En las pampas argentinas, en las planicies onduladas del Uruguay y en el sur del Brasil, no predominó ninguno de estos dos sistemas. Con una población indígena escasa, nómada y rápidamente diezma-

da, las vastas planicies fueron pobladas tardíamente, en el siglo XVIII, con población española a la que se le repartieron tierras en “chacras” y en “estancias”. Las primeras, en el entorno de los pueblos, pequeñas parcelas para producir los alimentos que precisaban sus habitantes. Las segundas, vastas extensiones en las que tierras y animales vacunos en estado semi-salvaje eran un solo patrimonio, y que producían el tasajo para exportar a las plantaciones del norte del continente y del sur de Estados Unidos y cueros vacunos para Europa. La estancia ganadera ocupó escasísima mano de obra y por ello dio lugar a un sistema de producción extensivo y a una geografía signada por los grandes espacios y la baja densidad de población, a la que se denominará sistema de estancia.

En el último tercio del siglo XIX se produce una reorganización de las formas de producción agrarias en América Latina que se conoce como la etapa de la modernización conservadora (Chonchol, 1994). El motor de este proceso estuvo constituido por el desarrollo industrial europeo, que generó una demanda creciente de materias primas para abastecer a las nacientes industrias (algodón y lanas para la industria textil, minerales para la industria metalúrgica) y de alimentos para abastecer a la población trabajadora. Las potencias industriales, con Inglaterra a la cabeza, inician una etapa de conquista de nuevos territorios y de nuevos mercados para sus productos. En América Latina, luego de algunos intentos frustrados de conquistar los territorios de la corona española (como las invasiones inglesas al Río de la Plata), se opta por la alianza con las oligarquías locales, propietarias de las tierras, desarrollando en cambio el comercio, los medios de transporte y el sistema bancario, lo cual a la larga también les permitirá dominar la producción agrícola.

La costa atlántica del continente será el foco de atención privilegiada. Una de las regiones que menos se había desarrollado hasta el momento, la región del Plata, con sus fértiles llanuras, se transformará en la región de más rápido crecimiento en el período, multiplicando por diez el crecimiento de sus productos. Las inversiones inglesas se dirigen a la construcción de ferrocarriles, puertos, medios de comunicación, desarrollo de la energía eléctrica, inversiones bancarias, etc., con el fin de incentivar y permitir el manejo de las crecientes cosechas de cereales y de la producción de carne y lana. La oligarquía local, propietaria de extensas fracciones de tierra, no contaba sin embargo con los brazos necesarios para hacer producir sus tierras y para levantar las cosechas. Ello se resolvió con la masiva inmigración de pobla-

ción europea. La costa atlántica del continente recibió entre 1880 y 1914 alrededor de 12 millones de inmigrantes (Chonchol, 1994).

Si bien estos inmigrantes fueron atraídos por la posibilidad de conseguir tierras, en realidad muy pocos de ellos lo lograron, debido a que las oligarquías locales ya se habían apoderado de ellas en la primera mitad del siglo. Sin embargo, desarrollaron diversos sistemas de aparcerías y medierías en las que el propietario ponía las tierras, el inmigrante sus brazos, y el capital era proporcionado en montos variables por uno u otro variando con ello la proporción en que se repartían los beneficios de la producción (Scobie, 1968). La gran mayoría de los inmigrantes terminaron siendo asalariados transitorios que se ocupaban de las más rudas tareas agrícolas, como la cosecha de los cereales, para luego volver a emigrar hacia las ciudades o regresar a Europa. Fue con estos sistemas que la Argentina logra hacia las primeras décadas del siglo XX cultivar 14 millones de hectáreas con cereales.

En Brasil la gran transformación ocurre con el cultivo del café. Esta planta había sido introducida mucho antes, pero recién durante el siglo XIX se transforma en un importante cultivo de exportación, impulsada por la demanda de las crecientes capas adineradas de la población europea. Los cafetales se expandieron inicialmente en el Estado de Río de Janeiro para luego extenderse a los estados de San Pablo, Minas Gerais y Espírito Santo. Hacia mediados del siglo XIX ya las exportaciones de café superan a las de azúcar. En su explotación se emplea tanto a esclavos de origen africano como a trabajadores libres, y hacia el fin de siglo crecientemente a inmigrantes europeos.

En la costa del Pacífico la modernización conservadora ocurre con las plantaciones peruanas de caña de azúcar y de algodón. Como las comunidades campesinas indígenas de la sierra impedían la migración de sus miembros para trabajar en las plantaciones de la costa, se trajo a trabajadores de origen asiático en un sistema de semiesclavitud por deudas adquiridas durante el viaje.

En el Caribe, tanto en los países de América central como en Venezuela la forma de inserción de la agricultura en el mercado internacional pasó por los cafetales y por la plantación bananera. Es particularmente para el desarrollo de este último cultivo que los gobiernos centroamericanos conceden generosas porciones de tierras, a cambio de la construcción de ferrocarriles y puertos, a compañías extranjeras principalmente norteamericanas. Para trabajar en ellas se empleaba

población de origen africano traída de Jamaica, y también trabajadores locales que emigraban de las zonas centrales hacia la costa en busca de trabajo. La historia de feroz explotación de la fuerza de trabajo de las compañías cafetaleras y bananeras y de su interferencia en el poder del Estado es suficientemente conocida y ha sido reflejada por la novelística de la época (Chonchol, 1994).

En resumen, los casos mencionados, con los cuales no se pretende ser exhaustivo, son ilustrativos de la reinserción que sufre el agro latinoamericano en la economía mundial a partir del desarrollo industrial europeo. Se consolida el papel de suministrador de materia prima agrícola y de alimentos baratos para la población europea, sin que para ello se altere el sistema latifundiaro sobre el que descansaba el sistema de dominación política de la oligarquía local. La ingente demanda de fuerza de trabajo que representó la nueva inserción en los mercados mundiales de la agricultura latinoamericana constituyó un importante obstáculo para las clases propietarias. Ante la negativa de la población indígena a incorporarse a un régimen de cruda explotación laboral refugiándose en sus comunidades, o ante el déficit de trabajadores en ciertos espacios territoriales caracterizados por el vacío poblacional, y ante la imposibilidad histórica de continuar con el régimen esclavista, no se vaciló en recurrir a soluciones drásticas. En muchos casos los latifundistas se expandieron sobre las tierras de las comunidades campesinas, apropiándose de tierras valorizadas por los nuevos cultivos y expulsando población campesina que ahora sólo puede ofrecerse como mano de obra. En otros casos se recurrió a la importación de trabajadores de las islas caribeñas, o la importación de trabajadores chinos, japoneses o hindúes en carácter de semiesclavitud por deudas. Pero uno de los mayores contingentes de trabajadores fue importado de Europa mediante la promesa de la concesión de tierras para trabajar, que pocas veces se cumplió. La mayoría de los trabajadores europeos fueron asalariados temporales, otros lograron insertarse como medieros o aparceros en el desarrollo de los nuevos productos de exportación, mientras que unos pocos accedieron finalmente a la tierra mediante planes de colonización de tierras incultas.

## LA ACCIÓN COLECTIVA

Terminadas las guerras de la independencia en la primera mitad del siglo XIX, la mayoría de los países de América Latina se sumergen en guerras intestinas entre partidarios de regímenes del libre-cambio y

partidarios de regímenes económicos proteccionistas. Unitarios y federales en Argentina, colorados y blancos en Uruguay, liberales y conservadores en Paraguay, etcétera. Los primeros sostuvieron procesos de modernización vinculando el destino de los nuevos países al papel de proveedores de materias primas para los países europeos que estaban en pleno proceso de industrialización. Los segundos sostenían la necesidad de proteger y desarrollar una incipiente manufactura nacional. La guerra de la Triple Alianza, en la cual los ejércitos de Argentina, Uruguay y Brasil, con la ayuda y la interferencia de la corona británica, derrotaron y destruyeron el incipiente proceso de desarrollo independiente del Paraguay, es tal vez uno de los mejores ejemplos de la lucha entre estas tendencias ideológicas y políticas. El revisionismo histórico ha sugerido que las guerras civiles de mediados del siglo no fueron solamente luchas entre facciones de la oligarquía, sino que detrás de los caudillos que defendían el proteccionismo, en las montoneras gauchas, se alineaban los sectores populares rurales.

Pero esa lucha, compendiada en la celebre dicotomía sarmientina entre civilización y barbarie, fue ganada por aquellos que propugnaban una modernización dependiente vinculada al desarrollo de la agricultura como proveedora de materias primas, mientras estimulaban las inversiones europeas en infraestructuras y servicios. Hacia fines del siglo XIX, y durante las tres primeras décadas del siglo siguiente, América Latina conoce un importante desarrollo vinculado a este modelo político y económico. Los procesos de acción colectiva sin embargo prosiguieron, ya no como guerras internas, sino como manifestaciones parciales de diversos grupos y sectores subordinados que se rebelaban contra las condiciones de dominación impuestas en especial por las clases terratenientes. La revolución mexicana de la segunda década del siglo XX parece haber sido la única excepción. Pero en muchos países y regiones levantamientos campesinos y revueltas populares en el campo jalaron el proceso de modernización conservadora descrito más arriba. No es el objeto de este libro ni de este capítulo hacer una revisión o una enumeración de estos procesos de acción colectiva. Pero sí contribuye al objetivo del libro detenerse en el debate acerca de si estos movimientos fueron formas pre-políticas o si por el contrario fueron formas políticas de la acción colectiva.

En un conocido artículo sobre la acción colectiva, Aníbal Quijano propone llamar pre-políticos a los movimientos campesinos latinoamericanos anteriores a la década del treinta, porque no se proponían modificar las relaciones de poder y la estructura social vigente

en sus sociedades, sino más bien modificar aspectos parciales de la misma<sup>2</sup>. A su vez categoriza a estos movimientos en movimientos mesiánicos, bandolerismo social, movimientos racistas y movimientos agraristas tradicionales o incipientes. Los primeros son movimientos que pretenden modificar las relaciones entre el hombre y lo sagrado y tienen un marcado carácter místico y religioso. En los segundos, la acción de los campesinos tiene una clara finalidad punitiva dirigida hacia aquellos grupos sociales o personas que oprimen a los campesinos: los terratenientes, los comerciantes, las autoridades locales. Los movimientos racistas son aquellos en los que la reivindicación está dirigida contra un estamento dominante que los oprime por razones derivadas de las diferencias étnicas, pero sin que hubiese reivindicaciones dirigidas a la modificación de la estructura social. Los movimientos agraristas tradicionales persiguen finalidades de reforma social circunscriptos a aspectos limitados de la vida social o de las relaciones de poder. Quijano les reconoce a estas formas pre-políticas la capacidad de evolucionar hacia las formas políticas de lucha campesina que serán propias de la etapa siguiente (Quijano, 1967).

En un artículo posterior incluido en un vasto estudio dirigido por González Casanova (1985) sobre la historia política de los campesinos latinoamericanos, José de Souza Martins, sin pretender invalidar la distinción entre movimientos pre-políticos y movimientos políticos de los campesinos, nos previene acerca de una tendencia de los intelectuales y políticos de izquierda a preconcebir a la acción colectiva campesina como movimientos pre-políticos. En la base de esta forma de ver los movimientos se halla una cierta incomodidad del marxismo con los campesinos. Por un lado, por la dificultad de ubicarlos en un esquema de clases. Por otro lado, por la dificultad de atribuirles la posibilidad de constituir una clase en sí, capaz de una acción dirigida a modificar las relaciones sociales de producción y con ellas las relaciones de poder (Martins, 1985).

Martins analiza dos movimientos mesiánicos y dos casos de bandolerismo social en el Brasil para sostener su hipótesis de que aún las formas de acción colectiva pueden ser entendidas como formas de cuestionamiento a las relaciones de poder. El primer caso estudiado es el de la rebelión de Canudos en el Estado de Bahía. Un antiguo beato

---

<sup>2</sup> Quien a su vez se basa, en parte, en las categorías creadas por Eric J. Hobsbawm en su libro *Primitive Rebels. Studies in Archaic Forms of Social Movements in the 19th and 20th Centuries*, The Norton Library, New York, 1959.

llamado Antonio Consejero funda una población denominada Belo Monte que llegó a tener 30 mil habitantes. Este movimiento fue duramente combatido con el pretexto de que eran monárquicos, y finalmente exterminado por el ejército entre 1896 y 1897. El segundo movimiento ocurre en el sur en el límite disputado entre los estados de Paraná y de Santa Catarina. En esas tierras se instala el monje José María acompañado por sus seguidores, campesinos desplazados y campesinos sin tierra, y esto es interpretado por los paranaenses como una invasión de campesinos del Estado vecino. Atacados por las milicias del Estado de Paraná, el monje José María es muerto pero sus adeptos consiguen derrotar a las tropas y apoderarse de las armas. Los campesinos se retiran hacia sus refugios y durante cuatro años logran sobrellevar una guerra en la que más de veinte mil de ellos se verán involucrados. En sus tierras llevan una vida comunitaria e igualitaria y alientan la creencia del regreso de aquellos que son muertos en el combate. De esta manera la guerra se hace inevitable y prolongada.

Martins hace ver que en realidad ambos movimientos reúnen a campesinos que han sido desplazados por “coroneles” y latifundistas que se apropiaron de sus tierras. Al crear sociedades de iguales con reglas diferentes a las instauradas por aquellos que los oprimían, los campesinos no sólo se rebelaban en busca de tierras, sino que también cuestionaban seriamente el orden instituido. Si se declaraban monárquicos era porque nada bueno les venía de la naciente República. En este sentido, dice de Souza, los movimientos mesiánicos también eran políticos.

Una reflexión similar se desprende de su análisis del bandolerismo social. Toma dos ejemplos: el de Antonio Silvino y el de Lampião, que desarrollan su accionar en el *sertão* en las primeras tres décadas del siglo XX. Ambos actuaban por vengar afrentas y violencias recibidas por su familia. Silvino tenía como norma no atacar a campesinos ni trabajadores, y distribuía parte de lo que robaba en haciendas y comercios entre los pobres. Lampião no distinguía claramente entre ricos y pobres, tuvo la protección de hacendados, y con frecuencia se alquilaba a unos “coroneles” para atacar a otros. Ambos, Silvino y Lampião, son arquetipos del *cangaçeiro*: un campesino expulsado de sus tierras, agraviado por hacendados o comerciantes, y contra quienes dirigía su venganza. Ambos casos muestran, según de Souza, que los *cangaçeiros* constituían un cuestionamiento al poder de los coroneles, y en este sentido su accionar también podría ser considerado político.



La historia de dominación étnica de nuestro continente ha dado innumerables ejemplos de luchas en las que predominaban las cuestiones de raza. Uno de los casos más conocidos es la creación de pueblos libres por parte de esclavos de origen africano en las tierras del norte del Brasil. Como ya se mencionó más arriba, el sistema de producción de la plantación azucarera fue el principal recurso económico durante el periodo colonial lusitano. Se estima que en el siglo XVIII había 2.500 ingenios azucareros en las costas atlánticas del Brasil. Para realizar el trabajo en dichos ingenios se importaron tres millones y medio de esclavos durante el periodo colonial. Dadas las terribles condiciones de trabajo de estos esclavos, cuando podían huían hacia la selva, hacia el interior del país escasamente habitado, y allí constituían poblados independientes –conocidos como *quilombos*– regidos por sus propias reglas, dedicados a la agricultura de subsistencia. Estos poblados eran frecuentemente atacados por el ejército y por milicias privadas de los ingenios, que no sólo querían recuperar los hombres de su propiedad, sino también castigar el mal ejemplo que constituían para el disciplinamiento de la fuerza de trabajo. El más conocido fue el *quilombo* de Palmares, que sobrevivió durante un siglo y llegó a tener varios miles de habitantes.

Uno de los casos estudiados en profundidad en este libro, el del movimiento de los mapuches en Chile, tiene durante la primera mitad del siglo XX las características de un movimiento “racista” como sugiere la categorización de Quijano. Los mapuches del sur de Chile tuvieron durante la primera mitad del siglo XX una política contradictoria de integración y de resistencia que en realidad es la expresión de las distintas tendencias que convivían al interior de la etnia. En este sentido tanto integración como resistencia resumen la tragedia de la dominación étnica de este pueblo por los chilenos. Pero, como se verá luego, tanto desde una posición como desde la otra los mapuches hicieron considerables esfuerzos por participar de la vida política de la sociedad chilena.

En resumen, el proceso de modernización conservadora que ocurre en la agricultura latinoamericana entre las últimas décadas del siglo XIX y las tres primeras décadas del siglo XX dio lugar a diversas formas de expresión de los grupos subalternos para resistir la opresión y la dominación. Si bien Aníbal Quijano los categoriza como movimientos pre-políticos, tal vez una mirada más abierta a las motivaciones últimas de los movimientos descubra su potencial político.

En la etapa siguiente las motivaciones de los movimientos serán más claramente políticas.

## EL PERÍODO DE DESARROLLO HACIA ADENTRO

La crisis iniciada en 1930 no fue solamente económica y financiera. Los procesos de reorganización de las zonas de influencia de las grandes potencias terminan de concretarse con los acuerdos de Yalta, con los que se da fin a la Segunda Guerra Mundial y se instaura un nuevo orden político. La guerra fría divide el mundo y tensa las relaciones entre los dos grandes bloques. Pero también el esfuerzo bélico que tuvieron que hacer los países capitalistas de Occidente facilitó la aparición en América Latina de gobiernos que ensayaron vías económicas alternativas. Coincidiendo con las teorías económicas de la CEPAL acerca del intercambio comercial desigual, gobiernos generalmente de tendencias populistas inician experiencias de industrialización que buscan reemplazar las importaciones de productos manufacturados. Este proceso a su vez hace crecer y cohesiona a una burguesía industrial autóctona, que cobrará una considerable importancia económica y política.

Es necesario recordar que los medios técnicos de producción en el agro que habían experimentado importantes cambios en los países desarrollados se incorporaron en forma mucho más lenta en América Latina. La tractorización y la mecanización se expandieron recién en la década del cincuenta. La industria química ligada a la agricultura también había desembarcado en el continente, y los abonos inorgánicos y los diversos pesticidas se encontraban en el mercado. La industria semillera estaba dando un paso gigantesco con la incorporación de los híbridos. Todas estas tecnologías estaban disponibles pero el latifundio se interponía con obstinación (Gómez y Pérez, 1979).

El complejo latifundio-minifundio, forma derivada del viejo sistema hacendal, significaba un impedimento para el desarrollo del capitalismo industrial y agrario. Éste capta renta que no se reinvierte, y al impedir la reinversión no es un demandante de productos industrializados; retiene mano de obra campesina a lo interno de la hacienda, con lo cual deprime la circulación del dinero y limita la creación de un mercado de trabajo rural; impide que los campesinos y trabajadores del campo sean consumidores de bienes industrializados, y finalmente impide la migración campo-ciudad que era necesaria para la creación de un amplio mercado de trabajo urbano.

En consecuencia, en varios países de América Latina emergen alianzas dirigidas a fracturar el poder terrateniente. A veces es la burguesía industrial y urbana la que se alía con los campesinos. En otras ocasiones, especialmente cuando la burguesía local era débil, ese papel lo cumplían las Fuerzas Armadas y entonces fueron las alianzas militares-campesinos las que condujeron un proceso revolucionario (o no) de reestructura de la propiedad de la tierra (por ejemplo en Bolivia en 1952, y posteriormente la revolución liderada por Velasco Alvarado en el Perú.). En Chile, donde el poder terrateniente era muy fuerte, el proceso fue mucho más lento, y si bien se inició con la tímida reforma de la Democracia Cristiana, fue luego profundizado por el gobierno socialista de Salvador Allende. Lo cierto es que en las décadas del cuarenta al sesenta en casi todos los países del continente latinoamericano se crearon fuertes organizaciones campesinas que tuvieron un papel relevante en las revueltas políticas de esos turbulentos decenios y en los procesos de reforma agraria consiguientes.

No fue ajeno a todo ello el hecho de que a principios de la década del sesenta Estados Unidos pone en marcha la Alianza para el Progreso, plan destinado a restar fuerzas a las reformas agrarias de corte izquierdista (como la que recientemente había ocurrido en Cuba) anticipándose y estimulando la realización de reformas agrarias que redistribuían la tierra, eliminando el poder del latifundio pero manteniendo firmes y vigentes los principios de la propiedad privada y del desarrollo agrario capitalista.

En cuatro de los cinco países de los cuales se ocupa este libro, el proceso de transformación de la propiedad territorial fue distinto. En Uruguay y en Argentina (y cuando se habla de Argentina se está haciendo referencia a la zona pampeana), los grandes propietarios de tierras, los “estancieros”, se modernizaron ellos mismos transformándose en activos empresarios agropecuarios, insertándose en los mercados de tierras, de productos, de mano de obra y de capital. La transformación por lo tanto ocurrió sin necesidad de cambios estructurales y no hubo reforma agraria. A lo sumo, la creación de un tímido proceso de colonización dirigido por entes estatales. En Paraguay, en cambio, la revolución burguesa nunca se llevó cabo y la descompresión de la conflictiva situación del agro se produjo por la apertura de amplias áreas de colonización haciendo avanzar la frontera agrícola. Brasil posiblemente sea una situación que haya combinado las dos formas: modernización de una parte del empresariado agrícola (y por otra parte permanencia del latifundio), y apertura de nuevas tierras para la

colonización campesina. Lo concreto es que en ninguno de los cuatro países se llevó a cabo una reforma agraria entre 1940 y 1960 a pesar de las presiones internas y externas para que se concretasen.

Hacia la década del sesenta este modelo ya mostraba signos de agotamiento. El proceso de industrialización se encontraba estancado, la producción agraria volcada a los mercados internos había encontrado sus límites, los procesos inflacionarios corroían los ingresos de los asalariados y con ello la base de sustentación del modelo. Hacia la década del setenta comienza un proceso de liberalización económica, apertura de fronteras, ajuste económico y desregulación estatal que modificará profundamente las economías y las sociedades de los países latinoamericanos.

### LA ACCIÓN COLECTIVA

Para Quijano (1967), luego de la crisis del '30 las movilizaciones campesinas en América Latina cobran un cariz distinto a las de la etapa previa. Según su tipología, los movimientos campesinos ya serán movimientos políticos, distinguiendo entre el agrarismo reformista y el agrarismo revolucionario. En el primer tipo distingue dos variantes: en la primera variante del agrarismo reformista encuadra aquellos procesos dirigidos a modificar aspectos negativos en las relaciones de trabajo, en los que el instrumento de lucha será la huelga. Esta modalidad será más importante en aquellos lugares en que las haciendas han evolucionado a formas asalariadas de trabajo o donde el sistema agrario predominante es el de plantación. La segunda variante surge cuando los movimientos campesinos se dirigen a modificar predominantemente la relación con la tierra pero sin proponerse necesariamente la modificación de las relaciones sociales de la sociedad agraria. Finalmente Quijano elabora la categoría de agrarismo revolucionario presentándola como una situación aún incipiente y que apenas se distingue del agrarismo reformista. La categoría se define como aquellos movimientos campesinos que luchan no sólo por la transformación de las relaciones de propiedad de la tierra sino por la modificación de toda la estructura de poder, la redistribución de la autoridad y del prestigio social en la sub-sociedad campesina. El ejemplo más notable de este agrarismo revolucionario es el movimiento campesino y miliciano que se movilizó con la revolución boliviana en 1952. Corresponde detenerse brevemente en este proceso histórico que fue

durante aquellos años el espejo en que se miraron los movimientos campesinos del continente.

La revolución boliviana de 1952 es un buen ejemplo de las alianzas que se establecieron entre campesinos y militares para destruir el régimen oligárquico preexistente<sup>3</sup>. En la primera mitad del siglo XX Bolivia era un país escindido en dos mundos distintos. Con un 62% de población indígena y 25% de mestizos era gobernado por una oligarquía de origen blanco. Esta despreciaba profundamente al pueblo indígena, al que había sojuzgado por varios siglos. La economía del país reposaba en la industria minera y en una agricultura aún basada en el sistema hacendal. Durante la segunda mitad del siglo XIX la oligarquía había utilizado su control del Estado para extender sus propiedades despojando de sus tierras a las comunidades indígenas. Los indígenas aún estaban obligados a trabajar las tierras hacendales y a pagar diversos tributos al Estado. En realidad, buena parte de la economía fiscal se basaba en la tributación indígena.

La derrota que sufren el gobierno oligárquico y el ejército boliviano en la guerra por el petróleo del Chaco desacredita a la oligarquía e inicia el camino hacia su desaparición. Dentro del ejército boliviano surge una camada de jóvenes oficiales imbuidos de una ideología nacionalista, deseosos de reivindicarse luego de la derrota sufrida. La democracia de las trincheras y el activo papel que los indios jugaron en la guerra facilitan la revalorización de lo indígena. A principios de la década del cuarenta surge un nuevo partido anti-oligárquico conformado por la confluencia de asociaciones de ex-combatientes y el emergente sindicalismo obrero y campesino. Los líderes de este partido, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, son jóvenes políticos provenientes de los sectores medios de la sociedad no indígena. Los gobiernos de postguerra con fuerte influencia militar adoptan medidas como la sindicalización obligatoria y la creación de un Ministerio de Trabajo que aceleran el proceso de organización sindical obrera y campesina.

A principios de la década del cuarenta llega al poder el General Villarroel en alianza con el cada vez más fuerte MNR. Las medidas de este gobierno, y sobre todo su apoyo y reconocimiento a las organizaciones indígenas campesinas, acrecientan los temores de los sectores

---

<sup>3</sup> El análisis del movimiento campesino boliviano está basado en Silvia Rivera Cusicanqui. "Apuntes para una historia de las Luchas Campesinas en Bolivia" (1900-1978). En Pablo González Casanova (Coord.), *Historia Política de los Campesinos Latinoamericanos*, Editorial Siglo XXI, 1985.

urbanos blancos, que terminan con una revuelta que asesina al Presidente.

Se inician así seis años de una cuasi guerra civil (1946-1952) en que se alternan tomas de haciendas y de poblados por los campesinos con represiones sangrientas del ejército. Los dirigentes campesinos, obreros y del MNR, terminan confraternizando en las cárceles, y en ellas se construye un proceso de acercamiento entre líderes sindicales y dirigentes del MNR.

En 1952 estalla una revolución, con apoyo de algunas facciones del ejército y con amplio apoyo popular y de las organizaciones sindicales obreras y campesinas, que lleva al MNR y a Víctor Paz Estenssoro al poder. A partir de allí se lleva a cabo una profunda reforma que implica la nacionalización y el traspaso al Estado de las principales empresas mineras, ferrocarriles, servicios públicos, etc., instaurando la participación obrera en la dirección de las mismas. Se propende a la ampliación del mercado interno y a la sustitución de las importaciones de alimentos. Paralelamente se lleva a cabo una reforma agraria que buscó destruir el sistema hacendal y el poder terrateniente. Con frecuencia la distribución de las tierras señoriales fue llevada a cabo por los propios campesinos y luego legitimada por el Estado. Esto, a veces, dio lugar a conflictos violentos entre los propios campesinos –antiguos comuneros, colonos de las haciendas y trabajadores de las haciendas–, ya que todos creían tener derechos sobre las tierras. El resultado fue el establecimiento de un sistema agrario con una fuerte predominancia de una agricultura campesina asentada en predios de escasa superficie (Chonchol, 1994).

Rivera arguye que para el análisis del movimiento campesino boliviano es preciso distinguir dos fases. En la primera “cristaliza un movimiento reivindicativo amplio, combativo y centrado en torno a la lucha por la tierra” (Rivera, 1985:193). Esta fase terminó con la subordinación del movimiento campesino al Estado, ya que se “culmina con el establecimiento de estructuras de mediación entre el movimiento campesino y el Estado, cuya manifestación externa es la formación de un aparato sindical paraestatal crecientemente controlado por el MNR” (Rivera, 1985:194). Este poderoso movimiento sindical llegó a tener medio millón de afiliados y cerca de 20 mil sindicatos de base.

En la segunda fase, finalizado el proceso de reforma agraria, resuelto el problema de la tierra y consolidada la estructura sindical que dependía fuertemente del Estado, empezaron a resquebrajarse las

bases de apoyo del MNR, comenzando por el distanciamiento del poderoso sindicalismo obrero. En esa circunstancia el sindicalismo campesino se vio en la necesidad de optar entre apoyar a este último o proseguir bajo la tutela del Estado que le garantizaba la continuidad de sus conquistas, enfrentando al sindicalismo obrero.

La opción por continuar la alianza con el Estado, que a su vez se distanciaba cada vez más del movimiento popular, reforzó el distanciamiento de las cúpulas dirigentes campesinas de los sindicatos de base y acentuó las tendencias al prebendalismo y la corrupción de sus dirigentes. La gradual y creciente subordinación del sindicalismo campesino al Estado se consolidó con el Pacto Militar-Campesino y el desarme de las milicias rurales, acordado entre los dirigentes sindicales y el nuevo Presidente y líder militar, el general Barrientos, en 1964.

Sin embargo la alianza entre el Estado y el movimiento campesino no duró mucho, socavada por dos frentes: la pérdida de legitimidad de un gobierno que gradualmente se fue inclinando a los dictados del neoliberalismo (especialmente a partir del mandato de Banzer) y la pérdida de legitimidad de las cúpulas sindicales. Hacia mediados de la década del setenta aparecieron organizaciones campesinas independientes de la estructura sindical que se rebelaron contra la corrupción y el servilismo político de los dirigentes sindicales campesinos, el Movimiento Katarista, que inauguró ya un proceso de organización campesina diferente.

En los cinco países que estudiamos en este libro, los procesos de acción colectiva de los estratos subordinados del campo recorren caminos distintos. Se hará una breve recorrida por los mismos sin perjuicio de volver sobre ellos cuando se traten los casos específicos en cada país. En Chile el desarrollo agrario continuaba todavía aherrojado por el sistema latifundiaro aún en la década del cincuenta. Las organizaciones campesinas e indígenas habían crecido con grandes dificultades durante la primera mitad del siglo, alternando períodos en que podían tener cierto margen de organización con otros en que sus actividades eran prohibidas y perseguidas. A principios de la década del sesenta la burguesía industrial había cobrado más influencia y exigía el quiebre del sistema latifundiaro. Una alianza de partidos de izquierda con la recientemente creada Democracia Cristiana allana el camino hacia la promulgación de una legislación que permite la organización sindical en el campo. Los sindicatos agrarios crecen rápidamente en los años siguientes, creándose Confederaciones Sindicales que responden a los principales partidos políticos. Con el triunfo de la

Democracia Cristiana en 1964, con fuerte apoyo campesino, se inicia una primera reforma agraria que tenía como fin el desarrollo capitalista agrario y la creación de una agricultura familiar que fuese el basamento del partido en el poder. La organización campesina también jugará un rol importante en el triunfo de la Unidad Popular en 1970 y constituirá un importante apoyo a la profundización de la reforma agraria que encara el gobierno socialista. Las organizaciones campesinas serán duramente reprimidas con el golpe militar en 1973, y la contrarreforma agraria militar terminará de consolidar el desarrollo agrario capitalista en el campo chileno (Bruna, 1985).

Brasil tiene una amplia historia de movimientos campesinos de distinta entidad y duración. A mediados de la década del cincuenta en Pernambuco y en Paraíba se crean las condiciones políticas que llevan a la creación de una organización de los *foreiros*, campesinos que trabajan en las tierras de los ingenios azucareros y que se denominó Ligas Camponesas. En Pernambuco, una alianza entre la burguesía industrial regional y el Partido Comunista permite ganar la Prefectura de Recife y luego la gobernación del Estado. Esto facilitó la creación de organizaciones locales de trabajadores, y así como se organizaron las ligas, también se organizan los trabajadores de los ingenios. En toda la historia sindical de Brasil está presente esta dualidad, la organización campesina y la organización de los trabajadores rurales, a veces juntas y a veces separadas. Las ligas se convierten en un importante factor de poder en la región, realizan algunas ocupaciones de tierras, y luego consiguen la expropiación del ingenio Galilea y el reparto de sus tierras. Aunque sólo eran 500 hectáreas, el impacto político de dicha expropiación fue grande y estuvo entre los motivos que condujeron al golpe de estado militar en 1964 que depuso a Goulart e ilegalizó a las Ligas Camponesas (Martins, 1985).

En Paraguay, durante la década del cincuenta el gobierno opta por orientar el desarrollo del agro hacia la producción para la exportación apoyando un modelo basado en las empresas dedicadas a la producción agrícola-ganadera extensiva. Este estímulo alienta a los ganaderos a apropiarse de las tierras comunales de las comunidades campesinas. Los primeros despojos promueven la organización campesina con el apoyo de la Iglesia Católica, creándose en 1960 la primera Liga Agraria Cristiana. El decidido involucramiento de muchos párrocos y de organizaciones sindicales de origen cristiano fue facilitado por las nuevas orientaciones de la Iglesia que surgen luego del Concilio Vaticano II. Las ligas se extienden rápidamente en la región



sur y oriental del país, creándose cuatro años más tarde dos federaciones de ligas campesinas. El eje del accionar de las ligas estará dado por la recuperación de las tierras comunales asediadas por los ganaderos, la realización de una reforma agraria, y la lucha por precios justos por los productos comerciales campesinos, principalmente el algodón. Hacia la década del setenta el movimiento liguista ha crecido también políticamente. Logra identificar con mayor claridad a sus enemigos y gestar sus alianzas, iniciando un camino de distanciamiento de la Iglesia Católica. Esto facilitará la posterior represión, aniquilamiento de las dirigencias y disolución del movimiento, en 1976, por el régimen de Stroessner.

Para sintetizar los procesos de acción colectiva en el campo argentino es preciso distinguir al menos dos situaciones diferentes. En la región pampeana de fértiles llanuras, empresas agropecuarias capitalistas y un sector de agricultores medios propietarios y arrendatarios, estos últimos se organizaron tempranamente (1912) en la Federación Agraria Argentina. El modelo de sustitución de importaciones los favoreció en cuanto productores de bienes de consumo. El gobierno peronista, si bien no enfrentó directamente a la clase terrateniente, congeló los arrendamientos y favoreció de diversas maneras a los agricultores familiares pampeanos. En las economías regionales la distribución de la tierra era más asimilable a un sistema latifundio-minifundio con sectores campesinos y agricultores familiares de origen inmigrante. En las provincias del noreste de la Argentina<sup>4</sup>, los agricultores familiares y campesinos fueron duramente castigados hacia fines de la década del sesenta, por el agotamiento del modelo económico de sustitución de importaciones y la consiguiente crisis de mercados de sus productos (algodón, tabaco, yerba mate, caña de azúcar, maíz). Contando con el decidido apoyo y sostén de los sectores progresistas de la Iglesia Católica, crean las ligas agrarias en 1971. Estas serán la punta de lanza de las movilizaciones de los sectores subordinados del campo argentino cuyos sectores medios reclaman por mejores condiciones para sus productos, mientras los sectores campesinos reclaman por la devolución de tierras apropiadas por los ganaderos o la realización de planes de redistribución de tierras públicas o de tierras mal habidas. Las ligas agrarias tienen un rápido crecimiento y una amplia distribución, llegando a abarcar ocho provincias

---

4 En otras regiones también hubo movimientos campesinos. Por ejemplo, las luchas de los campesinos cañeros en la provincia de Tucumán.

del noreste y del centro de la Argentina pero serán reprimidas y disueltas por el golpe militar de 1976 (Ferrara, 1973).

En el Uruguay, el modelo económico de sustitución de importaciones y de protección de la agricultura local favoreció el crecimiento de la agricultura familiar durante las décadas del cuarenta y del cincuenta. La organización que los representaba, la Comisión Nacional de Fomento Rural, creada en 1915, tiene firmes vínculos con el gobernante Partido Colorado. Por consiguiente, cuando hacia fines de la década del cincuenta el modelo se agota y comienzan las dificultades en los mercados de los productos de la agricultura familiar, surge un nuevo movimiento que aglutina a los agricultores familiares y estratos medios del campo: el Movimiento Ruralista. Este movimiento, organizado por un líder carismático que era periodista radial, inaugura una modalidad de movilizaciones denominada cabildos abiertos que arrastra a cientos de agricultores en un proceso que desconcierta a los partidos de todo el espectro político. Sin embargo, el poderoso sistema de partidos del Uruguay termina cooptando al principal dirigente del movimiento, que al aliarse con el Partido Nacional tendrá una decidida influencia en las elecciones que terminarán con casi cien años del Partido Colorado en el poder. Ya fuera por la circunstancia de que el nuevo gobierno no modifica la situación o porque el líder muere al poco tiempo, el Movimiento Ruralista termina disolviéndose pocos años después (Abulafia, 1979; Methol, 1959; Cosse; 1982)<sup>5</sup>.

La eclosión de movimientos campesinos en varios países de América Latina, las reformas agrarias, y en general la gran transformación que estaba ocurriendo hacia mediados del siglo XX sepultando definitivamente al sistema latifundio-minifundio, y procesos como la revolución boliviana y la revolución cubana, replantearon entre los intelectuales latinoamericanos la cuestión campesina. La izquierda marxista siempre había tenido una relación incómoda con el campesinado, como se mencionó mas arriba, por las dificultades para ubicar a este en un esquema de clases en que la contradicción principal era entre la burguesía y el proletariado (pero el proletariado industrial, la

---

<sup>5</sup> Esto no significa desconocer que, coherentemente con un mayor desarrollo del capitalismo agrario, en Uruguay también hubo importantes procesos de acción colectiva llevados a cabo por trabajadores asalariados rurales. En su organización cumplieron un papel tanto el Partido Comunista Uruguayo como el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. La organización de los asalariados rurales fue desconocida y combatida por los empresarios rurales y perseguida desde el Estado en diversas épocas. Ver Yamandú González Sierra, *Los Olvidados de la Tierra*, Editorial Nordan, 1994.

clase obrera) y donde el campesinado sólo aparecía como una rémora de modos de producción ya perimidos.

Este debate ya había tenido una importancia fundamental durante la revolución rusa: muy complejo, e intelectualmente muy rico, se lo puede simplificar en dos posiciones básicas. Los leninistas sostenían que el capitalismo estaba muy desarrollado en el campo ruso, y que si bien aún había muchos campesinos, estos estaban en un agudo proceso de diferenciación que terminaría reubicándolos en las dos clases básicas del capitalismo: mientras la mayoría habría de deslizarse hacia la proletarización, unos pocos se transformarían en agricultores capitalistas. Sus opositores más ilustrados fueron los integrantes de la Escuela de Organización y de la Producción, cuya cabeza visible era Chayanov. Estos sostenían que, dado que el capitalismo en el campo ruso no estaba desarrollado aún, el campesinado era la clase básica a partir de la cual se podía reorganizar un sistema de producción socialista tomando como eje la construcción comunitaria que eran las comunas campesinas rusas. Sostenían que el campesinado era un modo de producción en sí mismo comparable al feudalismo o al capitalismo, y que la agricultura en una nueva sociedad podía basarse en ellos.

El debate entre marxistas y la Escuela de la Organización y la Producción tenía muy claras implicancias políticas. Para Lenin, como el capitalismo ya estaba bien establecido en el campo ruso, el proceso revolucionario debía llevar adelante esta diferenciación con el fin de desarrollar las fuerzas productivas que conllevarían naturalmente a la última etapa de la colectivización de la tierra mientras se expropiaba a la burguesía agraria. Para los populistas, como el capitalismo no estaba aún plenamente desarrollado, la comuna campesina rusa debía preservarse y basarse en la misma para construir el socialismo agrario. La tarea era encontrar formas apropiadas que organizaran a los campesinos con el fin de desarrollar al sector agrícola alrededor de esta fracción de clase. Su objeto era preservar al campesinado como una clase progresista a medida que se desarrollaba la industrialización de Rusia. Para Chayanov esto se lograría a través de la integración vertical de cooperativas que, mientras preservaba la unidad doméstica campesina, tendría como objeto integrarla en el mercado nacional e internacional.

El debate en la década del sesenta se reproduce en términos bastante parecidos, atizado por los movimientos campesinos y las reformas agrarias. Eric Wolf escribe un libro que tendrá mucho

impacto entre los intelectuales dedicados a la cuestión campesina. En su *Peasant Wars of the Twentieth Century*, Wolf analiza seis revoluciones de este siglo: la revolución agrarista mexicana, la revolución china, la lucha del pueblo vietnamita, la revolución argelina, la revolución cubana y la revolución rusa, y sostiene que en la base de todos estos movimientos hubo campesinos como la fuerza revolucionaria principal. Sostenía además que no eran ni siquiera los campesinos más pobres los que se levantaban en armas, sino por el contrario aquellos estratos campesinos más acomodados que tenían recursos materiales como para sostener la revolución (Wolf, 1973).

Entre los latinoamericanos la discusión se dio entre “campesinistas” y “descampesinistas” o “proletaristas”. Estos últimos sostenían que el proceso de proletarización ya estaba muy avanzado y que la fuerza transformadora de la sociedad vendría de una alianza entre proletarios urbanos y rurales. Por otro lado, los campesinistas sostenían que el campesinado podía coexistir con unidades capitalistas agrarias, y aún más, que podía ser un sujeto del desarrollo rural. Si la investigación agrícola y el apoyo del Estado (ahora sesgado a las empresas capitalistas agrarias) se volcaran a los campesinos, estos podrían abastecer el mercado interno.

En conclusión, en las páginas precedentes se ha ensayado una apretada síntesis de los procesos de acción colectiva de los sectores subordinados del campo latinoamericano. De ninguna manera se ha pretendido ser exhaustivo, lo cual resultaría imposible por la riqueza y la variabilidad de los hechos que se están estudiando. Esta síntesis ha tenido la intención de preparar el terreno, brindando los antecedentes históricos, para una discusión de los procesos de acción colectiva que se generarán en las dos décadas finales del siglo XX en el campo latinoamericano. Ella nos permite realzar algunos aspectos que se quieren señalar ahora y que son introducidos como temas o problemas que serán retomados luego en el análisis de cada organización en los cinco países seleccionados.

1. En primer lugar señalar, en coincidencia con Quijano (1967), el carácter político de los principales procesos de acción colectiva rural reseñados para este período. Los ejes de la acción colectiva pasan por la reivindicación de la tierra –y generalmente por la reforma agraria, en consonancia con las propuestas políticas de la época– y de mejores condiciones de precios y de comercialización de los productos campesinos, señalando

con esto la inserción de los mismos en los mercados nacionales. Además, todos los movimientos estudiados se plantean (y algunos lo logran), una directa intervención en el escenario de la política nacional.

2. Mostrar la extrema variabilidad de las forma de la acción colectiva en el campo latinoamericano que se vincula a diferentes realidades históricas, diferentes estructuras agrarias y distintos procesos políticos nacionales.

3. Coincidir con que el principal criterio de construcción de la unidad de la acción colectiva en este período fue la identidad de clase. Ya sea como campesinos o como agricultores familiares, y a veces, cuando las condiciones históricas lo permitieron, con alianzas entre ambos tipos de actores sociales.

4. Por otro lado, el renacimiento del interés en los movimientos campesinos como sujetos portadores del cambio social tuvo el efecto de oscurecer otros clivajes que ya se encontraban entre los campesinos, como la cuestión indígena, la cuestión de género, el clivaje etario o la construcción de identidades locales. En la medida que los campesinos eran revalorizados, como aliados del proletariado urbano o como una clase en sí misma que era capaz de sostener un proceso revolucionario (aunque tuviese que ser conducida por individuos de fuera de la clase campesina como sostenían muchos), se intentaba minimizar otras formas de dominación. En el caso particular de la dominación étnica, los indígenas importaban en cuanto trabajadores rurales o en cuanto campesinos en su relación con la tierra. Era su posición en el proceso productivo lo que les confería la capacidad revolucionaria, y no el color de la piel o la existencia de una cultura distinta. Un marxista esclarecido como fue José Carlos Mariátegui proclamaba: “el socialismo nos ha enseñado a plantear el problema indígena en nuevos términos. Hemos dejado de considerarlo abstractamente como problema étnico o moral para reconocerlo concretamente como problema social, económico y político” (Mariátegui, 1991).

5. Mostrar la importancia del contexto político en el cual se desenvuelve la acción colectiva. En general se ha insistido, para este período histórico, en procesos de debilitamiento de las oligarquías terratenientes a manos de una naciente burguesía industrial o, en su ausencia, por la acción de sectores mili-

tares que emprenden esta tarea histórica. Tampoco se debe desdeñar el papel del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que lanza la Alianza para el Progreso con el fin de apoyar y sostener a las a veces vacilantes o débiles burguesías nacionales. Hacia el fin del período de industrialización sustitutiva de importaciones los procesos de acción colectiva son llevados a cabo por sectores que se habían beneficiado con él, en busca de restituir las condiciones políticas y económicas que se agotaban. Los casos reseñados de las ligas en los tres países sureños y del Movimiento Ruralista en el Uruguay son un claro ejemplo de esta situación.

6. También parecería quedar más clara con la revisión realizada la importancia de los agentes externos o los “mediadores” en la constitución de procesos de acción colectiva llevados a cabo por campesinos o agricultores familiares. En algunos casos son los vínculos con militares, en otros casos son las relaciones con los partidos políticos, generalmente de izquierda, pero a veces también de otra ubicación en el espectro político. Uno de los casos tal vez más interesantes es el papel que ha cumplido la Iglesia Católica en la organización campesina, posiblemente para cerrarle el paso a los partidos de izquierda.

7. Los casos reseñados también apuntan a señalar, en muchos casos, la ausencia de mecanismos que fortaleciesen la democracia interna en las organizaciones campesinas. Predominaron las estructuras verticales y los liderazgos fuertes que se prestaron a la cooptación política e incluso a la corrupción económica.

8. Las movilizaciones campesinas no fueron ajenas, a pesar de su aparentemente escasa importancia política, a los procesos de golpe de estado y dictaduras militares de la década del setenta en América Latina, que en varios casos tuvieron como una de sus motivaciones frenar procesos de organización social en el campo.

9. Señalar finalmente que el desmantelamiento de los movimientos campesinos, el exilio o la supresión física de sus dirigentes, y la propia situación de rígido control político durante las dictaduras, explican por qué, cuando resurge la acción colectiva en la etapa siguiente a partir de la década del ochenta, se hará desde abajo, desde las organizaciones locales, con amplia participación de distintos actores, campesinos y campe-

sinas, jóvenes, indígenas, trabajadores rurales, agricultores familiares, etc., cada uno desde sus realidades, con nuevos dirigentes y nuevos estilos organizativos.

### TERCERA ETAPA: 1970-2000<sup>6</sup>

Hacia la década del sesenta el modelo de sustitución de importaciones ya mostraba signos de agotamiento. El proceso de industrialización se encontraba estancado, la producción agraria volcada a los mercados internos había encontrado sus límites, los procesos inflacionarios corroían los ingresos de los asalariados y con ello la base de sustentación del modelo. Hacia la década del setenta comienza un proceso de liberalización económica, apertura de fronteras, ajuste económico y desregulación estatal que modificará profundamente las economías y las sociedades de los países latinoamericanos.

Las últimas tres décadas del siglo XX fueron dominadas por un creciente proceso de globalización de la economía. El nuevo modelo de acumulación ha desarrollado las fuerzas productivas hasta un nivel desconocido anteriormente. La globalización económica se caracteriza por la creciente integración de “estructuras productivas, sistemas financieros y los mercados mundiales” a partir del fuerte desarrollo de las empresas transnacionales que son las que han liderado estos procesos (Llambí, 1994). Al decir de Ianni, la globalización genera una nueva forma de acumulación originaria: “destruye y reproduce, subordina e integra, subsumiendo formal o realmente las más diversas formas sociales y técnicas de organización del trabajo. Revoluciona relaciones de producción y modos de vida en todos los lugares, próximos y remotos” (Ianni, 1994).

En años recientes se han dado pasos definidos hacia la reorganización del comercio mundial bajo el signo de la liberalización. Esto ha ocurrido siguiendo dos tendencias que incluso pueden ser vistas como contradictorias (Krugman, 1991). Por un lado la Organización Mundial del Comercio ha avanzado en la dirección de liberalizar el comercio de manufacturas, productos agrícolas, servicios, inversiones y propiedad intelectual, entre otros. Por el otro lado, un nuevo orden mundial está emergiendo reorganizado en bloques económi-

---

<sup>6</sup> Este apartado está basado en un trabajo anterior del autor: Piñeiro, Diego E. “Desafíos e incertidumbres para la Sociología Agraria en la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo”. En Diego E. Piñeiro (Comp.), *Globalización, Integración Regional y Consecuencias Sociales sobre la Agricultura*, AUGM-UNESCO, Universidad de la República, Montevideo, 1996, pp: 33-80.

cos: la Comunidad Económica Europea, el Tratado de Libre Comercio de Norte América, el MERCOSUR y el bloque del yen en el sudeste asiático.

Detrás de los procesos de globalización económica se perfilan las tendencias hacia la conformación de un orden político global. Así, el papel de organismos tales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, más allá de su función económica, debido a su capacidad para incidir sobre la política económica de los gobiernos a quienes presta recursos, ha tendido a modelar la política interna de las naciones. En las Naciones Unidas y otros organismos multilaterales también son perceptibles cambios, principalmente luego de la caída de los países socialistas del este europeo, tendiéndose a construir mecanismos y sistemas de regulación global. Sin embargo, el carácter asimétrico de las relaciones de poder en estos organismos tiene como resultado un neto predominio de los intereses y perspectivas de las principales potencias occidentales.

En otro plano hay fuertes tendencias a la uniformización cultural a partir de los moldes de las sociedades occidentales desarrolladas, vehiculizados por la expansión de los medios masivos de comunicación y por las autopistas de la informática, capaces de transferir información instantáneamente de una a otra parte del globo. En la contracara de esta globalización cultural estallan los nacionalismos, los fundamentalismos religiosos y la defensa de las particularidades de las etnias, regiones, naciones, comarcas, que, agredidas por la uniformización, pretenden rescatar y valorizar su identidad. Globalización cultural, y rescate y afirmación de las identidades, se convierten así en los polos de la contradicción dominante.

Uno de los aspectos más relevantes de este nuevo modelo es la sobredeterminación de lo económico por sobre lo político y lo social, y fundamentalmente el sentimiento de impotencia frente a las condiciones macroeconómicas de inserción internacional, la creencia en la autonomía de la economía en relación a las políticas, la sensación de ajenidad que produce en los sujetos individuales y colectivos, y un sentimiento de incertidumbre y angustia provocado por la pérdida de referentes y horizontes de creencias más o menos previsibles. La inmediatez de los cambios y el valor de lo instantáneo, incorporado por la revolución de las comunicaciones, se suma para contribuir a este sentimiento de “enajenación de lo ajeno y expropiación de lo propio que se vive como amenaza...” (Beck, 1998: 10).



Otro de los rasgos de la globalización económica es el surgimiento de las cadenas agroalimentarias mundiales. Estas han sido impulsadas principalmente, pero no sólo, por grandes empresas transnacionales. Algunos de sus rasgos son la tendencia a la homogeneización de la producción y la integración vertical, el desarrollo y la imposición de tecnologías agrícolas uniformes mediante la producción bajo contrato, la innovación constante en las fases industriales y agroindustriales, la uniformización de las pautas de consumo, y los cambios institucionales y organizacionales.

### AJUSTE ESTRUCTURAL EN LAS ECONOMÍAS LATINOAMERICANAS

Tal vez una de las consecuencias más importantes para el análisis que se está haciendo sea el abandono de la idea-fuerza del desarrollo por la del crecimiento económico. En efecto, el desmantelamiento del modelo ISI, de las políticas regulatorias del Estado y del estado de bienestar, reemplaza la idea de la intervención estatal para guiar el desarrollo económico y social por la de que el mercado es el que guiará y estimulará el crecimiento económico. Implícita está la idea de que el mero crecimiento económico expandirá sus beneficios a los distintos sectores de la sociedad.

El fuerte endeudamiento externo de los países latinoamericanos en la década del setenta y la suba de las tasas de interés a principios de la década siguiente colocaron a estos países en una delicada situación económico-financiera. La mayoría de los gobiernos latinoamericanos, influidos por las condiciones que exigen los organismos financieros como el FMI y el BM, a los que recurren para obtener los créditos que permitan superar los desequilibrios financieros, ponen en marcha medidas de estabilización y ajuste estructural.

Las consecuencias de estas políticas durante la década del ochenta serán importantes en varios aspectos. Por un lado se promocionan y aumentan las exportaciones mientras caen las importaciones; el ingreso por habitante y la inversión caen a niveles inferiores a los de la década pasada; se incrementan los fenómenos inflacionarios; aumentan el desempleo y el subempleo; se deteriora el salario real; aumentan la pobreza y la indigencia tanto a nivel urbano como rural. Se ha caracterizado a este decenio como la “década perdida” para el desarrollo.

En la década del noventa, las economías del Cono Sur se recuperan. Estimuladas por las inversiones que se realizan por la venta de

los activos del Estado, recibiendo fondos que provienen de una arriesgada política de endeudamiento externo, y controlando la inflación, dichas economías crecen a tasas sostenidas durante casi todo el período. Recién hacia el final del mismo los servicios de la deuda y el desbalance en los ingresos y los gastos del sector público disminuirán el ritmo del crecimiento. Argentina se precipita hacia una profunda crisis económica y financiera que arrastra luego a Uruguay y deja a Paraguay al borde el abismo. Brasil devalúa su moneda, quebrando el Plan Real a principios de 1999, y de esa manera logra sortear la crisis financiera. Argentina primero y luego Uruguay deben devaluar sus monedas en el año 2002, alterando los equilibrios macroeconómicos.

Desde el punto de vista de los indicadores macroeconómicos, sin embargo, es de destacar que la agricultura latinoamericana creció durante las décadas del ochenta y del noventa a una tasa mayor que la del PIB del conjunto de la economía. Dicho crecimiento se explica por el incremento sostenido de la superficie agrícola, un incremento de los rendimientos físicos y un crecimiento substancial de las exportaciones tanto en volumen físico como en el valor exportado (a pesar de los precios generalmente decrecientes de las materias primas). Estos aumentos de la productividad han sido posibles por la incorporación de las tecnologías de la revolución verde basadas en la mecanización creciente de las labores agrícolas, el uso extendido de agroquímicos, la incorporación de nuevos cultivos y de nuevas variedades para los cultivos tradicionales.

Por otro lado, la creciente urbanización de la población, iniciada ya en la década del setenta, se aceleró en la década siguiente. Si bien la población total rural no disminuyó en términos absolutos, sí lo hizo en términos relativos, pasando de ser un 50% en la década del sesenta a sólo un 30% en la década del ochenta y un 28% en la década del noventa. La urbanización provocó la expansión del mercado interno y el aumento de la demanda de alimentos, incentivó la producción agrícola, produjo una urbanización creciente de hábitos y costumbres en el medio rural debido a la densificación de una trama relacional entre los migrantes urbanos y su retaguardia rural.

## EL PREDOMINIO DE LOS COMPLEJOS AGROINDUSTRIALES

En las últimas décadas del siglo XX el capitalismo ha terminado de instalarse firmemente en el agro latinoamericano. Pero como todo proceso contradictorio, lo ha hecho bajo diversas formas. La forma

hegemónica de dicho capitalismo ha sido el desarrollo de las cadenas y complejos agroindustriales. Con ello se está queriendo indicar que son los sistemas de producción más dinámicos, donde hay mayor inversión, a quienes el Estado dirige su apoyo, donde el capital se reproduce en forma ampliada, donde se produce para los mercados internos o externos de mayor dinamismo, vinculándose con los sistemas agroalimentarios mundiales. Los complejos agroindustriales integran generalmente las etapas de producción agrícola, producción y aprovisionamiento de insumos para la agricultura, procesamiento, almacenamiento y distribución. El concepto de complejo agroindustrial incluye el de núcleo del complejo, siendo definido como la etapa en la cual se concentra la capacidad de determinación sobre las demás etapas del mismo (Vigorito, 1977).

El Estado ha jugado un papel central en la formación de este nuevo patrón agrario a través de medidas específicas y el manejo de instrumentos. El apoyo crediticio abundante y a tasas de interés favorables; el manejo de la tasa de cambio para favorecer tasas de cambio reales que permitan exportar en mejores condiciones de competitividad; las exenciones tributarias, disminuyendo los impuestos al agro, los aranceles de importación de insumos agrícolas y las retenciones a las exportaciones agrícolas (instrumentos de trasiego al sector industrial); la protección inicial del mercado interno para que las incipientes agroindustrias acumulen; los subsidios a las exportaciones; la caída del salario real de los trabajadores agrícolas, el control de la fuerza de trabajo y el desestímulo a la organización sindical; el apoyo a la investigación y transferencia tecnológica; la creación de un mercado de tierras o su expansión a través del estímulo a la colonización; la creación de la infraestructura de servicios necesaria (caminos, energía eléctrica, o la construcción de grandes obras de riego). Estas características han hecho decir a Martine que “la tan publicitada modernización agrícola cuya base es la “caificación” infelizmente, se presenta como una transformación parcial, desigual, fuertemente sustentada por recursos públicos, inherentemente limitada y con más rasgos de un capitalismo prebendario que de un capitalismo moderno” (Martine, 1991: 35).

Sin embargo es conveniente hacer notar la diversidad de situaciones agrarias en América Latina. Mientras en algunos países el desarrollo de los complejos agroindustriales está más avanzado, en otros puede no estarlo tanto. Pero aún dentro de cada país la extensión de la “caificación” puede ser variable por rubro de producción: mientras

algunas cadenas están muy integradas, otras lo están en muy bajo grado. En fin, rubros de producción que se encuentran fuertemente integrados en un país pueden estar muy poco integrados en otro.

Los principales actores de esta época son los empresarios vinculados a los complejos agroindustriales. El núcleo de los complejos generalmente está ocupado por empresas trasnacionales o nacionales, cuyos capitales no son de origen agrario, si bien hay casos en los cuales es el capital de origen agrario (privado o cooperativo) que se posee del núcleo de un complejo. Por lo tanto, es preciso resaltar que al predominar los complejos agroindustriales, los actores principales del agro pueden ser de origen agrario o extra-agrario. La experiencia muestra que, además, muy raramente son rurales.

Pero también hay empresarios en la etapa agraria del complejo. Estos pueden desempeñar un papel determinante en la política del complejo (si además controlan total o parcialmente su núcleo) o pueden jugar un papel subordinado a las empresas no agrarias que controlan el mismo. Simétricamente se vinculan al complejo los asalariados, tanto agrarios como industriales, rurales como no rurales. Los complejos también articulan, aunque en forma subordinada, a productores agrarios con formas no capitalistas de producción: campesinos, “farmers” y pequeños productores.

Como se ha expresado más arriba, el hecho de que la forma de producción predominante sean los complejos agroindustriales no excluye la existencia de situaciones en las que estos no están presentes. Hay vastas regiones de América Latina, incluso países, rubros de producción, grupos sociales, etnias indígenas, etc., que aún no han sido tocados por el desarrollo de los complejos agroindustriales. Así, un análisis realista del agro en nuestro continente debe reconocer la existencia de un importante sector de empresas que si bien no están insertas en dichos complejos no por ello dejan de ser capitalistas: las viejas haciendas, las estancias, en general empresas extensivas en que aún el capital fundiario juega un papel importante en la forma en que se apropian del excedente económico, pero haciendo pleno empleo de relaciones capitalistas de producción.

También es preciso reconocer la existencia de un vasto sector del campesinado y de pequeños productores que no se han integrado a los complejos agroindustriales. La mayoría de ellos son productores de alimentos para sus propias familias y para la venta en los mercados de pueblos y ciudades. Son principalmente, entonces, productores de bienes-salario para los sectores populares urbanos.

Finalmente hay un sector de campesinos pobres con escasos recursos naturales o sin tierra que no tienen un papel definido a jugar en la modalidad de desarrollo capitalista agrario que ha adoptado el agro latinoamericano. Son los migrantes rurales, los trabajadores temporales, los desocupados, los desalojados de las grandes obras y represas, los que viven en las orillas de las ciudades o en los intersticios de las propiedades rurales, que están por debajo de la línea de pobreza y aún por debajo de la línea de indigencia: son los excluidos del campo.

## SEGUNDA PARTE

# ACERCA DE LA ACCIÓN COLECTIVA

EN LAS PÁGINAS ANTERIORES se ha intentado hacer una breve revisión de los procesos de acción colectiva de los sectores subordinados en el campo latinoamericano, y se finalizaba notando que los procesos de acción colectiva que surgen a partir de la década del ochenta parecerían ser de un carácter distinto: más diversos en su composición social, en las formas que adoptan las acciones, en las alianzas que construyen, en los objetivos y en los resultados que obtienen. También ha cambiado considerablemente el contexto social y político: la estructura de oportunidades en términos de Tarrow (1997). El capitalismo está plenamente extendido en el agro y predominan las empresas agrícolas ligadas a los complejos Agroindustriales como el sector más dinámico, si bien subsisten aún terratenientes, campesinos y agricultores familiares y tienen más importancia los trabajadores del campo en los procesos productivos. Terminados los gobiernos militares, el retorno a regímenes de democracia formal ha facilitado la participación y la organización popular.

Para dar cuenta de estas nuevas formas de la acción colectiva en el agro es que se han seleccionado cinco casos que son bien diferentes entre sí. La intención ha sido mostrar la diversidad de procesos de acción colectiva, pero también se han seleccionado casos posiblemente similares a otros presentes en el contexto latinoamericano. Estos son el Movimiento de los Sin Tierra en el Brasil, el Movimiento de los Campesinos en el Paraguay, el movimiento mapuche en Chile, el Movimiento de las Mujeres Agrarias en Lucha de Argentina, y la Mesa Coordinadora de Gremiales Agropecuarias en el Uruguay.

¿Con qué herramientas teóricas y metodológicas es necesario acercarse para comprender estos procesos de acción colectiva? En principio parecería que son movimientos sociales (en adelante, MS) y que por lo tanto es posible utilizar las teorías de los MS para intentar comprenderlos y compararlos. Sin embargo, inmediatamente surgen otras preguntas: ¿todos los procesos estudiados son MS? Y aún si lo

fuesen: ¿cuál de las varias teorías sobre los MS se utilizaría? La respuesta a la primera pregunta debe dejarse en suspenso porque depende de la respuesta que se dé a la segunda.

Las teorías para analizar los MS, como se dijo, son varias, pero en principio es conveniente hacer una gran división que a su vez tiene un contenido histórico. Durante mucho tiempo, posiblemente el que va desde la publicación del Manifiesto Comunista a mediados del siglo XIX hasta la década del sesenta en el siglo XX, el movimiento social fue el movimiento de la clase trabajadora. En la historia de la humanidad siempre hubo opresión de ciertos grupos sociales sobre otros, y siempre existió la resistencia a dicha opresión. Esta adquirió muchas formas distintas: rebeliones, revueltas, huidas, disturbios, etcétera. Sin embargo, todas ellas tuvieron una característica: la discontinuidad. Eran relativamente espontáneas y sin permanencia. A partir de mediados del siglo XIX la diferencia consistió en que los movimientos de resistencia de la clase trabajadora contra la explotación de la burguesía se dieron formas organizativas y estructuras que otorgaron permanencia a estos movimientos. Así nace el movimiento de la clase trabajadora organizada a partir de los sindicatos.

Según Arrighi, Hopkins y Wallerstein, hubo dos grandes tipos de movimientos antisistémicos según cuál fuese identificado como el grupo opresor. En los MS la opresión era ejercida por el patrón sobre los trabajadores, por la burguesía sobre el proletariado, y la supresión de dicha opresión habría de provenir del reemplazo del capitalismo por el socialismo. En los movimientos nacionales la opresión era ejercida por un grupo etno-nacional sobre otros, y se eliminaría concediendo al grupo oprimido el mismo estatus jurídico detentado por los opresores o, más habitualmente, por la creación de estructuras paralelas e independientes (secesiones o creación de nuevos estados o desalojo de los colonizadores). Frecuentemente ambos tipos de movimientos coexistían en un mismo espacio o en un mismo Estado, generando también luchas y fricciones entre ellos. Más recientemente aparecieron los movimientos de liberación nacional que fueron capaces de realizar la síntesis de ambas perspectivas y por lo tanto de luchar contra ambos tipos de opresión “reivindicando la doble legitimidad del antiimperialismo nacionalista y del anticapitalismo proletario” (Arrighi, Hopkins, Wallerstein, 1999: 28).

Pero los enfrentamientos internos a ambos tipos de Movimiento obedecieron más frecuentemente a las distintas concepciones acerca de cómo hacerse con el poder del Estado: si por las vías legales y la

senda de la persuasión política, o por la fuerza. En pocas palabras, estas dos opciones se cristalizaron en la opción *reforma* o *revolución*. Dentro de los MS –aunque debería decirse dentro de los MS de izquierda– esta diferencia se materializó en las disputas que estallaron en la Segunda y la Tercera Internacional socialista entre socialdemócratas y comunistas.

Por otro lado, para los investigadores de las ciencias sociales que no adherían al marxismo en un principio, los MS no eran de interés. Tendían a pensar que las expresiones políticas eran canalizadas a través de los partidos y del sistema político, y que en realidad todas las expresiones que se salían de estos cauces eran “desviaciones”, “escrituras al margen” y de escasa importancia. Sólo cuando alguno de estos movimientos tenía éxito en sus reivindicaciones y conseguía alterar la agenda política entraba en una consideración más seria por parte de los investigadores. Es decir, regía un criterio de “éxito” en el análisis de estos movimientos.

Para los investigadores más próximos a la teorías tradicionales sobre el comportamiento colectivo, las acciones de los movimientos estaban dominadas por convicciones no racionales sino emotivas, y más que preocuparse por conseguir los que querían, lo que intentaban era expresar sus nociones sobre la justicia, estando dirigidas a poner de manifiesto los deseos y reivindicaciones del movimiento y no a conseguir resultados concretos a través de la negociación. Así, los MS eran formas inmaduras de la acción política y debían madurar y transformarse en grupos de presión con sus estructuras y sus burocracias y sus formas articuladas de intervenir en la vida política.

En la década del sesenta en Europa y Estados Unidos aparece y se desarrolla una serie de movimientos que por su profundidad y extensión vuelven a llamar la atención de los investigadores, aunque su éxito haya sido relativo. Estaba claro para ese momento que empleando los criterios de análisis clásicos, ya fuera como “desviaciones” o como “acciones de clase”, no era posible dar cuenta de estos movimientos. Aumenta así el interés en el estudio de estos MS. Para interpretarlos se desarrollan varias teorías –de la movilización de recursos, de la privación relativa, de los Nuevos Movimientos Sociales (en adelante, NMS), etc.– sin que ninguna de ellas haya logrado imponerse como único camino de interpretación.

En las múltiples definiciones sobre los MS que se han propuesto sobresalen algunas coincidencias. Por un lado, todas coinciden en que dentro de los MS suele haber una pluralidad de tendencias y obje-



tivos. La continuidad es otra característica a la que siempre se hace referencia. Mientras los partidos y los grupos de presión tienen una continuidad en el tiempo, los MS no la tienen, aunque sin llegar al extremo de las modas, de las acciones de una muchedumbre o de las acciones colectivas de protesta. Los MS están así entre dos extremos: las asociaciones formales y las movilizaciones espontáneas. Como destaca uno de los autores que estudia a los MS: “un movimiento supone una actuación concertada con un cierto grado de permanencia. Pero la concertación no implica un nivel de organización similar al de las asociaciones formales. Aunque el movimiento se desarrolle a través de organizaciones... no se basa en la afiliación explícita, el pago de cuotas y la asistencia regular a reuniones. Lo que le da unidad y coherencia es la participación de sus miembros en algunas actividades del movimiento y sobretodo la aceptación de un conjunto de creencias generalizadas a las que suele acompañar la aparición de una conciencia de grupo” (Pérez Ledesma, 1994: 61). En tercer lugar, la modificación en mayor o menor grado del orden establecido. Esta última característica, sin embargo, no fue aceptada por todos: hubo quienes hicieron notar que algunos movimientos más bien tratan de evitar los cambios sociales, dando lugar así a una clasificación que distingue entre movimientos activos y reactivos o entre movimientos y contramovimientos.

En el continente europeo, y luego de la década del sesenta, surge una cantidad de estudios de los MS de nuevo cuño que aparecen en esos años. Uno de los más influyentes fue el de Touraine (1987), quien en sus primeros escritos vinculaba aún el concepto de movimiento al de clase social. Posteriormente Melucci elabora una descripción de los MS que aún goza de gran aceptación. Según este autor, los MS se definen desde una perspectiva analítica por tres dimensiones diferentes pero estrechamente ligadas en la realidad: “son una forma de acción colectiva (a) basada en la solidaridad, (b) que conduce a un conflicto, (c) que rompe los límites del sistema” (Melucci, 1994: 62).

Pero lo que lograron los MS de la década del sesenta y posteriores fue una actitud más positiva frente a ellos. Es el reconocimiento de que son un recurso tan válido para la acción política como los caminos formalizados del sistema político. Ya no son más movimientos inmaduros o informales, sino que se los percibe como otras formas, igualmente válidas, de lograr cambios sociales.

Sin embargo se planteaban otros problemas teóricos. Los movimientos obreros se conformaban sobre la base de una identidad de clase. La constatación de que los NMS eran un conglomerado de individuos que provenían de grupos sociales o de fracciones de clases muy diferentes hizo que la pregunta principal que se hacían estos investigadores fuese: ¿qué les confiere identidad? ¿Sobre qué bases se conforma la identidad en estos NMS, formados por personas con extracciones sociales diferentes? De allí el énfasis que le dieron al estudio de la construcción de la identidad en estos NMS (Laraña, 1999).

Pérez Ledesma discute el carácter de novedad de estos movimientos. ¿Por qué eran nuevos, o en relación a qué eran nuevos? O dicho de otra manera, ¿cuáles eran los viejos MS? El viejo MS, el que se había estudiado hasta el momento, era el movimiento obrero. El conflicto social visible hasta entonces era entre trabajadores y empresarios. Pero con la eclosión de los nuevos movimientos, los analistas se encontraron con movimientos en que la clase obrera no sólo no tenía nada que ver, sino que incluso era desafiada por algunos de estos nuevos actores, como lo fue por el movimiento estudiantil francés en 1968. Nuevos eran los actores, nuevos los objetivos, nuevas las formas de acción (Pérez Ledesma, 1994).

Las preguntas que se hicieron ciertos investigadores europeos fueron: ¿de dónde proceden estos nuevos actores sociales? ¿Qué cambios en la realidad social, en los valores e ideologías, impulsan la movilización? ¿En qué consisten estas nuevas formas de organización y de acción? La primera respuesta no fue difícil: ya no era la clase obrera industrial la que se movilizaba, sino las clases medias. Offe (citado por Pérez Ledesma, 1994) identifica tres sectores distintos: la nueva clase media radical vinculada a los nuevos cargos técnicos, especialmente en el sector servicios, obreros y empleados altamente calificados; los grupos periféricos o desmercantilizados, como las amas de casa y los estudiantes, los jóvenes desocupados y los pensionistas; y la vieja clase media, tenderos, campesinos, y artesanos. Es decir, que se trata de una alianza de individuos que integran diferentes clases y “no clases”. Pero excluyen a las clases principales del sistema capitalista: trabajadores y empresarios. Por lo tanto, uno de los problemas principales consiste en encontrar las raíces sociales de dicha alianza, los lazos que permiten coincidir a grupos tan dispares. La agrupación y los procesos de identificación ya no se desprenden de códigos socioeconómicos compartidos, ni siquiera de códigos políticos e ideológicos.

El desarrollo económico vivido por Europa después de la Segunda Guerra Mundial, el período que Hobsbawm (2000) ha llamado la “edad de oro”, ha permitido a los distintos sectores sociales independizarse de los vínculos de clase, familia y religión. Esta liberación, como se demostró luego, sólo fue para caer en nuevas formas de dependencia. Las personas tienen sus opciones de vida predeterminadas por entidades abstractas como las corporaciones económicas y el Estado, a la vez que tienen amenazada su autonomía individual por estas corporaciones y por los riesgos civilizatorios introducidos por el desarrollo del capitalismo (Pérez Ledesma, 1994). Como lo ha argumentado Beck (1998), en las sociedades avanzadas los riesgos civilizatorios (la polución ambiental, el cambio climático, el peligro nuclear, el agotamiento de los recursos naturales, etc.) constituyen hoy amenazas más importantes a los ciudadanos que la pobreza o las dificultades de acceso a los recursos económicos. De estas amenazas surge una unidad que se puede entender como unidad “negativa” o, como también se ha sugerido, de estas surgen los “contramovimientos”, es decir, aquellos movimientos que se oponen a la modificación de un estado de situación.

Frente a la diversidad de teorías que intentan dar cuenta de los NMS, Diani (1992) ha intentado construir una síntesis que reúne los aspectos básicos de las principales. Para reconstruir una definición de MS que pueda ser común y compartida entre las distintas perspectivas teóricas, Diani analiza cada una de las definiciones propuestas y extrae los elementos comunes. Esto le permitirá construir una definición sintética que se expresa del siguiente modo: “un movimiento social es una red de interacción informal entre una pluralidad de individuos, grupos y/o organizaciones, involucrados en un conflicto cultural o político, sobre la base de una identidad colectiva compartida” (Diani, 1992: 3).

Esta definición puede descomponerse en tres partes. La primera pone el énfasis en que un MS es una red de la cual participan actores de diferente tipo, ya sea individuos, grupos informales u organizaciones sociales constituidas, pero que se vinculan informalmente entre sí. Esto descarta la confusión, muy común, de identificar movimiento social con organizaciones sociales. Estas últimas pueden ser parte de un movimiento social pero no constituyen de por sí un MS. Por estas redes circulan recursos de información, de conocimientos y de recursos materiales, así como más amplios sistemas de significado. Las redes contribuyen a crear condiciones para la movilización y a

construir un contexto adecuado para elaborar visiones del mundo y estilos de vida compartidos. Las redes de reclutamiento juegan un papel importante en la decisión individual de implicarse en un MS. Ninguna movilización comienza o se extiende en el vacío, ya que se movilizan individuos que forman parte de tejidos sociales. La pertenencia a estas redes sociales disminuye el costo de involucramiento individual en la acción colectiva. En ellas los individuos interactúan, se influyen recíprocamente, negocian y producen las estructuras motivacionales necesarias para la acción. La motivación para la acción, por lo tanto, no es una variable individual, sino que se construye en el dialogo y la interacción con otros individuos en el marco de las redes.

Sobre este aspecto de la definición Melucci (1994) sostiene que también ha cambiado la forma de ver a los fenómenos colectivos. Si hasta hace un tiempo se percibía a los fenómenos colectivos como un fenómeno unitario, en la actualidad la tendencia es más bien que la unidad del fenómeno colectivo sea el objeto a explicar: “la existencia de un actor relativamente unificado es, en esta perspectiva, un problema que tiene que ser explicado” (Melucci, 1994: 155). Así se podía hablar del movimiento feminista o ecologista como si estuviesen integrados por individuos con metas, valores significados y actitudes compartidos, cuando en realidad esta unidad es construida por quienes integran el movimiento.

El problema que el analista debe explicar es cómo en la acción colectiva se combinan de diferentes maneras orientaciones de la acción, motivaciones y aspectos estructurales dando lugar a un actor colectivo. La constitución y permanencia de este actor colectivo se convierte así en el problema que debe ser explicado antes que en un dato a partir del cual surge la investigación. Para el autor “los fenómenos colectivos constituyen procesos en los cuales los actores producen significados, comunican, negocian y toman decisiones” (Melucci, 1994: 156). Para la comprensión de una teoría de la acción colectiva es preciso hacerse estas preguntas cruciales: “¿A través de que procesos construyen los actores una acción común? ¿Cómo se produce la unidad entre las distintas partes, niveles y orientaciones presentes en un fenómeno empírico de acción colectiva? ¿Cuáles son los procesos y relaciones a través de los cuales los individuos se implican en la acción colectiva?” (Melucci, 1994: 156).

Un segundo aspecto a resaltar de la definición es la construcción de una identidad colectiva en los MS a través de un sistema compartido de creencias y un sentido de pertenencia. Aún más, los pro-

pios límites de los MS son definidos por quienes comparten una identidad colectiva. La identidad colectiva no implica homogeneidad de ideas al interior de un MS. Por el contrario, estas se caracterizan por contener individuos y/o grupos con ideas diferentes, siendo la identidad colectiva construida y reconstruida permanentemente a través de la negociación entre distintos actores al interior del colectivo. La identidad colectiva se construye al interior del MS entre actores pero también es una cualidad atribuida desde fuera del MS, por sus oponentes o por observadores externos.

Para Melucci el concepto de la construcción de la identidad colectiva es una pieza central en su elaboración teórica. La identidad colectiva se construye en un proceso complejo, interactivo y negociado entre los que intervienen en la acción. Este proceso de construcción colectiva de la identidad revela a su vez la complejidad interna del actor, que puede tener una diversidad de orientaciones, y también revela la relación del actor plural con el ambiente que lo rodea (otros actores, oportunidades y restricciones). Más aún, la posibilidad de que un individuo se involucre en la acción está ligada directamente a su capacidad para definir dicha identidad, esto es, a la capacidad diferencial de acceder a los recursos que permiten definir dicha identidad. Esto marcará la intensidad y profundidad de su participación y la duración de la misma, en particular el momento en que se producirá la entrada y la salida de la acción colectiva

Un tercer aspecto de la definición tiene que ver con la idea de que los MS siempre están involucrados en conflictos, si bien para las distintas vertientes teóricas los mismos pueden ser definidos de distintas maneras. Para algunos, los conflictos de los MS involucran un desafío al sistema de dominación (y sólo cuando es así son verdaderamente MS), mientras que para otros, en el otro extremo, los conflictos son sólo en torno a cambios en la sociedad o aún al interior de una institución. Algunos autores han hecho ver que los MS pueden propender a un cambio pero también pueden oponerse a él (contramovimientos). Una discusión aún más complicada es aquella en la cual se contraponen la idea de que los cambios propuestos se centran en conflictos políticos, y la de quienes sostienen que los conflictos más bien se sitúan en el plano cultural. Es decir que no sólo se desafía la distribución desigual del poder político o de los bienes económicos sino también los sentidos sociales compartidos, esto es, la manera de definir e interpretar la realidad.

Diani (1992) sostiene que la característica disruptiva de un MS, si bien es importante para distinguir entre distintos tipos de MS, o entre distintas etapas por las que pasa un MS, no puede ser considerada una característica excluyente porque por ejemplo cumplen un papel marginal en los movimientos orientados al cambio personal o cultural. Para Melucci, en cambio, el contenido disruptivo de la acción social es tan importante que la incorpora a su definición de Movimiento Social como se vio más arriba: “La noción de movimiento social es una categoría analítica: Designa aquella forma de la acción colectiva que (i) invoca la solidaridad, (ii) hace manifiesto un conflicto, y (iii) implica una brecha en los límites de compatibilidad del sistema en el que la acción tiene lugar” (Melucci, 1996: 28).

#### LA ACCIÓN COLECTIVA DE LOS GRUPOS SUBORDINADOS EN EL CAMPO: INSTRUMENTOS PARA SU ANÁLISIS

Uno de los primeros temas sobre el que es preciso trabajar es en el intento de definir cuáles de las acciones colectivas estudiadas son MS y cuáles no lo son. Esto no es por un afán clasificatorio sino para comprender mejor las características del mismo y para poder decidir cuándo emplear las herramientas conceptuales que se construirán para el análisis. Para ello se analizarán los procesos de acción colectiva seleccionados comparándolos con las definiciones dadas por Diani y por Melucci, en el entendido de que no son contradictorias sino más bien complementarias. Contra estas definiciones serán “medidas” las acciones colectivas estudiadas para comprender cuáles son MS y cuáles no. Sin embargo, como se verá más adelante, este proceso no será tan sencillo, implicará varias discusiones, e incluso es posible que sobre algunas acciones colectivas no se llegue a conclusiones definitivas. Para las que no sean MS se intentará encontrar otra categoría que los describa mejor.

Como se verá luego con más detalle, la cuestión de la ruptura con los límites de compatibilidad del sistema es un aspecto bien difícil de concretar. Varios de los MS estudiados reclaman una reforma agraria. ¿Implica esto romper con los límites del sistema? Depende de cómo se defina “el sistema”. En muchos países ha habido reformas agrarias dentro del régimen (modo de producción) capitalista. Sin duda llevar a cabo la reforma agraria significa derrotar a las fuerzas que se oponen a ella, notablemente los terratenientes y sus aliados. Pero esto ha ocurrido muchas veces dentro de países capitalistas sin

que ello significase alteraciones en el modo de producción. En otros países la reforma agraria ha sido el eje para derrotar a las fuerzas que se oponían al cambio de régimen, para pasar del capitalismo al socialismo, como ha sido el caso de Cuba en nuestro continente. Pero no es una precondition necesaria cambiar el modo de producción para llevar adelante una reforma agraria. Entonces, salvo para aquellos MS que expresamente declaren que su intención es derrotar al capitalismo y realizar la reforma agraria, en el caso de los demás, ¿implica que romperán con “el sistema”? Además, llevar a cabo una reforma agraria y cambiar (o no) de régimen depende no sólo de los movimientos agrarios, sino también de sus aliados, de las correlaciones de fuerza entre aliados y adversarios, de la consistencia del sistema político, de la situación internacional, etcétera. En todo caso, es una operación ubicada en un hipotético futuro y cuyo resultado final está mucho más allá de las intencionalidades de los MS. ¿Cómo transformar entonces esta precondition (alterar los límites de compatibilidad del sistema) en un instrumento útil para definir a un movimiento social?

Por otro lado se profundizará extensamente en la idea de Melucci de que la unidad de un MS no es una precondition sino una cualidad trabajosamente construida, y que además no está dada de una vez y para siempre sino que por el contrario, así como se construyó, también se puede perder. La unidad se cimenta en la construcción de una identidad común. Por lo tanto se trabajará extensamente en cada caso en el análisis de cómo se consolida (si ello ocurre) una identidad común entre los miembros del movimiento. ¿En nombre de quién hablan o actúan? ¿Cómo se definen?

La identidad se construye también desde “los otros”, tanto desde los adversarios como desde los grupos sociales aliados, y aun desde aquellos que se podrían identificar como neutros. Algunos lo hacen por oposición, otros por alianza, pero en ambos casos la construcción de la identidad propia es coadyuvada por cómo los ven “los otros”.

Ligado a la definición de la identidad, que permite definir el “campo social” del movimiento, se intentará en cada caso describir a los miembros de éste como miembros, militantes, dirigentes, a la vez que intentado su cuantificación, localización geográfica, ubicación en la estructura social, etcétera.

Como sostienen la mayoría de los autores, para comprender un MS hay que estudiarlo en su accionar. Por ello se dedicará una parte importante del estudio de cada proceso de acción colectiva a la des-

cripción y al análisis de las acciones colectivas que se llevaron a cabo en un periodo de tiempo fijo y similar para todos, con la intención de hacer homogéneas las condiciones del contexto internacional. Se han considerado las acciones llevadas a cabo entre 1997 y 2000, ubicándolas en el contexto en que se llevan a cabo. Este procedimiento permitirá identificar con claridad el conflicto en cada caso: ¿por qué se lucha? ¿Cuáles son los bienes materiales o simbólicos que están en disputa? ¿Cuál es la relación con el Estado en este conflicto? ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias entre los distintos conflictos?

Varios autores, pero especialmente Tarrow (1997), hacen énfasis en el análisis de la estructura de oportunidades para comprender las razones por las cuales se genera la acción colectiva. Esta idea será trabajada para cada uno de los casos bajo análisis, y demostrará ser particularmente feraz. En particular se tendrán en cuenta los acontecimientos que ocurren en el sistema político: el fin de regímenes dictatoriales, la apertura y la tolerancia política, los realineamientos de los partidos políticos, el debilitamiento del aparato estatal y del partido en el gobierno, son algunos de los elementos que se tendrán en cuenta para analizar cada una de las situaciones. Por otro lado también se considerarán los procesos de reajuste económico, apertura comercial, integración regional y globalización bajo la égida neoliberal que es el paradigma dominante en el período analizado. La idea es que si bien los MS no son generados como una respuesta mecánica a estos fenómenos globales, en ellos se reconocerán muchos de los agravios que los MS esgrimen a la hora de formular sus reclamos. El impacto de estos procesos posiblemente sea distinto en cada una de las situaciones analizadas.

Los recursos materiales y simbólicos con que cuentan los movimientos (los recursos físicos, las alianzas, la imagen que el movimiento tiene en la sociedad, etc.) serán también analizados para cada caso porque, tal como lo sostiene la corriente teórica de la movilización de recursos, son importantes, aunque tal vez no definitorios ni los de mayor importancia.

Para cada movimiento se describirán también sus orígenes, los principales eventos en que participó, sus luchas, las alianzas que ha tejido, su estructura interna, las formas como se construye el consenso o se transmiten las demandas de los representados o las decisiones de los dirigentes. La cuestión de la democracia interna en los movimientos ocupará algunas de las reflexiones.



Por último se analizará la utopía, ese horizonte móvil hacia el cual marcha la acción colectiva. ¿Está presente en todos los casos? ¿Participan de él todos los que se movilizan, o es una construcción de los líderes? La utopía ¿es suficientemente realista como para que resulte posible alcanzarla? ¿Es lo suficientemente no real como para impulsar las acciones?

## CAPÍTULO II

# CONSTRUYENDO LA HEGEMONÍA: EL MOVIMIENTO DE LOS SIN TIERRA EN BRASIL<sup>7</sup>

### LOS ANTECEDENTES

#### LA SITUACIÓN DE LA TIERRA

Para comprender la forma en que surge el Movimiento de los Sin Tierra es preciso comenzar la discusión por una explicación del problema de la distribución y la posesión de la tierra en Brasil. Esta historia guarda diferencias con las historias agrarias de algunos de los otros países que se analizarán, particularmente con Uruguay, Chile y Argentina, asemejándose más en cambio la situación del Paraguay. Como se verá luego, estas semejanzas y diferencias son necesarias para comprender a su vez aquellas que se vinculan con los procesos de formación de las organizaciones agrarias.

Brasil es uno de los países del planeta que tiene la distribución más desigual de la tierra. Esta situación se remonta a la época de la colonia con el sistema de las Capitanías Hereditarias y las Sesmarías que reservaban las tierras a la nobleza portuguesa, y a la posterior Ley

---

<sup>7</sup> En la búsqueda de información para este capítulo colaboró la ayudante de investigación Lic. Carina Nocetti, Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, Uruguay.

de Tierras de 1850 que terminó de consolidar el latifundio. Por esta última ley se estableció que todas aquellas tierras que no pudiesen ser cercadas y apropiadas en un plazo determinado debían ser devueltas al Estado. Esta disposición generó una categoría de tierras, las *terras devolutas*, que al menos nominalmente serían de propiedad fiscal.

En la práctica, la apropiación de las tierras por parte de los latifundarios, los “coroneles”, ha seguido un procedimiento que, si bien no es único, porque procedimientos similares se emplearon al menos en el Paraguay y en las provincias del Nordeste argentino, sí es peculiar por la cantidad de tierras involucradas. Por este procedimiento, a los campesinos de origen criollo (*caboclos*) o de origen negro (que provenían de los esclavos libertos a fines del siglo XIX), o más tarde de origen europeo, les era permitido ocupar tierras no reclamadas o apropiadas, con el fin de desmontarlas y convertirlas a la agricultura. Sin embargo, luego de algunos años de cultivarlas, al ser reclamadas, los campesinos eran desplazados de esas tierras, entonces sí apropiadas por los latifundistas. Es decir: los campesinos eran, en la práctica, empleados como trabajadores para desmontar y poner en producción tierras que luego eran apropiadas por distintos medios por actores con mayor poder económico o político. El campesino desplazado con este sistema se dirigía nuevamente en búsqueda de nuevas tierras libres e inexploradas, generalmente hacia el oeste del territorio, en un proceso incesante y repetido.

Sin embargo, las tierras así apropiadas por los latifundistas a su vez precisaban mano de obra para su explotación, ya sea en la temprana industria azucarera, en la pujante agricultura cafetalera de principios del siglo XX, o en la necesaria producción agrícola. Para ello, y frente al perenne déficit de mano de obra que el campo brasileño ha experimentado, el mecanismo consistía en que los propietarios de las tierras las daban a campesinos bajo distintos y variados regímenes de tenencia. Ello dio lugar a una serie de figuras distintas –*arrendatarios, foreiros, meieiros, agregados, parceiros*– según cuál fuese la figura que relacionaba la fuerza de trabajo con el capital terrateniente. La característica común era la inestabilidad y la precariedad en la tenencia de la tierra, así como la explotación a la que eran sometidos los campesinos.

La historia agraria de Brasil debe entenderse en la clave de estos dos procesos: la lucha por la apropiación de un territorio enormemente vasto, y la lucha por la apropiación de la fuerza de trabajo necesaria para explotar dichas tierras. Es el contrapunto entre estos dos proce-

so lo que facilita la comprensión de la forma en que se desarrolló el agro brasileño y de los procesos sociales a que dio lugar. Paralelamente, la mirada sociológica se detiene o se focaliza en el conflicto generado por estos dos procesos y en sus actores principales: por un lado los “coroneles”, los latifundistas, y por el otro los campesinos y los trabajadores rurales en sus distintas formas y organizaciones; y entre ambos, la legislación agraria y el Estado, fuertemente influido y manipulado por los primeros.

La colonización del territorio de la joven colonia portuguesa tuvo su principal enclave en el nordeste del territorio, donde se desarrolló una pujante industria de producción de azúcar a partir de la caña, que ya en el siglo XVII contaba con doscientos ingenios en la región (Chonchol, 1994). Esta industria de enclave era dominada por los holandeses, que actuaban de banqueros pero también eran los introductores y distribuidores del azúcar en Europa. El suministro de mano de obra para estos ingenios azucareros fue hecho en un primer momento mediante la esclavización de población indígena. Sin embargo, la rebeldía de estas poblaciones, y la facilidad que tenían para huir hacia el interior del territorio, hicieron que muy tempranamente se desarrollase el comercio de esclavos con población de origen africano. Estos constituyeron el principal contingente laboral de los ingenios azucareros del nordeste. La población esclava también ensayó formas de resistencia a la explotación, huyendo hacia el interior y constituyendo pueblos libertarios, denominados *quilombos*. Algunos de ellos, como el de *Palmares*, fueron muy importantes: formados por varios poblados, llegaron a tener miles de habitantes. Estos pueblos eran permanentemente atacados por las milicias de los propietarios de los ingenios. Palmares mismo, si bien duró más de un siglo, fue finalmente arrasado en 1694 (Fernandes, 2000).

La población indígena también protagonizó conflictos y luchas para escapar de la esclavitud en distintas partes del vasto y despoblado territorio de la colonia portuguesa. En particular cabe mencionar los poblados organizados en la Misiones Jesuíticas en una vasta área que ocupaba las tierras hoy fronterizas entre Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Estos poblados también eran permanentemente atacados por los *jagunços* y fueron finalmente destruidos con la expulsión de los jesuitas de las tierras americanas a fines del siglo XVIII.

A fines del siglo XIX, y en los inicios del siglo XX, las luchas por la tierra y por liberarse de la explotación de los latifundistas son corporizadas en los movimientos mesiánicos. Existieron varios de ellos

en la historia del Brasil. El mayor y posiblemente más conocido fue el movimiento de campesinos y ex-esclavos que hacia fines del siglo XIX se organizan en torno a un líder mesiánico, Antonio Conselheiro. Ocupando la hacienda de *Canudos*, organizan la producción de subsistencia en la tierra común con el aporte del trabajo de todos, llegando a tener diez mil personas. Este enclave cooperario era un mal ejemplo que sustraía tierras y mano de obra a los coroneles y terratenientes. Acusados de intenciones monárquicas, fueron arrasados por el ejército y tropas irregulares en 1897 (Martins, 1985).

A fines del siglo XIX y en los comienzos del siglo XX, Brasil recibe un enorme aporte de trabajadores de origen europeo, que se dirigen principalmente a los Estados del centro, sur y sudeste del país. Sin duda el aporte de estos inmigrantes permitió hacer frente a la demanda de trabajadores para desarrollar la agricultura, y si bien la mayoría de ellos fueron empleados como trabajadores asalariados o como trabajadores agrícolas familiares bajo formas precarias de ocupación de la tierra, también es cierto que otros pudieron asentarse y terminaron siendo propietarios de las parcelas que ocupaban. Posiblemente se deba a esta situación el hecho de que durante la primera mitad del siglo pasado los conflictos por la tierra y por la mano de obra parecen haber sido menores. En la segunda mitad del siglo XX se invierte el proceso, y en los Estados más poblados del litoral Atlántico la mano de obra se transforma en excedentaria como consecuencia de la modernización agrícola con cambio técnico, arreciando entonces nuevamente los conflictos por la tierra.

#### LAS LIGAS CAMPESINAS Y EL MASTER

Luego de la caída del gobierno de Vargas en 1945 se inaugura una época de mayores libertades democráticas. En ese ambiente comienzan a organizarse asociaciones de campesinos por casi todo el país. Algunas de ellas tenían vinculación con el recientemente legalizado Partido Comunista Brasileiro y protagonizaron acontecimientos más bien aislados de lucha por la tierra. En 1954 se organizan bajo la denominación de Ligas Campesinas, inicialmente en el Estado de Pernambuco, extendiéndose luego a Paraíba, Río de Janeiro, Goiás, Ceará y Alagoas. El conflicto más conocido ocurre en el Estado de Pernambuco, con la ocupación del Ingenio Galilea por parte de los campesinos arrendatarios de sus tierras (*foreiros*) ante la amenaza de expulsión. En este conflicto se involucra el abo-

gado y diputado por el Partido Socialista Brasileiro, Francisco Julião, que a partir de allí se transformará en uno de los principales mentores de las Ligas. Esta organización promovió un acuerdo de los campesinos con sectores urbanos, lo cual permitió ganar las elecciones estaduais y la Prefectura de Recife en 1958 y en 1962 respectivamente. El Gobernador del Estado, presionado por la ocupación de tierras hecha por las Ligas y por la demanda popular, finalmente expropia la Hacienda Galilea (500 ha) y reparte sus tierras entre 47 familias de arrendatarios. Esta victoria de los campesinos, si bien insignificante en cuanto a las tierras involucradas o las familias beneficiadas, tuvo una enorme repercusión política tanto entre las fuerzas de los propietarios y terratenientes como entre las organizaciones campesinas.

Las Ligas sostenían la necesidad de una reforma agraria radical, mientras que tanto el PCB como la Iglesia Católica, instituciones ambas que apoyaban a las Ligas, más bien impulsaban una reforma agraria por etapas y con indemnización en dinero a los propietarios (Fernández, 2000). Parte de ellas intentaron iniciar la lucha armada, siendo duramente reprimidas con la intervención del ejército y finalmente desarticuladas con el golpe militar de 1964.

En el Estado de Río Grande do Sul, el Gobernador Leonel Brizola, también electo en 1958, apoyó la organización del *Movimento dos Agricultores Sem Terra* (MASTER) que representaba a 100 mil campesinos del Estado (Bergamasco y Norder, 1996), y expropió y repartió tierras en las cercanías de la ciudad de Pelotas. En forma similar, varios gobernadores en diversos Estados (Goiás, Paraná, São Paulo) elaboraron en esa época proyectos que permitieron la recuperación de tierras por parte de los Estados y su posterior distribución. Sin embargo, más allá de su sentido simbólico, la parcialidad de las reformas encaradas produjo efectos limitados en la distribución de la tierra.

En 1954 el PCB creó la *União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas* (ULTAB) con el fin de coordinar el accionar de las asociaciones de trabajadores rurales que le eran afines. En 1961 la ULTAB organiza un congreso de trabajadores rurales en Belo Horizonte. De los 1.400 trabajadores que participaron, 215 eran delegados de las Ligas Camponesas y 50 delegados eran del MASTER. Esta composición es reveladora de la intensa lucha política que existía por la representación de los trabajadores rurales entre el Partido Comunista, la Iglesia Católica y otros partidos, como el PTB de Brizola.

En el transcurso de estos años se da un intenso proceso de creación de sindicatos rurales en los principales Estados de Brasil, impulsados por los actores arriba mencionados. Esto posibilita que en 1963, un año antes del golpe de Estado, al llegarse a un acuerdo entre el PCB y la Iglesia Católica, se cree la *Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura* (CONTAG). El conjunto de estas organizaciones, de carácter local, estadual o nacional, llevó a cabo en las décadas del cincuenta y del sesenta (hasta el golpe de Estado) una innumerable serie de acciones de ocupación de tierras, huelgas, reivindicaciones, defensa de los derechos de los trabajadores asalariados y de los campesinos sin tierras o con poca tierra. Muchas de esas luchas están relatadas en diversos textos, mientras otras, por su carácter local, nunca fueron registradas.

Gradualmente el tema de la Reforma Agraria ganaba espacio en la sociedad, no sólo en la sociedad agraria, sino también –y principalmente– en la urbana. En 1960 Janio Quadros vence en las elecciones con un claro discurso pro-reforma agraria. Cuando al año siguiente renuncia y deja el cargo a João Goulart, este, que había estimulado la alianza de sectores campesinos y de trabajadores urbanos para la realización de una amplia reforma agraria, se ve envuelto en una situación gradualmente más conflictiva. Los sectores propietarios sindicaron a Goulart como una “amenaza comunista”, asociándolo a las reformas emprendidas por la Revolución Cubana. En 1964 decreta la desapropiación de las tierras improductivas, y dos semanas después un golpe de Estado militar lo depone (Bergamasco y Norder, 1996).

#### LA POLÍTICA DE TIERRAS DURANTE EL GOBIERNO MILITAR

La política de tierras durante el gobierno militar apuntó a desactivar la lucha por la tierra a partir de redirigir la presión hacia la colonización en áreas de frontera agrícola. Pocos meses después del golpe de Estado se sancionó una ley creando el *Estatuto da Terra*, fijando los lineamientos para llevar a cabo proyectos de colonización en el área amazónica a través del *Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrícola* (INDA) y para la política de reforma agraria que estaría a cargo del *Instituto Brasileiro de Reforma Agraria* (IBRA). Seis años después ambos institutos se reúnen en el *Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria* (INCRA) que continuará hasta la actualidad. A través del INCRA se promovió la colonización de las tierras públicas de la Amazonía, prácticamente vacías (o habitadas

en forma dispersa por etnias indígenas y por *posseiros*) con dos modalidades distintas: pequeñas unidades familiares trasladando familias campesinas desde las áreas más conflictivas del país, y grandes empresas agropecuarias a las que se les dio facilidades crediticias y subsidios e incentivos a través de la realización de grandes obras de infraestructura. Dos grandes ejes viales, uno norte-sur y otro este-oeste, se construyeron para facilitar el traslado de personas, bienes y productos desde y hacia los nuevos territorios. Entre los proyectos de colonización oficial, la colonización particular, la regularización de las tierras de *posseiros* y otros convenios durante los veinte años de gobierno militar, se asentaron 160 mil familias en más de 260 proyectos de colonización (Bergamasco, Norder, 1996).

Durante las décadas del setenta y del ochenta el Estado Brasileño llevó a cabo un extenso programa de desarrollo de la energía por medio de la construcción de represas hidroeléctricas. Este programa era paralelo a la intensa industrialización y urbanización que ocurrían en aquellos años. La construcción de las represas se hacía sin la menor consideración por la suerte de los pobladores que vivían en las tierras que serían inundadas por el espejo de agua de las represas. Estos eran de distinto origen social: pequeños productores rurales, *posseiros*, arrendatarios, comerciantes, asalariados, pescadores, poblaciones indígenas, agricultores grandes y medianos, etcétera. A los conflictos entre las familias que serían desplazadas por la inundación y las empresas eléctricas se superponían los conflictos entre antiguos y nuevos interesados en ocupar tierras ahora pasibles de ser irrigadas. Esta situación dio lugar a la creación de varios movimientos de distintos tipos de población afectada por las represas que luchaban por la reubicación de sus viviendas y de sus tierras productivas. Las empresas eléctricas, cuando mucho, ofrecían pagar en dinero por los bienes inundados, aunque estos eran subvaluados y el pago en cuotas desvalorizaba el dinero recibido. La consigna de los movimientos, reunidos en el *Movimento de Atingidos por Barragens*, pronto fue *terra x terra*. En resumen, los movimientos originados pueden ser agrupados en tres grandes áreas: la cuenca del Río San Francisco en el Nordeste, la cuenca de los ríos Paraná y Uruguay, y en el Norte la represa de *Tucuruí*. En la experiencia de estos movimientos, sólo cuando los damnificados se organizaron y presionaron al Estado y a las empresas consiguieron que se les reubicase y se atendiesen sus demandas (Grzybowski, 1987).



## LAS POLÍTICAS FUNDIARIAS ESTADUALES DURANTE LOS AÑOS '80

A principios de la década del ochenta el gobierno militar ya estaba en retroceso. Las elecciones para los gobiernos estaduais abrieron la posibilidad de que las demandas de los trabajadores sin tierra fuesen introducidas en la contienda electoral en varios Estados. En los años subsiguientes varios gobernadores electos, presionados por sus promesas y por la posterior ocupación de tierras, llevaron a cabo procesos de distribución de tierra. Como la potestad de expropiar tierras privadas descansaba, según la Constitución, sólo en el Presidente de la República, los gobernadores se concentraron en la identificación y catastramiento de las tierras públicas y en la recuperación de aquellas que habían sido ilegalmente apropiadas por latifundistas fraguando títulos o procedimientos legales (*grilheiros*) para su posterior distribución. Por este método, los programas estaduais de recuperación y distribución de tierras públicas, y de legalización de los títulos de propiedad de familias que ocupaban tierras públicas, se lograron asentar 120 mil familias en 634 núcleos de asentamientos por un total de 4,7 millones de hectáreas (Bergamasco y Norder, 1996). Si se considera que los estudios de la época ya identificaban que las familias sin tierra llegaban a 4,5 millones en todo el país, está claro que el efecto de estos esfuerzos estatales fue insuficiente.

En 1985 toma posesión el nuevo gobierno constitucional que inaugura un período de profundos debates en torno a la cuestión de la tierra. En 1984 se había creado en Cascavel (Estado de Paraná) el *Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra*. De allí en más, para comprender la evolución de la política de tierras, debe efectuarse una lectura de contrapunto entre el accionar de las organizaciones agrarias, en especial el MST, la acción de los latifundistas agrupados en sus organizaciones y enquistados en el gobierno, y el accionar de los propios organismos del Estado nacional. Sin embargo, antes de desarrollar este tema es conveniente hacer una referencia a la política de modernización agrícola impulsada por los militares y continuada por los gobiernos posteriores que logró modificar ostensiblemente el campo brasileiro.

### LA MODERNIZACIÓN DEL AGRO BRASILEIRO

Con el golpe militar se estructura un pacto entre los militares y sectores de la burguesía brasileira que, en lo que respecta al agro, tendrá dos expresiones distintas pero complementarias. Como se explicó más

arriba, en cuanto a la política de tierras el gobierno militar se inclina por desactivar los conflictos a través de la colonización de la amazonía con población campesina que es trasladada hacia aquellos confines. Por otro lado, esta política coincidía coherentemente con la ocupación del territorio pregonada por las doctrinas de la seguridad nacional preconizadas en la época. Además, el gobierno militar estimula el desarrollo capitalista en el campo a través del estímulo a los Complejos Agroindustriales y a la gran agricultura llevado a cabo por empresas capitalistas, con trabajo asalariado e intensa mecanización.

Hubo mucho debate en la época acerca de las bondades y las desventajas de ese modelo de desarrollo agrícola. Para sus impulsores, la modernización de la agricultura consistía en la agroindustrialización y la industrialización de la agricultura, entendiendo por lo primero el incremento de los procesos de transformación, procesamiento, almacenamiento y comercialización de la producción agraria, y por lo segundo el uso creciente de bienes de origen industrial, de insumos industriales y de servicios técnicos con el fin de la producción agraria.

Lo que caracteriza a esta forma de producción agraria es el predominio de los medios fijos de producción –entendiendo por tales a los tractores, arados con tracción mecánica, cosechadoras, camiones– y de los “elementos del costo de producción” –fertilizantes, agroquímicos, etcétera. También en el capital variable se producen cambios, ya que disminuye el empleo de trabajadores permanentes (aunque con mayor calificación y división del trabajo) mientras aumenta el empleo de trabajadores estacionales y temporales con baja o nula calificación. Por lo tanto, hay que pensar que estos cambios técnicos y económicos harían predominar el capital productivo, comercial y financiero sobre el capital estrictamente fundiario (Muller, 1990).

El Estado jugó un papel central en la formación de este modelo agrario a través de medidas específicas y el manejo de diversos instrumentos. El apoyo crediticio abundante y a tasas de interés favorables; el manejo de la tasa de cambio para favorecer tasas de cambio reales que permitiesen exportar en mejores condiciones de competitividad; las exenciones tributarias, disminuyendo los impuestos al agro, los aranceles de importación de insumos agrícolas y las retenciones a las exportaciones agrícolas (instrumentos de traspaso al sector industrial); la protección inicial del mercado interno para que las incipientes agroindustrias acumulen; los subsidios a las exportaciones; la caída del salario real de los trabajadores agrícolas, el control de la fuerza de trabajo y el desestímulo a la organización sindical; el apoyo

a la investigación y transferencia tecnológica; la creación de un mercado de tierras o su expansión a través del estímulo a la colonización; la creación de la infraestructura de servicios necesaria (camino, energía eléctrica, o la construcción de grandes obras de riego), etcétera.

Martine ha hecho notar que el avance de los complejos agroindustriales no es tan extendido como parece, precavido contra aquellos análisis que han transmitido la idea de que la modernización de la agricultura brasileña ha penetrado homogéneamente en todas las regiones y sectores, con capacidad para competir en los mercados internacionales y para generar el bienestar de la población. Se hace notar que la aparente eficiencia y productividad de los CAI en el Brasil ha estado ocultando en realidad un fuerte apoyo del Estado y un enorme traslado de recursos del conjunto de la sociedad a este sector de la agricultura, preguntándose si éste fue el mejor uso para dichos recursos. A partir de la constatación de que treinta millones de brasileños fueron expulsados del campo en las últimas tres décadas, se ha hecho notar que los procesos de urbanización (presentados como inevitables por algunos autores) ocurren en momentos en que ni las ciudades ni otros sectores de la economía tienen capacidad de absorber a los inmensos contingentes de desplazados por el nuevo modelo agrícola. Martine sintetiza su pensamiento así: “la tan publicitada modernización agrícola cuya base es la ‘caificación’ infelizmente se presenta como una transformación parcial, desigual, fuertemente sustentada por recursos públicos, inherentemente limitada y con más rasgos de un capitalismo prebendario que de un capitalismo moderno” (Martine, 1991: 35).

En materia de tierras, la valorización de las mismas impulsadas por este desarrollo agrícola con fuerte apoyo estatal provocará la expulsión de miles de pequeños productores, propietarios, *posseiros*, arrendatarios, etc. en las regiones más fértiles y aptas para el desarrollo agrícola y pecuario, al reposesionarse los propietarios de las tierras o al avanzar por distintos métodos en el despojo y apropiación de las tierras cuyos títulos no estuviesen claramente saneados. Por otro lado, el avance hacia las tierras de la amazonía promovido por el gobierno militar también se hizo bajo el modelo de la promoción a las grandes empresas agropecuarias o forestales. De esta manera, no sólo se favoreció a un modelo de grandes explotaciones de dudosa productividad, atentándose además contra la conservación y el uso sustentable de los enormes recursos naturales de esta región, sino que también se invioló la propia posibilidad de que los trabajadores desplazados de las

regiones del este y del sudeste fuesen efectivamente asentados en las nuevas tierras (por ejemplo, 25 millones de hectáreas se repartieron entre 27 empresas en los estados de Amazonas, Acre, Pará, Amapá y Mato Grosso)<sup>8</sup>.

Es en este contexto, en que no sólo hay campesinos sin tierra, sino que los campesinos sin tierra son re-creados por el proceso de modernización agraria, con escaso impacto de las políticas oficiales de asentamientos y de reubicación fundiaria, que es preciso comprender el surgimiento de las organizaciones de campesinos sin tierra (o despojados de la tierra).

#### EL MST Y LA LUCHA POR LA TIERRA<sup>9</sup>

Durante la década del setenta, en pleno gobierno militar, el ala más progresista de la Iglesia Católica ligada a la Confederación Nacional de Obispos comienza un trabajo innovativo tanto en el campo como en la ciudad de conformar pequeños grupos de reflexión pastoral denominados Comunidades Eclesiales de Base (CEB). Esta actitud respondía a profundos cambios que estaban ocurriendo en la Iglesia impulsados por el Concilio Vaticano II (1965), por la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano realizada en Medellín, Colombia en 1968, por la III Conferencia realizada en Puebla, México, en 1979, y por otros cónclaves impulsados desde las más altas jerarquías católicas. Estos cambios implicaban que la Iglesia hacía una opción por colocarse del lado de los pobres y que en su predicación y en su reflexión pastoral abría un espacio para que sus fieles, guiados por el clero, reflexionasen sobre su propia situación de pobreza, buscando salir de ella, tratando de realizar el reino de Dios aquí en la tierra. En la tarea de organización de las CEBs se adoptó la metodología de educación popular creada por Paulo Freire, lo cual le dio un poderoso instrumento de conscientización popular. Naturalmente este nuevo giro de la Iglesia no se dio sin resistencias tanto desde su propio interior como desde fuera de ella. Sin embargo, la Teología de la

---

8 Historia del MST. En <[www.mst.org.br](http://www.mst.org.br)>.

9 La descripción del MST y de las distintas etapas por las que atraviesa ha sido extractada de las siguientes publicaciones: Fernandes, Bernardo Mançano, *A formação do MST no Brasil*, Petrópolis, RJ, Editora Vozes, 2000; *La Historia do MST*, publicada en la página web de la organización <<http://www.mst.org.br/historico>>; Stédile, João Pedro y Bernardo Mançano Fernandes, *Brava Gente. A trajetória do MST e a luta pela terra no Brasil*, Editora Fundação Perseu Abramo, 1999. En adelante sólo se hará referencia a dichos textos cuando se transcriban citas textuales de los mismos.

Liberación (como se denominó a esta nueva corriente dentro de la Iglesia) gozó de la protección y el beneplácito de las más altas jerarquías de la Iglesia por cierto tiempo, hasta que finalmente cayera en desgracia con los cambios ocurridos con el advenimiento del Papa Wojtila. Aún así el tiempo fue suficiente, al menos en Brasil, para contribuir a crear un poderoso movimiento que, habiendo tenido su origen en la Iglesia, se extendió y, al perder apoyo de las jerarquías eclesiales, se transfiguró en un movimiento autónomo. Sin embargo, este origen es muy importante para comprender muchas de las creencias y prácticas actuales del MST (Novaes, 1997).

Las CEBs se nuclearon en la Comisión Pastoral por la Tierra (CPT), organismo que fue decisivo en el nacimiento del MST. Las comunidades se habían convertido en espacios de discusión y de concientización que permitieron construir gradualmente un instrumento de organización campesina para la lucha por la tierra. La CPT articuló las diferentes experiencias que contribuyeron a crear el embrión de la organización de la resistencia campesina tanto a la política de tierras como a la política de modernización conservadora del agro impulsada por los gobiernos militares.

La génesis del MST comienza con la ocupación de las haciendas de *Macali* y *Brilhante* en Ronda Alta en el Estado de Río Grande do Sul el 7 de septiembre de 1979. Desde esa fecha hasta el mes de enero de 1984, en que se funda el Movimiento en el Primer Encuentro Nacional de Trabajadores sin Tierra en la ciudad de Cascabel, en el Estado de Paraná, se suceden multitud de acciones y ocupaciones en los Estados de Santa Catarina, Paraná, Sao Paulo y Mato Grosso do Sul que construyen las fuerzas que permiten llegar a aquella instancia organizativa.

La ocupación de la hacienda *Macali* en Ronda Alta (Río Grande do Sul) tiene todos los ingredientes que caracterizarán a las luchas iniciales por la tierra que conducirán a la creación del MST. Por ello es conveniente detenerse brevemente en una relación del proceso. En 1978 los indígenas de la etnia *Kaingang* inician las acciones y finalmente consiguen desalojar a 1.800 familias de colonos arrendatarios de la Reserva Indígena de Nonoai, creada en 1847, que la arrendaban desde la década del '40. En junio de 1978, 30 familias sin ningún tipo de organización previa ocupan tierras de las haciendas de *Macali* y *Brilhante* en Ronda Alta y en la Reserva Forestal de la hacienda Sarandí en Rondinha. Estas tierras eran públicas, estaduais, y estaban arrendadas a empresas agrícolas. Pronto las ocupaciones llegan a

300 familias. El gobierno negocia la desocupación de las tierras con la promesa de la situación será contemplada cuando “se realice la reforma agraria”, y los ocupantes retornan a casa de familiares y amigos donde estaban transitoriamente refugiados. Por otro lado parte de las familias desalojadas de Nonoai son enviadas a Bagé a tierras de la exposición de Esteio (128 familias), y a Mato Grosso (550 familias) a un proyecto de colonización denominado Terranova.

Mientras tanto, un pequeño grupo de cinco familias de colonos desalojados de Nonoai llega hasta la Parroquia de Ronda Alta solicitando asilo. Allí el cura párroco no sólo se los provee, sino que también inicia con ellos una tarea de reflexión pastoral acerca de sus condiciones y de la situación por la que están pasando. En dichas reflexiones leen y analizan el capítulo tercero del libro del Éxodo que relata el sufrimiento y la liberación del Pueblo de Dios en busca de la tierra prometida. A partir de ello las familias acuerdan participar de los diversos campamentos que están sucediendo en la región y que ayudarían a concretar la organización de los trabajadores sin tierra. De allí parten con una tarea concreta: trabajar en los campamentos haciendo reflexionar a las familias sobre la situación y los caminos de acción, acordando que un delegado de cada familia se volvería a encontrar en la parroquia dentro de quince días. Luego de este plazo se reencuentran en la casa parroquial y acuerdan continuar con su trabajo en los campamentos, pero tendiendo a la realización de una asamblea de las familias acampadas. En julio de 1979, un año después, 1.100 familias se reúnen en una asamblea para decidir sus destinos. Hasta el momento las soluciones que se veían eran tres: desertar de la organización y volver a trabajar como asalariados de las empresas, trasladarse a los proyectos de colonización en Mato Grosso o reivindicar el asentamiento en tierras en el Estado. La Asamblea elige este último camino acordando que ocuparían nuevamente la hacienda Sarandí si el gobierno no les prestaba atención. Un mes después los colonos consiguieron una entrevista con el gobernador estadual, quien les solicita un mes de plazo para solucionar el problema. Vencido el plazo y sin respuestas del gobierno, los colonos acuerdan la ocupación de la tierra.

Los líderes de los diversos campamentos establecidos en la región inician el trabajo de organización, y la ocupación de la Hacienda Macalí se lleva a cabo en la noche del 6 al 7 de septiembre con 110 familias. Cuando llegan a la tierra ocupada plantan una cruz de madera y una bandera de Brasil. Esa tarde tiene lugar una celebra-

ción religiosa. Reconstruyen colectivamente el proceso de la ocupación reconstruyendo su propia historia, y leen los versículos del libro del Éxodo que describen la peregrinación del Pueblo de Dios en la búsqueda de la tierra prometida. Al día siguiente llega la Brigada Militar, que cerca a las familias. Las mujeres con los niños se colocan entre los militares y los acampantes. Frente a esta situación la Brigada Militar se retira de sus posiciones y comienzan las negociaciones con el gobernador, quien finalmente accede a permitir a los colonos a sembrar en esas tierras y retira a los militares del lugar. La ocupación ha terminado con éxito para estas familias, que al mismo tiempo han mostrado cuál es el camino para los demás.

A partir de esta ocupación, otras se suceden en los meses siguientes en la misma región con resultados diversos. A veces logran sus objetivos, en otras deben recular y desalojar las tierras ocupadas para asentarse a la vera del camino y de las alambradas que los separan de la tierra prometida. Tal vez la resistencia más empecinada y la lucha más importante en la gestación del MST fue el campamento de la *Encruzilhada Natalino* también en el Estado de Río Grande Do Sul, que llegó a reunir a 600 familias y que permaneció durante más de dos años (1981-1982) a pesar de la fuerte presión militar y de las tratativas con el gobierno que intentaba desarticularla, hasta que consiguieron ser asentados en el municipio de Ronda Alta. Acontecimientos similares sucedían en los Estados de Santa Catarina, Paraná, Sao Paulo y Mato Grosso do Sul forjando la génesis del MST, ya que su fundación es el producto de una serie de acciones de resistencia y de ocupación de tierras que se expande por cinco años, hasta 1984.

Estas acciones pueden caracterizarse por ciertos rasgos básicos que se van creando en estos años, al fragor de la lucha, pero que continuarán siendo el sello distintivo de las acciones del MST: la organización de los campesinos a partir de grupos de reflexión, en muchos casos promovidos y apoyados por la CPT o por otros grupos religiosos; la confianza en las propias fuerzas y en una metodología de ver, reflexionar y actuar que era la base del método Freiriano; la identificación de tierras públicas, o de tierras con títulos mal habidos o de latifundios improductivos que podrían ser reclamados y ocupados; la ocupación de dichas tierras para luego negociar con el gobierno; la organización en los campamentos en distintos frentes de lucha para atender a las necesidades de los acampantes pero también como una forma de democratizar las relaciones al interior del grupo de ocupan-

tes; la formación de los acampantes ya sea a través de escuelas para los niños como de la capacitación de los adultos; etcétera.

Como consecuencia de las ocupaciones promovidas por las organizaciones campesinas y por la propia acción de los gobiernos estaduais y del gobierno Federal, entre 1979 y 1984 se crean 115 asentamientos en todo el país, con 21.563 familias en un área de 1.224.528 ha (Bergamasco y Norder, 1996).

Paralelamente a las ocupaciones que se sucedían en distintos puntos del territorio del sur y sudeste de Brasil, la CPT comenzó a estimular los encuentros regionales de líderes de las ocupaciones con el fin de intercambiar experiencias y promover una perspectiva de carácter acumulativo y de socialización de las prácticas de lucha por la tierra. Comenzando por realizar encuentros de carácter regional y luego encuentros de carácter estadual, el crecimiento de la capacidad organizativa llevó a que la CPT propusiese realizar el Primer Encuentro Nacional de Trabajadores Sin Tierra en Cascavel, Estado de Paraná, a fines de enero de 1984.

El encuentro, de tres días de duración, se llevó a cabo en el Centro Diocesano de Formación de Cascavel con la participación de cerca de cien personas, representantes de los trabajadores sin tierra de los cinco estados del sur del país e invitados de distintos orígenes: trabajadores rurales de otros estados, operarios de la CUT, de sindicatos de trabajadores rurales, y también representantes de la CPT, de la Asociación Brasileña de Reforma Agraria, de la pastoral operaria, etcétera.

En el documento fundacional que se da a luz, los trabajadores comienzan analizando la situación del campo brasileiro, conmovido por “una política económica, fundiaria y agrícola dirigida solamente para la exportación, en beneficio del capital nacional y extranjero”. Denuncian que la concentración de las tierras en pocas manos ha elevado el número de los campesinos que fueron expulsados de la tierra en la década del ‘70: 2,5 millones en Paraná, 1,5 millones en Río Grande do Sul, y 600 mil en Santa Catarina. Pero con más angustia comprueban que en los años recientes ha “crecido el número de conflictos, el hambre, la miseria, el desempleo, las muertes, y los asesinatos brutales de compañeros”. Denuncian que sólo en 1983 fueron asesinados 116 trabajadores y sus asesinos no fueron castigados. Anuncian que frente al proyecto de la burguesía latifundiaria que quiere apropiarse de toda la tierra, los pequeños productores, los *posseiros*, los medieros, los arrendatarios comienzan una lucha que ya no



sólo es por la defensa de sus tierras sino que también es una lucha por la reconquista de la misma. Reseñan las victorias logradas en los años recientes en la reconquista de tierras en los cinco Estados. Llamam a todos los trabajadores a unirse a ellos “contando para tanto con el apoyo de las Iglesias, de la CPT y la CIMI y los Sindicatos Auténticos”, y esperan que en un próximo Encuentro haya representantes de todos los Estados de la Federación. Terminan con la consigna “La Tierra para quien en ella trabaja y vive”<sup>10</sup>.

Los asistentes al Encuentro también esbozaron los objetivos generales del Movimiento: luchar por una reforma agraria; luchar por una sociedad justa, fraterna y acabar con el capitalismo; integrar a la categoría de los sin tierra: trabajadores rurales, arrendatarios, medieros, pequeños propietarios, etc.; la tierra debe ser para quien en ella trabaja y de ella necesita para vivir.

También se definió a los latifundios y a las *terras devolutas*<sup>11</sup> como las categorías principales para ser ocupadas. Con el fin de extender el Movimiento, principal preocupación que emergió del Encuentro, se acordó que líderes de los campamentos ya formados deberían trasladarse a otros municipios con el fin de extender la organización en otras regiones y Estados indicando la metodología que debían seguir: procurar el apoyo de las Iglesias y de los Sindicatos de Trabajadores Rurales; realizar reuniones con las familias en sus casas y en sus comunidades; formar grupos de Sin Tierra; realizar asambleas; escoger a los líderes; en cada lugar estudiar las leyes y la situación de los que no tenían tierra. Estas tareas darían lugar a una intensificación de la lucha por la tierra, teniendo como principal instrumento la ocupación de las tierras escogidas. La intensificación de las luchas por la tierra daría paso a la necesidad de organizarse en niveles superiores municipales, regionales y estatales, confluyendo a una organización de carácter nacional.

Con estas directivas, cuando al año siguiente se reúne el Primer Congreso del Movimiento, preparado con varios encuentros previos, regionales y estatales, asisten 1.500 delegados de 23 Estados del país y una amplia y variada representación de religiosos de distintas deno-

---

10 Documento Final del Encuentro. Relatorio del 1er. Encuentro Nacional del *Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra*, Porto Alegre, 1984: 19 y 20. Citado por Fernandes, op. cit.: 81 y ss.

11 Las *terras devolutas* eran tierras que habían vuelto a la propiedad del Estado. Sin embargo muchas veces estas tierras habían sido ilegalmente apropiadas por latifundistas por medio del soborno, del fraude de papeles de propiedad o por métodos más violentos.

minaciones, del gobierno federal y de gobiernos estaduais, líderes sindicales, representantes de organizaciones campesinas de América Latina, de organizaciones de derechos humanos, etcétera. Del total de los delegados, 300 eran mujeres, demostrando con su presencia la importante participación que habían logrado en la naciente organización campesina.

En este Congreso terminan de establecerse las bases de la organización, definiéndose como principios rectores: que la tierra sólo esté en manos de quien en ella trabaja; luchar por una sociedad sin explotadores ni explotados; ser un movimiento de masas, autónomo, dentro del movimiento sindical, para conquistar la reforma agraria; organizar a los trabajadores rurales desde la base; estimular la participación de los trabajadores rurales en los sindicatos y en los partidos políticos; dedicarse a la formación de líderes y a construir una dirección política de los trabajadores; articularse con los trabajadores de las ciudades y con los campesinos de América Latina<sup>12</sup>.

Con la realización de este Congreso se había dado el paso inicial para la consolidación del MST. Los próximos pasos serían la expansión del MST a todos los Estados y su afianzamiento en todo el territorio nacional<sup>13</sup>.

## EXPANSIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MST (1985-1990)

### EL FRACASO DEL PLAN NACIONAL DE REFORMA AGRARIA

En 1985 el electo Presidente Constitucional Tancredo Neves muere antes de asumir la presidencia, siendo sucedido por el Vicepresidente José Sarney. Entre los compromisos asumidos por Tancredo Neves estaba la realización de una Reforma Agraria. Cuando asume Sarney, nombra en el recién creado Ministerio de Reforma y Desarrollo Agrario y en la presidencia del INCRA a conocidos defensores de la Reforma Agraria. En ese momento, una parte importante de las fuerzas progresistas del país coincidía en la posibilidad de que efectivamente se llevase a cabo una Reforma Agraria. En mayo de 1985 un grupo de expertos prepara y entrega al Congreso Nacional una pro-

12 *Normas gerais do MST*, 1989a, cap. II, p. 5-7. Citado por Fernández, op. cit., pp 93.

13 Las etapas en que se divide la cronología del MST han sido propuestas por Fernández, op. cit., pero también se encuentran en los *Documentos para la Historia del MST* disponibles en Internet en <<http://www.mst.org.br/historico/historia4.html>>.

puesta de Reforma Agraria. La meta de la propuesta era asentar a 1,4 millones de familias en 15 millones de hectáreas entre 1985 y 1989.

En el Congreso los sectores latifundarios muy bien organizados comienzan un proceso de desfiguración de los principios de la propuesta. Luego de doce versiones distintas, ésta es finalmente aprobada como Plan Nacional de Reforma Agraria en octubre de 1985. Pero para ese entonces ya se había modificado sustantivamente la propuesta inicial: la expropiación de tierras por interés social dejó de ser una medida prioritaria, y en su lugar se priorizaba la ocupación de tierras públicas en áreas de frontera agrícola. Además se consideraba que las propiedades que tuviesen arrendatarios, medieros y agricultores en formas similares de tenencia estaban cumpliendo con una función social y eran productivas, con lo cual se dio nuevas fuerzas a las formas más retrógradas de la tenencia de la tierra.

Las consecuencias de este retroceso se verían luego en las cifras de los asentamientos realizados entre 1985 y 1989: se asentaron apenas 82 mil familias, es decir, el 6% de la meta propuesta, y sólo se transfirió un 2% de las tierras propuestas, siendo el 45% de ellas en la región norte (Bergamasco y Norder, 1996).

Una nueva derrota de la propuesta de Reforma Agraria ocurrió con motivo de la discusión y elaboración de una nueva Constitución, al debatirse el capítulo correspondiente a la cuestión de la tierra. En 1985 los latifundistas habían creado la Unión Democrática Ruralista (UDR), organización que tenía como cometido defender los intereses de los grandes propietarios. Sus líderes tenían estrecha vinculación con connotados políticos y legisladores, y fueron exitosos en armar una coalición con los sectores empresariales (que también habían recibido tierras durante el gobierno militar) que presionó y logró bloquear las propuestas de Reforma Agraria en la nueva Constitución. En la práctica lograron introducir el concepto de intangibilidad de la propiedad productiva, lo cual ya era un retroceso con respecto al *Estatuto da Terra* sancionado por la dictadura militar, mientras le dejaba a una ley complementaria la definición de “propiedad productiva” y del procedimiento para las expropiaciones de tierras.

La coalición política ensamblada por la UDR también fue exitosa en demorar todo el proceso. La nueva Constitución recién fue sancionada en el año 1988. Pero la discusión de la nueva ley que reglamentaría las condiciones y el proceso de expropiación llevaron cinco años más. Recién en 1993 se sancionó la Ley Agraria, siendo Presidente Itamar Franco.

Frente a esta situación, el MST y otras organizaciones campesinas locales y regionales impulsaban las ocupaciones como única forma efectiva de llevar adelante la reforma agraria. En presencia de las maniobras efectuadas en la Constituyente y del no cumplimiento de compromisos contraídos en las campañas electorales por varios de los partidos políticos, frente al desconocimiento del reclamo de 1,2 millones de personas que firmaron un petitorio reclamando la realización de una reforma agraria efectiva, frente a la prepotencia de la UDR vinculada no sólo a las presiones sobre los legisladores sino también a acciones concretas de asesinatos de dirigentes campesinos y sindicales, descreídos por las enormes demoras y chicanas judiciales que lograban imponer los sectores contrarios a la reforma agraria, las organizaciones campesinas sólo confiaron en sus propias fuerzas y en la instrumentación de acciones efectivas de ocupación. Fueron las ocupaciones las que luego permitieron negociar el efectivo asentamiento de las familias acampadas en el propio predio ocupado o en otras tierras que eran ofrecidas por el gobierno.

Al Primer Congreso Nacional del MST asistieron líderes campesinos de 12 Estados del país, con una presencia mayoritaria de los Estados del sur y sudeste donde se había iniciado el Movimiento. Cinco años más tarde, cuando se lleva a cabo el Segundo Congreso, asisten representantes de 19 Estados, marcando así la extensión del Movimiento en el territorio. Significativamente, el Segundo Congreso se lleva a cabo en la ciudad de Brasilia, y la consigna bajo la cual se reúnen es “Ocupar, Resistir, Producir”.

En los cinco años que median entre uno y otro Congreso el MST se había dado una política de extender sus raíces en todo el país a través de las ocupaciones de tierras improductivas o de tierras estatales o con títulos mal habidos. La política de ocupar y resistir la represión posterior para luego negociar la entrega de las tierras ocupadas o el asentamiento en otras tierras había sido relativamente exitosa para lograr la expansión y la consolidación del movimiento, aunque no lo fuese tanto para asentar efectivamente las familias en la tierra. Como se dijo entre 1985 y 1989, sólo se asienta a 82 mil familias, apenas un 6% de las familias que el propio gobierno (Sarney) se había propuesto asentar. Sin embargo, la nueva consigna bajo la cual se reúne el Congreso también refleja una realidad que provocó en su momento un arduo debate: el MST ahora también lideraba asentamientos en los cuales había que producir. Producir no sólo para atender a las necesidades de las familias, sino también para demostrar que los asenta-

mientos eran más productivos y más provechosos, no sólo para las familias asentadas, sino también para el país.

Que el Congreso se llevase a cabo en Brasilia a pocos meses de la derrota de las fuerzas pro-reforma agraria en la Constituyente, pero cuando todavía estaba en pleno debate la Ley Agraria que debía reglamentar las expropiaciones y definir el proceso expropiatorio, también era una demostración de fuerza política. Los líderes de los trabajadores rurales tratan infructuosamente de reunirse con el entonces Presidente Collor de Mello, logrando reunirse sólo con su Ministro de Agricultura y con los Presidentes de las Cámaras de Diputados y de Senadores. Finalmente realizan una manifestación en la explanada del órgano legislativo.

Es preciso tener en cuenta que entre el Primer (1985) y el Segundo Congreso (1989) el Movimiento lleva a cabo una serie de reuniones, seminarios, encuentros a niveles locales y estaduales. Incluso a nivel nacional realiza tres Encuentros. El primero de ellos, el Segundo Encuentro Nacional, se lleva a cabo en el Estado de San Pablo en 1985, y se debate una multitud de temas. De entre ellos interesa destacar la discusión que se da en torno a los límites a la autonomía del Movimiento. En efecto, reiteradamente se registra la queja de que las organizaciones de apoyo, como los sindicatos de trabajadores y los organismos de la Iglesia, procuraban determinar la dirección política del Movimiento. Esos problemas eran críticos especialmente allí donde el Movimiento recién se estaba organizando. Por otro lado, también se registran acusaciones de que el Movimiento compite con las organizaciones sindicales de trabajadores rurales, que en ese momento eran mucho más fuertes y extendidas que el propio MST. Esta organización se había dado la política de organizar a nivel de base sindicatos de trabajadores rurales auténticos, ya que en su opinión muchos de los sindicatos rurales (y su confederación, la CONTAG) eran afectos al poder y no representaban los verdaderos intereses de los trabajadores rurales.

En el Tercer Encuentro Nacional que se lleva a cabo también en el Estado de San Pablo, en enero de 1987, se debate igualmente una serie de cuestiones. Pero es en este Encuentro que se eligen los principales símbolos de la organización. La bandera y el Himno del MST, así como las palabras de orden que marcan la etapa particular de la lucha en que se encuentra la organización. Así, entre 1979 y 1983 la palabra de orden era: *la terra para quem nela trabalha*. En 1984, en el Primer Encuentro Nacional, las palabras de orden eran: *terra não se*

*ganha, terra se conquista*. De 1985 a 1989 fueron: *Sem reforma agraria nao há democracia y Ocupação é a única solução*. En 1989, en el Segundo Encuentro, fueron *Ocupar, resistir, produzir*.

En el Cuarto Encuentro Nacional llevado a cabo en 1988 se aprobó la propuesta de realizar el Primer Plan Nacional del MST para guiar los pasos de la organización por los próximos cuatro años. Este fue presentado en el Quinto Encuentro Nacional al año siguiente. Según Fernández, en él se delineaban cuatro puntos fundamentales. “En el primero, presentó su análisis del desarrollo del capitalismo en el campo, sistematizando los principales aspectos históricos, económicos, y sociales del campo brasileiro, tomando como referencias las transformaciones recientes de la agricultura. Esa lectura estaba contextualizada en el ámbito de la lucha de clases, destacando la lucha por la reforma agraria como forma de acceso a la tierra. Sin embargo, en el segundo punto, enfatizaban que, por la coyuntura, la lucha por la tierra impulsaba la lucha por la reforma agraria y las ocupaciones eran necesarias. En el tercer punto, con respecto a los desafíos, entre otras acciones, defendían los trabajos efectivos en la construcción de una alianza entre obreros y campesinos, para el fortalecimiento de las luchas de los trabajadores y de sus organizaciones. En el cuarto punto, presentaron las perspectivas para el cuatrienio 1989-1993, asociando el desarrollo de las luchas con la organización interna del Movimiento, definiendo las instancias y los sectores de actividades” (Fernandes, 2000: 191).

Si bien el Plan Nacional de Reforma Agraria fue un fracaso para los propulsores de un cambio en la distribución de la tierra, las ocupaciones realizadas durante esos años presionaron a los gobiernos estatales y al gobierno Federal a llevar a cabo una política de asentamientos. De esta manera, en 1989 existían 730 asentamientos, donde vivían 110.913 familias en 5.540.290 ha (Fernandes, 2000: 181).

## EN LA DÉCADA DEL ‘90: EXPANSIÓN E INSTITUCIONALIZACIÓN

### EXPANSIÓN Y LUCHA POR LA TIERRA

En la década del noventa el MST continúa su expansión en los Estados en que aún no estaba organizado. Así avanza en los Estados de Pará, Mato Grosso y Distrito Federal al inicio de la década, y hacia el final de la misma en los Estados de Tocantins y Amazonas, llegando a estar presente en 23 Estados de la Federación. Pero en todos los Estados continúa la ocupación de tierras, especialmente en

la segunda mitad de la década. Durante la primera mitad el MST tuvo que enfrentar la más dura represión durante el gobierno del Presidente Fernando Collor de Mello. Éste dio intervención a la Policía Federal e intentó por todos los medios reprimir y desorganizar al Movimiento. Con la caída de Collor, su sucesor Itamar Franco tiene una actitud más dialoguista, y el Movimiento, que se había “vuelto para adentro” para resistir los embates, vuelve a retomar su actividad pública incrementándose el ritmo de las ocupaciones. El gobierno responde con una política de asentamientos, que se incrementan notoriamente en la última mitad de la década y primer gobierno de Fernando Henrique Cardoso.

CUADRO 1  
*OCUPACIONES Y ASENTAMIENTOS EN EL BRASIL (1979-1999)*

	Ocupaciones	Familias	Asentamientos	Familias	Área (ha)
<b>1979-84</b>	s.d.	a.d.	115	21.563	1.224.528
<b>1985-89</b>	s.d.	s.d.	615	89.350	4.315.762
<b>1990-94</b>	421	74.247	478	65.565	3.843.570
<b>1995-99</b>	1.855	256.467	2.750	299.323	13.612.877
<b>Total</b>	<b>2276</b>	<b>330.714</b>	<b>3.958</b>	<b>475.801</b>	<b>22.996.197</b>

Fuente: elaboración propia a partir de Fernandes (2000).

Es de destacar que tanto las ocupaciones como los asentamientos no fueron liderados sólo por el MST sino también por otras organizaciones, generalmente de carácter estadual o local, que se organizan en este período. En efecto, estudios del mismo autor muestran que sólo el 40% de los asentamientos y de las familias de los asentados están vinculados orgánicamente al MST (Fernandes, 2000).

A partir del segundo gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1998-2002) se diseña una nueva política agraria que recibe el nombre de *Novo Mundo Rural* o *Nova Reforma Agraria*. Este programa tiene varios componentes. Por un lado se constituye un Banco de Tierras dotado de recursos por el Banco Mundial para realizar compras de tierras que serían luego entregadas a crédito a los nuevos propietarios. Es decir, se elimina la política de expropiaciones de tierras y pago de la tierra con títulos de la deuda pública, y con ello el carácter punitivo que ésta tenía por el uso improductivo de la tierra como bien social. La tierra ahora se les compra a los propietarios que la quisieran vender, pagando con dinero en efectivo. Por otro lado, los nuevos asenta-

dos pasan a ser deudores del Estado. Una segunda línea de trabajo es la unificación del Programa de Crédito para los Asentados (PROCERA) con el Programa de Crédito para la Agricultura Familiar (PRONAF), siendo que este último tenía tasas de interés más altas, con la argumentación de que los asentados son agricultores tanto como los agricultores familiares y de que no había por qué tener hacia ellos “paternalismos”, sino que era necesario ponerlos en pie de igualdad con los productores familiares. Una tercera línea del *Novo Mundo Rural* es la descentralización de las acciones hacia los Estados y los municipios con el argumento de la necesidad de reducir los costos del Estado, que son mayores debido a la concentración de las acciones del INCRA. Es decir, que se desmantelaría parte de esta institución para transferir parte de sus actividades a los niveles locales, constituyendo Comisiones Municipales de Desarrollo.

Esta propuesta gubernamental ha recibido las más duras críticas por parte de las organizaciones de los sin tierra y en particular del MST, porque implica un profundo cambio en la concepción política de una reforma agraria, transformándola en un programa de financiamiento estatal a la compra/venta de tierras privadas. En la práctica, un programa piloto (*Cédula da Terra*) puesto en práctica previamente en cuatro Estados de la Federación mostró varias dificultades: el fraccionamiento por venta de la mediana propiedad, el abandono de los lotes por la imposibilidad financiera de pagar las deudas adquiridas por los nuevos productores, la baja calidad de las tierras vendidas y el control de los líderes políticos locales sobre el programa (Lopes, 1999).

Posiblemente la acción más importante emprendida por el MST en el segundo lustro de la década con el fin de conmover y atraer las simpatías de la opinión pública haya sido la Marcha Nacional por Reforma Agraria, Empleo y Justicia. Esta gran marcha tuvo como objetivo llamar la atención pública sobre la necesidad de una reforma agraria, pero también sobre el problema del desempleo en las ciudades y de la impunidad de quienes cometían asesinatos y actos violentos contra los campesinos. Esta marcha constó de tres columnas que partieron de tres puntos distintos del territorio, confluyendo hacia Brasilia. La marcha duró dos meses, fue llevada a cabo por 600 personas estables (mientras muchos más se les agregaban al pasar por los pueblos y ciudades), y cada columna recorrió alrededor de mil kilómetros a pie. La marcha fue también una demostración de la enorme capacidad organizativa del MST (Chaves, 2000).



En cada pueblo o ciudad por la que pasaban se repetía el mismo ritual: entrada de las columnas a pie, realización de un acto público en un punto central e instalación de un campamento provisorio. Cuando los caminantes y la población se reunían en un acto, “la razón de ser de la peregrinación era expuesta a través de palabras de orden, himnos, representaciones teatrales y discursos. Junto con las manifestaciones públicas, se hacían reuniones en las escuelas, Facultades, cámaras municipales, sindicatos e iglesias con el fin de dar resonancia al pasaje de la Marcha Nacional y al mensaje que pretendían vehiculizar” (Chaves, 2000: 14, traducción nuestra). La Marcha fue un “ritual de larga duración” en cuyo transcurso, desde una partida poco publicitada desde los lugares de largada inicial, hasta la llegada victoriosa a Brasilia, el MST supo comunicar sus objetivos y su visión del mundo al resto de la sociedad logrando altos niveles de adhesión pública a sus propuestas.

#### LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL MST

Para fines de la década del ‘80 el MST ya había consolidado su estructura organizativa. No existió una planificación previa de la forma organizativa, sino que ésta se fue construyendo a medida que el movimiento crecía y se extendía en el territorio. Así como cuando los campesinos, al ocupar, se organizaban en distintas comisiones para atender las necesidades de los acampantes, el MST se organizó en Frentes. El primero y más importante es el Frente de Masas, que es el encargado de realizar las ocupaciones de tierras.

La ocupación de tierras es mucho más que el mero acto de tomar posesión colectiva de la tierra designada. Comienza con un trabajo casa por casa por parte de los militantes del movimiento, que conduce a la formación de grupos de familias que se reúnen para analizar la situación por la que están pasando y debatir las posibles soluciones. Se analizan las tierras disponibles en el municipio o región, se estudia la situación jurídica de cada una de ellas, y se elige la que será ocupada. Así se inician las tareas dirigidas a preparar la ocupación, dividiéndolas y compartiéndolas entre grupos de familias. Debe organizarse el transporte de personas y enseres básicos para montar el campamento. Hecha la ocupación se organizan el campamento, la forma de atender las necesidades de la vida diaria y las formas de relacionamiento con el exterior. Se prevén los enfrentamientos con la poli-

cía o los militares, con los *jagunços* de los propietarios, y se estudian las formas de negociar con unos y con otros.

Si la ocupación salva el primer obstáculo –el enfrentamiento y la negociación con las fuerzas militares, el paso siguiente es la negociación política con los representantes del gobierno. En esos momentos son fundamentales los apoyos externos de otras organizaciones campesinas y de trabajadores de organizaciones de derechos humanos, de *vereadores* y legisladores de diversos partidos políticos, de la prensa, etc., porque es necesario captar la atención pública y transformar la ocupación en un hecho político. Cuando llegan, se analizan las propuestas del gobierno y se negocia la retirada del campamento o la efectiva ocupación de las tierras conquistadas.

Es preciso tener en cuenta que una ocupación puede durar desde unos pocos días hasta varios años según las características y la forma en que se desenvuelve. Un campamento generalmente se lleva a cabo por medio de la ocupación de tierras, pero otras veces puede llevarse a cabo a la vera del camino, cuando los ocupantes se retiran de la tierra ocupada para facilitar las negociaciones. Es importante destacar que en la táctica del MST, cuando se retiran de una ocupación, los ocupantes no vuelven a sus casas sino que se mantienen acampados, como instrumento de presión, hasta que la situación se resuelve favorablemente.

Finalmente, para dar una idea de la magnitud de las acciones de ocupación emprendidas por el MST, estas han ocurrido en forma creciente, registrándose entre 1990 y 1999 2.194 campamentos que involucraron a 368.325 familias.

La experiencia de la ocupación y de la organización para crear y sostener un campamento es en sí misma una experiencia concientizadora. Sin embargo, el MST, a través de su Sector de Formación, se ocupa de la formación continuada de sus militantes a través del diálogo, la lectura, el debate y la reflexión en momentos y lugares específicos. Se analizan las condiciones contextuales en las cuales se está llevando a cabo la lucha por la tierra, estudiando el momento histórico, la tenencia y distribución de la tierra en su municipio, en el Estado y en el país, su sistema político y económico, el desarrollo de la agricultura, los distintos sistemas de desarrollo agrícola y agrario, etcétera. En 1990 se creó una Escuela de Capacitación en el Estado de Santa Catarina donde se dictan diversos tipos de cursos para atender a las necesidades de los militantes que actúan en los distintos Frentes del Movimiento. Allí se dictan cursos de formación profesional para agricultores, para el magis-

terio o para la administración de las cooperativas, así como cursos de apoyo para la enseñanza primaria y secundaria.

Posiblemente una de las mayores peculiaridades del MST como movimiento social agrario, que lo distingue de las organizaciones anteriores, es su concepción sobre la educación. Para el MST la Reforma Agraria es mucho más que la conquista de la tierra: es la conquista de la ciudadanía, y uno de los derechos fundamentales de la ciudadanía es el derecho a la educación. Para el MST “la Educación es un proceso, desde la participación de los niños, de las mujeres, de la juventud, de las personas mayores, construyendo nuevas relaciones y conciencias, hasta la participación en marchas, asambleas, cursos, caminatas, trabajos voluntarios, gestos de solidaridad, ocupaciones, movilizaciones, reunirse para aprender o enseñar el alfabeto es mas que eso [es el] acto de leer y escribir la realidad y la vida”<sup>14</sup>.

A partir de 1987 se constituye el Sector Educación, que se organiza en Frentes de Trabajo: el Frente de Educación Infantil que atiende los jardines infantiles (hasta 6 años), el Frente de 1er. Grado que atiende a la enseñanza primaria, el Frente de Educación de Jóvenes y Adultos para romper con las cercas del analfabetismo, y el Frente de Formación para Formadores que atiende a la formación de sus maestros pero también acompaña a aquellos que están insertos en la educación secundaria y terciaria.

Una de las dificultades que emergieron en los primeros momentos, cuando las ocupaciones eran exitosas y se transformaban en asentamientos, fue la transformación de los intereses de los campesinos. A partir del momento en que los campesinos eran asentados, los problemas ya no consistían en conseguir tierra sino en conseguir el crédito para sembrar, la infraestructura caminera, la comercialización de sus productos, etcétera. En 1986 se discutió una propuesta de formar otro movimiento con los asentados. Sin embargo, esta propuesta no prosperó, y en cambio se dieron los pasos necesarios en el MST para incorporar estas demandas. Así se creó el Sector de los Asentados.

Una de las discusiones que se trabó en el Sector de los Asentados fue acerca de las formas en que se debía organizar la producción. Muchos de los campesinos asentados habían sido pequeños productores expulsados por los procesos de modernización de la agricultura. Habían experimentado en carne propia las desventajas de un modelo de producción que privilegia las economías de escala. Por ello,

---

14 *O MST e a Educação*. En <<http://www.mst.org.br/setores/educacao/educar.html>>.

en este sector se propició una discusión acerca de las formas de producción individuales o cooperativas.

En realidad los campesinos tenían en su práctica varias formas de cooperar en la producción. Era frecuente que en las épocas de cosecha u otros picos de trabajo las familias se prestasen trabajadores entre sí. Asimismo, en situaciones de enfermedad o de otras dificultades que disminuían el aporte de trabajo de una familia, esta podía recurrir a parientes o vecinos para pedir ayuda. Por ello, cuando se organizan los asentamientos, también surge naturalmente la organización de distintos tipos de “grupos de ayuda mutua” para encarar las tareas que requerían mayor aporte de fuerza de trabajo. Por otro lado, también era una práctica campesina prestarse herramientas o animales de trabajo en los momentos de mayor demanda, y en los asentamientos se organizan formas asociativas en las cuales se comparten herramientas o máquinas entre los asentados.

Estas experiencias llevan a la necesidad de debatir y profundizar dichas formas de cooperación. Muchos asentados que habían sido pequeños productores habían tenido la experiencia de pertenecer a diverso tipo de cooperativas agropecuarias. En Brasil, como en otras partes del mundo, las cooperativas no habían sido instrumentos eficaces en la lucha por la resistencia de la agricultura familiar. Antes bien, muchas veces habían sido las propias cooperativas, al difundir un modelo tecnológico de carácter extensivo en tierra e intensivo en capital, las que habían empujado a los pequeños agricultores a la ruina. Más aún cuando en muchas cooperativas son los productores más grandes y de mayor poder económico los que las dirigen, sin tener consideración por la problemática de los más pequeños. Para el MST el sistema cooperativista tradicional era un instrumento más del desarrollo del capitalismo agrario.

Por ello, en los asentamientos y al interior del MST se da una discusión muy fuerte en torno a las ventajas y desventajas de impulsar sistemas de cooperación. Finalmente el MST se propone impulsar un cooperativismo distinto: por un lado, estimular todas las formas de cooperación a nivel de los grupos de ayuda mutua para el intercambio de trabajo. También se propone apoyar todas las formas de intercambio y coparticipación en el uso de herramientas y máquinas, e incluso en el uso colectivo de tierras a través de las cooperativas de producción. Por otro lado, también se propone impulsar a las cooperativas que se dedican a la comercialización y a la agroindustrialización y a la

prestación de otros servicios (como el sistema cooperativista tradicional), pero entonces bajo ciertos resguardos.

Por un lado se estimula la mayor participación de los asociados en asambleas mensuales o en comisiones de representantes de los diversos sectores que la componen, sin dejar que el Consejo Directivo de la Cooperativa sea la única autoridad. Así, bajo el modelo y la experiencia del propio MST, se articulan distintas instancias de participación de los asociados a las cooperativas para impedir que estas sean gobernadas sólo por sus directivos. Por otro lado se determina que los trabajadores de las cooperativas serán sólo sus propios asociados, permitiéndose la contratación de trabajadores asalariados únicamente en circunstancias excepcionales. En tercer lugar los asociados son asentados, es decir pequeños productores con una experiencia reciente como trabajadores rurales; en ningún caso se asociarán productores medianos y grandes por la propia composición social de los asociados, garantizándose así una mayor homogeneidad de intereses. En cuarto lugar, el planeamiento de las actividades, las principales decisiones políticas se deben tomar en asamblea y con la más amplia participación. Con estas y otras particularidades el MST procuraba así que el sistema cooperativista no se desvirtuase y sobre todo no llevase a la organización mayor, el MST, en un camino distinto al que ésta quería recorrer.

De 1987 a 1989 el Sector invirtió esfuerzos en la formación de grupos asociativos para compartir diversos bienes –máquinas, tierra, comercialización– o para coparticipar en el trabajo –cooperativas de trabajo. Para 1989 había más de 400 asociaciones de productores asentados con diferentes niveles de organización. Ese año se dan los pasos necesarios para crear, dentro del Sector de Producción y Comercialización del MST, el Sistema Cooperativista de los Asentados, que reunía todas estas experiencias en tres niveles: las Cooperativas de Producción Agropecuaria de nivel local, las Centrales de Cooperativas que eran de segundo grado y de carácter estadual, y luego la Confederación de Cooperativas de Reforma Agraria de Brasil (CONCRAB).

Las mujeres siempre han jugado un activo papel en el MST, desde el Primer Congreso en el que las 300 mujeres presentes organizaron la Comisión Nacional de Mujeres, que luego se transformaría en el Colectivo Nacional de Mujeres. Si bien las mujeres participaban activamente en las comunidades de base, en las ocupaciones, en la organización de los campamentos primero y de los asentamientos

después, en las escuelas en los puestos de salud y también en el campo en la producción, el Colectivo es un espacio de reflexión y de debate permanente acerca del papel de las mujeres en la sociedad y en el Movimiento.

Otros Sectores de menor importancia terminan por componer la estructura organizativa del MST. Son los Sectores de Finanzas (de carácter administrativo), de Proyectos (ayuda a formular proyectos socioeconómicos para las secretarías de nivel municipal o estadual y para los asentamientos), de Comunicaciones (que está al servicio de los otros Sectores y tiene la responsabilidad de editar el *Jornal dos Trabalhadores Sem Terra*) y el Sector de Relaciones Internacionales, responsable del contacto con organizaciones amigas del resto del mundo.

El MST posee una estructura compleja que ha sido creada a partir de la experiencia. Por un lado tiene los Sectores, como se explicó arriba. Por otro lado tiene las estructuras de decisión, de carácter deliberativo, en las cuales se construyen los consensos para tomar decisiones políticas. Esta estructura deliberativa está formada de la siguiente manera.

“La Coordinación Nacional está formada aproximadamente por 90 personas. Son dos miembros por Estado, electos en los encuentros estaduais; un representante electo por cada Central de Cooperativas Estaduales; dos miembros electos por sectores nacionales y 21 miembros de la Dirección Nacional, que son electos en el Encuentro Nacional”.

“La Coordinación Estadual está representada por un colectivo electo en el Encuentro Estadual y está formada por entre siete a quince miembros, de acuerdo con la realidad de la forma de organización de cada estado: este colectivo está compuesto por los miembros de la Dirección Estadual, de la Central de Cooperativas y de los Sectores Estaduales”.

“La Coordinación Regional está formada por miembros electos o indicados en los Encuentros Regionales. Estos también son miembros de las coordinaciones de los asentamientos y de los campamentos y son electos en asambleas”.

“Las Coordinaciones de los Asentamientos y Campamentos son formadas por miembros de varios sectores, como por ejemplo: producción, educación, salud. Comunicación, frente de masas, finanzas, etc. En ninguna de las instancias existen cargos del

tipo: jefes, presidentes, directores, etc. Los dos grados de jerarquía son coordinadores y miembros”<sup>15</sup>.

## INSTITUCIONALIZACIÓN, SECTORES Y FRENTE DEL MST DURANTE LA DÉCADA DEL '90

Además de la expansión en el territorio y de la profundización de las ocupaciones y los asentamientos, la década del noventa se caracteriza por la consolidación de los diversos servicios que el MST desarrolla en los distintos Sectores y Frentes de trabajo.

En el ya mencionado Sector de Educación, una investigación había mostrado que entre los ocupantes y los asentados vinculados al MST había 29% de analfabetismo, que entre los niños sólo el 1,6% terminaba la escuela primaria, y que cerca del 20% de los niños y 70% de los adultos no tenían acceso a la escuela. Para hacer frente a esta situación el MST propone y lleva a cabo un vasto plan de desarrollo de las escuelas públicas en los asentamientos, y de alfabetización para los adultos. De esta manera se llega a que hacia fines de la década del noventa la situación era la siguiente: el Frente de Educación, que ha ido creciendo acompañando el crecimiento de toda la organización, está compuesto por 1.800 escuelas de enseñanza primaria, con 160 mil niños y adolescentes como alumnos en los diversos campamentos y asentamientos. Trabajan en ellas 3.900 educadores. También hay cerca de tres mil educadores de alfabetización de jóvenes y adultos con cerca de 30 mil alfabetizandos. En los asentamientos las escuelas son públicas, y a partir de la experiencia de Río Grande do Sul se propone que las mismas se trasladen junto con los niños de los campamentos.

Tal vez sea en materia de organización de los asentamientos donde se dan los mayores avances en esta década. Esto es lógico si se hace referencia al cuadro de arriba, donde se muestra la cantidad de asentamientos y de familias asentadas en este período. Es preciso recordar que el MST ya había producido la decisión política de que los asentados no dejarían de pertenecer a él. A medida que el Movimiento tiene mayor cantidad de asentados en su seno, estos comienzan a pesar fuertemente en términos de sus necesidades y de sus intereses en la marcha del Movimiento. Es por ello que el MST emplea una enorme cantidad de esfuerzos y energías en organizar los asentamien-

---

15 *Historia do MST*. En <<http://www.mst.org.br/historico.html>>.

tos. Había también una razón política: era necesario demostrar al resto de la sociedad que los asentamientos eran productivos y que le traían beneficios al país. Que era mejor asentar campesinos en la tierra que dejar que las tierras fuesen empleadas por los grandes empresarios agrícolas o por los latifundistas.

Es por ello que el MST se vuelca a organizar la producción, y para ello echa mano al sistema cooperativista, con las restricciones y el perfil de cooperativismo al que ya se hizo referencia páginas atrás. En la década del '90 las familias de los asentados se "reúnen en núcleos de producción, en grupos semi-colectivos, en grupos colectivos, asociaciones, Cooperativas de Producción Agropecuarias (CPAs), Cooperativas de Prestación de Servicios (CPS), Cooperativas Regionales de Prestación de Servicios (CPSR), Cooperativas de Producción y Prestación de Servicios (CPPS), y Cooperativas de Crédito (Fernandes, 2000: 232).

CUADRO 2  
*SISTEMA COOPERATIVISTA DE LOS ASENTADOS (1998)*

Región	Nº de Cooperativas	Nº de socios
<b>Nordeste</b>	21	1.927
<b>Sudeste</b>	14	2.559
<b>Centro Oeste</b>	2	60
<b>Norte</b>	1	53
<b>Sur</b>	45	15.678
<b>Total</b>	<b>83</b>	<b>20.277</b>

Fuente: Fernandes, 2000.

Por otro lado el MST también se propone avanzar en la agroindustrialización de la producción de los asentamientos con el fin de generar valor agregado a la producción primaria y retenerlo, proporcionar empleo y retener a los jóvenes. Así se forman asociaciones y cooperativas con este objetivo: procesamiento de lácteos, mataderos y procesadores de carnes bovinas, suinas y de aves (dos asociaciones); procesamiento de granos de café, cereales, oleaginosos (cinco asociaciones); procesamiento de yerba mate (dos asociaciones), conservación y procesamiento de frutas y hortalizas (cuatro asociaciones), producción y procesamiento de semillas, de caña de azúcar, etc. (cuatro asociaciones)<sup>16</sup>.

16 Información de la CONCRAB en <<http://www.mst.org.br/setores/concrab/13.html>>



A su vez, las asociaciones y cooperativas de cada Estado se hayan agrupadas en Cooperativas Regionales, de las cuales hay nueve en los Estados en los que hubo mayor desarrollo del SCA. Todas ellas se encuentran reunidas en la CONCRAB.

En esta década se realizan varios estudios para analizar la productividad de los asentamientos. Tal vez el más influyente de ellos haya sido el estudio realizado por FAO en 1992, que encontró que “los beneficiarios de la distribución de tierras generaron en promedio una renta anual por familia equivalente a 3,7 salarios mínimos por familia, valor éste superior a la renta promedio pasible de ser obtenida por cualquier categoría de trabajadores rurales en el campo”<sup>17</sup>.

Finalmente cabe agregar que en esta década dos nuevos Frentes de trabajo se agregan a los ya existentes creados en la década del ochenta: el Sector de la Cultura y el Sector de la Salud en 1998.

En esta década el MST se las arregla para dejar de ser una organización de carácter estadual y principalmente asentada en el sur del país para pasar a ser una organización de carácter nacional. Asimismo logra ser reconocida dentro y fuera de las fronteras como la principal organización en materia de reivindicación de la Reforma Agraria, y se transforma en un punto de referencia ineludible para la política de tierras gubernamental. Al mismo tiempo su estructura organizativa se extiende y se complejiza de tal manera que surgen tensiones en su interior.

Câmara (s.f.)<sup>18</sup> ha hecho notar las dificultades de una organización que habiendo sido concebida como un instrumento para luchar por la tierra debe hacerse cargo de gestionar y dirigir políticamente la puesta en producción de las áreas de asentamiento que están bajo su control. Para hacerlo, el MST debe desarrollar estructuras burocráticas con técnicos, ingenieros agrónomos, contadores que apoyan a estas organizaciones. Es fácil comprender por qué se hace esto: como hace notar Fernandes (2000), de estos asentamientos salen los militantes que van a prestar apoyo a las áreas más débiles o con menos recursos, que precisan del apoyo de agentes externos para encaminar su propia lucha por la tierra. Estos asentamientos también proveen recursos para mantener la creciente estructura de la organización.

---

17 FAO/PNUD/MARA. *Principais indicadores socio-econômicos dos assentamentos de reforma agrária. Brasil, 1992*. Citado por Fernandes (2000: 201).

18 Câmara, Antonio “A atualidade da reforma agrária. De Canudos aos Sem-Terra: a utopia pela terra”, en *Olho da História* N° 3. Extraído de <<http://www.ufba.br>>.

## LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD

Schmitt (1992) ha sugerido que es conveniente distinguir analíticamente entre dos tipos de identidades: la de “acampante”, y la de los que pertenecen al Movimiento de los Sin Tierra. Esta idea parecería apropiada cuando según las propias estimaciones de oficiales de la organización sólo una porción menor de los campesinos involucrados en los campamentos son miembros del MST (40% según estimaciones de Fernandes, 2000: 299).

Schmitt, a partir de su estudio de un asentamiento en el Estado de Río Grande do Sul, elabora su definición de las diferencias entre una y otra categoría. Para ella la categoría de acampado remite a una dimensión social referida a su exclusión del acceso a la tierra, vinculando así la trayectoria del individuo desde su situación anterior, sin acceso a la tierra, a su situación actual de acampado. En cambio, la categoría “sin tierra” remite a una dimensión de contenido político en cuanto el individuo es parte de un grupo que es agente en un campo de conflictos y existe en oposición a otras fuerzas sociales (Schmitt, 1992). Mas aún, es preciso definir que la categoría “sin tierra” responde a la pertenencia a una organización social determinada, el MST.

Esta diferencia también se relaciona a una discusión mas sustantiva: la diferencia entre movimiento y organización. Según algunos autores (Navarro, 2002, por ejemplo), es preciso distinguir entre el movimiento campesino formado por los que no tienen tierras y luchan por ellas y la organización de los “Sin tierra” que se consolida como tal con su fundación en la ciudad de Cascavel en 1984. Mientras el primero es un movimiento social formado por miles y millones de campesinos, organizados en cientos de organizaciones de carácter local, regional, estadual e incluso nacional, con cortes de género, locales o de otros tipos, la segunda es una organización formal de cuadros de militantes con una estructura, objetivos propios, estrategias y tácticas de acción, etcétera<sup>19</sup>.

Una ocupación de tierras lleva un largo proceso de preparación. Generalmente se inicia con un trabajo casa por casa que realizan los militantes de la organización (cuando esta es impulsada por ella) o con reuniones que se llevan a cabo en las casas de los campesinos que han decidido emprender este camino para obtener tierras. Siempre

---

19 Sobre estos temas ver también el libro compilado por Zander Navarro, *Política, protesto e cidadania no campo*, Editora da Universidade, Porto Alegre, UFRGS, 1996.

hay algún tipo de organización previa y de socialización por la que pasan quienes emprenderán la ocupación: ya sea en las Comunidades Eclesiales de Base, en un grupo de pastoral rural o de la pastoral juvenil, en organizaciones de mujeres o de jóvenes, en las asociaciones que reúnen a los campesinos desplazados por la construcción de represas hidroeléctricas, etcétera.

Finalmente la ocupación comienza con el acto de prepararse y subirse al camión que, en plena noche, los trasladará hasta las tierras que serán ocupadas. Una ocupación puede ser hecha por unos pocos cientos de personas o por miles. Pero en general son unas centenas de familias. Ocupadas las tierras, todo es trabajo febril para tratar de ocupar el espacio y levantar las tiendas antes de que se extienda la noticia de la ocupación y lleguen los “*jagunços*” de los propietarios, la policía o las fuerzas militares. Con troncos, ramas, materiales del lugar, lona y plástico negro se levanta rápidamente un abigarrado conjunto de refugios y cobertizos que harán de vivienda mientras dure la ocupación. Sin embargo, el campamento tiene planificados los espacios: hay espacios individuales para levantar las “viviendas” como también espacios comunes para realizar las Asambleas; el espacio para la escuela, para la policlínica, los espacios de juego para los niños o la cancha de fútbol. La ocupación a veces dura sólo unos días porque por ejemplo se negoció con los propietarios o con los organismos estatales que tomaron intervención en la misma que se desalojará el terreno ocupado, y entonces el campamento se vuelve a levantar a la vera del camino. Pero el campamento, ya sea en las tierras ocupadas o a la vera del camino, puede durar varios meses o hasta dos o tres años mientras se llevan a cabo las negociaciones que conducirán a que desde el gobierno estadual o nacional se reubique a los acampantes en nuevas tierras. El campamento puede ser mudado varias veces de lugar, en la medida en que una de las tácticas del gobierno es tratar de desplazarlos a zonas poco pobladas lejos de los pueblos y ciudades desde donde pueden obtener apoyo material y político.

Los acampantes son de variado origen social. Son hijos de pequeños productores que no tienen futuro porque la escasa tierra se dividirá entre muchos herederos, son ex pequeños productores expulsados de sus tierras por el mercado o por el modelo tecnológico mecánico y extensivo; son arrendatarios, aparceros, ocupantes de tierras de otros, expulsados o cansados de trabajar en tierras ajenas; son asalariados rurales, changadores, desocupados, semi-ocupados, trabajadores zafrales, *boias-frias*. Pero todos tienen algo en común: su ideal, su

meta es la forma de vida campesina, dedicada al trabajo de la tierra con aporte de trabajo del grupo familiar.

El acampado puede estar sostenido por una retaguardia familiar que lo apoya a través del envío de alimentos, ropa y dinero. O puede no tener este apoyo porque son muy pobres o porque emprendieron la aventura sin el apoyo y a veces en contra de la opinión familiar. Por ello, uno de los puntos cruciales para sostener una ocupación (y en especial cuando ella dura mucho tiempo) es obtener los alimentos básicos para sostener a los acampantes. Una vez realizada la ocupación se trata de que tenga la mayor repercusión pública. Se trata de que un hecho que puede ser tratado como ilegal se convierta en un hecho político. Esto asegura que el Estado tome cartas en el asunto y acelera los tiempos de negociación. Para ello la repercusión pública es fundamental. Esta traerá también los apoyos monetarios y las donaciones en alimentos que permitirán sostener la ocupación. En aquellos lugares en que es posible, muchos asentados tratan de convertirse en asalariados zafrales de las explotaciones vecinas. En otros, la cercanía de pueblos y ciudades les proporciona fuentes de empleo temporario y apoyo popular.

En el campamento hay una intensa trama organizativa. Las familias se organizan en núcleos de seis a veinticinco familias, generalmente por lugar de origen (vecindad y/o parentesco). Cada núcleo tiene un líder o coordinador y se organiza además por tareas: higiene, seguridad, alimentación, educación, mantenimiento, etcétera. Se forma al interior de cada núcleo un equipo para cada tarea que a su vez tiene un líder. Los líderes de los equipos de tareas del campamento se reúnen en una Comisión de Tareas. A su vez, los líderes de los núcleos se reúnen en una Comisión Coordinadora del Campamento. Éstos eligen una Comisión Ejecutiva Interna que se ocupa de la coordinación de las actividades dentro del campamento, y una Comisión Ejecutiva Externa que es la que negocia con las autoridades gubernamentales, con la policía, con los propietarios, con la prensa, etcétera.

Los acampados tienen una fuerte participación en los equipos de tareas de sus núcleos, y aquellos que se destacan son elegidos para liderar un equipo o un núcleo o para representar al campamento en algunas de las instancias de representación. El campamento es un dispositivo de construcción de liderazgos, reforzado por la capacitación y el apoyo permanente de organizaciones como la Iglesia o el propio MST.

El acampado construye su identidad de tal no sólo en estos equipos formales, sino también en las numerosas actividades en las

cuales ocupa el tiempo y a través de las cuales se socializa permanentemente: los campeonatos de fútbol, las sesiones de teatro, las clases de alfabetización o de formación política, las celebraciones religiosas o las ruedas de mate con sus vecinos, en que se discuten y debaten permanentemente las noticias del día, el estado de las negociaciones, las gestiones de sus líderes, las frustraciones y avances de la lucha por la tierra, los precios de los productos o la situación económica del país, la situación de los campesinos, etcétera.

Los acampados son de variado origen social. También pueden ser de diferentes orígenes étnicos: los de origen inmigrante –italianos, alemanes y polacos, más frecuentes en los Estados del Sur– y los *caboclos*, criollos o brasileros. También los hay de distintas religiones: católicos, protestantes o devotos de diversas sectas religiosas. Hay una importante presencia de mujeres aunque predominen los hombres, y hay una importante presencia de jóvenes. Sin embargo, el campamento es un espacio de sociabilidad en el cual las identidades sociales son negociadas y reconstruidas con el trajín diario del campamento.

Pero las identidades también son construidas por los “otros”, por el mundo externo del cual proviene el acampante pero del cual es apartado al haber hecho la opción de transformarse en un “acampado”. Puede recibir desprecio de quienes consideran a los acampados como haraganes o vagabundos. Miedo de quienes creen que los acampados son violentos, que toman las tierras que no son de ellos. Rechazo de los pobladores de pueblos vecinos a los cuales los acampados recurren utilizando los servicios de salud o de educación, sobrepasando la capacidad de atención de las demandas y compitiendo por ellas con los lugareños. En su nueva identidad el acampado es aceptado, segregado o discriminado por su comunidad de origen o de vecindad: ha dejado de ser un vecino o un miembro de una familia del vecindario para pasar a ser un “acampado”, con la aceptación o el rechazo que su nueva adscripción genera en las distintas personas con las que se relaciona.

Por otro lado es preciso explorar cómo se construye la identidad de un militante de la organización Movimiento de los Sin Tierra. Wolford (2001) destaca que entre aquellos que se sienten identificados con el MST existe un fuerte sentido de pertenencia. La pertenencia al Movimiento se gana, y los militantes deben probar su adhesión y su sujeción a ciertas reglas y principios de este. En este sentido, para Wolford el MST es una organización de élite, ya que no todos pueden participar, sino sólo los que pueden demostrar que cumplen las reglas.

Hay por lo tanto límites a la entrada, e incluso expulsiones de aquellos que no las cumplen. Uno de los principios sería el amor por la tierra, ya que son campesinos y el Movimiento se propone conquistar un pedazo de tierra para cada uno. Ligada a lo anterior, la idea de que toda tierra improductiva puede ser ocupada para hacerla producir: se subraya la idea de la función social de la tierra, largamente sostenida por otra parte por la Iglesia Católica. La adhesión a la lucha como instrumento para provocar los cambios: estos no vendrán a través de las negociaciones de cúpula ni a través de la gracia de los políticos, sino a través de la lucha popular organizada. La adhesión a una nueva sociedad, rechazando a la sociedad capitalista y sus valores y adhiriendo a una sociedad socialista e igualitaria. Ligado a lo anterior, su materialización en los asentamientos a través de la producción cooperativa.

El sustrato del MST lo constituyen sus militantes. Estos son generalmente jóvenes que pertenecen a los asentamientos y que han sido liberados de las tareas cotidianas, permitiéndoles trabajar a tiempo completo al servicio del MST. Los militantes marchan a otros asentamientos o a los campamentos dentro o fuera de su propio Estado, en una cuidadosa política de rotación de cuadros que asegura una cierta homogeneización de los mensajes que transmiten. Los militantes organizan, enseñan, traen información de las acciones del MST en otros Estados o regiones y de las Asambleas o Congresos de la organización, transmiten la interpretación que la Dirección del Movimiento hace de la situación política y económica, etcétera. Pero también traen y llevan información sobre temas más prosaicos: sobre las prácticas agrícolas que se realizan en otros asentamientos, sobre un nuevo cultivo, sobre los precios de los productos, etcétera. Por lo tanto, por las redes que forman los militantes circula básicamente la palabra, y en menor medida, aunque también es importante, la palabra escrita, principalmente a través del *Jornal dos Sem Terra* y de cartillas y documentos preparados al efecto.

Para cumplir con este papel, los militantes son formados a través de los programas de educación formal junto a muchos otros miles de niños y jóvenes en las escuelas primarias y en los institutos de educación secundaria que opera el MST, y también a través de situaciones de capacitación no formal: los jóvenes que han sido seleccionados para ser militantes, a partir de su adhesión a los principios ya enumerados, pasan por distintas instancias de capacitación en las propias ocupaciones, en los asentamientos, en escuelas de formación política que opera el MST, y en numerosas reuniones, cursos y cursi-

llos que permanentemente se ofrecen en los distintos ámbitos de acción del Movimiento.

Según Wolford (2001), los miembros del MST también se mantienen en contacto entre sí a través de redes informales que se construyen a partir de contactos que realizan los delegados de los distintos asentamientos y campamentos cuando viajan a otros asentamientos y campamentos, y cuando concurren a reuniones y Asambleas locales, regionales, estadales o nacionales. Hay una intensa trama de contactos y de intercambio de información que circula por estos tejidos contruidos informalmente. La imagen que transmite esta autora es la de un intenso proceso de participación social que ocurre a través de las numerosas instancias de organización, asambleas, congresos, reuniones de todo tipo que están siendo permanentemente convocadas e impulsadas por las direcciones locales y por la dirección nacional del Movimiento. Wolford (2001) sugiere que hay una rotación de líderes a nivel de la Dirección Nacional del Movimiento y que los líderes locales son electos por quienes participan de los campamentos y de los asentamientos, y que luego por el mismo mecanismos son las bases las que designan a quienes concurren a las reuniones y encuentros locales, estadales o regionales y que por lo tanto tienen chances de llegar a ser designados en la Dirección Nacional. Navarro, sin negar estos mecanismos, hace notar que es la Dirección Nacional la que elige, de entre quienes llegan a los más altos niveles de dirección a nivel local, a quienes integrarán la Dirección Nacional, seleccionando a quienes se manifiestan más conformes con los criterios y los principios vigentes dentro del Movimiento (Navarro, 2002).

Ya se ha hecho notar la importancia que ha logrado el Sector Educación dentro del MST. Brevemente se quiere volver a insistir en el papel clave que juega la educación en la conformación de la identidad de los niños y jóvenes que pertenecen a los asentamientos como futuros miembros del MST. A partir de la base pedagógica de la unidad entre la teoría y la práctica, que se aplica en la enseñanza a todos los niveles, tanto en la educación primaria como en las escuelas secundarias o en los cursos de alfabetización de adultos, la realidad en la que están inmersos los acampados o los asentados es permanentemente analizada y debatida a la luz del papel que juega el Movimiento.

El MST hace un uso intenso y extenso de varios símbolos que confluyen y refuerzan la identidad de sus miembros como pertenecientes al MST. El Himno es repetidamente cantado cuando se inician las Asambleas, Congreso y reuniones del Movimiento: los militantes lo

cantan con el puño derecho levantado, y si fuese la ocasión, enarbolando las herramientas de trabajo, que son también símbolos. También está la bandera de color rojo con un escudo en el cual una pareja de agricultores en la que él enarbola un facón, sobre un fondo del contorno de Brasil en color verde. Y también están las camisetas y los gorros con el logo del movimiento.

Las palabras de orden, además de ser empleadas en todos los eventos, cumplen la función de indicar la dirección de la lucha en la etapa en que está el Movimiento. Así, cuando se funda el MST en 1984, se mantienen las palabras de orden que vienen de la CPT, *“Terra para quem nela trabalha”*. En el Congreso de 1985 las palabras de orden pasan a ser *“Ocupação é a única solução”*, reflejando una nueva estrategia en la lucha por la tierra. De 1989 a 1994 las palabras de orden fueron *“Ocupar, resistir, produzir”*, reflejando por un lado la difícil situación en que se encontraba el MST durante el gobierno Collor, que los obligó a replegarse hacia lo interno para poder resistir, y al mismo tiempo la necesidad de producir en los nuevos asentamientos como forma de demostrar a la sociedad un camino alternativo. En el Congreso de 1995 las palabras de orden fueron *“A reforma agraria é uma luta de todos”*, reflejando, con el advenimiento del gobierno de Fernando Henrique Cardoso y la implantación de un modelo económico neoliberal, que la Reforma agraria sólo se cumpliría cuando toda la sociedad estuviese convencida de que era necesaria, para la felicidad de todos (Stédile y Fernandes, 2000).

La unidad del Movimiento también se construye a través de la “mística”. Esta es definida en una conversación entre João Pedro Stédile y Bernardo Mançano Fernandes (principal dirigente y “historiador oficial” del MST respectivamente) en el siguiente diálogo.

Bernardo: *“A mística e uma prática que o movimento desenvolve. De certa forma, é seu alimento ideológico, de esperança, de solidariedade. A mística, para o MST, é um ritual. Ela tem um caráter histórico, de esperança, de celebração permanente. Está certa essa interpretação?”*.

João Pedro: *“Está, mas ela é mais do que isso. Até por influência de Igreja, tínhamos a mística como um fator de unidade, de vivenciar os ideais... A mística faz com que as pessoas se sintam bem”* (Stédile y Fernandes, 2000: 130).

Finalmente, la identidad de los miembros del Movimiento también se construye a través de una de las ideas-fuerza más complejas y tal vez



más cuestionadas, que es la idea de la autonomía del Estado. El MST se manifiesta en contra del Estado y lo identifica como su principal enemigo<sup>20</sup> en la medida en que se declara en contra del capitalismo y piensa que el Estado lo representa. Por lo tanto, el MST desarrolla en sus asentamientos la idea de que son territorios “liberados” en donde los valores y las prácticas implementadas son distintos a los que imperan en la sociedad “de afuera”. El MST, al atacar al sistema capitalista, sugiere que tiene una alternativa que es construida desde los asentamientos, al implementar formas cooperativas de producción. Existen, en este sentido, distintos niveles de cooperación entre los asentados. En el nivel más simple, los asentados cooperan entre sí en los momentos en que hay picos de demanda en el trabajo con el sistema de “*mutirao*” (sistema de “mano vuelta” o “minga” en otras latitudes), en que las tareas se van haciendo alternativamente en los predios de las distintas familias, cooperando todos los trabajadores. En un nivel de mayor cooperación se constituyen asociaciones en los asentamientos para la utilización conjunta de maquinarias o equipos, para la comercialización conjunta o para la compra de insumos en conjunto. En el nivel más elevado de cooperación, la tierra no es repartida individualmente sino trabajada en conjunto, propiedad comunal, teniendo cada familia sólo una pequeña porción de tierra en posesión individual para sembrar los productos de subsistencia. Los productos comerciales se siembran en conjunto en las tierras comunes. Esta última forma de cooperación se quiso implementar en los primeros tiempos de los asentamientos pero no dio resultado, ya que los propios asentados no estaban de acuerdo con el sistema. Navarro ha hecho notar que este sistema se opone a toda la tradición histórica del campesinado independiente brasileño (Navarro, 2002).

#### ADVERSARIOS Y ENEMIGOS

La identidad del movimiento también se construye a partir de la oposición. En este sentido, el principal sujeto social opositor a la acción de los campesinos sin tierra son los latifundistas, en la medida en que encarnan en sí aquello por lo cual se lucha: la posesión de la tierra. Los terratenientes han estado organizados tradicionalmente en el Brasil en dos organizaciones rurales: la Confederação Nacional da Agricultura,

---

20 “*Nossa luta ... é uma luta de esquerda, que é uma luta contra o Estado e contra o capital*” Stédile y Fernandes, 2000: 131.

que representa los intereses de los terratenientes, y la Sociedade Rural Brasileira (SRB), que ha sido canal de expresión de los productores de café y de los ganaderos. Sin embargo, durante la década del ochenta, a impulsos de los procesos de modernización del agro brasileiro, estas organizaciones disminuyeron su influencia (Medeiros, 1993), aumentándola las organizaciones de los empresarios rurales organizados por producto y las grandes cooperativas ligadas a los procesos de agroindustrialización. Tanto unas como otras ejercen su papel de negociación a través del “lobby” frente a los órganos del Poder Ejecutivo, como los Ministerios en los cuales tienen las puertas abiertas y frecuentes contactos, siendo consultados por los funcionarios de turno ante las principales medidas de política agrícola.

Con el Plan Nacional de Reforma Agraria a mediados de la década del ochenta, y con el incremento de las acciones de ocupación de las tierras de los latifundios improductivos y de las tierras *grilhadas*, los terratenientes se reorganizaron en la Unión Democrática Ruralista, un grupo de presión y de acción al que se sindicó en repetidas oportunidades como directamente involucrado en las amenazas de muerte y en los asesinatos perpetrados por pistoleros a sueldo contra los líderes de las ocupaciones de tierras, los sindicalistas y los agentes de la Pastoral de Tierras. Pero la UDR también cumplió una eficaz función en el aglutinamiento de las voluntades en contra del Plan Nacional de Reforma Agraria cuando fue discutido en el Congreso y a través de la organización de la bancada Ruralista en la Legislatura cumplió un papel central en el desfiguramiento de la propuesta original del PNRA. Sus acciones también incluyeron la recaudación de fondos a través de remates de ganado y la realización de grandes eventos, congresos y campamentos contra la Reforma Agraria.

El argumento central de los propietarios de la tierra estuvo dirigido a rescatar la idea de que la Reforma Agraria sólo debía realizarse sobre las tierras improductivas, ampliando el sentido de lo que era la “tierra productiva” y extendiéndolo a las tierras dadas en arrendamiento o en mediería, e incluso a las tierras que estaban en vías de ser puestas en producción. De esta manera se insistía en que la Reforma Agraria debía realizarse sobre las tierras que aún estaban en posesión del Estado en la Amazonía, y en que la mejor Reforma Agraria se llevaría a cabo otorgando créditos y condiciones favorables a los actuales productores para poder mecanizar la producción y tecnificarla, porque entonces los beneficios de la producción y las ganancias también alcanzarían a los trabajadores rurales.

Una discusión acerca de la construcción de la identidad del movimiento campesino que lucha por la tierra en Brasil, y más específicamente de la principal organización de dicho movimiento, el MST, debe hacer referencia a la *cuestión de la violencia*. La violencia en cualquiera de sus formas está incrustada en las relaciones sociales del mundo agrario brasileño. Por sus características, su intensidad y su frecuencia, contribuye a formar la identidad del movimiento, y en esto lo diferenciará de otros movimientos sociales agrarios de América Latina.

El origen de la violencia está en las formas de apropiación de la tierra: la burguesía agraria se produce y se reproduce a sí misma a través de la propiedad de la tierra. A través de ella obtiene la renta agraria, la plusvalía del trabajo de sus asalariados y el plusvalor generado por los campesinos arrendatarios, aparceros, medieros, etcétera. Pero la tierra también es fuente de prestigio social, de las relaciones clientelares que afirman y reproducen los mecanismos de dominación política tanto locales como regionales. Aquellos estratos o grupos sociales que se oponen a esta forma de apropiación de la tierra y a las consiguientes relaciones sociales que se generan y que esperan encontrar en la tierra su sustento y sus formas de reproducción material, cultural y simbólica, luchan por modificar la actual estructura de la tierra, y por esta osadía deben ser castigados. De esta manera la violencia política es ejercida como una forma de amedrentamiento y dominación: “[la violencia es]...*uma tecnologia de poder que se exerce sobre os homens, com o fim de, ao mortificar os corpos...provocar um efeito-de-demonstração para sileciar, punir e docilizar os vivos, tecnologia de poder tanto mais eficaz quanto bárbara e impune*” (Santos, et al 2000: 149).

Como señala Tavares dos Santos, hay al menos cuatro formas distintas de violencia. La violencia cotidiana que está inserta en las relaciones sociales de dominación desde la sociedad esclavista hasta nuestros días y que proviene de la mencionada forma de apropiación de la tierra y de la estructura agraria correspondiente. Tal vez sea conveniente recordar que la sociedad brasilera fue construida sobre la base del trabajo esclavo, siendo uno de los últimos países en abolirlo muy adelantado el siglo XIX. Sin embargo, el trabajo esclavo en la práctica posiblemente nunca desapareció por completo, habiendo recrudescido en años recientes, habiéndose denunciado en la década del '90 la existencia de miles de trabajadores sometidos a condiciones de esclavitud por deudas. Pero la violencia sobre las personas ha sido una constante en el medio rural brasilero a partir de las relaciones de

dominación asentadas en la propiedad de la tierra. Los terratenientes siempre han manejado las relaciones sociales al interior de su establecimiento como relaciones de carácter privado, no respetando la legislación vigente en materia de leyes laborales. De esta manera, los movimientos mesiánicos, el bandidismo, los movimientos sociales que luchan por la tierra, denuncian con su accionar la violencia cotidiana engarzada en las relaciones de poder en el campo (Santos, 1992). La violencia política tiene como mentores a terratenientes, empresarios rurales o comerciantes, pero es ejecutada por mercenarios y policías privados, y en ciertas ocasiones por miembros de la policía civil o militar, estando dirigida contra blancos seleccionados: militantes sindicales, líderes de las ocupaciones y agentes de la Pastoral de la Tierra de la Iglesia Católica. La violencia programada es aquella generada desde los poderes públicos que han ideado, programado y ejecutado los planes de colonización en las tierras públicas de las regiones de colonización ejerciendo una violencia ambiental, agronómica y económica. La violencia simbólica ejercida a través de los diferentes discursos: los discursos de la colonización los de las amenazas de muerte, y los discursos que disimulan y “naturalizan” las relaciones de coerción propias de las relaciones sociales en el agro brasileño.

De este modo, la violencia que los movimientos también ejercen, al ocupar tierras públicas o tierras privadas, al presionar a los poderes públicos y a la opinión pública a través de los campamentos, al marchar sobre las ciudades y aún al ejercer la violencia física sobre propios y ajenos (Navarro, 2002), son la respuesta a y la contracara de las distintas formas de violencia patronal y pública.

Algunas cifras ilustran la magnitud de la violencia agraria. Entre 1988 y 1998 hubo 5.508 conflictos por la tierra involucrando a 729.923 familias, y 592 asesinatos (Santos, 2000). Según otra fuente, entre 1990 y 1999 se realizaron 2.276 ocupaciones que involucraron a 330.714 familias en todo el territorio nacional, como se mostró en el Cuadro 1.

El MST ha tratado por todos los medios de construir la percepción entre sus miembros de que el Estado brasileño sólo avanza en la Reforma Agraria, la principal reivindicación de los campesinos, cuando el Movimiento presiona a través de las ocupaciones. Las cifras de ocupaciones y de tierras otorgadas a los asentamientos refuerzan esta idea. El MST estimula la idea de que se debe prescindir del Estado. Si los asentamientos son el lugar físico donde se construye una sociedad nueva y distinta, si en los asentamientos se educa y se forma a las nue-

vas generaciones en los ideales de la solidaridad, el compromiso y la cooperación, si los asentamientos son autosuficientes en materia de la alimentación que producen para los asentados y aún comercializan producción con el mundo exterior, se refuerza la idea de que se puede prescindir de y aún colocarse fuera del Estado. Sin embargo, como se ha hecho notar (Wolford, 2001; Navarro, 2002), la autonomía no es tal: uno de los factores más importantes que han permitido al MST tener un gran predicamento y un instrumento de coerción al interior de los asentamientos es el manejo de los créditos que otorga el Estado. Según estos autores, es una contradicción flagrante que el MST haga uso extensamente del crédito estatal para los agricultores asumiendo la responsabilidad de distribuirlo entre los asentados, y que luego se desentienda y desaliente su devolución (Wolford, 2001), y más aún, que designe al Estado como su enemigo principal.

Martins ha hecho notar que en realidad lo sucedido es que el Estado brasileño ha cambiado, pero los Movimientos Sociales y Populares no han reparado en ello. Según este autor, una cosa era la situación durante la dictadura militar que finalizó en 1985. En ese tiempo, cuando se constituyen los Movimientos Sociales y Populares como el MST, lo correcto era el ataque frontal al Estado para desestabilizarlo y obligarlo a capitular y dar paso a la democracia. Pero luego de 1985 la naturaleza del Estado ha cambiado. Son gobiernos que se han legitimado a través de procesos electorales, y por lo tanto ya no es posible atacarlos y deslegitimarlos, porque con ello se debilita la propia posición del Movimiento Social en la medida en que muchos miembros de estos ahora pertenecen a los equipos de gobierno locales o municipales (Martins, 2000).

#### LOS ALIADOS

La identidad del MST también se construye por la definición del campo dentro del cual realizará sus alianzas y por la construcción de las diferencias con aquellas organizaciones que se pueden conceptualizar como sus aliados.

Para definir el campo de alianzas, se ha considerado como tales a aquellas organizaciones que comparten con el MST una posición semejante o parecida de apoyo a la Reforma Agraria, conformando así un espacio de organizaciones y/o instituciones proclives a la realización de una Reforma Agraria. Debe quedar claro sin embargo que al interior de ese conjunto de organizaciones hay posiciones distintas,

no sólo acerca del significado político, económico y social de la Reforma Agraria, sino también acerca del mejor camino para lograrla.

Al interior de este conjunto de “aliados” la disputa por la hegemonía y por la conducción de los trabajadores rurales y campesinos es muy dura y ha sufrido muchos cambios a lo largo de las últimas dos décadas. La CONTAG, una federación que reúne a varios cientos de sindicatos de trabajadores rurales y cientos de miles de asociados, creada en 1963, fue la organización más importante de representación de este sector social durante los difíciles años de la dictadura militar. Justamente por haberse desarrollado en este período político, la CONTAG siempre apoyó al Estatuto de la Tierra, promulgado al inicio de la dictadura como el instrumento adecuado para llevar adelante una Reforma Agraria, y privilegió el diálogo y la utilización de instrumentos legales para llevarla adelante. La CONTAG fue además durante esos años un eficaz instrumento de defensa de los derechos de los trabajadores rurales, con una intensa lucha por los salarios rurales y la defensa de las condiciones de trabajo. Por otro lado, para el gobierno militar funcionó como la oposición permitida.

Sin embargo, a mediados de la década del ochenta, a medida que el gobierno militar perdía fuerza y comenzaba a incrementarse la oposición al régimen, creció el espacio para la aparición de otras organizaciones sociales que le disputaban la representación a la CONTAG. Esta oposición reconoce varios orígenes. Por un lado están aquellas organizaciones, como el Movimiento de Afectados por las Represas Hidroeléctricas, que responden a una situación determinada (Grzybowski, 1987). Allí también se podría ubicar al Movimiento de los Seringueiros, si bien aquí no sólo se responde a la situación de los trabajadores de los seringales en su lucha por la defensa de su fuente de trabajo contra las empresas que desmontan las selvas amazónicas, sino que también está presente una preocupación nueva por la preservación de los recursos naturales, la propuesta de nuevas formas de lucha (los “empates”) y la propuesta de un nuevo modelo de Reforma Agraria basado en las reservas extractivistas (Allegreti, 1997).

Por otro lado aparece el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), que cuestiona a la CONTAG sobre dos ejes principales. Uno de ellos es la propia concepción de la Reforma Agraria: para el MST esta no es meramente una forma de distribuir la tierra y de dar acceso a bienes a los campesinos, sino mucho más aún, es un paso hacia la democratización de la sociedad y para la destrucción del sistema capitalista en el Brasil. El otro eje de cuestionamiento

to está centrado en las tácticas de lucha. Mientras la CONTAG apostó todas sus cartas a apoyar las Propuestas del Plan Nacional de Reforma Agraria elaborado por los sectores progresistas del gobierno Sarney, por reconocidos técnicos de la Asociación Brasileira de Reforma Agraria y por líderes de la propia CONTAG, y privilegió las vías institucionales para implementar dicho Plan, el MST siempre fue muy crítico del PNRA y privilegió la ocupación de tierras como táctica para obligar y forzar a los gobiernos estatales y al gobierno Federal a negociar la entrega de tierras. El fracaso del PNRA y el posterior viraje a la derecha de la Constituyente (1988), que con el predominio de la bancada ruralista promulgó una Constitución que retrocedió en relación a la legislación que había estado vigente en materia de llevar a cabo una Reforma Agraria, le hizo perder espacio político a la CONTAG y transformó al MST, que lideró cientos de ocupaciones de tierras, en el interlocutor obligado de cualquier política de Reforma Agraria y de transformación del medio rural.

El MST contó con un valioso aliado en la lucha dirigida a socavar la hegemonía de la CONTAG, cuestionando sus perspectivas estratégicas y su forma de lucha en el departamento Nacional de Trabajadores Rurales, un organismo creado dentro de la Central Única de Trabajadores (CUT) perteneciente al Partido de los Trabajadores (PT). Ya en la década del '80 varios sindicatos opuestos y críticos a la conducción más dialoguista de la CONTAG se habían comenzado a nuclear en la CUT. Esto la llevó a crear la DNTR en 1989, que apoyó o se unió a las posiciones más radicalizadas del MST. Sin embargo, para la DNTR la Reforma Agraria era un paso y un aspecto de las transformaciones más profundas que era necesario llevar a cabo en la sociedad brasileña, y por ello se veía a sí misma como el puente o nexo necesario que los trabajadores rurales deberían tener con los trabajadores urbanos para construir esa alianza que permitía llevar a cabo las transformaciones profundas del sistema capitalista (Medeiros, 1993). La alianza DNTR-MST también pasó por diversas situaciones de apoyo y competencia, pero a lo largo de la década del '90 ha quedado más claro el papel hegemónico del MST.

Es justamente este papel el que ha levantado críticas hacia el MST. Navarro, por ejemplo, le critica esta concepción, a la que tilda de "leninista", que ha llevado al MST a ignorar y buscar destruir a otras organizaciones de trabajadores rurales y campesinos en su búsqueda por la hegemonía en la conducción y control del movimiento campesino (Navarro, 2002).

Particularmente interesante es la relación del MST con la Iglesia Católica y cómo la relación de alianza con ella ayuda a construir una identidad, pero al mismo tiempo necesita diferenciarse de ella para construir la propia. En las páginas iniciales de este trabajo se han explicado los cambios que sufrió la Iglesia Católica durante la década del setenta y el advenimiento, desarrollo y posterior caída en desgracia de la Teología de la Liberación. Sacerdotes y monjas (muchos de ellos a su vez de origen campesino, especialmente en el sur del país) que crearon e impulsaron junto con sus fieles las Comunidades Eclesiales de Base y que apoyaron a las incipientes organizaciones locales campesinas tienen un rol destacado en la iniciación de la organización campesina. En tiempos de la dictadura militar, cuando el dominio de los latifundistas y sus aliados era predominante en el campo, que la Iglesia y sus sacerdotes se pusiesen del lado de los pobres “santificó” sus luchas, fortaleció sus razones y dio tal vez, a los campesinos que en ella participaban, cierta idea de invulnerabilidad o al menos protección divina. Por otro lado, como la Iglesia Católica tenía una amplia ascendencia entre el campesinado del sur de Brasil de origen europeo o criollo, le creó al movimiento campesino en ciernes una amplia base social de apoyo. De esta manera, aún en el MST actual convive la fe religiosa con los objetivos políticos de la organización campesina, más que en términos contradictorios, en términos sinérgicos<sup>21</sup>.

Pero la Iglesia también puso al servicio de la organización y la lucha campesina por la tierra sus recursos materiales. Sus parroquias, conventos y seminarios fueron escenario frecuente de las reuniones, asambleas y congresos de las organizaciones campesinas, mientras que las fundaciones católicas colaboraron frecuentemente con recursos financieros para los desplazamientos y la alimentación de los participantes. Tampoco es de despreciar el aporte eclesial en materia de tecnología organizativa, y sobre todo en proveer una “mística” que alimentó los primeros esfuerzos de organización campesina.

Sin embargo, a medida que los campesinos y trabajadores rurales fueron creando y madurando sus organizaciones, se desataron conflictos con clérigos y agentes de pastoral. En las etapas iniciales de

---

21 “Como é que nós, que somos de esquerda, vamos sempre á missa? Para nós, não existe contradição nenhuma nisso. Ao contrário: a nossa base usa a fé religiosa que tem para alimentar a sua luta, que é uma luta de esquerda, que é uma luta contra o Estado e contra o capital”, João Pedro Stédile en João Pedro Stédile y Bernardo Mançano Fernandes, *Brava Gente. A trajetória do MST e a luta pela terra no Brasil*, 2000, pp: 131.



creación del MST en las Asambleas eran frecuentes las discusiones acerca del papel de los agentes de pastoral, ya que había frecuentes quejas de los delegados campesinos de que estos intentaban imponer sus ideas en las mismas. Esto, sumado a los cambios de rumbo en la Iglesia Católica a partir de fines de la década del '80, fue generando un enfriamiento de las relaciones, pero cuando ello sucede ya el movimiento campesino es capaz de marchar sobre sus propios pies. A pesar de ello, aun hoy hay muchos militantes y clérigos católicos que siguen participando del movimiento campesino en general y del MST en particular.

### LAS CRÍTICAS AL MST Y LA CUESTIÓN DE LA DEMOCRACIA INTERNA

En relación al ataque que el MST realiza al Estado, identificándolo como uno de sus enemigos, Martins ha opinado que lo que está sucediendo es que los grupos dirigentes del MST en realidad no representan a sus dirigidos. Los Movimientos Sociales y Populares están siendo dirigidos por miembros de las clases medias que impiden que los pobres se expresen. Hablan por los pobres, pero los pobres han sido expropiados de la palabra (Martins, 2000). La idea de la lucha contra el Estado proviene de una concepción exclusivamente de clase, donde se suponía que se estaba en un enfrentamiento definitivo entre burguesía y proletariado, entre el bien y el mal.

Como se adelantó más arriba, Navarro (2002) ha ido aún más allá en sus críticas. Sus argumentos se centran en la percepción de que en la segunda etapa del MST (1986-1993) este dejó de ser un movimiento de masas para convertirse en una organización de cuadros de inspiración leninista. Distingue entre los campesinos sin tierra, que participan de las ocupaciones y de los asentamientos, y la dirección centralizada nacional, las direcciones estatales e intermedias y los cuadros militantes. Estos son los que realmente conducen la organización. Los campesinos son intermediados por estos cuadros y en este sentido no hablan con su propia voz.

Petras y Veltmeyer (2001) arguyen que estos cuadros de la organización sí son representativos del conjunto de los campesinos, y que interpretan correctamente a sus bases. Para ello, con base en una encuesta realizada entre la Dirección Nacional, concluyen que los dirigentes provienen de familias de campesinos sin tierra y que muchos de ellos aún son campesinos familiares o trabajadores rura-

les. A pesar de ello, la misma encuesta de Petras muestra que un tercio de los dirigentes nacionales tienen formación universitaria, y que esta proporción se eleva al 50% entre las mujeres que la integran. Estos datos vuelven a levantar el problema: los dirigentes nacionales del MST, ¿son campesinos sin tierra o hablan por los campesinos sin tierra?

Navarro (2002) plantea los dilemas actuales del MST. Por un lado pone énfasis en los aspectos positivos del Movimiento: la permanente lucha del MST por la tierra ha logrado colocar y mantener en la agenda política el tema de la Reforma Agraria aún en las condiciones más desventajosas; gracias a la política de ocupaciones del MST se han formado cientos de asentamientos, y cientos de miles de campesinos han obtenido tierra; la descentralización política que se inició con la Constitución de 1988 a nivel local ha llevado a que muchos dirigentes locales estén participando de los gobiernos locales, lo cual ha minado el poder local terrateniente.

Por otro lado apunta a aquellas cosas que a su juicio son negativas y deberían corregirse. En los asentamientos se ejerce un estricto control social de los asentados, a través principalmente del manejo y la distribución del crédito estatal y de la adhesión a los principios del movimiento. La práctica política no es democrática: los dirigentes no se someten a elecciones ni a control ni responsabilización ninguna. El control en los asentamientos llega a la agresión física y a la expulsión. El sometimiento de la alteridad: las mujeres han debido postergar sus reclamos en pos de una problemática contradicción principal. Y una incorrecta deslegitimación permanente del Estado en una etapa de la historia brasileña en la cual este tiene un mayor nivel de legitimidad.

En resumen, a juicio de este investigador la situación del MST es tal que, pese a la intensa movilización de los campesinos que les ha permitido conquistar tierras, esto no necesariamente los conducirá a la emancipación<sup>22</sup>, ya que sus dirigentes encaminan al movimiento sólo a la satisfacción de sus intereses.

---

22 Navarro (2001: 7) define a la emancipación de las clases subalternas como la posibilidad de construir en forma autónoma sus propias formas de asociación y de representación de intereses, la posibilidad de entrar al campo de las disputas políticas ejerciendo su legítimo derecho a la representación de intereses sin riesgos de eliminación física o de restricciones políticas ilegítimas. Esta definición de emancipación es distinta de la ruptura antisistémica y de la conquista del poder por las clases subalternas, idea que es calificada de fantasiosa por el autor dadas la actual situación y relaciones de fuerza en la sociedad.

## LA UTOPIA

El objetivo principal de la lucha del MST es la redistribución de la propiedad de la tierra para que 4,5 millones de brasileños puedan acceder a ella. Este proceso se considera necesario para lograr la eliminación de la pobreza y de las desigualdades sociales. En segundo lugar se considera necesaria la democratización del capital. Esto significa que los asentados tengan acceso a los créditos necesarios para el proceso productivo, para invertir en medios de producción, y para invertir en la construcción de agroindustrias, de industrias para la agricultura, y en el fortalecimiento de los canales de comercialización para sus productos. En tercer lugar propugnan una democratización de la educación. Tanto porque no es posible construir una democratización de la tierra y el capital con analfabetos, como porque el acceso a la educación es sinónimo del acceso a la información, la cultura, el conocimiento, que en la sociedad actual es un factor de poder.

Los asentamientos son el ámbito en el cual se está construyendo una nueva sociedad. Uno de sus elementos fundamentales es la solidaridad. Por ello, desde los asentamientos se impulsa el apoyo a los hospitales, las guarderías y jardines de infantes, los asilos mediante la donación de alimentos, la realización de trabajos comunitarios, etcétera. El MST piensa que es posible proponer un modelo de desarrollo diferente al que el neoliberalismo intenta imponer en Brasil. Cree en el desarrollo del medio rural como una alternativa al crecimiento de las ciudades. Denuncia la idea de que la urbanización es inevitable y que el desarrollo social sólo vendrá desde las ciudades para proponer un desarrollo basado en el medio rural. Proponen el desarrollo de agroindustrias y de industrias localizadas en el campo para promover al desconcentración y formas de vida más humanas.

Finalmente se proponen recuperar el orgullo de ser brasileño. Piensan que no es posible impulsar un desarrollo nacional si el pueblo no cree en sus propios valores (Stédile y Fernandes, 1999).

## CAPÍTULO III

# LA UNIDAD ES UN CAMINO TRABAJOSO: EL MOVIMIENTO DE LOS CAMPESINOS EN PARAGUAY

### ANTECEDENTES DE LA CUESTIÓN AGRARIA EN PARAGUAY

Para comprender la situación actual del agro paraguayo y de las fuerzas que aún disputan por la hegemonía de la cuestión agraria, es necesario y conveniente hacer una breve referencia histórica a la forma en que se constituyó la posesión de la tierra cuando Paraguay nacía a la vida como nación independiente.

Tanto bajo el gobierno del Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia durante las primeras décadas del siglo XIX, como bajo los gobiernos de los López en las décadas siguientes y hasta la década de 1870, el Estado Paraguayo ha sido caracterizado como “fuerte, patrimonialista, paternalista e ilustrado” (Campos, 1987). Durante el gobierno del Dr. Francia, este lleva a cabo una política de recuperación de las tierras que habían sido de la corona española, de las que habían pertenecido a los jesuitas, de las que habían pertenecido a la Iglesia, e incluso de las que pertenecían a un sector criollo acaudalado que se oponía a su política de refundación de un estado agrario, basado en el campesinado. En 1824 y años subsiguientes se dictan varias leyes mediante las cuales se conmina a los particulares a presentar los títulos legales sobre las tierras que detentan, estipulando que de no ser así estas tie-

rras pasarían a dominio del Estado. Dos años más tarde se estima que el Estado paraguayo se había apropiado de la mitad de las tierras de la región oriental del país (al este del río Paraguay) y de la totalidad de las tierras de la región occidental, conocida como el Chaco paraguayo. Las tierras de la región oriental fueron luego, en parte, arrendadas a campesinos a precios módicos y sin plazo definido con la condición de que las pusiesen a producir. Por otro lado estaban los montes de yerba mate, que vuelven a ser “ocupados por la población indígena y por los mestizos de sectores populares, proclamándose éstos propietarios de los mismos por derecho natural” (Campos, 1987).

De esta manera el Estado no sólo resuelve la cuestión del acceso a la tierra de los campesinos, sino que al mismo tiempo se asegura ingresos en metálico, en ganado y en especie que percibe como rentas por la tierra cedida. En un segundo momento, bajo el dominio de los López, será esta acumulación del Estado lo que les permitirá desarrollar una política mercantil y de incipiente desarrollo industrial, aún en una sociedad de definido perfil rural.

Este modelo de desarrollo será destruido por la Guerra de la Triple Alianza. Los ejércitos de Brasil, Argentina y Uruguay, financiados por Inglaterra, terminarán con el incipiente desarrollo logrado por el Paraguay, con una política de desarrollo independiente y anti-librecambista. La guerra no sólo alteró profundamente el perfil demográfico de la nación, debido al exterminio de los varones, sino que también modificó la política económica y la distribución de sus recursos naturales. La libre navegabilidad de los ríos, negada por los López, y la destrucción de sus industrias, pronto incorporaron al mercado paraguayo al consumo de los productos manufacturados ingleses. La nueva Constitución promulgada en 1870 adopta los postulados del liberalismo y del libre cambio, inspirada en la Constitución y en otros textos legales de la República Argentina. Las tierras que habían sido confiscadas por los gobiernos anteriores fueron devueltas a sus antiguos dueños, y se sanciona una normativa legal –Registro General de la Propiedad y Código Rural– que legaliza y cristaliza la propiedad rural.

Por una ley de 1875 reforzada por otra posterior de 1883 se autorizó al gobierno a vender las tierras fiscales al primer denunciante, debiendo abonarse su costo en moneda metálica o en bonos de la Tesorería de la Nación. Si bien se respetaba el derecho de los ocupantes y arrendatarios de las tierras públicas a denunciar las tierras que ocupaban, de hecho ocurrió que el campesinado no tenía dinero para comprarlas. En cambio las tierras fueron denunciadas por una

naciente oligarquía nacional y por capitales extranjeros que eran a su vez poseedores de los bonos de la Tesorería emitidos para financiar la Guerra y su recuperación posterior. De esta manera, muchos de los campesinos pasaron a ser ahora arrendatarios de capitales privados que eran los nuevos dueños de las tierras. Esto ocurrió especialmente en las tierras próximas a los centros poblados, que fueron las que más demandaron los nuevos compradores por la posibilidad de disponer de la mano de obra necesaria para explotarlas.

El capital extranjero, primordialmente anglo-argentino, se dirigió también a la compra de los yerbales naturales y de la inmensa riqueza forestal del Paraguay. Era la época del desarrollo de la industria del tanino para la curtiembre de los cueros y de la explotación forestal para producir los durmientes que se empleaban en la extensión de las vías ferroviarias. Un historiador agrario (Pastore, 1972) resume así la situación: “Al finalizar el siglo XIX estaban cumplidos los objetivos de la política económico-social iniciada en 1883: mas de 7.030 leguas cuadradas de praderas y bosques de quebracho del Chaco habían sido enajenados a 79 personas o sociedades [...] Cuarenta y cinco entidades en su inmensa mayoría organizaciones de capitales extranjeros adquirieron la riqueza yerbatera del Paraguay. Una de ellas la Industrial Paraguaya S.A. fundada en 1886, compró no menos de 855.000 has. de yerbatal natural y un total de 2.647.327 has. de tierras” (citado por Campos, 1987: 9).

Fue también en esa década del ochenta del siglo XIX que se fundan los dos partidos políticos del Paraguay la Asociación Nacional Republicana –Partido Colorado– y el Partido Liberal, que se alternarán en el poder durante el siglo XX. Estos dos partidos tienen en sus bases muy pocas diferencias ideológicas, y más bien representan intereses de fracciones distintas de la naciente oligarquía paraguaya. Las lealtades políticas serán construidas sobre la base de la posesión de la tierra: cada caudillo aporta las fuerzas de los votantes, que a su vez son los arrendatarios de sus tierras. Las relaciones de caudillismo basadas en el patronazgo, el padrino y el clientelismo dominarán la historia política del Paraguay aún hasta la actualidad.

Durante la primera mitad del siglo XX se dictan varias leyes: la Ley de Homestead, de 1918, que intenta devolver las tierras enajenadas a los campesinos por las leyes de 1883 y 1885; y la Ley de Creación, Fomento y Conservación de la Pequeña Propiedad Agropecuaria de 1926. Sin embargo, en la práctica esas leyes fueron inoperantes para revertir la aguda concentración de la tierra operada

en las décadas anteriores. Algunos pocos miles de hectáreas que fueron expropiadas y distribuidas a los campesinos en este periodo –predios de cinco a diez ha– reforzaron la estructura dual latifundio-minifundio. Las leyes de inmigración y colonización que se dictaron no tuvieron el impacto económico y social que tuvieron leyes similares en los países limítrofes, debido a la escasa infraestructura vial que impedía el traslado de los productos agrícolas de las colonias hacia los puertos y a la insularidad del país, que obligaba a la remisión de los mismos a través de los puertos de Buenos Aires.

La dependencia del Paraguay con respecto a la Argentina también se debió a que esta nación era la principal compradora de sus productos primarios. El amplio predominio del capital anglo-argentino que se había posesionado de las obras públicas, de muchas tierras productivas, de los yerbales naturales y de las riquezas forestales, comenzó a declinar a partir de la crisis del treinta y fue languideciendo en las dos décadas posteriores. En su reemplazo ya había una oligarquía nacional, muy vinculada al poder político, que se fue apropiando de las tierras, de los bosques y de la industria de transformación primaria.

La población campesina que producía los alimentos básicos de consumo popular se asentó en tierras propias o arrendadas en los departamentos centrales del oriente paraguayo: Central, Cordillera, Paraguarí, Caazapá y Guairá. Hacia mediados del siglo XX la subdivisión de la tierra, la erosión de los suelos y la multiplicación de la población campesina habían transformado a esta región en una fuente de permanentes conflictos por la tierra.

La segunda mitad del siglo comienza con la dictadura de Stroessner, que durará treinta años. La presión social campesina fue encontrando salidas de distintas formas. Por un lado, las migraciones temporales de trabajadores a las provincias limítrofes argentinas para las tareas de recolección de algodón y de otros productos agrícolas. Por otro lado, las migraciones permanentes de trabajadores, principalmente hacia Buenos Aires, para trabajar en la construcción y en el servicio doméstico.

La segunda válvula de alivio de la presión campesina fue la ocupación de tierras fiscales, ya que aún había frontera agrícola en los departamentos más alejados de la zona central. Ocupaciones organizadas o espontáneas, grupales o individuales que luego eran legalizadas por el Estado, que creaba “colonias” allí donde había habido ocupaciones. Sin embargo, forzados por la escasa disponibilidad de capi-

tal y por la propia política estatal al respecto, las colonias resultantes también estaban formadas por propiedades minúsculas de entre 6 y 20 ha. En realidad, una familia campesina librada a sus propias fuerzas y trabajando con herramientas manuales, sin maquinaria, tampoco tenía capacidad para ocupar productivamente extensiones mayores de tierra. La explotación que hizo de estos campesinos el capital comercial local (bolicheros, intermediarios), que les vendía los productos manufacturados necesarios para la subsistencia familiar, les financiaba el cultivo de algodón y les compraba la producción a precios irrisorios, y la propia posición hegemónica del capital industrial en el extremo de la cadena del complejo agroindustrial algodonero, impidieron cualquier posibilidad de acumulación de excedentes de este campesinado parcelario.

Esta estructura agraria dualizada recién comienza a modificarse hacia la década del setenta. Resumidamente consistía en grandes establecimientos ganaderos, los enclaves forestales y yerbateros y una extensa capa de campesinos minifundistas, que alternaban el trabajo en sus parcelas con la venta de fuerza de trabajo fuera del predio, en los establecimientos vecinos y aún a través de las migraciones laborales a países limítrofes<sup>23</sup>.

Los gobiernos militares que se sucedieron durante veinte años en Brasil sostuvieron una geopolítica dirigida a disputar a la Argentina la primacía que había tenido durante un siglo, desde la Guerra de la Triple Alianza sobre el Paraguay. Para ello instrumentaron una serie de acciones que modificarían radicalmente las relaciones de fuerzas en esta parte del continente. El eje de esa política fue la construcción de la gigantesca represa de Itaipú, sobre el curso alto del río Paraná, en el límite entre ambos países. Es la represa más grande del mundo, con una capacidad de generación de 12.600.000 Kw, y se constituyó en una importante fuente de generación de recursos para el Paraguay, que le vende la mayor parte de la energía a Brasil. El impacto que la construcción de la represa generó en la débil economía paraguaya fue muy importante. Se estima que sólo el presupuesto de la obra durante 1975 sobrepasó el total de las exportaciones paraguayas de dicho año (Rivarola, 1981). Poco después se construyó la ruta

---

23 Como bibliografía para la cuestión agraria en el Paraguay, remitirse a los volúmenes editados por el Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos que reúnen los números editados de la *Revista Paraguaya de Sociología*. "Pasado y Presente de la Realidad Social Paraguaya", Volumen III, La Cuestión Agraria en el Paraguay, Asunción, CPES, 2001.



entre Asunción y Foz de Iguazú, y desde allí la ruta que atravesando territorio brasileño conectaba con el puerto franco paraguayo de Paranaguá, que le daba a este país la ansiada salida al Atlántico. Estas y otras iniciativas consolidaron la presencia de Brasil como un importante aliado del Paraguay, desplazando la primacía argentina.

La construcción de estas importantes obras de infraestructura tuvo un importante efecto en la demanda de mano de obra, aliviando la presión que esta ejercía sobre el mercado laboral interno. Dinamizó la industria de la construcción, por la demanda generada no sólo por estas obras sino también por la construcción de viviendas y de distintas obras de infraestructura destinadas a asentar a la población que durante una década trabajó en estas obras. Modificó la imagen de los departamentos de la cuenca del alto Paraná, que ahora eran percibidos como los lugares dinámicos donde había trabajo y nuevas oportunidades laborales y empresariales. Elevó enormemente el precio de la tierra urbana y posteriormente el precio de la tierra agrícola (Rivarola, 1990).

Pero tal vez el impacto mayor fue en la modernización de la agricultura en los departamentos del este del país. En efecto, motivados por la diferencias de precios de la tierra agrícola en el Brasil (más altos) y en el Paraguay (más bajos) se generó una fuerte corriente de agricultores medios (tipo *farmer*) y de empresarios agrícolas de origen brasileño, que compraron muchas tierras para destinarlas a la producción de soja y de trigo. En muy pocos años, toda esta vasta región se transformó en la mayor zona de producción de granos del país. Los agricultores podían vender sus tierras en Brasil y comprar tierras en Paraguay, y aún les quedaba dinero para capitalizar sus explotaciones. Trajeron las maquinarias y los conocimientos agrícolas para poner en producción miles de ha. Para ello primero debieron transformar en tierras agrícolas superficies con montes, para lo cual emplearon también mano de obra paraguaya. Completada esta tarea, la mecanización de los cultivos reducía abruptamente la demanda de mano de obra local. La presión que ejercían los agricultores brasileños también produjo el desplazamiento de campesinos paraguayos, ya sea por la venta voluntaria de sus pequeñas parcelas o por las presiones legales e ilegales a las que eran sometidos para vender. De hecho, la “colonización” realizada por los agricultores brasileños ha sido una importante fuente de conflictos en el agro paraguayo, como se verá más adelante.

La superficie boscosa en los cuatro departamentos de la Región Oriental disminuyó en tres cuartas partes entre 1945 y 1976 (FAO, 1977,

citado por Rivarola, 1981: 178), mientras la producción de soja pasaba de 1.500 ha en 1961 a 357 mil hectáreas en 1980 (Rivarola, 1981). A esto se agregó la expansión del cultivo del trigo y de otros cultivos menores, como la menta, y otras hierbas medicinales y aromáticas. El cultivo del algodón a su vez no se restringió a la Región Oriental, sino que cubrió una amplia zona de cultivo también en los departamentos del centro del país y fue el cultivo de renta preferido de los estratos campesinos. La superficie cultivada paso de 47 mil hectáreas en 1970 a 258 mil hectáreas en 1980 (Galeano, 1993). La modernización agrícola provocada por esta colonización de origen brasileño fue parcial, en el sentido de que sólo se produjo en dichos cultivos, altamente mecanizada (el 54% de los tractores del país se concentran en esta región), con las tecnologías de la revolución verde, altamente contaminantes y dependientes de insumos importados, destructiva de los recursos naturales: de los bosques, y en consecuencia de los suelos. Además produjo desplazamientos de los campesinos radicados en dichas zonas, y demandó mano de obra en condiciones de precariedad laboral, destinada a derribar el bosque y a tareas estacionales ligadas a los nuevos cultivos.

Según Rivarola (1981), otra área de crecimiento importante en las décadas del '60 y del '70 se produce en la ciudad de Asunción y su periferia, motivada por varias acciones convergentes. Por un lado el crecimiento del propio aparato del Estado, localizado principalmente en la ciudad capital, con su funcionariado y los servicios que presta, que a partir de mitad del siglo XX va adquiriendo cada vez más funciones y que se convierte en un importante empresario al administrar los ferrocarriles, las comunicaciones, el transporte aéreo y fluvial, etcétera. Importantes planes de vivienda y el crecimiento del turismo, principalmente argentino, provocado por la diferencia cambiaria, también actuarán como dinamizadores de la actividad en el área central. Esta dinamización a su vez atrajo a migrantes rurales que se asentaron en la periferia de la ciudad, cumpliendo actividades en el área de servicios domésticos, turísticos, y principalmente en la venta ambulante y callejera. Esta migración también modificó el área rural próxima a la ciudad al elevar el precio de la tierra, demandada ahora para inversiones turísticas o de casas de fin de semana, o por emprendimientos agrícolas intensivos, como la horticultura forzada destinada a abastecer el mercado de la ciudad de más altos ingresos.

Hacia fines de la década del setenta y durante la década siguiente se producen varios hechos que señalan el agotamiento de este modelo de crecimiento. La finalización de la construcción de la repre-

sa de Itaipú y de las obras conexas libera un gran cantidad de mano de obra que apenas podrá ser atendida por la realización de la obra binacional argentina-paraguaya de la Represa de Yacy-Retá hacia fines de la década del ochenta. Esta población excedentaria presionará sobre las tierras agrícolas.

El Estado paraguayo instrumentó una política de desarrollo agrícola, por acción o por omisión profundamente dualista. En las palabras de un analista paraguayo, la acción del Estado se verifica a través de dos líneas de acción: "...una, tendiente a promover y afirmar un sector productivo de punta ligado muy directamente al mercado de exportación, y otra, la disposición del mantenimiento del amplio sector de pequeños productores, que así cumpliría funciones esenciales tales como la absorción de la sobrepoblada oferta de mano de obra campesina, el abastecimiento de los renglones alimenticios a bajo costo y una relativa estabilización de los niveles de salarios de la fuerza de trabajo no calificada" (Rivarola, 1981: 184).

La agricultura fue durante las décadas del setenta y del ochenta el principal motor del crecimiento de la economía. Durante la década del setenta creció a una tasa del 7% anual, y en la década siguiente, si bien bajó al 4%, se mantuvo por arriba de la tasa de crecimiento del PIB total. Empleó a la mitad de la fuerza de trabajo, y provee el 90% de las exportaciones. Las exportaciones agrícolas crecieron más de tres veces durante este periodo, lideradas básicamente por dos cultivos de exportación: la soya y el algodón. Mientras el primer cultivo se produce en empresas agrícolas modernas, el algodón es el principal cultivo de renta de la economía campesina. Durante la década del '90 las exportaciones de algodón se reducen a la mitad por una contracción de las áreas cultivadas y de los rendimientos. Esta reducción ha tenido un importante impacto en la profundización de la pobreza rural (Morley y Vos, 2000)<sup>24</sup>.

Mientras la pobreza en las áreas urbanas mostró una tendencia leve a la disminución durante la década del ochenta, como consecuen-

---

24 Sobre el tema de la pobreza rural ver además Barrios, Oscar, "La Pobreza en el Paraguay: Distribución del Ingreso y Características Socio-Económicas", en *Revista Paraguaya de Sociología*, Año 37, N° 108 (mayo-agosto de 2000), pp. 95/108; Berry, Albert, "Las causas de la pobreza rural en América Latina y políticas para reducirla, con referencia especial para Paraguay", en *Revista Paraguaya de Sociología*, Año 36, N° 106 (septiembre-diciembre de 1999), pp.7/34; Galeano, Luis, "La exclusión social en el sector rural del Paraguay", en *Revista Paraguaya de Sociología*, Año 32, N° 94 (septiembre-diciembre de 1995) pp. 51/74; Rivarola, Domingo y Luis Galeano, "Los Pobres Rurales como Actores Sociales", en *Revista Paraguaya de Sociología*, Año 35, N° 102 (mayo-agosto de 1998), pp. 127/151.

cia del crecimiento dual mencionado más arriba, no ha pasado lo mismo en las áreas rurales. En el Paraguay “la mitad de la población es rural y la mitad de la misma es pobre. Mas de la mitad de estos pobres, entre 600.000 y 700.000 personas viven en la pobreza absoluta” (Morley y Vos, 2000: 28). Los pobres rurales se concentran en las explotaciones de menos de diez hectáreas, son guaraní hablantes, trabajadores independientes y analfabetos o con primaria incompleta (posiblemente analfabetos funcionales). Es decir, la concentración se produce en el grupo de campesinos con muy poca tierra. El incremento en los niveles de la pobreza rural registrados por algunos estudios entre 1980 y 1992 (cf. Sauma, 1993) es una consecuencia de la disminución del tamaño de las explotaciones, a su vez producto del cierre de la frontera agrícola y de la inacción del gobierno en materia de distribución de tierras, y de la caída de la producción de algodón. Esta a su vez es causada por los bajos precios en el mercado internacional, por el ataque de la plaga del gorgojo del algodón y por la disminución en la fertilidad de los suelos causada por la erosión. En este contexto, es muy posible que la pobreza rural se haya incrementado durante la década del ‘90. “Es de gran importancia política el hecho de que la divergencia entre las condiciones de los más pobres con respecto al resto continuó ampliándose (hasta 1995), en la medida en que la pobreza absoluta rural creció a una tasa significativamente mayor que la de cualquier otro grupo” (Morley y Vos, 2000: 37).

En materia de política de tierras es preciso señalar dos períodos: con frontera agrícola, y después de la finalización de la misma. Durante las décadas del ‘60 y ‘70 el Instituto de Bienestar Rural otorga tierras a 100 mil familias campesinas, siendo los departamentos de San Pedro y Caaguazú los que reciben mayor número de estas colonias (Galeano, 1993). Es posible reconocer dos procesos distintos en la ocupación de las tierras. En una modalidad, grupos de minifundistas y de campesinos sin tierras ligados entre sí por vínculos de vecindario o parentesco se movilizan para detectar tierras fiscales o con títulos de dudosa procedencia que estuviesen incultas. Una vez ubicadas estas tierras, los campesinos las ocupan logrando posteriormente el reconocimiento del Instituto de Bienestar Rural. En otra modalidad, son grupos de campesinos organizados y azuzados por fracciones del partido de gobierno o por caudillos locales, especialmente en etapas preelectorarias, los que invaden y ocupan tierras que han sido previamente sindicadas como fiscales u ocupables. En estos casos la acción de los caudillos se debe entender por su necesidad de extender y afianzar sus

redes clientelares, y su acción se comprende a la luz de las luchas entre fracciones del partido de gobierno. Pero lo importante de destacar es que las dos millones de hectáreas que se estima se distribuyeron en colonias campesinas durante estos treinta años, no obedecieron a un plan elaborado sino a las respuestas políticas circunstanciales de las presiones de los propios campesinos, y le sirvieron al régimen para reforzar sus bases clientelares. Por otro lado es preciso destacar que en el mismo periodo se distribuyeron cerca de cinco millones de hectáreas en grandes establecimientos, principalmente entre partidarios y familiares vinculados al partido de gobierno, “constituyéndose así un empresariado rural dependiente del Estado y marcadamente conservador, con dos fracciones claramente diferenciadas, la ligada al cultivo empresarial de la soja con tecnologías sucias y no sustentables y la fracción de latifundistas ligados a la ganadería” (Fogel, 2001: 51).

El segundo período acontece con el cierre de la frontera agrícola. La modernización agrícola experimentada por los departamentos de la Región Oriental, la colonización parcial en los departamentos centrales, y principalmente la compra y apropiación de tierras llevada a cabo por grandes empresas nacionales y extranjeras, atraídas por el bajo precio de la tierra, terminó con la frontera agrícola. Una prueba de ello es que entre 1975 y 1986 el precio de la tierra subió promedialmente en un 66%. Agotada la posibilidad de asentar campesinos en tierras libres, el gobierno no es capaz de estructurar una política de tierras coherente que permita continuar con el proceso de redistribución de tierras. La estructura agraria que se consolida es profundamente concentrada. Según el Censo de 1991, el 40% de las explotaciones tienen menos de 5 ha y ocupa el 1% de la tierra, mientras que las explotaciones de más de 1.000 ha, siendo el 1% del total, ocupan el 70% de la tierra. Esta distribución es aún peor que la detectada por el Censo de 1981, con lo cual se puede concluir que la persistencia histórica del campesinado ha ocurrido a costa de la subdivisión de las parcelas y la minifundización (Galeano, 1993).

Como consecuencia de este conjunto de situaciones convergentes –mayor minifundización, cierre de la frontera agrícola, aumento de la desocupación– en los años siguientes hubo una mayor presión de los campesinos, desplazados y ahora desocupados, sobre las tierras de dudosa legitimidad o utilización.

Ya en la década del setenta los campesinos se habían organizado en la Ligas Agrarias Cristianas protagonizando algunas ocupaciones, pero sobre todo impidiendo el despojo de tierras de comunidades

campesinas. Éstas fueron brutalmente reprimidas y desarticuladas por el gobierno dictatorial de Stroessner en 1976.

Hacia fines de la década del ochenta la dictadura stronista muestra señales de agotamiento. La alianza entre las Fuerzas Armadas y el Partido Colorado que había sostenido al dictador será la que también lo derrocará. La crisis económica iniciada en la década del ochenta, al disminuir el aporte de recursos de los que aliados y partidarios del régimen podían disponer, también precipitó la crisis política. Primeramente es el Partido Colorado el que se divide entre los “militantes” sostenedores del dictador y los “tradicionalistas” proclives a una transición democrática ante la edad avanzada del mismo. Si bien los primeros logran posesionarse de la maquinaria del partido de gobierno, no logran hacer lo mismo con las Fuerzas Armadas, al punto que éstas terminan dando el golpe de Estado que derroca a Stroessner el 3 de febrero de 1989. Pero el hecho de que no hayan sido los partidos de oposición ni los movimientos sociales organizados los que forzaron la apertura democrática (sin desconocer el papel que ellas tuvieron en erosionar la legitimidad del régimen) concedió al proceso de apertura política un carácter particular, al punto que se lo ha denominado como una “apertura otorgada” (Galeano, 1993).

En los primeros años del nuevo gobierno éste se concentra más en las medidas de carácter político que en las de carácter económico o social. Así, los pasos más importantes fueron dados en materia de recuperar las libertades públicas y ciudadanas, y en la confección de un cronograma eleccionario y de una agenda política que incluía las elecciones presidenciales y municipales y la reforma de la Constitución. En cuanto a la agenda social, existía consenso en que los principales problemas se relacionaban con el desempleo, el acceso a la vivienda de los sectores populares, la reforma educativa y el acceso a la tierra para los campesinos. Muy poco fue lo que se hizo en los primeros años en torno a estos problemas, hecho que en especial en la cuestión de la tierra hizo arrear la conflictividad en el medio rural.

Las ocupaciones de tierra por parte de los campesinos ya habían venido ocurriendo durante los últimos años de la dictadura. Sin embargo, la caída de la misma y los nuevos aires de libertades civiles y políticas incentivaron nuevas ocupaciones. Así, entre principios de 1989 y fines del año siguiente ocurren 120 ocupaciones, de las que participaron alrededor de 20 mil familias. Además de la masividad de las ocupaciones, la novedad fue la intervención abierta de las organizaciones campesinas y su nivel de conflictividad. No fue ajena a ésta

la actitud de la principal entidad que nuclea los intereses de los terratenientes la Asociación Rural del Paraguay, que defendió virulentamente a sus asociados y llegó a alentar la constitución de un organismo paralelo –la Comisión de Defensa de la Propiedad Privada– que repelió las ocupaciones con milicias armadas y fue sindicada como responsable de varios de los asesinatos de campesinos.

En los años inmediatos posteriores, 1991 y 1992, se percibió una desaceleración transitoria de las ocupaciones como consecuencia de varios hechos. Por un lado el debilitamiento de las organizaciones campesinas por divisiones internas y desencuentros ideológicos. Por otro lado, las organizaciones campesinas emplearon muchas energías en la participación con candidatos propios o apoyando candidatos de partidos reconocidos en las elecciones municipales y en las elecciones por la Constituyente, con resultados muy magros (Galeano, 1993). En tercer lugar, los terratenientes y la ARP dejaron de lado las actitudes más beligerantes al asumir una conducción de tendencia más moderada en esta institución. El gobierno, por su lado, habiendo prometido en la campaña eleccionaria una Reforma Agraria Integral, fue incapaz de llevarla a cabo y dejó en manos del IBR la instrumentación de una política de tierras que se limitaba a comprar las tierras ocupadas para repartirlas entre los campesinos, en algunos casos, y en otros a apelar al desalojo violento o negociado de los ocupantes.

## LA ACCIÓN COLECTIVA

### LOS ORÍGENES Y LAS LIGAS AGRARIAS CRISTIANAS

Hacia fines de la década del cincuenta el gobierno ya había decidido orientar el desarrollo del agro hacia la producción para la exportación, apoyando un modelo basado en empresas dedicadas a la producción agrícola–ganadera extensiva, ignorando la posibilidad de un desarrollo basado en la agricultura campesina. Esta opción alienta el interés de los ganaderos por la posesión de las tierras comunales que aún quedaban en poder de comunidades campesinas. En la comunidad de San Juan Ruguá, cercana a la localidad de Santa Rosa en el departamento de Misiones, los pobladores vieron una mañana que se estaba midiendo y cercando su campo comunal, con fuerte apoyo policial. Cuatrocientos veinte familias usufructuaban de dichas tierras en las que pastaban sus bueyes y demás animales.

Los vecinos del lugar, con el apoyo de los párrocos de Santa Rosa, decidieron reunirse para analizar la situación planteada y para

encaminar gestiones tendientes a solucionar el problema que se había creado. Pronto recibieron apoyo del Movimiento Sindical Paraguayo (MSP), que a su vez había sido fundado por militantes de la Juventud Obrera Cristiana. Con el decidido apoyo de los párrocos, del Obispo diocesano, y la orientación del MSP, se creó así la primera Liga Agraria Cristiana en 1960. Pronto el trabajo se fue extendiendo a otras localidades cercanas sobre la base de tres elementos aglutinantes: “los problemas de “poderosos” que quieren quitar sus tierras a los pobres; la esperanza en la fuerza de la unión, y la convicción de que la fe cristiana llega a los problemas concretos” (Equipo EXPA, 1982: 22)<sup>25</sup>.

El hecho de que los campesinos reunidos en la primera Liga Agraria tuvieran éxito en impedir el cercamiento de su campo comunal mostró el camino de la unidad campesina, y pronto las Ligas de base se extendieron en Misiones y luego a otras regiones del país. También se vieron favorecidas por un cierto relajamiento del rígido control de la dictadura stronista y una parcial apertura política promovida por la Alianza para el Progreso y por las presiones y las donaciones del gobierno norteamericano. El hecho es que las Ligas del departamento de Misiones pronto se reúnen en la Federación Regional de Ligas Agrarias Cristianas (FERELAC), y cuatro años más tarde se crea la Federación Nacional (FENALAC), que agrupó a las federaciones regionales de Caaguazú, Concepción, Paraguarí, Cordillera y Misiones. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados no se pudo evitar que se creasen dos Federaciones distintas: además de la mencionada FENALAC se creó también la Federación Cristiana Campesina, con un tinte más sindical y afiliada a la Central Cristiana de Trabajadores y al Movimiento Mundial de la CLASC. La FENALAC en cambio tenía una relación más estrecha con los sacerdotes y con los agentes de la Pastoral. Varios autores coinciden en que en realidad estas diferencias obedecían más a rivalidades entre los dirigentes que a diferencias de orientación, y que en las bases campesinas no se comprendían las razones de esta división. Posteriormente en 1971 se creó la Coordinación Nacional de Bases Campesinas Cristianas, que fue un intento de reunificar a todas las Ligas del país en una coordinación laxa sin eliminar a la Federaciones.

---

25 Equipo EXPA. *En busca de la “Tierra sin Mal”. Movimientos Campesinos en el Paraguay 1960-1980*, INDO-AMERICAN PRESS SERVICE, Colombia, 1982, pp. 22. Este libro es la mejor fuente para el estudio de las Ligas Agrarias Cristianas.



En la constitución de las Ligas tuvieron mucha influencia los propios cambios que se estaban operando en la Iglesia Católica luego del Concilio Vaticano II, que impulsó a los sectores más progresistas de la Iglesia a hacer una “opción por los pobres” y a vivir su compromiso cristiano en profundidad, muchas veces conviviendo con los campesinos, labrando la tierra. El principal instrumento para construir la organización fue la educación campesina realizando cursos de base estructurados sobre la base de los ideales cristianos de la fraternidad y la solidaridad, recreando una metodología de educación para la liberación a partir de la propuesta de Pablo Freire. En dichos cursos los campesinos, guiados por religiosos o por otros campesinos ya capacitados, analizaban la sociedad en que vivían, analizaban las injusticias, buscaban sus causas en el egoísmo individual y en las estructuras opresoras del capitalismo, utilizaban lecturas y pasajes bíblicos para buscar en un cristianismo renovado los caminos de la caridad cristiana, y proponían respuestas que generalmente pasaban por organizarse para emprender acciones de carácter defensivo. Posteriormente las propuestas consistieron en modelos alternativos de producción y organización social (Galeano, 1991). Así se llegaron a organizar media docena de asentamientos campesinos con un núcleo urbano y las tierras trabajadas comunitariamente.

La concepción “basista” de la organización se reflejaba en las formas de organización interna. Las Ligas no contaban con dirigentes permanentes. En cada comunidad y para cada tarea o en cada reunión (local, regional o nacional) se elegía un coordinador y un secretario, cargos que se terminaban con el evento. En cada colonia se formaba una comunidad de base, que nombraba uno o dos delegados para concurrir mensualmente a una reunión de las comunidades de un pueblo. La Liga estaba formada por la unión de todas las bases de un mismo pueblo (Equipo EXPA, 1982: 25).

En las primeras etapas de las Ligas el objetivo era la organización de los campesinos para que tomaran conciencia de la situación de opresión en que vivían y que ellos buscaran las respuestas. Las Ligas también buscaban “la promoción de la justicia entre los hombres, en tanto la justicia expresara amor y caridad”. En lo económico se buscaba la socialización de la tierra y los medios de producción pero rechazando expresamente al comunismo “...queremos un socialismo nuevo impulsado por la fe y nuestra realidad” (Equipo EXPA, 1982: 28).

Sin embargo, los liguistas tuvieron gran dificultad para pasar de estos enunciados generales y de los grandes objetivos a medidas que les permitiesen definir propuestas más concretas para realizar los objetivos. Incluso se les critica que frecuentemente no supieron definir correctamente quiénes eran sus aliados y quiénes sus enemigos. Recién en la década del setenta, y particularmente en las Ligas de Misiones, se habría dado el paso de un movimiento pre-político a un movimiento político al lograr definir con mayor claridad las demandas y la identificación de los adversarios particularmente centrados en el Estado (Galeano, 1991).

Sin embargo, estas definiciones y otros errores les provocaron frecuentes y crecientes disensiones con la jerarquía de la Iglesia Católica, que gradualmente se fue distanciando del movimiento liguista. Finalmente ello facilitó la represión desatada por el régimen stronista en 1976, que apresó, torturó, asesinó y desapareció a los principales dirigentes, aniquilando con ellos a la organización liguista.

#### LA DÉCADA DEL OCHENTA: REORGANIZACIÓN DEL MOVIMIENTO CAMPESINO

Las causas que habían dado origen a las Ligas, el proceso de concentración y de despojo de la tierra campesina por los ganaderos, la expansión de una agricultura empresarial excluyente, el deterioro de los recursos naturales, y la creciente minifundización, impulsaron en los años siguientes a los campesinos a continuar con las invasiones de tierras no ocupadas. “Entre 1983 y 1986 por lo menos 15 mil familias ocuparon fracciones no explotadas. Sólo entre enero de 1983 y agosto de 1984 las crónicas periodísticas refieren más de 30 invasiones que movilizan a aproximadamente 7.000 familias campesinas” (González et al, 1987:24; Zarza, 1988).

Es preciso introducir otros dos cambios con respecto a lo que había sido la organización campesina en las décadas del sesenta y del setenta. Por un lado el papel de la Iglesia Católica que, ya alejada del espíritu del Concilio Vaticano II y del Cónclave de Medellín, ha abandonado la teología de la liberación. No abandonó sin embargo la tarea de acompañar a los campesinos y de colaborar en su organización a través de la Pastoral Social, pero su acción tiene ya un matiz diferente al de la década del sesenta.

Por otro lado, es preciso dar cuenta de la aparición de numerosas organizaciones no gubernamentales (en adelante, ONGs) que, con

objetivos diferentes y desde posiciones distintas, emprenden la tarea de estímulo a la organización de los campesinos y de apoyo y acompañamiento a las organizaciones constituidas. Las ONGs tienen tres orígenes diferentes. Están las que derivan de la Iglesia Católica o de esfuerzos ecuménicos por atender necesidades no cubiertas. En segundo lugar están las que se forman a partir de la asociación de técnicos de distintas especialidades, que frecuentemente provienen de otras ONGs o del Estado, que confluyen en el interés de formar una institución propia. En tercer lugar están las instituciones que se forman como un desprendimiento de otras preexistentes, a veces en un proceso conflictivo (Palau, 1995).

La tarea de la Iglesia, de las ONGs, de las propias organizaciones campesinas que se irán formando, y de militantes de las ex-Ligas, explica un vasto proceso de formación de organizaciones de base campesina que gradualmente irán confluyendo hacia la constitución de organizaciones primero de carácter local y luego regional, para finalmente reconstituirse en la década del '80 como organizaciones de carácter nacional. En lo esencial esto significa que el régimen no pudo, a pesar de todo, terminar con el espíritu de las Ligas.

Hacia fines de 1980 varios dirigentes campesinos de las ex-Ligas y de la Juventud Agraria Cristiana crean el Movimiento Campesino Paraguayo. Esta es una organización que se declara libre de toda tutela "de partido político, jerarquía eclesial y/o del Estado, fundada... para luchar en defensa de los intereses gremiales y los derechos del campesinado nacional" (González et al, 1987: 30). El MCP se caracterizó por reclamar el esclarecimiento de los crímenes cometidos por la represión contra los campesinos, el regreso de los exiliados y la libertad de los presos políticos. En 1983 fundó la Comisión Permanente de Familiares de Desaparecidos y Asesinados (CPFDA), que prontamente se ganó el reconocimiento por sus acciones. Al año siguiente funda la Asamblea Permanente de Campesinos sin Tierra (APCT) para agrupar y liderar los reclamos por la tierra. En los años siguientes apoyan las invasiones de tierras y comienzan a realizar concentraciones masivas de campesinos en reclamo por las tierras y por las libertades civiles. En 1985 crean la Coordinación Nacional de Mujeres Campesinas (CMC) con el objetivo de reclamar la igualdad de derechos de las mujeres en la sociedad y el respeto por los derechos del niño. La CMC realiza una primera concentración pública en Caaguazú con 700 mujeres, y poco después en la misma localidad el MCP realiza otra que logra reunir a 5 mil campesinos. En 1986 crean la Asociación de

Pequeños Productores Agrícolas (APPA) para promover la obtención de créditos, precios justos por los productos y canales de comercialización, y la Coordinación Juvenil Campesina (CJC), que aspira a nuclear a los jóvenes hijos de campesinos. Como se advierte, la estrategia organizativa del MCP apuntó a crear diversas organizaciones, posiblemente con el fin de dificultar el control y la represión de sus dirigentes (González, 1987).

Hacia mediados de la década del ochenta el MCP contaba con diez regionales en los departamentos de Caaguazú, Kanindeyú, Alto Paraná, Concepción, San Pedro, Itapúa, Misiones, Central, Guairá y Paraguarí. Cada regional a su vez está formada por una cantidad de organizaciones de base que están constituidas generalmente a nivel de la colonia campesina o de la comunidad.

Por otro lado, desde principios de la década del ochenta, con el apoyo de la Pastoral Social de la Iglesia Católica y de numerosas ONGs, se fueron creando organizaciones de agricultores que luego se fueron nucleando en Organizaciones departamentales y en Coordinaciones Regionales. En 1986, diez organizaciones de carácter departamental o regional, advirtiendo que tenían puntos en común, acordaron crear una estructura que las federase. Así nació la Coordinación Nacional de Productores Agrícolas (CONAPA), que poco después contaba con 300 comités de agricultores que eran las bases de las diez organizaciones que la conformaron. La diversidad de orígenes y de estrategias de cada organización constituyente planteó una de las dificultades de la nueva Coordinación. Pero por otro lado esta diversidad también constituyó su riqueza, y le permitió acoger puntos de vista y estrategias diferentes, lo que le dio mayor flexibilidad. Desde el inicio se caracterizó por inclinarse más que el MCP hacia los proyectos y emprendimientos de carácter productivo y a la preocupación por las cuestiones vinculadas al crédito agrícola, la comercialización de la producción campesina y el abastecimiento de insumos (Villagra, Casaccia, Ayala, 1989).

En 1986 se crean dos organizaciones más de menor importancia. La Organización Nacional Campesina está formada por varias organizaciones de distinto nivel: organizaciones zonales, una organización de asalariados rurales y otra organización de nivel comunitario. Su orientación la llevó a vincularse al sindicalismo cristiano, afiliándose a la Federación Campesina Latinoamericana. La Unión Nacional Campesina "Oñondive Pa" fue creada por un líder campesino independiente a partir de una campaña que emprendió para esti-

mular a los campesinos a no plantar algodón, volcando sus esfuerzos a plantar para el autoconsumo.

El peso organizativo de cada una de las organizaciones de nivel nacional se aprecia a partir del cuadro siguiente.

CUADRO 3  
*MIEMBROS DE GREMIOS CAMPESINOS (1989)\**

Organizaciones	Nº de Comités	Nº de Familias
CONAPA	374	5.154
MCP	183	1.945
ONAC	95	720
UNC	100	380

Fuente: J. C. Rodríguez, "El gremialismo campesino", CDE, *Informativo Campesino* N° 10, julio de 1989.

\* Estimaciones del autor. Citado por Luis Galeano (1991).

Las diferencias entre el MCP y la CONAPA no eran sólo de tamaño. También tenían diferencias de carácter organizativo e ideológico. El MCP siempre alentó una posición más crítica a la estructura social vigente y a las relaciones de poder en la sociedad. Sus posturas eran reivindicativas, dirigidas a promover un cambio social y político. La dirigencia se apoyó en "una ideología de corte clasista de izquierda. Ha sido la utopía de la sociedad socialista y colectivista el sustrato social básico". En cambio, la CONAPA, sin dejar de lado las reivindicaciones dirigidas al cambio de sociedad, más bien hacía énfasis en demandas económicas dirigidas a la solución de los problemas más inmediatos de sus bases campesinas (Galeano, 1991: 460).

En 1988, las luchas entre las dos fracciones del Partido Colorado, los "tradicionalistas" y los "militantes", llegan ya a provocar divisiones en el Ejército, y a principios del año siguiente se produce el golpe liderado por una fracción del Ejército, aliada con el sector político de los "tradicionalistas". Las organizaciones campesinas interpretaron la caída de la dictadura como una señal para iniciar los cambios que reclamaban desde hacía décadas en la estructura fundiaria. Así, los años siguientes están marcados por numerosas invasiones tanto de tierras públicas como privadas. La mayoría de estas invasiones eran espontáneas, o al menos sin una organización campesina que las respaldase. Para unificar la lucha de los Sin Tierra se creó la Coordinadora Nacional de Lucha de los Sin Tierra y la Vivienda. Esa

organización llegó hasta 1993, cuando se dividió. Por un lado, la Organización de Lucha por la Tierra (OLT) se afilió a la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC); por el otro, la Coordinadora Interdepartamental de los Sin Tierra que tenía sólo alcance regional: tuvo una existencia fugaz y se convirtió en la Coordinadora de Productores Agrícolas de San Pedro Norte, con 14 asentamientos y una propuesta de trabajo colectivo de la tierra.

La nueva situación política y el recrudecimiento de la lucha por la tierra también producen cambios al interior de las organizaciones campesinas. La CONAPA, que se había caracterizado por una línea de acción que ponía énfasis en la realización de proyectos de tipo productivo, comienza a ser modificada por la misma práctica social de sus bases, que se involucran cada vez más activamente en la lucha por la tierra, orientándose a la exigencia de la Reforma Agraria. Incorpora como principio organizativo la autonomía y la independencia de la organización, y pone más énfasis en la movilización como método de lucha para conseguir tierras. Poco tiempo después elabora un proceso de conjunción y unificación de las organizaciones que la integran, y se transforma en la Federación Nacional Campesina (1993) (Bareiro, 2001). Según un analista, no fue ajena a este proceso la incorporación de varios de los dirigentes campesinos al Partido de los Trabajadores de tendencia troskista (Galeano, 1991).

La división de las organizaciones campesinas, y la existencia de múltiples organizaciones de nivel nacional, regional o local, siempre constituyeron una debilidad del movimiento campesino. Presionado por sus bases y por las organizaciones sociales aliadas, el movimiento campesino inició un proceso de convergencia. El motivo para ello fue la crisis de la producción de algodón a partir de la campaña de 1993. Los precios del algodón, que ya eran exiguos, sufren un deterioro en los primeros años de la década del '90, precipitando una crisis económica del campesinado, que es su principal productor. Estos, viéndose imposibilitados de recuperar las inversiones y el trabajo aportado, tampoco pueden devolver los créditos que el Estado les había otorgado a través del sistema de comercialización, como era habitual. Se inició entonces una campaña liderada por la FNC para obtener del gobierno la condonación de las deudas. Esta campaña cobró una inusitada fuerza, y empujó a las dirigencias campesinas a buscar la unidad de acción. Se creó así la Coordinadora Interdepartamental de Organizaciones Campesinas (CIOC), que en sus primeras instancias logró reunir a todas las organizaciones campesinas del Paraguay. Esta

organización realizó una marcha hacia la ciudad de Asunción en marzo de 1994 que movilizó a veinte mil campesinos y prácticamente ocupó la ciudad, obligando al gobierno a recibirlos y a escuchar sus reclamos, basados en la demanda concreta de la condonación de las deudas y en cuestiones más generales que tenían que ver con la lucha por la tierra, la salud, la educación.

Ese mismo año, una asamblea de delegados de las organizaciones participantes le cambió el nombre y se transformó en la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC). La integraron organizaciones de carácter nacional como la FNC, la OLT, el MCP, la ONAC, la UNC, junto con organizaciones de carácter regional y de carácter local, hasta constituir una veintena de organizaciones. Esta organización, que coordinó unitariamente las acciones de las diferentes organizaciones campesinas, se mantuvo hasta 1998, en que se procesó una nueva fractura. El enfrentamiento se produce entre los dirigentes de la Federación Nacional Campesina (FNC), del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) y de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT). El motivo fue una disputa por la táctica a llevar a cabo en la movilización, conocida como Marcha sobre Asunción, que se produjo en ese año. Sin embargo, también había divergencias de tipo programático y político. La FNC había ido profundizando su propuesta y sus enfoques, proponiendo cambios en la política económica y cambios de carácter estructural. En ese año llevan a cabo en Asunción un debate de tres días de duración con dirigentes campesinos, profesionales de distintas vertientes y miembros de partidos políticos con y sin representación en el Parlamento, sobre el problema agrario y el problema campesino. La FNC propuso un Documento de Base titulado “Un Programa de Reactivación Productiva Nacional” que se fue enriqueciendo y mejorando con los distintos aportes a lo largo del seminario. En su transcurso se evidencia que cerca del 80% de los pequeños y medianos productores estaban endeudados con los organismos financieros del Estado. Entonces se lanza un Plan de Lucha por la Condonación de las Deudas y por la Reactivación del Aparato Productivo. Lo notable de la propuesta de reactivación productiva es que, en el caso del agro, está basada en el fortalecimiento de la producción algodonera con la propuesta de industrializar al menos el 30% de la producción nacional por la industria paraguaya. Es de remarcar que la producción algodonera, si bien es el principal cultivo de renta campesino, luego de llegar a un máximo de 600 mil tn durante la campaña ‘89-‘90,

decreció durante la década del noventa hasta situarse en la 200 mil. Influyó en este decrecimiento un conjunto de factores: bajos precios a nivel internacional, fuertes ataques de plagas, dificultades por la distribución de semillas en mal estado, falta de financiamiento estatal, agotamiento de los suelos, etcétera. La propuesta de la FNC consiste en señalar que el problema no es de la producción de algodón, sino de las políticas estatales que han desalentado su cultivo y alentado el prebendarismo y la corrupción entre los campesinos, los técnicos del Estado y el aparato de comercialización e industrialización que expolia al campesinado. Si estas cosas se cambiasen, la producción y la industrialización del algodón podrían volver a ser un rubro rentable para los campesinos<sup>26</sup>.

En lo político, la FNC y sus aliados se declaran marxistas-leninistas y crean un Movimiento Político, paso previo a la constitución de un partido político, al que denominan Paraguay Pyahurá. El Movimiento es lanzado con motivo de la Marcha hacia Asunción de ese año sin que la decisión hubiese sido comunicada a las demás organizaciones campesinas, que se encuentran frente al hecho consumado. Esto sumará a los motivos de ruptura. Dos organizaciones campesinas regionales muy importantes, Coordinación Regional de Agricultores de Itapúa (CRAI) y Asociación de Agricultores de Alto Paraná (ASAGRAPA), que tienen dirigentes afines al Partido de los Trabajadores, se desprenden de la FNC y se reafilian a la MCNOC (Fogel, 1986).

Las entidades agrupadas en la MCNOC no coincidieron ni con el diagnóstico ni con la propuesta programática productiva de la FNC. La MCNOC tiene un enfoque en el cual se estima que la lucha de las organizaciones sociales contra la corrupción y el actual estamento político que gobierna el país durará aún diez o quince años más<sup>27</sup>. Por ello impulsan, en lo agrícola, un modelo basado en la autosuficiencia alimentaria campesina. En su análisis, el impulso a cualquier cultivo de renta tiene hoy pocas posibilidades de generar excedentes entre los campesinos como consecuencia de la poca tierra que cultivan y de las injustas estructuras de comercialización y distribución de la renta. Por ello impulsan la producción alimentaria para la autosubsistencia, la generación de pequeñas agroindustrias, la artesanía, y todos aque-

---

26 Ver el Documento de la FNC "Por la Producción y la Industrialización del Algodón", Federación Nacional Campesina, diciembre de 2001, 121 págs.

27 Ver entrevista a José Parra, dirigente de la MCNOC, en el diario *La Nación* del 2 de junio de 2002, realizada por el periodista Roque González Vera.



llos emprendimientos económicos que permitan que los campesinos retengan una porción mayor del excedente generado. Como consecuencia de las marchas campesinas programadas en el mes de marzo del 2000 por la MCNOC, el gobierno firma un acuerdo con dicha organización por la cual se compromete a desarrollar en forma conjunta un programa de financiamiento de 12 millones de dólares con los siguientes fines: 2,5 millones para la compra de tierras a través del IBR para distribuir entre campesinos sin tierra; 6,4 millones para financiar proyectos productivos, inversiones sociales y seguridad alimentaria; 3 millones para proyectos productivos en el departamento de Cordillera. Además, el gobierno se comprometió a atender las necesidades crediticias de los pequeños productores, a dotar a viejos y nuevos asentamientos con la infraestructura necesaria para su buen funcionamiento, a atender las demandas de tierra, etcétera. Para operativizar estas acciones crea una Comisión formada por representantes del gobierno y por delegados campesinos. Sin embargo como luego lo reconocerá la dirigencia campesina, tres años después apenas se había desembolsado el 20% de lo prometido<sup>28</sup>, y muy pocas de las acciones previstas se habían llevado a cabo. Como era esperable, este acuerdo fue duramente criticado por la FNC y sus aliados, quienes atribuyeron a este acuerdo una disminución en la combatividad de la MCNOC. Desde otras perspectivas, se ha hecho notar que el manejo de los proyectos y del dinero involucrado han generado sospechas y denuncias de corrupción hacia algunos dirigentes, y que la MCNOC ha hecho mal en involucrarse en una actividad compleja y para la cual los dirigentes no tienen la capacitación suficiente (Fogel, 1992).

En resumen, y en cuanto a lo que importa para el análisis de las acciones del Movimiento Campesino entre 1997 y 2000 que se realizará en las páginas siguientes, importa retener dos aspectos. En primer lugar, que en estos años ocurren cambios y realineamientos de fuerzas, en un proceso muy dinámico, como consecuencia de la adopción de definiciones políticas y de procesos de consolidación de las organizaciones. Procesos que son más fuertes cuanto más poder van cobrando las organizaciones campesinas. En segundo lugar, que las dos organizaciones principales en este período son la FNC y la MCNOC, cuya constitución es la siguiente.

---

28 Entrevista realizada por el autor a Belarmino Balbuena, dirigente de la MCNOC, 12 de septiembre de 2002.

La FNC tiene como aliados a la ONAC y al Movimiento Juvenil Campesino Cristiano, y en estos años procesa una evolución que lo lleva a crear el Movimiento Paraguay Pyajurá como brazo político, y a reabsorber en una sola organización, la FNC, a las organizaciones constituyentes. Ese proceso se consolida en diciembre de 2001 con la disolución de las organizaciones constituyentes y la adopción de una estructura unitaria con una Dirección Nacional, Direcciones departamentales y Direcciones Distritales: deja de ser una federación de organizaciones campesinas para transformarse en una estructura única.

Por otro lado, la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas queda constituida como una coordinadora de organizaciones campesinas (en realidad como una Federación) a la cual adhieren todas las demás organizaciones salvo las que integran la FNC: cinco organizaciones de nivel nacional (MCP, OLT, UNC, ONAI<sup>29</sup> y TESAI REKA Paraguay) y una veintena de organizaciones de nivel regional, departamental y distrital<sup>30</sup>. En las próximas páginas se explicarán las posiciones, la forma organizativa y las alianzas y las acciones que llevaron adelante estas dos organizaciones durante el período 1997-2000.

#### LAS ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS Y LA CUESTIÓN DEL FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LAS ORGANIZACIONES

La FNC procesó durante estos cuatro años una reestructura que la lleva a ser en este momento una organización con una estructura unitaria<sup>31</sup>. El órgano principal de conducción es la Dirección Nacional o Consejo Nacional de Delegados, constituida por dos delegados –titular y suplente– por cada departamento: en este momento hay 9 departamentos

29 ONAI es la Organización Nacional de Aborígenes Independientes, constituida principalmente por la etnia Aba Guaraní de los departamentos de San Pedro, Caaguazú, Alto Paraná y Canindeyú (Bareiro, 2001).

30 Es difícil saber con certeza la cantidad de miembros que posee cada organización. La MCNOC declara que tiene 600 Comités de Productores Asociados y estima que eso representa unas 11 mil familias campesinas. La dificultad para estimar la cantidad de asociados es que el socio se asocia a la organización departamental, que es la que lleva (o no) los registros. En la FNC se informó que no sabían la cantidad de Comités de Base que la forman, ya que esa información se lleva a nivel de Distrito. No tienen un padrón de asociados. Sin embargo, cuando se hizo el registro de los productores que siembran algodón se inscribieron 34 mil productores. Los dirigentes prefieren remarcar la capacidad de convocatoria de la FNC al momento en que se realiza una movilización, cuando son capaces de poner 35 mil o 40 mil personas en la calle (entrevista realizada por el autor a Belarmino Balbuena de la MCNOC y a Marcial Gómez de la FNC, septiembre de 2002).

31 Este apartado está construido principalmente sobre una entrevista que le hizo el autor a Marcial Gómez, Secretario Adjunto de la FNC, el 12 de septiembre de 2002.

organizados. Estos dieciocho delegados se reúnen cada sesenta días con el Secretario General en Asunción, y es el cuerpo que traza las líneas generales de la organización. De allí se eligen los miembros del Comité Ejecutivo nacional, de diez miembros distribuidos en seis Secretarías: Secretario General, Secretario General Adjunto, Secretario para la Reforma Agraria, de Finanzas, de Actas, y de la Mujer. Este órgano se reúne cada treinta días. El Secretario General y el Secretario General Adjunto residen en Asunción, y son los que quedan a cargo de la ejecución de las decisiones y del manejo del aparato administrativo de la organización. La elección del Consejo Nacional de Delegados se hace por medio del siguiente mecanismo: en forma previa al Congreso Nacional de Delegados se realizan los Congresos departamentales, en los cuales se evalúan las propuestas realizadas por el organismo de conducción nacional, se realizan las propuestas y recomendaciones para el Congreso Nacional, y se eligen a los dos delegados del departamento que integrarán el Consejo Nacional de Delegados. El Comité Ejecutivo Nacional se elige en el Congreso Nacional a través de un sistema de representación proporcional entre las distintas listas que presenten candidatos para integrarla. En las últimas tres elecciones se presentó lista única acordada previamente en los Congresos departamentales.

Por otro lado, en cada departamento también funciona un Comité Ejecutivo departamental de diez miembros con las mismas seis Secretarías del Comité Ejecutivo Nacional. Cada mes, luego de la reunión de dicho órgano, el Secretario General se reúne con los Secretarios Generales de cada departamento para transmitir los contenidos de las resoluciones del Ejecutivo Nacional y para ayudar a implementarlas.

En todos los órganos de Dirección las resoluciones se toman por consenso, pero si este no se logra las minorías deben acatar las decisiones mayoritarias. Hasta el momento tales situaciones han sido poco frecuentes: las decisiones, cuando se adoptan, han sido muy discutidas en los Comités de Base y en las diferentes instancias. Para ciertos casos especiales, modificación de estatutos o de las estructuras, o convocatoria de Congresos Extraordinarios de la organización, se necesitan mayorías especiales de dos tercios.

La Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) se define como una unidad de acción<sup>32</sup>, compuesta por cinco organizaciones campesinas de nivel nacional y veintidós organizacio-

---

32 Este apartado está basado en la entrevista que el autor le hiciese al Coordinador General de la MCNOC, Belarmino Balbuena, el 12 de septiembre de 2002.

nes campesinas de nivel departamental. No tienen una estructura estable. A nivel de las colonias, cada organización tiene sus socios organizados en Comités de Productores. A nivel departamental hay una Mesa Coordinadora departamental formada por diez personas representantes de las organizaciones que tienen asociados en ese departamento. En la Coordinadora departamental cada organización tiene un cupo de delegados según la cantidad de Comités organizados que posee. La Plenaria está formada por diez delegados por departamento: está constituida en la actualidad por ciento veinte personas, y se reúne cada seis meses. La Conducción Política Nacional está formada por dos delegados por cada departamento. Son veinticuatro personas y se reúnen cada dos meses. De este órgano se elige la Conducción, formada por diez personas que están a cargo de las Secretarías: Secretario General, Secretario General Adjunto, Secretarías de Producción, de Sin tierras, de Mujer y Juventud, de Actas, de Finanzas, de Educación, de Relaciones Nacionales e Internacionales, y Secretaría Indígena. Este órgano se reúne por convocatoria. Cuatro de estos representantes a su vez residen permanentemente en Asunción.

La estructura ideada es una estructura de representación de las distintas organizaciones que la componen. Las decisiones suelen ser analizadas y discutidas en las Coordinadoras departamentales, para luego ascender hacia el Ejecutivo Nacional. Esta forma de funcionamiento hace que las decisiones sean más difíciles de tomar y que el proceso sea más lento, pero asegura un mayor grado de representatividad. Si se compara con la estructura montada por la FNC, se advierte que esta última es más ágil, está más centralizada, y por lo tanto permite que las decisiones bajen más rápidamente a las organizaciones departamentales y de allí a las organizaciones locales. Pero también parecería que el proceso inverso, es decir, el recorrido de una propuesta o de un planteamiento desde los organismos de base hacia la cúpula organizacional, es más dificultoso porque los canales no están claramente establecidos. Es decir que es una estructura pensada para la acción, y para que las decisiones fluyan más fácilmente desde la Dirección Nacional hacia las bases. En la MCNOC, en cambio, se ha priorizado el recorrido inverso: mientras está más claramente establecido cuál es el camino que las propuestas deben tomar desde las bases hacia la cúpula de la organización, el camino inverso, el de las decisiones, parece ser menos claro.

## UNA CRONOLOGÍA DE LA ACCIÓN COLECTIVA (1997-2000)<sup>33</sup>

### LA SITUACIÓN POLÍTICA

El año 1997 está signado por la campaña electoral que se desarrolla durante todo el año, ya que las elecciones se realizan recién en mayo de 1998. En su transcurso el país se paraliza. Todos los recursos se emplean en la campaña, debilitando la menguada estructura económica y acentuando los problemas sociales. Desde los técnicos del Ministerio de Agricultura que salen a convencer a los campesinos “asistidos” de que voten por el candidato oficialista hasta la extrema inoperancia del Parlamento, que dividido en luchas internas casi no cumple con su función legislativa, desconociendo importantes leyes que tenía en estudio, como la de un nuevo Código Agrario.

La elección como Presidente del Ing. Raúl Cubas, candidato del General golpista Lino Oviedo, aumenta la inestabilidad política del país. El nuevo mandatario, dirigido y tutelado por Oviedo, demuestra su incapacidad para gobernar el país a la par que su falta de respeto por los procedimientos constitucionales le granjea la enemistad de los otros poderes del Estado. Los proyectos de ley que envía al Parlamento son frenados por la oposición, que tiene mayoría en las Cámaras. La discrecionalidad en el manejo del poder se revela aún en la designación de funcionarios estatales en puestos clave –es el caso del Ministerio de Agricultura– por lealtad partidaria antes que por idoneidad técnica. Esta situación de ingobernabilidad se traducirá en una aguda crisis económica y en el empeoramiento de la situación social de los sectores más pobres de la población.

Durante 1999 el país atravesó por tres momentos distintos. En los primeros meses la ingobernabilidad llegó al extremo y culminó con el asesinato del vicepresidente Argaña. En ese momento, la presencia de una gran movilización campesina en Asunción fue el elemento clave para forzar la renuncia del Presidente y la designación de un gobierno de Unidad Nacional. El segundo momento, entonces, fue de alivio –porque se había conseguido aventar el espectro de un gobierno autoritario encabezado por Oviedo que recordaba viejas prácticas políticas a las cuales la ciudadanía no quería regresar, y hacer resurgir la esperanza de que este nuevo gobierno, que representaba a una coalición de

---

33 Este apartado está basado en los Informes Anuales publicados en el número de diciembre de cada año del *Informativo Campesino*, revista mensual publicada por el Centro de Documentación y Estudios (CDE) Asunción, Paraguay.

los tres principales partidos políticos, lograría sacar al país de la crisis política, económica y social en la que estaba inmerso.

Pero ante el asombro de la ciudadanía, el gobierno de coalición muy pronto mostró que el clientelismo, el amiguismo y el prebendarismo no eran patrimonio sólo del Partido Colorado. Los políticos de los partidos que habían estado en la oposición durante tantos años criticando estas conductas cayeron en las mismas prácticas. La tregua social que las organizaciones sociales le habían concedido al nuevo gobierno no duró más de dos meses, iniciándose hacia finales de junio grandes movilizaciones y masivas ocupaciones de tierras.

Durante el año 2000 la frustración y la incredulidad de los ciudadanos se extienden a todo el sistema político. La coalición demuestra una gran fragilidad a la hora de gobernar; no tiene un plan de gobierno definido, y más bien parece operar por reacción frente a los desafíos de las organizaciones sociales, entre ellas el movimiento campesino. En el sector rural, la ausencia de una política agraria que responda a las necesidades de los pequeños productores posterga su desarrollo.

#### LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

En lo económico, el periodo 1998-2000 se caracteriza por la recesión. La principales razones por las cuales ello ocurre son: “el manejo politizado, partidizado y electoralizado de la política económica en general y de la política cambiaria en general; la falta de transformaciones de fondo o estructurales (reforma del Estado con privatizaciones); caída del comercio de triangulación o reexportación; magro desempeño de la agricultura y caída del consumo interno” (CDE, *Informativo Campesino*, diciembre 2000: 2).

El índice de desempleo crece a lo largo de los cuatro años, para ubicarse en el 17% de la PEA en el 2000. La pobreza alcanza a la mitad de la población rural, pero la indigencia agobia a 650 mil personas. La industria se desactiva, el comercio recoge un índice de quiebras superior al de años anteriores, y la agricultura tiene cuando menos un comportamiento irregular.

En el ámbito de la educación y de la salud pública las cifras son alarmantes. Cifras oficiales confirman que, de cada cien alumnos que comienzan la educación primaria en el medio rural, sólo tres alumnos terminan el sexto año. Con esos índices de deserción, la educación elemental se transforma en un bien escaso, condenando a la mayoría de los niños del campo que asisten a la escuela pública a ser

en el futuro mano de obra no calificada. Con ello también se impide un verdadero desarrollo rural, que debe pasar por contar con trabajadores calificados. En el ámbito de la salud se denuncia que los centros y puestos de salud rurales carecen de médicos y de infraestructura mínima. Mientras la salud de la población rural está desprotegida, muchos recurren a la medicina tradicional para paliar sus necesidades. Pero si bien el gobierno aduce que la falta de recursos es la causa de todos estos males, la Contraloría General de la República denuncia que “la corrupción en sus diversas formas ha privado al país de 2.000 millones de dólares, una cifra que es casi el doble que la deuda externa del Paraguay (mil cuatrocientos millones de dólares) y más del doble de la reserva internacional” (CDE, *Informativo Campesino*, diciembre 1997: 6).

La principal queja del sector agropecuario es la inoperancia gubernamental, extremada por un continuo cambio de los ministros de Agricultura. El MERCOSUR produce tremendas dificultades a los pequeños productores que no tienen condiciones de competitividad frente a la agricultura de sus dos grandes vecinos. El gobierno intenta reactivar la alicaída producción de algodón, lanzando anualmente planes de financiamiento para el cultivo. La inoperancia y la corrupción en los organismos del Estado hacen que los apoyos prometidos para las campañas algodoneras no lleguen, o lleguen tarde. Los precios decrecientes del cultivo desalientan y endeudan a los productores. En cambio, crece sostenidamente la producción de los alimentos básicos que conforman el autoconsumo campesino. Las organizaciones campesinas, en acuerdo con algunos municipios, instrumentan ferias vecinales que permiten diversificar la producción comercial de los pequeños productores, encontrar un mercado para ellas, y mejorar los precios de la canasta de consumo popular.

En cuanto a la reforma agraria instrumentada por el gobierno a través del Instituto de Bienestar Rural, un estudio del Ministerio de Agricultura, el Banco Mundial y el BID concluyó “que los asentamientos rurales no han producido el arraigo de los campesinos, sino que en varios de ellos se pudo observar la rápida reconcentración de la tierra y los propios beneficiarios se convirtieron de nuevo en campesinos sin tierra. (...) el IBR señaló que son aproximadamente 180.000 las familias rurales que necesitan asistencia por encontrarse por debajo de la línea de pobreza admitida” (CDE, *Informativo Campesino*, diciembre 1997: 4).

## LA ACCIÓN COLECTIVA

Las expresiones de la acción colectiva se pueden clasificar en dos grandes subconjuntos.

Por un lado los conflictos por la tierra, y por el otro las manifestaciones.

A su vez, los conflictos por la tierra pueden ser de distinto tipo –ocupaciones de tierras públicas o privadas, reocupaciones, desalojos– y pueden dar lugar a la expropiación de las tierras o a su cesión, generalmente luego de una negociación que puede llevar desde algunos meses a varios años. Los conflictos a su vez pueden llevar a la detención de los campesinos, y en algunos casos a la represión violenta durante el desalojo, la tortura, los malos tratos de los detenidos, y al asesinato de campesinos.

Las manifestaciones se llevan a cabo en los pueblos y ciudades del interior, y tres o cuatro veces por año son movilizaciones masivas hacia Asunción. Mientras las primeras suelen estar organizadas por organizaciones campesinas departamentales o Distritales, las segundas suelen ser convocadas por las organizaciones de nivel nacional. También pueden llevarse a cabo cortes de ruta, sitios de las plazas u otros lugares públicos de pueblos y ciudades, ocupaciones de locales u oficinas públicas, etcétera. Las manifestaciones tienen como motivo principal el reclamo por la política de tierras, el apoyo a ocupaciones, la protesta por la violación de los DDHH, el reclamo por mejoras en los precios de los productos campesinos, el reclamo por créditos, etcétera. En algunas ocasiones, generalmente cuando las movilizaciones son hacia Asunción, los reclamos son de carácter más general y se vinculan al reclamo por cambios en la política económica, por la reactivación productiva, por la renuncia del Presidente de la República, por la Reforma Agraria, etcétera.

## CUADRO 4

*PARAGUAY: CONFLICTOS POR LA TIERRA Y MANIFESTACIONES CAMPESINAS  
(1990-2000)*

Año	Conflictos	Ocupaciones*	Desalojos**	Familias participantes	Detenciones	Manifestaciones
1990	99	29	31	sd	820	34
1991	66	17	23	sd	566	19
1992	50	17	16	sd	120	15
1993	46	14	17	sd	128	18



CUADRO 4 - CONTINUACIÓN

Año	Conflictos	Ocupaciones*	Desalojos**	Familias participantes	Detenciones	Manifestaciones
1994	57	26	24	sd	411	60
1995	49	23	25	sd	359	37
1996	54	20	27	6.386	553	39
1997	43	15	13	4.572	137	17
1998	28	14	11	3.565	429	15
1999	52	31	20	6.767	1.048	54
2000	47	19	12	5.666	531	34
<b>Totales</b>	<b>591</b>	<b>225</b>	<b>219</b>		<b>5.102</b>	<b>342</b>

Fuente: *Informativo Campesino*, CDE, diciembre de 2000, pp. 7.

\* y \*\*: ocupaciones y desalojos son las principales formas de expresión de los conflictos.

### AÑO 1997

Los conflictos por la tierra disminuyeron, pero la violencia contra los ocupantes no. El acoso policial y parapolicial ha sido permanente, aún contra campesinos de asentamientos ya regularizados, con el objetivo de que no pudiesen prestar ayuda a otros Sin Tierra. En Caaguazú, los ocupantes reaccionaron frente a los atropellos y quemaron una comisaría y atacaron otra con disparos, sin que hubiese víctimas. Durante el año se registraron 43 casos de conflictos de tierra, habiéndose realizado 15 ocupaciones, algunas de las cuales son reocupaciones; hubo 13 desalojos y fueron encarceladas 137 personas. Durante 1997 se llevaron a cabo 17 manifestaciones, menos de la mitad de las ocurridas el año anterior. Dentro de las organizaciones campesinas hubo dirigentes que cuestionaron la real eficacia de las movilizaciones luego de la marcha nacional campesina realizada el 18 y 19 de marzo (como ocurre regularmente desde cuatro años atrás), luego de que hubo varias desinteligencias entre las organizaciones y a la vista de los escasos resultados obtenidos. A pesar de ello, la movilización y la ocupación siguen siendo los instrumentos de presión más fuertes que tiene el campesinado. Prueba de su incidencia son las disposiciones que adoptó el gobierno en el transcurso del año, modificando la circulación en las calles de Asunción para dificultar las movilizaciones públicas, y la aprobación en el Congreso de una nueva ley que castiga más duramente a los ocupantes.

## AÑO 1998

Posiblemente debido a que este fue un año electoral, hubo una disminución en los conflictos por la tierra. Sin embargo, en algunos casos los campesinos debieron resistir los desalojos judiciales como una forma de proteger la parcela que les da la subsistencia. En otro caso atacaron un puesto policial, apoderándose de las armas de los efectivos policiales que resguardaban la propiedad de la que fueran desalojados momentos antes. Los Sin Tierra realizaron este año 14 ocupaciones, y hubo 11 desalojos violentos, con la detención de 429 ocupantes entre hombres mujeres y niños. Tres campesinos fueron asesinados en diversas circunstancias por efectivos policiales o parapoliciales.

En el correr del año las movilizaciones campesinas llegaron tres veces hasta Asunción para reclamar contra la política neoliberal, exigir la condonación de deudas que los campesinos mantienen con el Estado y un plan de reactivación económica, reclamar la realización de una verdadera Reforma Agraria, etcétera. Varias fueron las movilizaciones de carácter departamental (hasta completar las 15 que hubo en el año en todo el país) para reclamar por la detención de campesinos o en repudio a la represión y el asesinato de otros. En los meses de febrero y marzo, en consonancia con el inicio de la cosecha, se realizaron dos movilizaciones reclamando por el bajo precio del algodón.

También en el correr de este año se produce la fractura de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas en dos bloques, uno liderado por la FNC, la ONAC y el MJCC, y otro en el que quedan las demás organizaciones campesinas.

## AÑO 1999

Se incrementaron las ocupaciones como respuesta al desencanto y a la falta de respuesta del nuevo gobierno de Unidad Nacional. Los campesinos comprueban que la única manera de conseguir tierras es a través de las ocupaciones. Las vías legales se empantanaron en interminables litigios y procesos judiciales de dudoso trámite. Esto ha llevado a la polarización de las posturas, entre los Sin Tierra que cada vez más apremiados por la necesidad presionan con ocupaciones, campamentos, huelgas de hambre y movilizaciones, y por el otro lado los propietarios de los latifundios, que presionan a los poderes del Estado y cuando no consiguen lo que desean no dudan en armar a civiles para defender sus propiedades y atemorizar y atacar a los campesinos.

En este año se produjeron 52 conflictos, de los cuales 31 fueron ocupaciones y 20 desalojos. Las detenciones llegaron a un récord histórico: 1.048 personas fueron detenidas. La violencia también se ha acrecentado, especialmente por la presencia de parapoliciales contratados por los latifundistas. Seis campesinos fueron asesinados este año, sin que haya habido ningún procesamiento.

A principios de año el clima político estaba enrarecido: “Las organizaciones campesinas habían anunciado la realización en serie de movilizaciones de protesta por el rumbo que iba tomando la política agraria del gobierno. La creación de comités de agricultores y de cooperativas que respondían a los intereses del ovedismo y el peligro de ovedización de las existentes mediante prebendas y presiones políticas alertaron a los dirigentes campesinos. Corrían fuertes rumores de que los créditos iban a ser canalizados sólo a los grupos que respondían al movimiento UNACE (Unión Nacional de Colorados Éticos) liderado por Lino Oviedo” (CDE. *Informativo Campesino*, marzo 1999: 2).

En este clima, la Federación Nacional Campesina, la Organización Nacional Campesina y el Movimiento Juvenil Campesino Cristiano, los tres aliados que se habían apartado de la MCNOC y conformado su propio bloque el año anterior, comienzan a organizar por quinto año consecutivo la marcha campesina hacia Asunción. Sin embargo, este año la marcha tuvo consecuencias inimaginables para sus organizadores como consecuencia del asesinato del Vicepresidente de la Nación, Luis María Argaña, el día de la llegada de la marcha a la capital del país. La marcha partió desde los departamentos de San Pedro, Canindeyú, Caazapá, Alto Paraná, Itapúa, Misiones, Paraguari y Concepción, y convergió en densas columnas hacia la capital. Los organizadores estimaron que 35 mil personas y 600 vehículos participaron de la marcha.

Como en los años anteriores, los reclamos básicos eran: precio justo por el algodón; precio justo para productos diversificados; acceso a la tierra propia; nuevo estatuto agrario; nueva política agraria favorable al campesinado; congelamiento de precios de la canasta familiar; retiro del MERCOSUR. En esta marcha, además, se focalizó en los siguientes reclamos: condonación de las deudas; crédito oportuno; transferencia de tecnología; mercado seguro; seguro agrícola; infraestructura.

Como se advierte, los reclamos eran muy heterogéneos y tenían distintos niveles de generalidad. Sin embargo, los organizadores de esta marcha habían focalizado su reivindicación en la obtención de la

condonación de las deudas que los campesinos mantenían con el Estado, estimados en cien mil familias. Tanto es así, que se había anunciado que los manifestantes se quedarían por tiempo indefinido en Asunción, no regresando a sus domicilios hasta que no hubiesen obtenido la condonación de las deudas. Los manifestantes ya venían preparados para una movilización que podía llevar varios días.

Cuando las columnas campesinas llegan en la mañana del 23 de marzo al Seminario Metropolitano, en cuyos predios estaba previsto que acamparían, los esperaban la Pastoral Social y otras organizaciones de apoyo con alimentos y puestos de atención de salud. Pero la noticia del asesinato del Vicepresidente había cambiado el sentido de la marcha, que pasó a segundo plano en la atención nacional.

Previamente hay que destacar que en las elecciones del año anterior había sido elegido como Presidente el Ing. Raúl Cubas por el Oviedismo, y como Vicepresidente Luis María Argaña, hombre del riñón del Partido Colorado oficialista y enfrentado a los oviedistas. Por lo tanto, su asesinato es achacado al General Lino Oviedo como autor moral del mismo. Cualquiera sea la verdad, que posiblemente nunca se esclarezca, el hecho concreto fue que los sectores oficialistas del Partido Colorado y los partidos de oposición quieren impulsar el juicio político y la destitución del Presidente Cubas. Por otro lado, los oviedistas, en minoría, movilizan y dirigen a grupos armados hacia la plaza del Congreso –la Plaza Uruguay– para impedir que los parlamentarios puedan reunirse. La posesión de esta plaza se transforma así en un elemento estratégico para que el Congreso Nacional pudiera sesionar.

Mientras los campesinos marchaban hacia Asunción, la Cámara de Diputados había dado media sanción a una ley que condonaba las deudas. Cuando el Senado se reunió en la mañana del martes 23 para a su vez sancionar la ley, se conoció la noticia del asesinato del Vicepresidente, cambiando así el sentido de la Sesión. Esa tarde los campesinos iniciaron su marcha desde el Seminario, atravesando la ciudad, hacia la Plaza Uruguay frente al Parlamento. La razón inicial de la marcha y de la concentración frente al Parlamento era presionar por la condonación de las deudas. Pero ahora la incertidumbre era el signo que campeaba en los rostros. El país se había paralizado, a la expectativa. Un grupo de jóvenes denominado “Jóvenes por la democracia” convoca a una concentración frente al Congreso para pedir la renuncia del Presidente de la República. Al anochecer la Plaza estaba abarrotada de gente.

Los partidos políticos les reclaman a los campesinos que vuelquen sus fuerzas a apoyar el juicio político al Presidente, en realidad un juicio al oviedismo. Los dirigentes, sin embargo, no transan. Exigen que primero se sancione la ley de condonación de las deudas, y luego ellos apoyarían el juicio político. Así, se retiran a los predios del Seminario mientras una multitud compuesta por organizaciones juveniles y partidos de oposición la ocupan ahora para impedir el ingreso de los oviedistas. En la madrugada del día siguiente, miércoles 24, los campesinos vuelven a ocupar la plaza del Congreso ante el reclamo de los jóvenes, que no pueden resistir la presión de los oviedistas y de la propia policía que, siguiendo órdenes del Presidente Cubas, intenta desalojarlos. En los días siguientes la presencia campesina en la plaza fue decisiva. Con su férrea organización y disciplina, los campesinos impidieron la infiltración de los oviedistas entre los que acampaban en la Plaza, y mantuvieron su control ante la presión policial y la provocación de civiles armados.

En medio de mucha confusión y de vehementes negociaciones, el Parlamento sesiona los días 24, 25 y 26 y finalmente sanciona la ley de condonación de deudas. Los campesinos se mantienen en la Plaza hasta el día lunes 29 de marzo, en apoyo al juicio político que termina con la destitución de Cubas y hasta la asunción del nuevo Presidente González Macchi, regresando entonces a sus lugares de origen. Con ello los campesinos lograron una importante victoria, no sólo porque lograron la condonación de las deudas que asfixiaban a los pequeños productores, sino también porque colaboraron en la desarticulación del aparato político oviedista que, regresando a las peores prácticas prebendarias y corruptas en la distribución de favores en el campo, estaba minando a las propias organizaciones campesinas.

## AÑO 2000

En este año hubo 47 conflictos de tierra, de los cuales 13 fueron nuevas ocupaciones realizadas durante ese año y 6 fueron reocupaciones. Hubo 12 desalojos. En total se está litigando por 75 mil hectáreas de tierras, y los campesinos involucrados sumaron 5.666. Los conflictos de mayor impacto en la opinión pública fueron aquellos en los que se empleó más violencia. En una ocupación en el departamento de San Pedro, las fuerzas policiales asesinaron a tres ocupantes. En otra ocupación en Caagazú se detuvo a 320 campesinos, y se hirió a 60 perso-

nas, 10 de ellas con impactos de bala. Durante el año fueron asesinados 11 campesinos.

En marzo de ese año los dos bloques de organizaciones campesinas realizan la marcha hacia Asunción, pero lo hacen en forma separada y en días distintos. La FNC moviliza 15 mil campesinos, mientras la MCNOC pone en la calle a 10 mil manifestantes. La principal reivindicación de ambas es la reactivación del aparato productivo. Pero como se relató más arriba, mientras la FNC lanza su propuesta de reactivación productiva a través de la reactivación algodonera, la MCNOC firma con el gobierno un acuerdo de reactivación por 12 millones de dólares basado en la diversificación productiva a través de pequeños proyectos administrados por las organizaciones campesinas.

En el correr del año se realizan un total de 34 manifestaciones, nueve de ellas en Asunción, y las demás en ciudades y pueblos del interior. Doce de ellas tienen que ver con reclamos por la tierra. Otras ocho son en reclamo por los asesinatos de campesinos o la impunidad de sus ejecutores y mandantes. Cinco son por reclamo de mejores precios de los productos, comercialización y créditos.

## LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD

### EL CAMPESINO, LA TIERRA Y LA LENGUA GUARANÍ

Para el caso del Paraguay es posible y aún conveniente hablar de un Movimiento de los Campesinos formado a su vez por numerosas organizaciones de nivel distrital, departamental o nacional. El Movimiento Campesino se encuentra dividido por razones de estrategia en torno a propuestas diferentes de desarrollo rural. Sin embargo, estas diferencias no son tan fuertes como para que en condiciones extremas no predomine la unidad del Movimiento Campesino. La unidad no es un bien dado sino una trabajosa construcción. Eso es lo que ha aprendido el Movimiento de los Campesinos en estos años luego de la caída del régimen stronista.

Ahora bien, ¿que es lo que confiere la identidad a los miembros de este Movimiento? En primer lugar, su identificación como campesinos, como miembros de un colectivo distinto, que los identifica y los separa de otros grupos sociales. Como ocurre en cualquier otro movimiento, no todos los que comparten una misma identidad son miembros activos del movimiento. Así como no todos los obreros forman parte del Movimiento Obrero, no todos los campesinos forman parte del Movimiento de los Campesinos. Aun más, hay algunos campesinos

que forman parte de organizaciones o partidos políticos que son opuestos al Movimiento de los Campesinos, en cuanto no comparten ni sus aliados, ni su proyecto político, ni su utopía.

¿Qué características tiene la identidad campesina? Es posible diferenciar al menos dos vertientes para analizar esta identidad. Por un lado, la racionalidad económica. Por otro, la existencia de una cultura campesina. Pero ambas giran en torno al vínculo del campesino con la tierra. Campesino es aquel que trabaja la tierra que posee (no necesariamente en propiedad) con la sola ayuda del trabajo familiar. Esporádicamente puede contratar fuerza de trabajo para complementar tareas en picos de demanda, y también puede vender parte de la fuerza de trabajo familiar en momentos de necesidad. El campesino produce primero con el objetivo de atender sus necesidades de consumo alimentario. Si hay excedentes, los vende. También puede producir cultivos de renta para atender sus necesidades de dinero, pero sus vínculos con el mercado de productos, de bienes, de tierras, de insumos y de trabajo son débiles. En la actualidad ningún campesino existe sin vínculos con los mercados. Esta débil relación con los mercados es una de las características que lo separan del *farmer*, quien produce para los mercados con tierra y trabajo familiar. El campesino es además un grupo subordinado en la sociedad. Otras clases y grupos sociales lo expolían, extrayendo parte de los excedentes económicos que produce.

La tierra es para el campesino su medio de vida, el lugar donde se produce y reproduce el grupo familiar, y en determinados contextos el origen de su linaje. Sin tierra, el campesino deja de ser tal. Aún para aquellos que pierden la tierra o no la tienen por subdivisión o sistemas de herencia, la identidad sigue vinculada a la tierra. Esa es la identidad de los Campesinos Sin Tierra, que se construye sobre la base de la negación de la posesión, pero también de la posibilidad de recuperarla. Este “apego a la tierra” (Galeano, 1984) es más fuerte en sociedades que ofrecen pocas oportunidades en otros medios de vida alternativos. En Paraguay, país en que la industrialización ha sido muy débil y que tiene altos niveles de desempleo, las ciudades sólo pueden ofrecer malos empleos en el sector informal. En ese contexto es más explicable que la presión por la tierra haya sido fuerte, ya que es vista por parte de la población campesina como una de las pocas posibilidades de tener trabajo y un medio de vida.

Galeano entiende la cultura campesina como “el conjunto de símbolos, costumbres y formas compartidas de pensar”, algunos de

los cuales son propios de la identidad campesina mientras otros son absorbidos de la cultura externa. La cultura campesina debe entenderse como la resultante de elementos contradictorios. Así, por ejemplo, en el Paraguay, el campesinado por razones históricas es parcelario (y no comunitario como en el área andina), con lo cual se refuerzan los componentes individualistas. Pero también las propias condiciones de la producción agrícola parcelaria, i.e. los ciclos biológicos que tienen picos de demanda de fuerza de trabajo, la falta de mano de obra y la proximidad de las parcelas, refuerzan instituciones solidarias como la “minga” o la “mano vuelta” que establecen relaciones de cooperación entre familias vecinas, reforzadas por vínculos familiares, relaciones de compadrazgo y clientelismo (Galeano, 1984).

Para el caso de Paraguay, la lengua guaraní es otro elemento que refuerza la identidad campesina. Es cierto que los campesinos no son los únicos que hablan la lengua guaraní, pero también lo es que son los que más la hablan. El guaraní es la lengua materna, aquella en la que se socializan los niños, la que hablan las madres, la que se usa en el hogar. El castellano es la lengua del exterior, la de la escuela, la lengua “oficial”, la de los negocios, la de los medios de comunicación y en general la lengua del dominador. El 40% de la población paraguaya sólo habla el guaraní, mientras que el 6% de la población sólo habla el castellano, y un 49% habla ambos idiomas. Pero cuanto más población rural tiene un departamento, mayor será la población que habla sólo guaraní: por ejemplo San Pedro, donde el 80% de la población sólo habla guaraní, Caazapá con 76%, o Concepción con el 69% (Steckbauer, 2000).

Salvo raras excepciones, el guaraní estuvo prohibido en las escuelas, siendo perseguido y denostado su uso. Las excepciones se dieron en los tiempos de guerra: tanto en la guerra de la Triple Alianza como en la Guerra del Chaco, se usaba el guaraní como forma de evitar que el enemigo se enterase de las órdenes. Tampoco resultaba ajeno a esta disposición que los soldados fueran campesinos que no sabían castellano. De modo que en los periodos de defensa de la nacionalidad el guaraní volvía a recuperar su status, para perderlo nuevamente en épocas de paz. Pero esta persecución sólo fortalecía a la lengua guaraní como la lengua de los campesinos, la de los pobres, la de los dominados, frente al castellano, que era la lengua oficial. En 1992 una nueva Constitución elevó al guaraní al rango de lengua oficial de la Nación, junto con el castellano. Este reconocimiento posibi-



litó recientemente su enseñanza en las escuelas y una mejoría en el status social de la lengua (Steckbauer, 2000).

La lucha por la tierra no ha consistido sólo en las ocupaciones y la presión ejercida por los campesinos para conseguir nuevas tierras en las que asentarse. También ha sido la lucha por conservar las que poseían frente a las demandas de los ganaderos, que pretendían ocupar tierras comunales o que, esgrimiendo títulos recientes, pretendían expulsar a campesinos que las poseían desde mucho tiempo atrás pero sin títulos legales. Estas batallas fueron las que dieron origen a las Ligas Agrarias Cristianas en la década del '60. En estos casos los campesinos actuaban convencidos de hacerlo en legítima defensa, seguros de que los "otros" actuaban atacando derechos constituidos y legítimos<sup>34</sup> que provenían de la posesión continuada de la tierra más allá de su tenencia legal.

Pero aún en el caso de las ocupaciones de tierras, estas se hacen esgrimiendo un criterio "moral". No es justo, en la perspectiva de los campesinos, que las tierras permanezcan incultas cuando hay tantos campesinos que necesitan de ellas para sobrevivir. Ya sea que fuesen tierras públicas no ocupadas, tierras públicas ocupadas sin permiso, o tierras privadas pero mal explotadas, los campesinos han esgrimido, en las ocupaciones, el concepto de que si eran tierras agrícolas y estaban sin utilización o siendo empleadas en ganadería extensiva, esto era injusto e inmoral en presencia de tantas necesidades de las familias campesinas. Esta situación, en su perspectiva, les da derecho a ocuparlas para ponerlas a producir y así dar sustento a las familias sin tierra.

Un último elemento cultural que es preciso considerar en el caso del campesinado paraguayo es su religiosidad, y en particular su fuerte adhesión a la Iglesia Católica. Si bien este elemento tampoco es sólo patrimonio de los campesinos, sino que es una manifestación popular, es necesario reconocer el papel aglutinante que ha jugado la Iglesia Católica en su aliento a las organizaciones campesinas. En la década del sesenta, el surgimiento de la Teología de la Liberación y de una vertiente dentro de la Iglesia que apoyó decididamente a la organización del campesinado fue lo que dio pie a la formación de las Ligas Agrarias Cristianas en Paraguay (y también en Brasil y en la

---

34 Para una interesante discusión acerca de este tema ver Knott, John William, "Land, Kinship and Identity: The Cultural Roots of Agrarian Agitation in Eighteenth-and Nineteenth-Century Ireland", en *The Journal of Peasant Studies*, Volume 12, Number 1, October 1984.

Argentina). La presencia de la Iglesia y de sus obispos y sacerdotes en la lucha por la tierra revistió a la lucha de los campesinos de un sello de "santidad". ¿Cómo no iban a estar en lo cierto las organizaciones campesinas en sus reclamos, si la Iglesia los apoyaba y los alentaba? ¿Cuán invulnerables se sentirían los campesinos en sus reclamos, cuando el obispo y los sacerdotes marchaban junto con ellos? Aún ahora que la Iglesia apoya el Movimiento de los Campesinos pero lo hace desde una posición distante y más prescindente, ¿qué papel juega en el imaginario colectivo de los campesinos que marcharon a Asunción en el Marzo Paraguayo en 1999 la recepción de las densas columnas humanas en el ex Seminario Metropolitano, y que el obispo de Asunción les dirigiese la palabra para recibirlos?

#### LOS ADVERSARIOS

Para el Movimiento de los Campesinos el adversario son los latifundistas en general, y en particular la Asociación Rural del Paraguay. Esta institución ha asumido la representación de los grandes propietarios, y se ha opuesto por todos los medios a las ocupaciones de tierras. En 1996, cuando las ocupaciones arreciaban, crearon una organización paralela, la Comisión de Defensa de la Propiedad Privada, que en realidad encubría una organización paramilitar. Sin embargo, posteriormente pasa a controlar la institución un grupo más moderado y se la desactiva. Los grandes propietarios amenazados contratan a sus propios guardias armados, que en muchos casos son los responsables de los vejámenes, las torturas y los asesinatos de campesinos<sup>35</sup>. También identifican como sus enemigos a los empresarios nucleados en la Federación de la Producción y del Comercio, que reúne a los empresarios y comerciantes más fuertes del país. Las organizaciones campesinas sostienen que hay una densa imbricación entre los latifundistas y el poder político, ya que muchos de ellos son altos jefes militares, parlamentarios o funcionarios políticos del gobierno.

Otro grupo social que es visto como adversario son los intermediarios, en especial aquellos comerciantes que intermedian comprando la producción de algodón y que a su vez son los mismos que en sus almacenes de campaña les venden las provisiones a los campesinos, muchas veces a cuenta de la futura cosecha. Este sistema de crédito,

---

35 La Federación Nacional Campesina contabiliza 36 muertos entre sus asociados. De ellos, 20 lo fueron a manos de civiles armados y el resto por la policía en los cortes de ruta, desalojos y otras acciones (entrevista del autor a Marcial Gómez, dirigente de la FNC, 12 de septiembre de 2002).

vigente en la mayoría del campo paraguayo, da lugar a las peores expropiaciones. En la punta de la cadena industrial identifican a las empresas propietarias de las treinta desmotadoras de algodón que hay en el país como las que controlan el mercado algodonero y fijan los precios del algodón en detrimento de su rentabilidad.

Más recientemente, a medida que la conciencia política de los dirigentes campesinos se ha ido elevando, han pasado a ser adversarios también el gobierno y la política neoliberal, las instituciones internacionales de crédito como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

#### LA UNIDAD

La unidad del Movimiento de los Campesinos es una trabajosa construcción que se logra sólo en contadas ocasiones. En realidad, lo asombroso es que se logre la unidad a partir de organizaciones que tienen orígenes muy disímiles, y que se logre la unidad en un campo de fuerzas que está sometido a tensiones desde diversos ángulos.

Como se dijo más arriba, el Movimiento de los Campesinos Paraguayos logró unificarse a través de la creación de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, entre 1994 y 1997. Esta unidad se quebró con la creación de los dos “bloques” en que quedó fracturado el movimiento: la Federación Nacional Campesina (con sus dos aliadas, la ONAC y el MJCC) por un lado, y por el otro la MCNOC, que es un conglomerado de organizaciones.

Después de la represión y la desactivación de las Ligas Agrarias Cristianas en 1976, pasan varios años sin que el campesinado tuviese una expresión propia. Sin embargo, a inicios de la década del ochenta, por la acción de la Pastoral Social y de diversas ONGs, se comienza a reorganizar. Las expresiones son muy cautas en un principio, y los Comités o Asociaciones campesinas que se crean tienen un neto corte productivo. Los campesinos se asocian, apoyados por estas organizaciones externas, para conseguir pequeños créditos, obtener asistencia técnica, mejorar los canales de venta de sus productos o comprar en conjunto los insumos agrícolas que precisan para sus cultivos.

Gradualmente ocurren dos cosas. Por un lado, que los controles del régimen se van aflojando, permitiendo mayores niveles de organización; y por otro, que los Comités o las Asociaciones locales se percatan de las ventajas de construir organizaciones de carácter Distrital o departamental que, reuniendo a varios Comités, pudiesen

mejorar sus condiciones de negociación, ya sea en el mercado, ya sea con las autoridades locales o nacionales. Este proceso convergente dará lugar a la CONAPA.

Por otro lado, ex dirigentes de las Ligas también se propusieron reconstruir una organización campesina de nivel nacional, a la que denominaron Movimiento Campesino Paraguayo. Mientras tanto, por otros conductos, también se crean otras dos organizaciones de nivel nacional.

En resumen, cuando González, Casaccia, Vázquez y Velázquez en 1987 hacen su estudio de las organizaciones campesinas en Paraguay, encuentran cinco organizaciones de nivel nacional, ocho de nivel regional y diez de carácter local que tienen existencia propia. La mayor de las organizaciones de nivel nacional, la CONAPA, está formada, según los autores, por trescientos Comités de Productores. Se podría caracterizar a la década del ochenta como de profusa y activa constitución de organizaciones campesinas prioritariamente por un movimiento inductivo, desde las organizaciones locales hacia las organizaciones de mayor alcance.

Ex-dirigentes liguistas, la Pastoral Social y las ONGs, entre otros, fueron los principales promotores de este proceso organizativo. Pero entonces cada uno de estos vectores trabajó con su propia orientación y sus propios objetivos. En el caso de las ONGs, se ha hecho notar que su trabajo estuvo muy orientado a las cuestiones técnicas y productivas: “las ONGs que han iniciado o acompañado proyectos de las organizaciones campesinas no han tomado en cuenta la perspectiva de la organización política como objetivo del trabajo promocional. Se ha trabajado en la mayoría de los casos, con un enfoque meramente técnico-productivo...” (Palau, 1995: 7).

Los ex-liguistas que dieron lugar al MCP, por el contrario, se plantearon de entrada formar una organización gremial campesina autónoma “independiente de cualquier tutelaje, ya sea de partido político, jerarquía eclesial y/o del Estado”<sup>36</sup>.

El gobierno, a través del Servicio de Extensión del Ministerio de Ganadería y Agricultura, del Instituto de Bienestar Rural, del servicio de Crédito Agrícola de Habilitación, etc., ha creado numerosos Grupos de Agricultores que con distintos nombres sumaban cerca de 1.600 en el momento en que González et al hicieron su estudio en 1987. Estos grupos actuaban desvinculados entre sí, muy dependientes de las institu-

---

36 Estatutos sociales del MCP. Citado por González et al, 1987, pág. 30.

ciones públicas que los organizaban; carentes de representatividad, vehiculizaban las políticas públicas dirigidas a la agricultura y no se ocupaban de otros temas como la cuestión de tierras, la salud, la educación, etcétera (González et al, 1987: 100). Si bien estas organizaciones no pueden ser consideradas como parte del Movimiento de los Campesinos en el sentido en que se lo define en este estudio, no debe minimizarse su efecto sobre las propias organizaciones gremiales como factor de desmovilización y de desorganización del Movimiento.

Es preciso tener presente que los partidos políticos tradicionales y los partidos de izquierda todos intervienen, interfieren y tratan de incidir en el Movimiento de los Campesinos. El Partido Colorado tiene sus propios caudillos políticos entre los campesinos, y también, a nivel local, entre los comerciantes y los funcionarios públicos de cierto rango. El Partido canaliza favores y prebendas a través de estos “punteros” políticos, a veces con la expresa intención de cooptar a dirigentes campesinos o de desmovilizar a las organizaciones locales. Algo similar se puede decir del Partido Liberal Radical Auténtico, aunque su capacidad de incidencia haya sido mucho menor al no haber estado en el poder.

Más recientemente, a partir de la década del noventa, al haberse legalizado la actuación de los partidos de izquierda, ellos también pretenden incidir sobre el Movimiento de los Campesinos. La forma de hacerlo ha sido a través de la cooptación de los principales dirigentes de las organizaciones campesinas de mayor predicamento. Varios observadores externos han hecho notar que posiblemente la división en dos bloques del Movimiento de los Campesinos se deba, al menos en parte, al accionar de esos partidos sobre el Movimiento<sup>37</sup>.

Es por ello –la acción de estas fuerzas divergentes sobre el Movimiento de los Campesinos– que en realidad la unidad del mismo parecería ser más una construcción necesaria (y tal vez posible) que un resultado evidente<sup>38</sup>.

---

37 En entrevistas mantenidas con el autor en el año 2002.

38 En el mes de mayo de 2002, un conjunto de organizaciones sindicales, campesinas y políticas confluyeron en la formación del Congreso Democrático del Pueblo para oponerse a la Ley de Privatización de Empresas Públicas, a la Ley Antiterrorista, a la reforma de la banca pública, a la Ley de Concesión de Rutas y a la corrupción y la impunidad. El principal actor en estas movilizaciones fue el Movimiento Campesino, que logró unificarse nuevamente para conducir las acciones. Estas comenzaron con cortes de ruta en el interior y grandes manifestaciones que avanzaron hacia la capital del país. Las protestas duraron 16 días, paralizando el país, al cabo de los cuales el gobierno retiró todas las leyes del Parlamento.

Cabe aún explorar la unidad (o la falta de unidad) desde otro ángulo: la composición social del campesinado. En efecto, este no es un todo homogéneo. Por el contrario, tiene a su interior divisiones de clase, de raza y de género. Entre las primeras hay campesinos sin tierra (pero que aún aspiran a tenerla y por ello siguen siendo campesinos) que son trabajadores asalariados agrícolas en establecimientos mayores o que se emplean tanto en la agricultura como en los servicios en las áreas urbanas; campesinos con poca tierra que la cultivan para su subsistencia pero son total o parcialmente asalariados; campesinos que son pequeños productores; productores con más recursos que a su vez emplean esporádicamente a trabajadores agrícolas, trabajando también ellos la tierra. Aún es posible que se encuentren campesinos que trabajan la tierra pero que también son pequeños comerciantes. Luego están los cortes de raza, ya que en Paraguay aún hay comunidades indígenas de diferentes etnias que están organizadas y en parte se reconocen también como campesinos. La diferencia de género también se expresa en la existencia de varias organizaciones de mujeres campesinas. Sin embargo, ninguno de esos cortes parecería cobrar expresión en la división del campesinado paraguayo en dos grandes bloques: tanto dentro de la FNC como dentro de la MCNOC hay organizaciones de campesinos sin tierra, organizaciones de mujeres campesinas, y dentro al menos de la MCNOC está la Organización Nacional de Aborígenes Independientes (ONAI) (Palau, 1996).

La división en dos grandes bloques parecería más bien el resultado de la existencia de perspectivas diferentes acerca del camino a seguir para llegar a una imagen-objetivo de la sociedad paraguaya en la cual tampoco parece haber grandes diferencias.

## EL CONFLICTO

La heterogeneidad del campesinado es lo que necesariamente lleva a las organizaciones campesinas a plantear el conflicto en varios campos. Esto surge en forma evidente al repasar las plataformas reivindicativas de las Marchas de Marzo. En general ellas contienen una serie de reivindicaciones que apuntan a la satisfacción de demandas del campesinado parcelario, que son sin duda el grueso de sus adherentes: precio justo para el algodón y demás productos de la tierra; condonación de deudas y acceso al crédito agrícola; mejorar el acceso a la tecnología y a los mercados; etcétera. Pero también suelen agregarse reivindicaciones que apuntan a los reclamos de la familia rural y de

evidente peso entre las mujeres: mejoras en la educación y la salud; disminuir el costo de la canasta familiar; etcétera<sup>39</sup>.

Por último está la reivindicación más fuerte de todas, la Reforma Agraria, que tiene sin duda mucho impacto entre las generaciones más jóvenes que no pueden tener acceso a la tierra si no hay planes específicos por parte del Estado. Como lo han expresado dos analistas de la situación de la pobreza rural en el Paraguay: “La solución (de la pobreza en el sector rural) requerirá de una reforma agraria profunda que tenga en cuenta la redistribución de la tierra, los insumos mejorados, la disponibilidad de crédito para pequeños agricultores, la asistencia técnica, el aumento de los niveles educativos entre la población rural, la expansión y el mejoramiento sustancial de la infraestructura (caminos rurales, irrigación, etc.)” (Morley y Vos, 2000: 39). Es por eso mismo que luchan las organizaciones del Movimiento de los Campesinos.

#### LOS LÍMITES DEL SISTEMA

Es poco imaginable que el Estado paraguayo sea capaz de dar respuestas a los reclamos del Movimiento de los Campesinos, con las relaciones de poder existentes entre los grupos sociales en la actual estructura social. El reclamo más anti-sistémico de todos es aquel por una redistribución de la tierra, actualmente muy concentrada. Paraguay sigue siendo una sociedad agraria, y por lo tanto la posesión de la tierra sigue siendo una de las principales fuentes de riqueza y poder.

Las acciones del gobierno a través del Instituto de Bienestar Rural no han podido dar respuesta a los reclamos por tierra de los campesinos que no la tienen. Es cierto que con el impulso de las ocupaciones de tierras y de la lucha del campesinado durante la década del noventa se crearon varios asentamientos mediante la compra o la expropiación de tierras. Sin embargo, la tierra que se ha redistribuido no alcanza para revertir el proceso de concentración, según lo muestran los Censos Agrícolas.

---

39 En noviembre de 2001 se llevó a cabo una marcha hacia Asunción de 500 mujeres pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI) que “tuvo por objeto sensibilizar a la ciudadanía ante la extrema pobreza del campo y denunciar públicamente el abandono del gobierno con respecto a la salud y la educación de miles de mujeres, niños y niñas pobres del país. [...] La marcha fue integrada [también] por indígenas de las parcialidades mbya, avá guaraní y tobas del Chaco” (CDE, *Informativo Campesino* N° 158, noviembre de 2001).

Por otro lado, la escasa industrialización del aparato productivo no crea puestos de trabajo, y las ciudades no demandan trabajadores como para esperar que la presión sobre la tierra disminuya por efectos de la emigración rural-urbana. Esta existe, pero es de campesinos desplazados que se refugian en actividades informales y de pequeño comercio apenas disimulando el desempleo. Los países limítrofes, Argentina y en menor medida Brasil, que durante muchos años absorbieron parte de la fuerza de trabajo excedentaria rural, hoy tienen sus propios problemas de desempleo y crisis productivas.

De modo que es de esperar que, favorecida por las altas tasas de crecimiento poblacional en el medio rural, la presión por la tierra no decaiga en los próximos años en el Paraguay. Una respuesta a la misma sólo es esperable con otros cambios más profundos en la estructura social y en los mecanismos de dominación política.

#### LA UTOPIA

“Sabemos lo que no quieren pero no sabemos bien lo que quieren. Posiblemente sueñan con un país socialista pero ¿de qué tipo? Sin latifundios, con justicia, educación y salud para todos, pero no pueden concretarlo” (Riquelme, 2002).

“Hay diferencias entre el proyecto de la MCNOC y el de la FNC. En la MCNOC se piensa que la competitividad de la agricultura campesina es baja, no pueden vivir completamente integrados a los mercados. Entonces se establece una estrategia de aguante a los embates de la política neoliberal que ellos estiman que durará diez o veinte años. Mientras es preciso mantener la tierra y producir alimentos. Aunque tampoco quieren desvincular a los campesinos totalmente del mercado. Hay que mantenerse vinculado a los mercados a través de la venta de excedentes alimentarios y de la manufactura de derivados agropecuarios y forestales en pequeña escala. Un aspecto importante para ellos es el mantenimiento de la identidad cultural guaraní. Piensan en un país productivo de base campesina cuidadoso del medio ambiente. La FNC en cambio tiene una visión de un campesinado integrado a la agroindustria (del algodón) y en general a los mercados” (Palau, 2002).

“Como todos los Movimientos tenemos nuestros sueños. Tenemos compañeros caídos en la lucha. Tuvimos varias derrotas durante la dictadura. Entonces nuestra consigna es no tran-



sigir los ideales de nuestros compañeros. Queremos una sociedad nueva. Construida desde abajo. No queremos radicalizar ni sectorizar nuestras luchas. Rechazamos a los dirigentes que radicalizan. Queremos formar nuevos líderes. Luchar contra la burocracia en las organizaciones. Hay una enfermedad de los partidos de izquierda que es plantear el socialismo ¡ya! Sin trabajar con la conciencia de la gente. Así no se llega a la gente. Para ello es preciso arrancar de sus primeras necesidades: tierras, educación, salud, precio justo por sus productos, caminos en las colonias, etc. Primero hay que motivar luego hay que concientizar” (Balbuena, 2002).

“Decimos que esta sociedad con tantas diferencias debe transformarse. Queremos una sociedad más igualitaria. El resultado de la producción debe ser distribuido a favor de la mayoría. Los recursos naturales están en manos de un pequeño grupo. Así como también los resultados del trabajo. Tenemos que avanzar hacia el socialismo. Paraguay no es un país industrial, es un país agrario, con una alta dependencia del sistema financiero y de la agroexportación. Debemos cortar con esa dependencia, creando un Estado democrático y desarrollando las fuerzas productivas. La FNC plantea reactivar la producción agrícola y generar la industrialización de los productos agrícolas entre otros del algodón. Para ello tenemos coordinaciones con pequeños y medianos empresarios industriales” (Gómez, 2002).

## CAPÍTULO IV

# SIN DISFRACES: EL PUEBLO MAPUCHE LUCHA POR SU RECONOCIMIENTO

### UNA BREVE HISTORIA DEL PUEBLO MAPUCHE

Corría el año de 1535 cuando Diego de Almagro, proviniendo del Perú, inicia la conquista de Chile. El territorio estaba ocupado por los araucanos o mapuches desde las actuales ciudades de Copiapó en el norte hasta Puerto Montt al sur. Pero no sólo Chile, sino también un extenso territorio de Argentina, desde el lejano sur cordillerano hasta las pampas argentinas, al sur de la Provincia de Buenos Aires, eran recorridos y controlados por este poderoso pueblo. Los mapuches<sup>40</sup> a su vez se diferenciaban en distintos grupos humanos, autoidentificados con distintos nombres, que muchas veces estaban en guerra entre sí: picunches, nagches, huenteches, lafkenches, pehuenches y huilliches (Barrera, 1999).

Entre 1540 y 1558 Pedro de Valdivia fundó entre otras las ciudades de Valparaíso y Santiago. Los mapuches le opusieron fiera resis-

---

40 Para Ribeiro sin embargo “los araucanos contemporáneos son casi todos sobrevivientes del subgrupo mapuche, que por vivir más al sur y por haber resistido más vigorosamente a los españoles, escapó al destino de los otros –Picunche y Huilliche– deshechos y sojuzgados... (Ribeiro, Darcy, *Las Américas y la Civilización*, Tomo 2, “Los Pueblos Nuevos”, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, Argentina, 1969, pp. 264).

tencia. Al mando del cacique Lautaro batallaron contra los españoles, dando muerte al propio Valdivia. Pero en los años siguientes los sucesores de este conquistador derrotaron a los indígenas, logrando establecerse sobre el territorio. Durante la mayor parte del siglo XVII los mapuches estuvieron en guerra contra los españoles, obligando a la Corona a celebrar tratados mediante los cuales esta les reconoció a sus adversarios los territorios ubicados al sur del río Bío-Bío.

En 1818 se declara la independencia de Chile de la Corona española. Los criollos habían idealizado a los araucanos en la literatura y en el teatro, reconociéndolos como pobladores originarios de esas tierras que también habían sufrido la dominación española. Para su sorpresa, los mapuches prefirieron defender al Rey, con el cual tenían tratados que respetaban sus tierras, antes que plegarse a una revolución de cuyas intenciones poco sabían. Sin embargo, a pesar de este desencuentro inicial, los nuevos gobernantes, enfrascados en sus propias luchas internas, no pudieron ocuparse de la cuestión indígena hasta casi el final del siglo XIX.

Hasta entonces el Estado chileno no controlaba desde el río Bío-Bío hasta el río Cruces en Valdivia. Hacia el norte la sociedad santiaguina ya había colonizado las tierras feraces del valle central y deseaba extenderse hacia el sur. Al sur del territorio mapuche, una temprana colonización con inmigrantes alemanes había creado una sociedad “europeizada”, industrialista, pujante, que también veía en las tierras mapuches un freno para su expansión. De esta manera, los territorios mapuches quedaron entre dos fuegos.

Entre 1866 y 1890 aproximadamente se lleva a cabo una campaña militar tendiente a ocupar las tierras al sur del Bío-Bío. El coronel Cornelio Saavedra fue su principal ideólogo y ejecutor. Se comenzó dictando los instrumentos legales que permitirían ocupar los territorios, declarando todas las tierras fiscales. Luego se reconoció parte de las tierras a las comunidades araucanas y el resto se vendió a colonos criollos e inmigrantes. El ejército avanzó con incursiones militares que eran fieramente resistidas por los guerreros mapuches. Se construyeron fuertes y se fundaron ciudades, y poco después llegaron las líneas ferroviarias y de comunicaciones. Es de destacar que los mapuches, como ocurrió reiteradamente en su historia, se dividieron frente al avance militar. Las tradicionales rivalidades entre ellos, que muchas veces los habían llevado a cruentas guerras intestinas, fueron aprovechadas por el Ejército chileno para obtener el concurso de algunas de las parcialidades para luchar contra las otras.

“Entre el año sesenta y seis y el ochenta hubo avances y retrocesos, pero en buena medida los mapuches lograron mantener su territorio. Fueron quince años de guerras, destrucción de casas, robo de ganados, incendio de sementeras, por parte del Ejército de Chile. Quince malos años para los mapuches. Muchos huyeron” (Bengoa, 1999: 45).

En 1881 los mapuches sufren una gran derrota cuando tratan de destruir varios fuertes fundados en los años anteriores. En 1991 el Ejército chileno es reforzado por las avezadas tropas que habían hecho la Guerra del Pacífico, y eso significará la derrota final de los guerreros mapuches.

Los mapuches tenían una fluida integración al mercado chileno y aún al mercado mundial. De ninguna manera deben ser vistos como un pueblo que producía para su subsistencia, sin contactos comerciales con el resto de la nación. Muchos caciques eran relativamente ricos. Caciques y jefes de familia se dedicaban principalmente a la ganadería. Los ganados, muchos de ellos traídos desde las pampas argentinas a través de las rastrilladas y los pasos cordilleranos, eran engordados en las vegas y lomadas chilenas y luego vendidos en los mercados y ferias de la frontera norte de sus territorios. Este ganado era transformado en “charqui” y de esa manera cargado en los barcos que lo llevaban hacia el norte para alimentar a los trabajadores de las minas y de los salitrales, o era llevado hacia otros continentes para alimentar a esclavos y trabajadores manuales. Por lo tanto, detrás de los ejércitos se desplazaba una multitud de comerciantes que intercambiaban bienes y alimentos con los indígenas “reducidos” o con aquellos que se habían plegado a la ofensiva de los *winkas*.

También fueron atraídos criollos, trabajadores desplazados de las tierras centrales que buscaban aposentarse en estas tierras, que en el imaginario colectivo quedaban “libres” aunque en realidad no fuese así. Cuando las Comisiones de Radicación se pusieron a trabajar hacía ya tiempo que partes de esas tierras habían sido vendidas, cedidas o usurpadas por colonos blancos.

Es de destacar que esta política de “pacificación de la Araucanía”, como irónicamente se la llamó, se llevó a cabo tanto del lado chileno como del lado argentino. Efectivamente, por la misma época, a comienzos de la década de 1880, el general Julio A. Roca llevaba a cabo la Campaña del Desierto con el declarado objetivo de empujar a los indios hacia el sur del río Negro, dejando libres las feraces pampas

argentinas para que la oligarquía ganadera y la inmigración europea pudiesen producir la lana que precisaba la industria textil europea y los alimentos para la creciente clase trabajadora industrial inglesa (Ortiz, 1974: 174). De esta forma los mapuches fueron guerreados, correteados, empujados y por último diezmados a ambos lados de la cordillera al mismo tiempo y con coordinación de los ejércitos de ambos países (Bengoa, 1999).

En 1866 se dicta la primera ley de títulos de tierra para los mapuches, que será seguida por dos más en los años siguientes. En líneas generales estas leyes tienen dos fines: por un lado asegurar a los mapuches la propiedad comunitaria de las tierras que poseían, otorgándoles un título gratuito sobre ellas: el “título de merced”. Por otro –y este fue su principal objetivo– reducir la cantidad de tierras que detentaban los indígenas con el fin de dejar tierras libres para la colonización por inmigrantes. La principal sorpresa que se llevan los gobernantes santiaguinos cuando termina la guerra contra los mapuches es que no existían tierras libres. Todas estaban ocupadas por las comunidades mapuches, siendo sus habitantes mucho más numerosos de lo que se había supuesto. Antes de emprender la campaña de “pacificación” se estimaba que los mapuches no pasaban de 30 mil personas, pero un Censo posterior y estimaciones más precisas arrojaron una población estimada de 150 mil personas (Bengoa, 1999). De allí la necesidad de reducir la cantidad de tierras bajo control mapuche, localizándolos en Reducciones.

Para crear las Reducciones las Comisiones Radicadoras levantaban un plano de las comunidades, otorgándole luego a cada familia las tierras que efectivamente estaban ocupadas bajo labranza, no reconociéndoseles las tierras de pastaje o las tierras en descanso. El título de merced se extendía además a nombre de un jefe de familia, al cual la Comisión Radicadora de Indígenas identificaba como el cacique más importante, adjuntándole a este otras familias del mismo tronco o familias distintas pero de menor importancia. La cantidad de tierra que se entregaba a cada familia dependía de la cantidad de hijos varones que esta tuviese. Sin embargo, a la familia del cacique se le otorgaba más tierra, en reconocimiento a su autoridad. En general se estima que el promedio de tierra que se otorgó por persona en los títulos de merced rondaba las 6 ha, apenas suficiente para la subsistencia. De esta manera, los mapuches, que habían sido ante todo un pueblo ganadero, trashumante, se vieron obligados a convertirse en un pueblo de agricultores.

Es sumamente difícil saber con precisión la cantidad de tierras que se repartieron y la cantidad de familias mapuches que las recibieron. Todo el proceso de radicación, reducción y entrega de títulos de merced se llevó a cabo durante 45 años, entre 1884 y 1929. Un Censo realizado en la década de 1960 estimaba que aún quedaban 3.078 títulos de merced, que sumaban 475.423 ha en las que vivían 77.751 personas (Bengoa, 1996). Sin embargo, el Estado también entregó títulos de dominio y títulos gratuitos de diverso tipo a familias mapuches a lo largo del siglo XX.

“En definitiva, de 10 millones de hectáreas aproximadas que corresponden a las regiones del sur que habitaban los mapuches, el Estado les cedió unas 500 mil y los dejó ocupando otro tanto en Osorno y Valdivia, sin protección legal alguna” (Bengoa, 1999).

Por lo tanto, el resto, nueve millones de hectáreas fueron vendidas a colonos y hacendados chilenos, consumando el despojo de las tierras mapuches.

A lo largo del siglo XX fueron ocurriendo varios procesos. Por un lado, un importante aumento de la población mapuche, ya que según el Censo de 1992 hay 235 mil mapuches viviendo en comunidades rurales. Por otro lado, muchas comunidades (se estima que unas 168) vendieron sus tierras y se disolvieron. Estudios de Bengoa estiman que hoy día “existen 3,6 ha por familia y el tamaño de las familias mapuches es mayor que el promedio nacional” (Bengoa, 1999: 59). Por otro lado, las tierras han perdido fertilidad y se han erosionado, perdiendo también muchos de los bosques que daban abrigo, madera y leña. Estas cifras están en la base de la actual pobreza de la mayoría de la población mapuche que vive en comunidades rurales.

La ley que otorgaba los títulos de merced también establecía la imposibilidad de su venta. Sin embargo, durante todo el siglo XX ha habido un lento y sostenido proceso de apropiación de las tierras de los mapuches por parte de gente que no lo era. Para ello se utilizaron diversas artimañas. Una de ellas fue otorgarles a diversas empresas, generalmente sociedades anónimas constituidas por empresarios y políticos cercanos al poder del Estado, la autorización para explotar los bosques de las tierras de los mapuches. De esta manera, sin violar el principio de la intangibilidad de la propiedad mapuche establecida por los títulos de merced, sí se otorgó la capacidad de explotar su principal recurso natural. En consecuencia, las comunidades mapuches quedaron empobrecidas por tamaño despojo. Otra

argucia consistía en arrendar la propiedad de los indígenas pero por el plazo de 99 años. De más está decir que en el encontronazo entre una sociedad ágrafa y que confiaba en la palabra empeñada, y los leguleyos que estaban tras estas maniobras, el campesino mapuche frecuentemente firmaba sin saber leer lo que suponía era un arriendo por unos pocos años pero se transformaba en un arriendo secular, cuando no en la lisa y llana cesión de derechos sobre sus tierras por unas pocos pesos.

La violencia física también figuraba en el repertorio de las formas en que se producía el despojo. Las Comisiones Radicadoras de Indígenas, al hacer los planos de mensura, procedían simplemente a cuadricular el terreno sin registrar los accidentes topográficos naturales como cerros, montes y cañadas, por lo cual las medidas reales en el terreno podían ser muy distintas de las que figuraban en los planos. La tierra “sobrante” de las reducciones era vendida en subastas públicas y comprada por gente que nunca había reconocido el terreno que compraba previamente. Al querer tomar posesión del mismo, se podía encontrar con que esa tierra estaba ocupada hacía centenares de años por una comunidad mapuche no registrada o por colonos criollos asentados hacía una o dos generaciones, o con que tenía más o menos tierras que las que había comprado según como se desarrollasen los accidentes naturales del terreno. En el caso de que las tierras estuviesen ocupadas, el nuevo propietario desalojaba por la fuerza a los “ocupantes ilegales” –que en algunos casos estaban ahí desde hacía doscientos años– que no tenían los papeles que legitimaran su posesión. En algunos casos el nuevo propietario llegaba a un arreglo con los ocupantes para que quedasen como administradores de su nueva posesión. En estos u otros casos también funcionaban en ciudades y pueblos de la Araucanía notarías y oficinas de Conservadores de Bienes Raíces que, transformadas en verdaderas “fábricas de papeles”, legitimaron posesiones dudosamente adquiridas (Bengoa, 1999: 69).

De esta manera desaparecieron a lo largo del siglo XX alrededor de doscientas comunidades mapuches y miles de hectáreas que estaban en su posesión. Hasta hoy los mapuches las conocen como las “tierras usurpadas”, y generalmente en la memoria de las comunidades vecinas y de quienes se sienten con derechos sobre esas tierras se conoce perfectamente el origen y la forma del despojo.

Hacia fines del siglo XIX la sociedad mapuche había sido derrotada, pero no vencida. Con una extraordinaria vitalidad, los mapuches comenzaron a plantearse las formas más apropiadas para conseguir

sus objetivos, que continuaban pasando por su reconocimiento como pueblo, el respeto por sus derechos y la devolución de las tierras usurpadas. Muchos de ellos comenzaron a transitar el camino de la integración a la sociedad chilena. A instancias de dos misiones religiosas –anglicanos y capuchinos– que se habían instalado en tierras de la Araucanía, los hijos de los principales caciques comenzaron a recibir educación escolar y religiosa. Por otra vía, algunos hijos de caciques que eran entregados a jefes militares o políticos blancos como forma de sellar acuerdos recibían una esmerada educación.

Hacia las primeras décadas del siglo que se iniciaba surge una camada de jóvenes mapuches formados en la cultura chilena pero que no por ello reniegan de su cultura indígena. Antonio Neculman funda la primera escuela formada en la Araucanía por un profesor mapuche. Concurrirán a ella muchos hijos de caciques y jefes principales. Sus egresados constituirán la Sociedad Caupolicán Defensora de la Araucanía. Era la época en que se formaban sociedades obreras, de socorros mutuos, de artesanos, etc., para la defensa y promoción de sus afiliados, y los mapuches tienden a imitar esta modalidad. Será la primera organización mapuche que se organiza por fuera del modelo tradicional de los linajes y cacicazgos.

Consistentemente, alrededor de la Sociedad Caupolicán surge una generación de jóvenes profesores que propugnan la “integración respetuosa” en la sociedad chilena (Bengoa, 1999: 111). Algunos de ellos llegan a posiciones de importancia en la sociedad local. Otros tratan de integrarse a través de la política. En las décadas del ‘20 y del ‘30 se presentan a posiciones electivas en los municipios y al Parlamento Nacional. Francisco Melivilu Henríquez llega ser el primer diputado mapuche en 1927. En sus más de doscientas intervenciones en el Parlamento denunció los atropellos y abusos de que era víctima su pueblo, y reclamó respeto por los derechos de sus hermanos de raza. Manuel Manquilef dirige luego a la Sociedad Caupolicán, y será el principal líder durante la década del ‘20, llegando a ser diputado por el Partido Liberal. Venancio Coñoepán, descendiente de una ilustre familia mapuche, siendo joven se instala en Temuco y se dedica exitosamente al comercio. Obtiene la concesión de los automotores de la marca Ford, lo cual lo convierte en una persona respetada no sólo en su ciudad sino también en la región. En la década del treinta, él y su equipo de jóvenes colaboradores dominan la Sociedad Caupolicán.



Como consecuencia de la gran depresión económica mundial, los años '30 serán de mucha inestabilidad. En 1936 llega al poder Pedro Aguirre Cerda, impulsado por un Frente Popular de amplio espectro de centro-izquierda. Los mapuches crean el Frente Araucano y apoyan a Cerda. Varios dirigentes de esa época adhieren a las ideas socialistas. Se producen grandes marchas para reclamar tierras, pero la oligarquía, a pesar de estar debilitada, logra pactar con Aguirre Cerda para que no se toquen sus tierras. Se impulsa en cambio un programa de colonización a través del cual muchos mapuches obtienen tierras en el sur del territorio a más de mil kilómetros de su tierra natal. En esa época se construyen escuelas y se abren caminos en las comunidades mapuches, y se logra detener muchos de los abusos contra las comunidades indígenas.

A todo esto, Venancio Coñoepán ha pasado al Partido Conservador y en 1941 gana la diputación. Antes se ha fundado la Corporación Araucana, símil mapuche de la Corporación de Fomento a la Producción (la famosa CORFO) que el Estado nacional creara en Santiago. Con Carlos Ibáñez del Campo, la Corporación Araucana gana poder. Coñoepán es nombrado Ministro de Tierras y Colonización, mientras dos de sus miembros son elegidos diputados. En este período se crean el departamento de Asuntos Indígenas y el primer programa de becas de estudio para jóvenes mapuches, mediante el cual se formarán muchos de los futuros profesionales. Coñoepán y su grupo se opondrán firmemente a la división de las tierras indígenas. La década del cincuenta será una época de crecimiento económico, industrialización, crecimiento del empleo, grandes migraciones hacia las ciudades, y los mapuches hábilmente sabrán recoger los beneficios de esta situación a través de los apoyos y la militancia política. Esta situación se terminará hacia la década del sesenta, cuando se agote el modelo de industrialización substitutiva.

Bengoa ha sugerido el "efecto espejo", consistente en un esfuerzo consciente de los mapuches por integrarse a la sociedad chilena a través de la creación de instituciones similares a las que predominan en la sociedad nacional: "Al leer la historia moderna de los mapuches, uno tiene la impresión que los indígenas chilenos han tratado de obtener sus objetivos de dignidad y desarrollo por todos los caminos posibles. Sobre todo, han tratado de hacerse entender. Han buscado 'plataformas de comprensión' con la sociedad chilena. Han tratado de 'traducir' sus aspiraciones en imágenes y lenguajes comprensibles al resto de los chilenos. Cuando en las organizaciones populares de comienzo

de siglo se utilizaba el concepto de ‘sociedades’ ellos formaron sus propias ‘sociedades’, la Sociedad Caupolicán, la Sociedad Galvarino, y numerosas otras. Al hablarse en el país de ‘frentes’, ellos formaron sus propios ‘frentes’, el Frente Único Araucano que hemos mencionado. Al hablar de ‘corporaciones de desarrollo’, hicieron lo propio, creando la Corporación Araucana. Ha sido la necesidad de establecer una comunicación comprensible con la sociedad. Mostrar que existen puentes por los cuales se puede transitar. Ha sido, desde mi punto de vista, un esfuerzo extremadamente frustrante para los dirigentes indígenas. Ellos siempre han buscado a través de los métodos más diversos, de nombres cambiantes, la dignidad mínima para su gente, el respeto, la abolición de la discriminación. No lo han logrado. Han visto una sociedad cerrada, inflexible, racista, incapaz de escuchar sus palabras” (Bengoa, 1999: 121).

Mientras muchos dirigentes mapuches fundaban instituciones para la defensa de su raza y competían en las lides políticas para tratar de obtener puestos de representación pública, el despojo de las tierras siguió lenta pero inexorablemente. Ya se ha mencionado la desaparición de cerca de doscientas comunidades en el transcurso del siglo. Los diarios de la época, publicaciones diversas y las actas del propio Congreso registraron innumerables denuncias de atropellos, abusos, exacciones, engaños, cuando no violencia física, lisa y llana, para resolver litigios en torno a la tierra. No todos los mapuches estuvieron de acuerdo con la vía de la “integración respetuosa” y ellos más bien denunciaron a los que como Coñoepán eligieron este camino como traidores a su raza. Como siempre ha ocurrido en la historia de este pueblo, hubo organizaciones y comunidades indígenas que eligieron caminos más contundentes y construyeron una “cultura de la resistencia” (Mires, 1991).

Manuel Aburto Panguilef organiza tempranamente, a principios del siglo XX, una sociedad de resistencia a la que luego llamaría Federación Araucana, desde la cual propugnaba un retorno a las costumbres y las prácticas de la tradición mapuche. Martín Segundo Painemal fue uno de los primeros mapuches afiliados al Partido Comunista, al cual se había vinculado como trabajador en las panaderías de Santiago. Según Bengoa (1999: 137), el Partido Comunista “formó un pequeño pero sólido contingente de militantes mapuches” fogueados en innumerables batallas sociales en el campo y en pequeños pueblos de la Araucanía. A mediados de siglo forman, junto con militantes socialistas, la Federación Campesina e Indígena de Chile,

que aportaría luego sus fuerzas en la formación de la Central Única de Trabajadores de Chile. Los partidos de izquierda generalmente subordinaron la cuestión étnica a la lucha de clases. Apoyaban a los mapuches como tales, pero también los incitaban a unirse a la lucha de los trabajadores contra la opresión y la explotación del capital.

Hacia la década del sesenta soplan vientos de cambio. La “integración respetuosa” ya se ha desacreditado. Aparece cada vez más como una ideología paternalista y falsa que manipulaba los votos de sus partidarios. Al declinar la Corporación Araucana aparecen decenas de organizaciones mapuches, la mayoría de carácter local. Barrera (1999: 109) dice que en momentos del golpe militar existían “no menos de diez organizaciones mapuches, todas ellas controladas por partidos políticos chilenos. La más antigua era (es) Ad Mapu vinculada al Partido Comunista. Surgieron después Lautaro Ñi Aillarrehue, con claros nexos con una de las fracciones del Partido Socialista; Nehuen Mapu, ligada a la Democracia Cristiana; Choin Folil Che, cercana al P.P.D.; Aukiñ Domo, organización femenina vinculada a la Democracia Cristiana; Lonko Kilapán de inspiración socialista; Roble Huacho, virtualmente dirigida por el ex Partido Nacional; y otras de menor importancia”.

Cuando la situación política nacional cambia en la década del sesenta, cuando el gobierno de la Democracia Cristiana comienza con una tímida Reforma Agraria, y posteriormente cuando se anuncia el triunfo de la Unidad Popular, son muchas las comunidades indígenas que, cansadas de décadas de fatigar los juzgados y los salones de los Ministerios y de cortejar a los Partidos Políticos, deciden tomar las reivindicaciones en sus manos. Comienza a fines de la década del sesenta una ola de ocupaciones de fundos (GIA, 1983). Las comunidades ocupan las tierras reclamadas, corren los cercos y exhiben desafiantes los amarillentos papeles con los títulos de merced que atestiguan sus derechos sobre las tierras otrora usurpadas y ahora recuperadas. Cuando la Unidad Popular toma el gobierno, inicia la Reforma Agraria expropiando muchos de los fundos reclamados y devolviéndoselos a las comunidades mapuches. Es por todos sabido cómo terminó el gobierno de la Unidad Popular. El Golpe de Estado militar y la posterior dictadura devuelven en algunos casos las tierras a sus anteriores propietarios, en otros rematan las tierras, y en otros incluso permiten que las comunidades retengan las tierras. Pero la represión de los militares se ensaña particularmente con los mapuches y con sus organizaciones. Ciento treinta y siete mapuches figuran como desapa-

recidos en las Actas de la Comisión Rettig, y cientos huyeron al exterior, donde muchos han quedado suspendidos entre dos mundos.

La dictadura militar intenta terminar con el “problema mapuche”. Para ello dicta una ley por la cual obliga a la división de las tierras de las comunidades y a la entrega de títulos de propiedad a las familias que las habitan. La ley además establecía que a partir del momento de la división y de la entrega de los títulos “las reservas (o reducciones) dejarán de ser consideradas tierras indígenas e indígenas sus dueños y adjudicatarios” (Mires, 1991: 98).

Sin embargo, cediendo a la presión de los propios mapuches, se mantiene la prohibición de las ventas de las parcelas a personas no mapuches. Al influjo de la ley, de buena o de mala gana, prácticamente todas las comunidades mapuches son divididas, entregándoseles los títulos de propiedad a cada familia. Sin embargo, este hecho tuvo poco efecto en las comunidades, porque fueron pocas las familias que luego decidieron vender sus parcelas. Sí tuvo un efecto perverso para la unidad familiar, ya que la ley establecía que aquellos que se habían apartado de la comunidad (emigrantes a las ciudades, por ejemplo) carecían de derechos sobre las tierras, y que sólo serían indemnizados. Esto hizo que muchos mapuches asentados en las ciudades se encontrasen de la noche a la mañana despojados de sus derechos sobre las tierras ancestrales a beneficio de los familiares que habían quedado en el campo.

La quietud forzosa a la que fueron sometidos muchos dirigentes indígenas durante los largos años de la dictadura militar produjo un decantamiento de posiciones e ideas en muchos de ellos. Cuando hacia fines de la década del setenta se hace una primera reunión en Temuco bajo el paraguas protector de la Iglesia Católica, el discurso mapuche ha cambiado. Hay ahora una reivindicación del pueblo mapuche, de sus creencias y costumbres, de sus derechos y necesidades, independientemente de la sociedad chilena. En esa reunión se darán los pasos para la creación de una nueva institución, los Centros Culturales Mapuches, que liderarán la organización en los próximos años. Al decir de Bengoa: “Los Centros Culturales Mapuches reaccionaron frente a la política de dividir las comunidades implementada por la dictadura militar. Las comunidades se sintieron amenazadas. Se inicia allí, como consecuencia de esa amenaza, un movimiento étnico que dura hasta el día de hoy. El año setenta y ocho, podría decirse, es la fecha de inicio de la nueva emergencia indígena en Chile. La característica de este nuevo discurso será una fuerte reafirmación étnica, esto es, su

énfasis en marcar las diferencias con la sociedad llamada a veces occidental o, mejor dicho, criolla. A diferencia de lo que había ocurrido durante la Unidad Popular, en que los indígenas se habían plegado al movimiento campesino y a la Reforma Agraria, a partir de los ochenta los indígenas van a mostrar su diferencia y distancia con los otros movimientos sociales, formando asociaciones y reivindicaciones autónomas. La cuestión étnica se va a separar de la cuestión social en general, e incluso van a criticar crecientemente la intermediación de los partidos políticos” (Bengoa, 1999: 172).

Durante la década del ochenta se procesa en Chile la larga salida hacia la redemocratización del país. Los Centros Culturales Mapuches fueron la organización que expresó los cambios profundos que estaban ocurriendo. Durante décadas se había tratado de integrar a los mapuches a la sociedad chilena, como campesinos o a través de los partidos políticos. Durante la dictadura, probablemente como una decantación y una lección de las experiencias aprendidas, los mapuches se orientan a organizarse como mapuches, no para integrarse y disolverse en la sociedad chilena sino para reafirmarse en cuanto pueblo, distinto a la sociedad criolla. Los Centros Culturales Mapuches se van politizando y transformándose en otras organizaciones: Ad Mapu, Caupolicán, Lautaro Newen Mapu, Wall Mapu o Consejo de Todas la Tierras, etcétera. Su accionar durante el gobierno dictatorial parece haber sido poco efectivo, ya que sus reclamos fueron en general desoídos y no tuvieron mayor credibilidad e influencia sobre los votantes (Bengoa, 1999).

En 1989, en plena campaña electoral después de veinte años de dictadura militar, se celebra un acuerdo con el candidato electoral y futuro Presidente por la Concertación Nacional, Patricio Aylwin, en la ciudad de Nueva Imperial, en el corazón de las tierras mapuches. De él participan, y firman el Acuerdo, todas las organizaciones indígenas existentes (no sólo mapuches), con la excepción del Consejo de Todas las Tierras liderado por Aucán Huilcamán.

“El acta que se firmaría poseía varios puntos, pero los principales consistían en que el gobierno se comprometía a enviar al Parlamento una Reforma a la Constitución de la República que reconociese formal y solemnemente a los pueblos indígenas de Chile. Además se comprometía al envío de una nueva ley indígena y creación de una comisión con participación indígena para que la preparara. Por su parte, los indígenas se comprometían a resolver sus problemas

y canalizar sus demandas por la vía institucional. Esta cláusula se refería al fantasma de las tomas de fundos” (Bengoa, 1999: 184).

Poco después de su victoria, Aylwin convoca a más de cien dirigentes indígenas a constituir la Comisión Especial de los Pueblos Indígenas con representación no sólo de los mapuches sino también de los aymaras, de los indígenas de Atacama y de la Isla de Pascua. Durante todo 1990 esta Comisión trabaja realizando encuentros y escuchando opiniones en los más diversos rincones de las tierras indígenas. De esa forma se va construyendo el perfil de los principales puntos que debía contener la nueva Ley Indígena. La principal reivindicación que emerge es la necesidad de ser reconocidos como pueblos indígenas: reconocimiento a su cultura, a sus valores, a sus diversas lenguas, a sus religiones, a sus creencias. En segundo lugar, la cuestión del territorio y de las tierras: es decir, el reconocimiento de un espacio territorial originario al cual están vinculados sus lugares sagrados, sus antepasados, condición necesaria para que esas culturas pudiesen desarrollarse. El acceso a las tierras como espacio físico y productivo para instalarse y extraer de ellas su sustento material. En concreto, era necesario instituir mecanismos y procedimientos por los cuales los indígenas pudiesen recuperar las tierras provenientes de los títulos de merced que les habían sido usurpadas a través de años de dominación y despojo.

Sin embargo, la discusión de la Ley Indígena en las Cámaras llevó tres años más y sufrió múltiples mutilaciones y modificaciones. Cuando se aprobó, lo más que se pudo rescatar en materia de tierras fue el reconocimiento de la imposibilidad de la venta de las tierras originales mapuches a personas que no fuesen de este origen, y la constitución de un Fondo de Tierras mediante el cual el Estado pondría recursos para comprar tierras y restituírselas a los indígenas. Este Fondo sería manejado por la Corporación de Desarrollo Indígena (CONADI), organismo que se creaba por esta ley y que en adelante tendría potestades para manejar toda la cuestión indígena. Sus dos primeros directores fueron destacados dirigentes mapuches.

La cuestión del reconocimiento de los Pueblos Indígenas a la cual se había comprometido el Presidente Aylwin en los Acuerdos de Nueva Imperial fue canalizada a una reforma del artículo primero de la Constitución. Esta reforma tuvo aún peor suerte: luego de nueve años de debate en las Cámaras, fue finalmente archivada por falta de apoyo político. Hacia finales del gobierno de Aylwin el Acuerdo de

Nueva Imperial se había debilitado notablemente, y había ya muchos dirigentes desencantados y deseosos de salirse de él.

### LA RUPTURA DEL PACTO DE NUEVA IMPERIAL Y LA EMERGENCIA DE UNA NUEVA DIRIGENCIA INDÍGENA

Las conmemoraciones que se montaron en toda Iberoamérica con motivo de la celebración de los 500 años de la llegada de Colón a estas tierras dieron motivo para un resurgimiento de la indianidad. Así como España y los gobiernos latinoamericanos celebraron una serie de actos y festejos “oficiales”, hubo muchos otros actos no oficiales llevados a cabo por quienes habían sido dominados y sojuzgados por los españoles. En Chile, una incipiente organización mapuche, el Consejo de Todas las Tierras, liderada por Aucán Huilcamán, fue entre otras una organización que aprovechó esta efemérides para marcar su presencia realizando ocupaciones simbólicas de tierras usurpadas, saliéndose así de las condiciones pactadas en el Acuerdo de Nueva Imperial (que por otra parte no habían firmado). La reacción del gobierno, que apresó a sus principales dirigentes, sólo logró darle más figuración y presencia a una organización que hasta el momento era relativamente pequeña.

Pero la ruptura final del Acuerdo de Nueva Imperial acaecerá en 1998 con el episodio de la destitución del Director de la CONADI, Domingo Namuncurá. La empresa de electricidad ENDESA había planeado realizar una serie de siete represas hidroeléctricas en el curso del río Bío-Bío. Cuando se quiso llevar a cabo la segunda represa en Ralco, se encontraron con la férrea oposición de las comunidades pehuenches, que serían inundadas por la represa del lago. Si bien la empresa compró tierras para reubicar a las familias que quedarían desplazadas, estas no aceptaron ser reubicadas. Trasladado el problema a la CONADI, realizados los estudios e informes técnicos, su director y los consejeros indígenas votaron en contra de la realización de la represa. El gobierno, totalmente comprometido con el proyecto hidroeléctrico en función del desarrollo de sus planes energéticos, removió al director y a los delegados oficiales de la CONADI e hizo votar favorablemente la realización del proyecto.

La destitución del director de la CONADI fue la gota que desbordó el vaso, ya lleno por el dificultoso y negociado trámite de la Ley Indígena, el fracaso de la reforma constitucional que reconocería a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, y la no adhesión

del gobierno chileno al Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Muchos dirigentes mapuches llegaron así a la convicción de que el camino de la negociación con el primer gobierno de la Concertación Democrática y los dos gobiernos posteriores sólo les permitió avances mínimos, pero no logros sustanciales. Los dirigentes mapuches más jóvenes, pertenecientes a una generación con mejor formación educativa, se convencen gradualmente de que es necesario volver a posiciones más confrontativas, reivindicando su condición de pueblo indígena.

### LA ESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MAPUCHES

Los mapuches son una etnia, un pueblo originario, que tiene su propia estructura social, su lengua, sus creencias y ritos religiosos propios, diferentes a los de la sociedad chilena en la cual conviven. Es cierto que la conquista española primero y la dominación y sometimiento a manos de la sociedad criolla chilena después introdujeron muchas modificaciones tanto en la estructura social como en su cultura. Sin embargo, a pesar de ello aún hoy se mantienen como un pueblo diferenciado, con identidad propia. Es por ello que un análisis de las principales organizaciones mapuches debe ser precedido por una descripción y análisis de esta sociedad, inserta en pero diferenciada de la sociedad chilena. La hipótesis es que las organizaciones mapuches tienen su base, arraigo y sostén en las comunidades rurales mapuches que están físicamente asentadas en las reducciones. Estas son la unidad básica de organización territorial desde donde se derivan las organizaciones. A su vez, las reducciones o comunidades están organizadas en torno a los linajes, y estos a su vez están compuestos por las familias. La célula organizativa básica de la sociedad mapuche son las comunidades (reducciones), en cuyo interior cuentan con una estructura jerárquica elaborada. Esto determina o influye en las formas de organización social y política. En las páginas siguientes se tratará de describir y explicar el funcionamiento de estas distintas unidades como marco cognoscitivo de la organización social mapuche.

Cuando el Estado Chileno derrota a los mapuches y los confina a los límites de las reducciones de tierras en un proceso que se inicia hacia la década de 1880 y termina cincuenta años más tarde, modifica profundamente la estructura social indígena. La Comisión Radicadora de Indígenas mide y diseña las reducciones generalmente alrededor de las tierras de un jefe o cacique principal, otorgándole tie-



rras a él en proporción con el tamaño de su familia, y le agrega otras familias de menor importancia a su alrededor. De esta manera las reducciones quedarán constituidas por el linaje principal, el del jefe y sus descendientes, y por los linajes subordinados constituidos por los de las familias agregadas y sus descendientes.

La propiedad de las tierras se reconoce a través del otorgamiento de los títulos de merced (o sea, títulos gratuitos) que están extendidos a nombre del jefe del linaje principal. Es por ello que las comunidades se identifican aun hoy por el nombre de dicho jefe principal. La propiedad, por lo tanto, está atada a la capacidad de reconocer en los ascendientes la pertenencia al linaje principal o a alguno de los linajes subordinados reconocidos en el título de merced original. Para una familia de una reducción es fundamental poder vincular su nombre al de los antecesores del linaje, porque ello atestigua y da crédito a sus derechos sobre la tierra. “Remontándose al jefe original, es lo suficiente para revalidar los derechos de uso de la tierra; remontándose desde este jefe hasta el fundador del linaje total, se establece la unión mística con los dioses mapuches. Por esto, podemos encontrar el baluarte religioso, económico y político de la sociedad mapuche en el contexto del sistema de linaje” (Faron, 1997: 27).

A su vez los derechos sobre la tierra se reconocen por la línea paterna (patrilinaje). En el casamiento las mujeres van a vivir a la reducción y en la tierra del marido, y adquieren todos los derechos sobre la misma, aun en el caso de viudez. Sólo si este no tuviese tierra se produce la situación inversa, en que el marido ingresa a la familia (y la tierra) de la mujer. Sin embargo la mujer pierde estos derechos en caso de separación, en cuyo caso tiene que volver a su familia original.

Por lo tanto una reducción está compuesta por un conjunto de varones del linaje principal relacionados por vía paterna, con sus mujeres y sus hijos, así como por las mujeres solteras, viudas o divorciadas de este linaje. A ello se agregan las familias de los linajes subordinados compuestas de forma similar (Faron, 1997).

En cada reducción hay un jefe, generalmente el más anciano, que es a la vez jefe del núcleo familiar principal (*lonko*) y jefe político de las familias de los distintos linajes que conviven en una reducción. Este jefe es además un descendiente directo del jefe original a cuyo nombre fue extendido el título de merced, un organizador laboral, y un jefe ritual de la comunidad de la reducción.

La campaña militar para “pacificar la Araucanía” de 1880 terminó con la movilidad de los indígenas en una vasta porción del territorio

chileno, sobre el cual ellos eran dueños y señores, para confinarlos en los límites de las reducciones. Esta modificación también los obligó a readaptarse en cuanto a sus actividades económicas. Así, los mapuches, un pueblo pastor que recorría las pampas argentinas y los valles chilenos con enormes arreos de ganado para ser comerciados en las fronteras, tuvieron que transformarse en campesinos. Aquellas familias que habían recibido más tierra pudieron seguir con su costumbre de criar animales, pero esta actividad fue gradualmente disminuyendo a medida que el aumento de población y la pérdida de tierras por usurpación de los criollos reducían aún más la disponibilidad de tierras. “En cifras gruesas, el doble de tierras soportaba la mitad de la población actual, esto es, más de 500 mil hectáreas a 100 mil personas y hoy día menos de 400 mil hectáreas a 230 mil personas que es la población rural mapuche de la comunidades indígenas” (Bengoa, 1999: 80).

El trigo fue (es) el principal cultivo, seguido por las papas, la cebada, la avena y distintas hortalizas, con el fin principal de la alimentación de la familia. Para un antropólogo que hizo un profundo estudio de este pueblo a principios de la década del '50, la agricultura mapuche era atrasada, y explicaba su pobreza: “... se caracteriza como un sistema de tres potreros, de siembra y barbecho, combinada con rotación casual de cosechas. Sin embargo muchos de los beneficios de la rotación se pierden porque el abastecimiento de agua no está controlado..., los abonos se usan rara vez y en mala forma y la sucesión de cosechas no corresponde a las necesidades del suelo... el mapuche tiene tendencia a sembrar semillas de mala calidad y todavía en proporción inadecuada al área de suelo que emplea... los potreros en barbecho siempre están sobrepastados por las ovejas. Agreguemos a esto que la erosión producida por el fuerte régimen de lluvia y los vientos del verano que eliminan la capa vegetal del suelo, hacen emerger las dificultades tecnológicas básicas de la agricultura mapuche. Aun cuando todo mapuche pretende cosechar para obtener dinero, lo corriente es que no lleguen a tener ganancia alguna y todo el alimento lo consuman los labriegos” (Faron, 97: 20).

Llama la atención este comentario descriptivo tan poco perspicaz y legitimador de la dominación en un antropólogo que por otro lado produjo el que a nuestro juicio es el mejor estudio sobre la cultura mapuche. Posiblemente se debió a que su atención no estaba puesta en la comprensión de las actividades económicas y productivas de los mapuches. Años después, otro estudioso de la cultura mapuche, si bien coincide respecto del tipo de actividades productivas que se lle-

van a cabo y en la organización de las mismas, tiene una interpretación muy distinta de las causas de la pobreza indígena, no atribuyéndosela al atraso tecnológico: “Los agricultores mapuches tienen una gran capacidad de discutir la tecnología, de adaptar tecnologías foráneas de experimentar nuevas variantes tecnológicas. Muy lejos de la realidad esa imagen de personas incultas que no saben trabajar la tierra, que suele darse entre los no mapuches” (Bengoa, 1999: 87).

La familia es el núcleo básico de la organización económica y de la organización laboral, y gana más fuerza en la medida en que se debilitaron las otras formas de organización basadas en el linaje. Las relaciones laborales contractuales también son hoy de mucha importancia, quedando a veces sólo vestigios de las obligaciones y derechos laborales que provenían de la estructura de linaje tradicional. Sin embargo, aún hoy persisten sistemas de prestación laboral en que las familias se prestan fuerzas en determinados momentos del año (Faron, 1997). La figura más común es la *mediería*, por la cual entre dos personas se acuerda trabajar una parcela aportando cada uno bienes o servicios diferentes y complementarios, y repartiéndose las ganancias según una valoración acordada de lo que cada uno aportó. Por ejemplo: un campesino puede aportar la tierra y otro la semilla y el trabajo, repartiéndose luego el producto a medias.

La *vuelta mano* es un intercambio de trabajo que se da entre personas que se tienen mucha confianza y respeto, generalmente, aunque no siempre, con vínculos familiares estrechos. Una persona está dispuesta a ayudar a otra en el trabajo en el entendimiento de que podrá recibir una ayuda equivalente cuando la necesite.

El *mingaco* es una cooperativa laboral encabezada por el *lonko* que reúne a los hombres de la reducción, mediante la cual se llevan cabo tareas de tipo comunitarias como la construcción de un canal o de un camino, la construcción de una casa, etcétera. Generalmente el trabajo va acompañado por festejos, comida y bebidas proporcionados por quienes resultan principales beneficiarios del emprendimiento.

## EL MUNDO SOBRENATURAL Y LA CONGREGACIÓN RITUAL

Faron (1997) sostiene que si bien para el Estado chileno la unidad social y legal de los indígenas mapuches es la reducción (comunidad), existe otra unidad mayor sin sanción legal pero de mucha importancia para la sociedad mapuche: la congregación ritual, formada por los linajes de más de una reducción que reconocen ancestros comunes.

Abarcan más de una reducción porque el sistema matrimonial mapuche es exogámico al linaje y por lo tanto los hombres contraen matrimonio con mujeres de otros linajes, permitiendo así el entrecruzamiento de linajes pertenecientes a reducciones distintas. Faron lo denomina congregación ritual porque estos linajes emparentados entre sí se reúnen en los dos ritos principales de la religión mapuche: la ceremonia de la fertilidad o *nguillatún* y los funerales de los muertos o *awn*. Para explicar esto es necesaria una breve referencia a la rica y elaborada creencia mapuche en lo sobrenatural. Faron hace notar que las creencias religiosas mapuches son acatadas por la gran mayoría de los mapuches. Hay variaciones regionales, pero son menores que las coincidencias que Faron y otros antropólogos han encontrado en el mundo mapuche.

Los mapuches tienen muchos dioses mayores y menores. *Ñenechen* es el dios de los mapuches, aunque no es considerado ni omnisciente ni omnipotente. Es el hacedor de las personas, mientras que *Ñenemapun* es el dios que hizo la tierra. Los dioses tienen esposas e hijos pero estas nunca son figuras importantes, a lo sumo acompañan y pueden influir sobre los dioses. *Pillán* es el dios de los truenos y de los volcanes, a quien los sacerdotes misioneros cristianos asimilaban como Satán. Hay numerosos dioses menores, pero generalmente están bajo el control de *Ñenechen*. Muchos relatos los describen como pícaros o caprichosos; intervienen en numerosas circunstancias, y aunque a veces se les pide que intercedan frente a *Ñenechen*, también se le pide a este que los controle. La manera de conseguir los servicios de estos dioses es mediante la intercesión de los ancestros del linaje, especialmente los jefes difuntos, ancianos y fundadores de grupos de linaje. Estos, junto con los hijos de los dioses, vuelven a la tierra para asistir y proteger a los mapuches. Es por ello que los vivos tienen que preocuparse por propiciar a los muertos, para que sus antepasados permanezcan vigilantes de sus intereses (Faron, 1997).

La gran ceremonia del *nguillatun* es la ocasión para las rogativas tanto a *Ñenechen* como a los dioses menores y a los ancestros que han sido los fundadores de los grupos de linaje. En dicha ceremonia participan familias de varios linajes vinculadas entre sí a través de los matrimonios. Es por ello que en el *nguillatun* participan familias y linajes de varias reducciones (comunidades). Esto es lo que Faron (1997) denomina la congregación ritual. El *nguillatun* es una compleja y elaborada ceremonia que se celebra anualmente, generalmente en primavera, con el fin de rogar por el buen tiempo y por la abundancia

de las cosechas y el bienestar de la congregación. Para ello en cada reducción existe un área de carácter sagrado, generalmente ubicada en un potrero, que no se puede cultivar ni pastar, donde están el altar principal (*rewe*) y el altar menor (*llañi*). A su alrededor o en los límites del potrero se construyen enramadas que servirán de refugios a las familias que concurren a la ceremonia, viniendo a veces desde lejos con sus carros, bueyes y caballos. La organización de un *nguillatun* lleva al menos un mes y está a cargo del linaje convocante. Sin embargo es importante notar que la organización de un *nguillatun* se rota anualmente entre los linajes vecinos. De esta manera, a cada linaje le toca organizar uno cada cuatro años aunque concorra anualmente a los organizados por sus vecinos.

La ceremonia en sí dura dos o tres días. Concurren las familias invitadas que reconocen ancestros comunes pertenecientes a más de una reducción, pero también pueden participar como asistentes, sin involucrarse en los ritos, personas provenientes de otros linajes no emparentados. En su transcurso el jefe del linaje convocante oficia de sacerdote (*ñillatufe*) a través de un elaborado ceremonial, ofreciendo alimentos a *Ñenechen*, los dioses menores y los ancestros. Uno de los momentos culminantes consiste en una ronda de jinetes que a toda carrera y profiriendo grandes gritos corren cuatro veces alrededor del altar mayor, con el fin de ahuyentar a los malos espíritus. Luego hay bailes rituales, en los que participan las mujeres, acompañados por la música de instrumentos propios: el silbato (*pifulka*), la *trutruca* (una trompeta larga) y el monótono batir del tambor (*kultrun*). También se sacrifican animales, se hacen donaciones y ofrendas de granos a los dioses, y abundantes rogativas. El sacerdote debe conocer estos ritos, en cuyo transcurso se emplea la lengua ancestral, y puede ser reemplazado por otro jefe de un linaje emparentado al linaje que oficia de huésped si no conoce bien los rituales. Estos ritos se repiten de dos a cuatro veces a lo largo de cada día. Entre una ceremonia ritual y otra las familias se retiran a las enramadas, donde cocinan los alimentos habituales y se visitan y se convidan entre ellos (Faron, 1997).

El segundo rito descrito por Faron en el cual se exceden los límites de la reducción es el rito funerario, al cual concurren los parientes del difunto, vecinos y amigos. En este sentido (y nuevamente como consecuencia de los matrimonios que se llevan cabo fuera del linaje) los asistentes no son sólo los que residen en la reducción del difunto. El velorio dura cuatro días y en su transcurso también hay elaborados rituales cuyo objetivo es asegurarse de que el alma del

difunto realiza adecuadamente su viaje al mas allá para ubicarse junto a sus ancestros. Entre los mapuches existe la creencia de que si esto no es así, si los ritos no son adecuadamente llevados a cabo, el alma, que ya dejó el cuerpo pero que aún no emprendió su último viaje, puede ser apresada por los espíritus del mal y empleada en contra de los parientes del difunto. Por ello los días del velorio son de una gran tensión para los familiares del fallecido, quienes hacen todo lo posible por cumplir con los rituales preestablecidos. Entre ellos también hay una ronda de jinetes para ahuyentar a los malos espíritus, y hay abundantes comidas y libaciones ofrecidas a los visitantes por los familiares del difunto. También hay largos discursos en los que se ensalzan las cualidades del fallecido y se desmenuza su genealogía, elogiando las virtudes de los principales miembros varones de cada generación, remontándose hasta sus ancestros fundadores del linaje. Finalmente, antes del entierro se dejan en el cajón un paquete con alimentos y las más preciadas pertenencias del occiso, para que lo acompañen y lo alimenten en el viaje en el que se reunirá con sus ancestros.

La ceremonia es más importante y numerosa aún cuando el que muere es un *lonko*. Faron menciona que pueden llegar a reunirse más de mil personas. Además de los miembros de la reducción asisten otros jefes de reducciones vecinas, así como jefes de otros linajes que integran la congregación ritual, acompañados por sus familias y los principales varones de cada comunidad (Faron, 1997: 87).

## CRONOLOGÍA DEL CONFLICTO MAPUCHE 1997-2000

### LA LUCHA CONTRA LAS EMPRESAS FORESTALES

Hacia 1997 el conflicto de los mapuches con la sociedad chilena ha desplazado su eje hacia las empresas forestales de la Octava, Novena y Décima región, al sur, en pleno territorio mapuche. Para ello es preciso volver hacia atrás en la historia. El Estado chileno concedió con mucha frecuencia el usufructo de los bosques de las tierras mapuches a empresas, generalmente sociedades anónimas, que explotaron la madera de una forma totalmente extractiva, sin reforestar. Llegó así un momento en que vasta regiones de otrora riquísimas tierras forestales se habían transformado en tierras erosionadas de escaso valor. Esta es en parte la explicación de los altos índices de pobreza de las comunidades mapuches. Pero durante la dictadura militar se dicta una ley por la cual el Estado chileno bonifica con un 75% del valor de la plantación a las empresas que foresten. Esto dio lugar a una masiva

inversión de empresas, mayormente extranjeras, en la compra de tierras con destino a la forestación con eucaliptus y con pinos, las dos especies preferidas por la rapidez de crecimiento y la colocación asegurada con destino a la producción de papel. De esta manera, sin haber aprendido la lección del empobrecimiento de las tierras resultante del monocultivo con trigo en mucha de las tierras del valle central, ahora se vuelve al monocultivo forestal. Pero muchas de las tierras que se compraron eran a su vez reclamadas por los mapuches, ya que según las comunidades les habían sido otorgadas mediante títulos de merced y luego les habían sido usurpadas por los terratenientes vecinos.

Las tierras forestadas de esta manera durante la década del '80 y '90 sólo produjeron más miseria en las comunidades mapuches. En efecto, muchos campesinos mapuches de las comunidades, al tener poca tierra, se veían en la necesidad de ocuparse en tareas agrícolas en las tierras de las fincas colindantes. Pero cuando estas tierras se venden a las empresas forestales la situación se modifica. La forestación emplea mano de obra en los primeros años cuando es necesario preparar las tierras, realizar los viveros y plantar los jóvenes ejemplares. Pero luego por veinte años casi no proporcionan más ocupación, salvo a las personas que se emplean como guardias forestales. Posteriormente, en la fase de la tala y procesamiento, en la que se esperaba que se volviese a ocupar mucha mano de obra, hicieron su aparición modernos equipos que cortan, desraman, trozan y sacan la corteza en forma completamente mecánica, ocupándose sólo a unos pocos obreros calificados.

Ambas situaciones, el reclamo por las tierras usurpadas y el desempleo resultante por la transformación de tierras agrícolas en tierras forestales, configuraron una situación altamente conflictiva. Hacia fines de la década del '90 muchas de las plantaciones forestales estaban próximas a la época de cosecha. Es entonces cuando las comunidades mapuches redoblan sus reclamos por la propiedad sobre las tierras. Comienzan acciones directas tratando de impedir la siembra de bosques o la tala de los mismos por parte de los obreros de las empresas forestales sobre las tierras en litigio, pero también se llega a acciones como quema de bosques y ataques a vehículos, que le confieren una nueva tónica a la lucha por las tierras mapuches. Las ocupaciones son llevadas a cabo por las familias de las comunidades directamente afectadas por las actividades de estas empresas forestales, mientras

que las acciones más violentas son ejecutadas por personas que por temor a las represalias esconden su identidad.

Pero la mayoría de las acciones de ocupación de tierras parecen estar impulsadas por dos organizaciones: el Consejo de Todas las Tierras y la más inasible Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco. La primera organización nació en el fragor de las manifestaciones por la conmemoración de los 500 años de la llegada de los españoles a estas tierras. Su principal dirigente ha tenido una participación destacada no sólo en Chile sino también en muchos foros internacionales a los cuales ha llevado la causa de los pueblos indígenas de Chile. Sus opositores lo descalifican como representante del pueblo mapuche por haber residido muchos años en el exterior. La Coordinadora de Comunidades Mapuches en Conflicto parece ser una organización que al coordinar las acciones de las comunidades tiene una estructura más horizontal, menos concentrada y más descentralizada. Según uno de sus voceros, la Coordinadora estaría integrada por unas 40 comunidades, sobre un total de 3 mil comunidades mapuches (*El Mercurio*, 28/12/2000). Tal vez haya que recordar la extrema sensibilidad que existe en Chile hacia las ocupaciones de tierras. La Reforma Agraria que se llevó a cabo durante el gobierno de Salvador Allende fue precedida por innumerables ocupaciones de tierras, muchas de ellas de mapuches que recuperaban así tierras que ellos consideraban usurpadas. Lo cierto es que para los productores, lo propietarios agrícolas chilenos, los políticos y la opinión pública en general, la ocupación de tierras es un instrumento temido y revulsivo.

Es por ello que el Acuerdo de Nueva Imperial estaba centrado en un pacto mediante el cual el gobierno se comprometía al reconocimiento del pueblo indígena, a revisar la Ley Indígena y a recuperar tierras para los mismos, pero a cambio de ello estos deberían abstenerse de realizar ocupaciones de tierras. Los mapuches cumplieron su palabra mientras sintieron que el Acuerdo de Nueva Imperial estaba vigente. Por ello, cuando hacia fines de la década del '90 se inician las ocupaciones de tierras, estas generan un fuerte impacto en la opinión pública.

Veamos la cronología de algunos de los principales conflictos que se desatan entre 1998 y 2000 a modo de ejemplo.

En abril de 1999 el periódico *El Sur* de la Octava Región reseñaba la situación de las ocupaciones: "Zonas de Conflicto: Provincia de Arauco, organizados por la Coordinadora Arauco malleco: Fundo Lleu-



Lleu, comuna de Cañete, 30 mapuches; Fundo Rucañanco, comuna de Contulo, de propiedad de Forestal Mininco, 100 mapuches realizan trabajos agrícolas; sector El Malo de Lleu-Lleu, Titúa, propiedad Minico, 50 mapuches en labores agrícolas. Provincia de Cautin y Malleco, todas las movilizaciones (excepto la de Collipulli) están coordinadas por el Consejo de Todas las Tierras de Aucán Huilcaman: Curarehue, Comunidad de Guampoe, Manuel Marillanea y Maite alto y bajo, ocupan predios de Bienes Nacionales más de 200 mapuches pehuenches; Pucón, sector de Llafenco, en terrenos de Forestal Oregón, más de 85 mapuches reclaman 300 ha; comuna de Collipulli, fundo Rucañanco de Mininco, más de 50 mapuches reclaman 1.400 ha, toma organizada por la Coordinadora Arauco-Malleco” (*El Sur*, 28/4/99).

La empresa Forestal Bosques Arauco, de capitales japoneses y norteamericanos, es una de las empresas que ha sostenido duros enfrentamientos con las comunidades mapuches. La ocupación del Fundo Cuyinco en Los Álamos, 120 km al sur de Concepción, es un buen ejemplo.

En enero de 1998 los periódicos hacen notar la situación de extrema tensión que se vive en la Araucanía al aumentar las movilizaciones para recuperar tierras que están en manos de empresas forestales. Por entonces los mapuches toman un predio de 300 ha en Lleu-Lleu, pero lo desocupan pacíficamente cuatro días después.

El 30 de enero, en una reunión de representantes de 45 comunidades mapuches en Tirúa, estos demandan la devolución de 4.600 ha del Fundo Cuyinco ubicadas en la comuna de Los Álamos que hoy es propiedad de Bosques Arauco, y demandan al gobierno una solución a los numerosos litigios por la tierra. En los meses siguientes, en un contexto de tirantez, ocurren algunas ocupaciones que se resuelven pacíficamente.

El 26 de mayo los periódicos dan cuenta de violentos enfrentamientos entre aborígenes y guardias forestales en la comuna de Los Álamos en el Fundo Cuyinco. La comunidad mapuche Fren reclama la propiedad de 1.250 ha que están en posesión de la Forestal Bosques Arauco. La comunidad ocupa parte de las tierras reclamadas y comienza a extraer madera que reclama como propia. La Forestal, a su vez, es acusada de destruir los caminos de acceso para impedirles la explotación forestal. La empresa reitera la legitimidad de su dominio y declara que impedirá la sustracción de madera. Finalmente se llega a un violento enfrentamiento, con el resultado de cinco personas heridas. El caso es llevado a los tribunales con acusa-

ciones mutuas por hurto, lesiones y daños, mientras las autoridades hacen llamamientos a la calma.

A mediados de octubre de 1998 resurge la violencia en el Fundo Cuyinco. El juez de Lebu ordena incautar la madera cortada por los mapuches. Para ello, una treintena de carabineros fuertemente armados controlan el retiro de la madera desde el interior del Fundo. Pero no contentándose con esta acción, la empresa forestal reanuda las faenas de corte con gran cantidad de maquinarias, pese a que la orden del juez sólo autorizaba el retiro de los árboles ya cortados. Ante esta situación, los miembros de la familia Fren esperaban la llegada de grupos de apoyo de la zona de Lumaco para defender lo que ellos afirman es de su propiedad (*El Sur*, 14/10/98). El Director de la CONADI, que viaja al lugar intentando una acción mediadora, denuncia haber sido amedrentado por los guardias de la forestal: "...los guardias nos azuzaron con los perros". Mientras, el mismo día, la Corte Suprema reconoce la propiedad del predio de la forestal y ordena reinscribir el Fundo Cuyinco a nombre de Bosques Arauco (15/10/98).

Al día siguiente la prensa recoge que la empresa forestal ha paralizado la explotación del bosque en litigio debido a la orden del juez de Lebu de paralizar las faenas. Pero en la madrugada, en enfrentamientos entre guardias e indígenas, resultan heridas cuatro personas. Los indígenas dicen que la empresa forestal prosiguió la extracción de madera a pesar de la orden del juez. Horas más tarde, el juez se constituye en el lugar para una inspección ocular (*El Sur*, 17/10/98).

La empresa mantiene a los trabajadores y las máquinas en el lugar y reinicia el trabajo en otro sector alegando que la orden judicial impide el trabajo sólo en 350 ha. El 21 de octubre los diarios revelan que se encontraron armas escondidas en el Fundo Cuyinco. Los guardias forestales y los mapuches se acusan mutuamente. Mientras el conflicto se encamina a ser resuelto a través de un juicio civil como lo reclaman las autoridades, el juez ordena a Carabineros el patrullaje de la zona. La decisión judicial es bienvenida por la empresa forestal para proteger a su personal de posibles agresiones o atentados, mientras que la Coordinadora de Comunidades Mapuches Arauco Malleco acusa a Carabineros de actuar como los "guardias privados" de la Forestal. En los días subsiguientes todavía se registran algunos incidentes protagonizados por miembros de la familia Fren, que intentan detener la tala autorizada por los tribunales en Fundo Cuyinco (*El Sur*, 26/10/98).

Otro conflicto que también es ilustrativo ocurre en la misma Región con la Forestal Mininco, empresa propiedad de Simson Paper y del Grupo Matte, ambas de capitales norteamericanos. Según Aucán Huilcamán, dirigente del Consejo de Todas las Tierras, esta empresa forestal tiene 80 litigios con comunidades mapuches (Barrera, 1999: 54). Algunos de ellos resultarán en ocupaciones y enfrentamientos.

En el mes de febrero de 1998 mapuches de la comuna de Purén toman el Fundo El Rincón, de propiedad de la Forestal Mininco. Esta inicia acciones judiciales, y tras once días de ocupación los mapuches lo abandonan pacíficamente al acordarse una base de diálogo con la empresa, dejando en claro que lo volverán a ocupar, esta vez con el apoyo de otras comunidades si el acuerdo no les satisface. La CONADI interviene mediando y ofrece comprar las tierras en litigio (nótese que este conflicto es contemporáneo al de Cuyinco) (*El Sur*, 19 al 27/2/98).

El 19 de abril de 1999 la prensa recoge la información que unos encapuchados atacaron a un camión de Mininco en el área en conflicto de Traiguén. Pero el 28 de julio la prensa da cuenta de que unos setenta encapuchados llevaron a cabo un ataque contra los fundos Chorrillos y Santa Rosa de Colpi en la comuna de Traiguén, provincia de Malleco. Según Carabineros, el ataque fue liderado por una ex-estudiante de teología de la Universidad Católica de Valparaíso, que ya había sido detenida en otras oportunidades.

Pero el comunicado de prensa de la Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco señala que “Forestal Mininco viola principio de acuerdo establecido con las comunidades mapuches de la zona de Traiguén: cuatro detenidos y varios heridos fue el resultado de los incidentes. Esta semana la Forestal Mininco S.A. reinició los trabajos, esta vez de forestación en los fundos Chorrillo y Santa Rosa de Colpi en la zona de Traiguén, IX región del país, rompiendo el principio de acuerdo que existía entre la empresa y las comunidades de Temulemu, Didaico y Pantano, acción que motivó la movilización de los comuneros mapuche, los que pretendieron esta mañana impedir que la empresa continuara con las faenas de plantación de pino en terrenos que ellas reclaman y que en la actualidad se encuentran en litigio. La acción fue violentamente reprimida por un contingente de 200 efectivos de fuerzas especiales de carabineros, los que, sin mediar diálogo y guardias de seguridad de la empresa forestal, replegaron a los

Mapuches –hombres y mujeres– con bombas lacrimógenas y balines de goma, deteniendo a cuatro personas”<sup>41</sup>.

En junio de 1999, el diario *El Mercurio* informa que “en la región de Bío-Bío continúan las acciones de fuerza por parte de la Coordinación Mapuche, fundamentalmente contra los predios de Mininco en la comunas de Tirúa y Contulmo. Estas se han traducido en la ocupación del fundo de Agua de Piedra, en Tirúa, y con la tala de pinos adultos en el predio La Posada de Contulmo. En el caso de fundo Cuyel, ubicado en Tirúa, grupos de mapuches apostados en el camino de acceso al predio impiden el paso de trabajadores que realizan faenas de siembra de plantaciones de pino insigne” (*El Mercurio*, 12/6/99).

A pesar de que no hay registros de prensa, posiblemente la empresa forestal haya solicitado la intervención judicial, porque unos meses después el mismo diario da cuenta de que un contingente de cuarenta efectivos de Carabineros desalojó a los ocupantes mapuches del fundo de Tirúa. En la acción es detenido el *werken* (vocero) de la Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco, José Huenchunao, quien deberá enfrentar cargos de abigeato y usurpación de propiedad privada. El detenido es trasladado a la cárcel de Lebu.

El 20 de febrero del 2000 el diario *El Mercurio* da cuenta de que en un camino en las proximidades de Temuco una camioneta de la Forestal Mininco que transportaba a tres guardias forestales fue atacada con bombas molotov, causándoles heridas graves a sus ocupantes. El diario sugiere que los atacantes “podrían ser indígenas presuntamente vinculados a la Coordinadora Arauco-Malleco”. Un mes después el juez interviniente somete a proceso al yerno del *lonko* (cacique) de la comunidad de Catriñancul por existir presunciones fundadas de ser uno de los autores materiales de la emboscada a los brigadistas de la Forestal Mininco. Seis meses después se registra un nuevo hecho de violencia. El mismo medio de prensa informa que un grupo de encapuchados incendian una camioneta de la Forestal Mininco y hieren con perdigones a cuatro trabajadores (*El Mercurio*, 21/8/2000). Dos meses después, la prensa da cuenta de nuevos enfrentamientos entre Carabineros y comunidades mapuches, esta vez motivados por la explotación forestal del fundo Alaska de la empresa Mininco en la provincia de Malleco.

La serie de ocupaciones y de ataques que recibe la empresa forestal Mininco lleva a que su Gerente General denuncie “pérdidas

---

41 Fuente: Centro de Documentación Mapuche, Ñuke Mapu (website).

que varían entre los ocho y nueve millones de dólares como consecuencia de ataques perpetrados presumiblemente por mapuches a la empresa durante el desarrollo de faenas en sitios en conflicto. El empresario ratificó que existe un desincentivo de los empresarios forestales a realizar nuevas plantaciones en los lugares donde hay conflictos con los indígenas. Incluso señaló que el año pasado las cifras de plantaciones cayeron a 30 mil ha, siendo que lo normal son 90 mil” (*La Tercera* en Internet, 14/4/2000).

#### EL CONFLICTO POR LA REPRESA HIDROELÉCTRICA DE RALCO

La empresa de electricidad ENDESA, de propiedad de capitales españoles, había planeado realizar una serie de siete represas hidroeléctricas en el curso del Río Bío-Bío en el marco de un plan energético nacional. La primera de ellas, la Represa Pangué, fue realizada sólo con la oposición de grupos ecologistas que denunciaban los impactos ambientales de la misma. Pero cuando se quiso llevar a cabo la segunda represa en Ralco, se encontraron con la oposición de las comunidades pehuenches de Ralco Lepoy y Quepuca Ralco, que serían inundadas por la represa del lago. Como forma de atenuar la oposición, la empresa compró tierras hacia las cuales se trasladaría a las comunidades afectadas. Luego encargó a un grupo de profesionales la construcción de las casas habitación y los galpones y realizó una agresiva campaña entre las familias pehuenches para que firmasen el acuerdo de permuta, por el cual cedían sus tierras a cambio de las nuevas que se les otorgarían. Aparentemente las familias sufrieron todo tipo de presiones y de promesas, lo que hizo que muchas de ellas terminaran firmando la cesión. Sin embargo, un grupo de 18 familias se negó a hacerlo, lideradas por dos mujeres, las hermanas Berta y Nicolasa Quintraman, alegando que las tierras a las que serían trasladados eran de pobre calidad y que no podrían vivir de ellas.

Durante 1998 el problema es trasladado a la CONADI, donde se realizan los informes técnicos y se analizan los estudios de impacto ambiental. Tanto el Director de la CONADI como dos de los directores nombrados por el Presidente, así como los directores indígenas, se manifiestan en contra del proyecto en el convencimiento de que la propuesta elevada por ENDESA no mantiene ni mejora la calidad de vida de las familias que deberían ser reubicadas. A mediados de año se agudiza el conflicto. Grupos de pehuenches y de ecologistas toman y cortan el camino que conduce al área de trabajos de la represa, y ENDESA

suspende los trabajos. El gobierno, totalmente comprometido con el proyecto hidroeléctrico en función del desarrollo de sus planes energéticos, removió al director y a los miembros del Directorio de la CONADI nombrados por la Presidencia y los reemplaza por personas más proclives a su posición. Se lleva a cabo así una nueva reunión del directorio en la cual, sin la presencia de los delegados indígenas y por escaso margen, se votó favorablemente la realización del proyecto.

Pero las cosas no terminarán allí. En septiembre de ese año el Arzobispo de Santiago hace un llamado al gobierno y a los pehuenches para que traten de solucionar el diferendo a través del diálogo amistoso. Un mes más tarde la prensa da cuenta de que un grupo de encapuchados protestaron con violencia en cercanías de la Universidad de Concepción contra la Central Ralco.

En mayo de 1999 se vuelven a realizar cortes de la ruta que lleva al obrador de ENDESA. El diario *El Mercurio* recoge la siguiente noticia el 17 de julio de 1999: “Por primera vez en el prolongado conflicto entre pehuenches del Alto Bío-Bío y ENDESA, las hermanas Berta y Nicolasa Quintramán, líderes de las familias de esa etnia que rechazan el Proyecto Ralco, dialogaron con un ejecutivo español de Enersis, grupo que controla la generadora. Hasta ahora la Corporación Nacional para el Desarrollo Indígena ha aprobado 70 permutas, aunque los pehuenches contrarios a Ralco aseguran que sólo 18 familias han confirmado el acuerdo, ya que muchas han desistido y tras comprobar que varias promesas hechas por ENDESA no figuraban en los documentos definitivos que tenían que firmar. El *werkén* (mensajero) pehuenche Agustín Correa afirmó que la empresa constructora Besalco ha continuado trabajando en el Alto Bío-Bío y que ya están terminados dos túneles de la futura represa. En su opinión se trata de faenas ilegales, dado que sólo 18 de las 91 familias afectadas han firmado las permutas”.

Pero la batalla se trasladará ahora a los juzgados. El 11 de septiembre de 1999 ENDESA paraliza los trabajos de construcción de la represa como consecuencia de una orden del Sexto Juzgado Civil de Santiago a partir de una querrela iniciada por la hermanas Quintramán en 1997. Recién en abril del año siguiente se definirá la batalla legal. La Cámara de Apelaciones falla a favor de ENDESA, y a pesar de nuevas apelaciones que interponen las querellantes, la justicia mantiene el fallo en varias instancias. El 8 de abril de 2000 se reanudan las obras de la represa. A pesar de las amenazas de nuevas movilizaciones, la actitud del nuevo Presidente, Ricardo Lagos, fue de no intervenir en un conflicto que, según su parecer, era de la esfera judicial.

Dos son los hechos a resaltar en el caso de la Central de Ralco. Por un lado que, como dijera el ex Director de la CONADI, Domingo Namuncurá (citado por Bengoa, 1999), esta situación de desalojo y reubicación de las familias pehuenches a través del engaño, las falsas promesas y la coerción se puede producir sólo porque eran familias indígenas. Pero como también destaca el mismo autor, lo distintivo de este episodio, y que marca una situación nueva, es que unas pocas familias indígenas lograron paralizar el mayor emprendimiento hidroeléctrico del país por varios años, suscitando la simpatía y el apoyo de buena parte de la sociedad chilena y de la comunidad internacional. Porque eran indígenas. Porque hay una nueva sensibilidad con respecto a la cuestión indígena y los atropellos que han sufrido durante centurias. Años atrás el episodio hubiese pasado desapercibido y hubiese sido tratado como uno de los tantos casos de desalojo de dos comunidades pehuenches.

#### LA ACTITUD GUBERNAMENTAL

La actitud del gobierno chileno frente a la radicalización del conflicto mapuche fue variando con el tiempo a pesar de mantener ciertos rasgos básicos. Durante las primeras ocupaciones de tierras ocurridas en 1997 y 1998 el gobierno intenta negociar, dando participación a la CONADI. Pero la presión de los grupos políticos de derecha, de las organizaciones gremiales de los grandes productores, de las empresas forestales y de su organización, la CORMA, influye en que el gobierno adopte una actitud cada vez más “legalista” enviando a los Carabineros para recuperar los fundos ocupados mediante el desalojo por la fuerza, y solicitando la intervención de la justicia para procesar a los ocupantes.

En abril de 1999, mientras recrudecen las ocupaciones de tierras, el senador Carlos Bombal, de la derechista UDI, luego de reconocer la situación de pobreza de la población en las comunidades mapuches, manifiesta que “el verdadero origen [de la violencia] está en la influencia política de la ultraizquierda y en el surgimiento de una violenta dirigencia mapuche. ...Precisó que actualmente son cuatro las Coordinadoras: Comunidades Mapuches de la Provincia de Arauco, Comunidades Mapuches de Malleco, Comunidades de la Región Metropolitana, y la Internacional de Mapuches, todas ellas financiadas desde el exterior por la Fundación Relmu”. En el mismo artículo periodístico se continúa luego diciendo: “Desde otra perspectiva, los senadores de Renovación Nacional Sergio Diez, Mario Ríos y Julio

Lagos y el senador de Roberto Muñoz Barra (PPD)... afirman que no hay infiltración política en el movimiento de los mapuches, sino que lo que existe es un sector radicalizado de comuneros mapuches jóvenes que representan tendencias mucho más anárquicas que cualquier partido político del país. En su opinión, la actuación de estos grupos es mucho más riesgosa, porque tratan de extender la intención de un reconocimiento constitucional como pueblo” (*El Mercurio*, 4/4/99).

Por su lado, la poderosa Sociedad Nacional de Agricultura, entidad que nuclea a los grandes empresarios y terratenientes rurales, reitera la profunda inquietud que existe en el sector ante los graves acontecimientos instigados en el sur del país por algunas comunidades mapuches, que la entidad ha catalogado como ‘terrorismo rural’. En carta dirigida al presidente de la Corte Suprema, la SNA señaló que “a la creciente inseguridad personal que se cierne sobre los agricultores de las zonas afectadas, sus familias y trabajadores, se suman los graves daños a la propiedad privada a través de atentados contra inmuebles, maquinarias y plantaciones” (*El Mercurio*, 10/12/99).

La entidad que agrupa a las empresas forestales, la Corporación de la Madera, mantiene que no son estas las responsables del conflicto con los mapuches (*El Sur*, 10/10/98), sino toda la sociedad chilena que mantiene una deuda histórica con ellos, y que por lo tanto es el gobierno quien debe dar respuesta a sus reclamos y no las empresas madereras que han comprado legalmente las tierras que ocupan. Denuncian la permisividad oficial (*El Sur* 22/4/98), y cuando un grupo de mapuches ocupa la Sede Regional de la CORMA, obtienen el desalojo mediante una enérgica y rápida acción de fuerzas especiales de carabineros, y la detención de nueve mapuches que son pasados a la fiscalía militar (*El Sur*, 10/10/98). Un año después el Presidente de la CORMA califica de “ineficientes, insuficientes y débiles” las políticas del gobierno en relación al conflicto mapuche (*El Sur*, 3/8/99).

A fines de 1999 el Director de la CONADI manifiesta que el gobierno del recientemente elegido Ricardo Lagos mantendrá la política de su antecesor, Eduardo Frei, en materia de relacionamiento con los mapuches. Esta consistirá en “dialogar con las comunidades por sus demandas de tierras, educación y salud... y dejar que los tribunales de justicia resuelvan los problemas que generen aquellos que opten por métodos violentistas como tomas de terrenos, emboscadas o incendios. Entre estas últimas, aunque de representación minoritaria, se encuentra el Consejo de Todas las Tierras y la Coordinadora Arauco-Malleco” (*El Mercurio*, 16/12/99).



El gobierno de Frei cargó con la responsabilidad de la ruptura del Acuerdo de Nueva Imperial. Sus actitudes fueron vacilantes, y las propuestas de solución débiles y de poca efectividad. El gobierno de Ricardo Lagos parece definir con más claridad una política que combina el diálogo con las organizaciones mapuches, segregando y aislando a las entidades que considera “radicalizadas”, con medidas de alivio y combate a la pobreza (políticas sociales focalizadas en la población mapuche) y una limitada acción en materia de tierras. Por otro lado, no duda en convocar a los Carabineros para desalojar a los ocupantes y asegurar el respeto a la propiedad, sin reconocer los títulos que los mapuches dicen poseer sobre las tierras litigadas. “Judicializa” así el conflicto, deteniendo y procesando selectivamente a los dirigentes de las organizaciones mapuches que lideran las ocupaciones.

A poco de iniciado su mandato, Lagos convoca una Comisión integrada por representantes de los pueblos originarios, empresarios, distintas iglesias y el gobierno para que elaboren un documento con recomendaciones de acción sobre la situación de los pueblos indios. Después de un par de meses de trabajo, dicha Comisión produce un documento. Sobre dicha base el presidente Lagos presenta su “Carta a los Pueblos Indígenas de Chile” señalando su compromiso con los habitantes originarios del país e invitándolos a trabajar juntos para “la gran tarea de construir una nueva época en Chile: he decidido crear una Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato a la que pediré que nos ayude a hacer una nueva política de país, que aborde los problemas fundamentales de los pueblos indígenas y el reconocimiento de nuestra diversidad, que ponga justicia y ordene las relaciones de los pueblos originarios con la sociedad global” (*El Sur*, 1/6/2000).

Como parte de su nueva propuesta Lagos se compromete a entregar 150 mil hectáreas en el sexenio de su mandato. Ya en el transcurso de ese mismo año realiza algunas entregas: 820 ha a tres comunidades mapuches en Purén (*El Sur*, 5/10/2000), y 299 familias indígenas que fueron beneficiadas por los subsidios para compra de tierras de la CONADI (*El Mercurio*, 2/5/2000).

Por otro lado, en junio del mismo año se anuncia que diez mil pequeños agricultores (en su mayoría mapuches) serán beneficiados con un bono de cien mil pesos para adquirir insumos agrícolas, fertilizantes y semillas, para enfrentar de mejor forma las pérdidas que sufrieron por las extemporáneas lluvias del verano último (*El Mercurio*, 15/6/2000).

Por su parte, mientras los Carabineros detienen gradualmente a más activistas, el Poder Judicial procesará también en forma creciente. Así, en 1999 los registros periodísticos detectan veintiséis detenidos por el caso Ralco, y cuatro detenidos y procesados por las tomas de Traiguén en el mes de febrero. En junio, el procesamiento a trece comuneros por el asalto y quema a camiones de la forestal Mininco. En julio se detiene a seis mapuches luego de un confuso episodio durante el transcurso de una reunión en la que se agrede al Director de CONADI.

En el año siguiente, las detenciones y procesamientos se incrementan tanto por que hay una mayor actividad y virulencia de las acciones de los mapuches, como porque hay mayor determinación del gobierno de responder a dichas acciones con la detención y el procesamiento posterior. Así, en marzo de 2002 se detiene a José Maril, dirigente de la moderada Identidad Territorial Lafquenche, se somete a proceso a uno de los sindicatos como autores de la emboscada y ataque con bombas incendiarias a una camioneta de la forestal Mininco, y se detiene y somete a proceso a José Huenchunao, dirigente de la Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco, en el acto de ocupación de un fundo en Tirúa. El mes se cierra con la noticia de que “el ministro Lenín Lillo informará esta mañana a la Corte de Temuco de la toma del Juzgado de Collipulli, realizada por 32 mapuches en protesta por la detención de los lonkos Luis Ancalaf y Ariel Tori y el comunero Pedro Maldonado donde él y la jueza Georgina Solís fueron retenidos, mientras que Carabineros arrestó a 14 personas, entre ellas el líder de la Coordinadora Arauco-Malleco, Victor Ancalaf” (*El Mostrador*, 29/3/2000). Sin embargo, uno de los temas que más preocupan es la anunciada aplicación al conflicto con los mapuches de la Ley de Seguridad Interior del Estado, concebida para castigar delitos de índole política (*El Sur*, 20/3/2000).

En el mes de abril, ocho mapuches reclusos en la cárcel local entre los cuales está el líder de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto, Victor Ancalaf, iniciaron una huelga de hambre “en reclamo por supuestas irregularidades en la tramitación de sus causas” (*El Mercurio*, 22/4/2000).

En junio son desalojados los mapuches que habían ocupado la sede de la CONADI, resultando detenidos treinta de ellos (*El Mostrador*, 9/6/2000).

En noviembre, “Carabineros puso a disposición de la Fiscalía Militar de Valdivia a cuatro mapuches de la comunidad Calfulef-

Huenuman y tres estudiantes de la Universidad de Los Lagos, detenidos ayer tras violentos enfrentamientos registrados en el desalojo del fundo forestal Tringlo... en la comuna de Lago Ranco” (*El Mercurio*, 22/11/2000).

Al mes siguiente, mientras siete comuneros son detenidos en el desalojo de un fundo ocupado en el cerro Tren-Tren por veinticinco comuneros indígenas, otros tres son detenidos durante el desalojo de más de un centenar de mapuches del Fundo El Carmen que trataban de impedir la tala de bosques realizada por trabajadores forestales protegidos por la policía uniformada (*El Mercurio*, 22 y 27/12/2000).

Mientras ocurren estas acciones, el gobierno instrumenta la “Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato”, apostando a las comunidades mapuches políticamente más moderadas y dejando afuera a la Coordinadora de Comunidades en Conflicto, mientras que el Consejo de Todas las Tierras duda respecto de integrarse. En las elecciones municipales que se llevaron a cabo en noviembre del 2000, 98 candidatos de origen mapuche se presentan a competir por los votos de los 336 mil electores mapuches en 54 comunas del sur del país. Mientras algunos dirigentes y organizaciones optan por un camino de conflicto, sin duda otros optan por un camino que ya ha sido probado en épocas anteriores por este pueblo, como se historió mas atrás, que es el de competir en la vía electoral.

En síntesis, las primeras ocupaciones de tierras ocurridas luego de la ruptura del Acuerdo de Nueva Imperial parecen haber sorprendido al gobierno del presidente Frei, quien no atina a estructurar una respuesta apropiada. Durante el primer año del gobierno del presidente Lagos pareciera que sí hay una política. Esta consistiría en llevar adelante políticas sociales dirigidas a las comunidades mapuches para aliviar las situaciones de pobreza, y una política de tierras que, si bien no es suficiente para las organizaciones mapuches, implica un compromiso mayor que los anteriores. Por otro lado se exige total respeto a las leyes vigentes, no tolerando las ocupaciones y procesando a quienes las promueven.

## EL MOVIMIENTO SOCIAL DEL PUEBLO MAPUCHE

En un capítulo anterior se discutieron las distintas definiciones de lo que se entendía por movimiento social. Melucci (1996) aplicaba una definición restrictiva que ponía el énfasis en tres aspectos: la existencia de una fuerte solidaridad entre sus miembros; la existencia de un

conflicto; la trasgresión de los límites del sistema por el mismo desarrollo del conflicto. Pérez Ledesma agregaba que lo que da unidad y coherencia a un movimiento es “la participación de sus miembros en algunas actividades del movimiento y sobre todo la aceptación de un conjunto de creencias generalizadas a las que suele acompañar la aparición de una conciencia de grupo” (Pérez Ledesma, 1994: 61).

De acuerdo a las definiciones anteriores, es posible afirmar que los mapuches conforman un movimiento social. La identidad étnica remite a fuertes lazos de solidaridad; la lucha por la tierra de las comunidades constituye el eje del conflicto; el reconocimiento como pueblo que los mapuches reclaman es la esencia de su demanda por la autonomía.

¿Quiénes son parte de este movimiento social? Por una parte parecería sencillo definirlo: todos aquellos que son mapuches. En las páginas precedentes se ha explicado extensamente la estructura de la sociedad mapuche. Existe un conjunto de agregados sociales que conforman el entramado de dicha estructura: desde la familia que tiene a su cargo la organización económica, laboral y social básica, los linajes (*kupalme*) que son un conjunto de familias que reconocen un ascendiente común, las reducciones o comunidades que se constituyen dentro de un límite geográfico preciso conformado por uno o más linajes (el *Lof*) y la congregación ritual que reúne a un conjunto de linajes emparentados que pertenecen (o no) a más de una reducción.

Pero he aquí que esta identificación puede no ser tan simple. Esta definición es relativamente sencilla y útil para los mapuches que viven en comunidades rurales. O aún para los que viviendo en las ciudades pueden rastrear sus orígenes hasta aquellas. Pero no lo es tanto para la mayoría que vive en las ciudades. Según el Censo de 1992, los mapuches mayores de 14 años en Chile son alrededor de 900 mil personas sobre un total de 14 millones de habitantes. De ellos, sólo 250 mil viven en comunidades rurales. De los que viven en ciudades, 500 mil habitan en Santiago (Bengoa, 2000).

Otra señal identificatoria fuerte es la lengua mapuche (el *mapudungun*). Existe un nexo íntimo entre la cultura de un pueblo y su lengua. La cultura es principalmente una forma de comunicación, y la lengua ocupa un lugar importante aunque no es la única forma de comunicarse. Cuando un pueblo pierde su lengua pierde también parte de su cultura, pierde la habilidad de comunicarse en forma hablada. La lengua transmite no sólo contenidos sino una cosmovisión particular del mundo. Es por ello que el proyecto de dominación

de los indígenas que se instrumenta hacia fines del siglo pasado incluía la enseñanza obligatoria de los niños, criollos e indígenas sólo en idioma castellano. La lengua del mapuche el *mapudungun* no sólo no se enseñó sino que se persiguió, y se menospreció y se prohibió su uso, particularmente en las escuelas. La ley orgánica de enseñanza primaria y normal de principios de siglo universalizó e hizo obligatoria la enseñanza de la lengua castellana.

Esta perspectiva de la enseñanza predominó hasta hoy, a pesar de que durante el siglo XX varios educadores y políticos mapuches y las varias Sociedades Araucanas insistieron en la necesidad de que se enseñase el *mapudungun* en las escuelas (González y Montero, 1998).

El impacto de estas políticas colonizadoras es bien ejemplificado por un estudio reciente de dos comunidades mapuches: en una de ellas, Collico, un 64% de la población es mapuche, pero sólo el 37% sabía hablar el *mapudungun*. En la otra comunidad, Lleu-Lleu, con 85% de población indígena, el 71% lo hacía. Sin embargo, saber hablarlo no necesariamente significa usarlo. La mayoría de los interrogados reconoció que aún aquellos que sabían hablar el *mapudungun* sólo lo usaban en contextos tradicionales, en el ámbito doméstico o de la comunidad (por ejemplo en los rituales y ceremonias.) El lenguaje cotidiano, y aún el lenguaje público usado en estas comunidades, era el castellano (González y Montero, 1998).

A pesar de ello es preciso reconocer que la existencia de una lengua propia es un elemento de la cultura mapuche que sirve como elemento de cohesión. El reconocimiento de la lengua y su enseñanza han sido reivindicados por las principales organizaciones de los mapuches. Por ello, bajo el impulso de los acuerdos logrados en Nueva Imperial a principios de la década del '90, el gobierno de la Concertación Nacional instrumentó un conjunto de medidas que ha permitido iniciar la enseñanza del *mapudungun* en forma experimental en algunas escuelas. Sin embargo, uno de los principales obstáculos para la enseñanza consiste en la oralidad de la lengua. Los mapuches eran ágrafos, y aunque hoy existen dos sistemas para escribir el *mapudungún*, la gráfica no está extendida y sólo pocas personas la dominan.

Es posible afirmar que la identidad mapuche es sentida en distintas formas o con distintas intensidades, y distinguir analíticamente diversas categorías. Están aquellos que niegan su identidad por diversas razones: porque se mezclaron con criollos, porque viven en contextos sociales no mapuches (en las ciudades, o en pueblos donde las tierras de las reducciones ya han pasado a manos no mapuches, como

en el valle central cerca de Santiago), o por razones ideológicas (el desprecio inculcado a todo lo mapuche). Luego, aquellos que siendo mapuches y viviendo en comunidades mapuches reconocen serlo pero no se identifican fuertemente con sus orígenes: más bien piensan que su identidad mapuche forma parte del pasado, y están ansiosos por integrarse a la cultura criolla y por asimilarse a la sociedad no mapuche en la que viven. Como queda claro a partir de las entrevistas hechas por González y Montero (1998) en Lleu-Lleu y Collipulli, esta actitud encuentra más adhesión entre los jóvenes. Luego están los que viviendo en comunidades mapuches o aún fuera de ellas se reconocen mapuches, cultivan sus costumbres, y tratan de educar a sus hijos en ellas. Por último, hay un grupo de mapuches que, viviendo en comunidades o no, han hecho de la identificación como mapuches el sentido de su vida: son los militantes del movimiento social y los que pertenecen a las organizaciones del pueblo mapuche.

Tal vez sea conveniente diferenciar también distintos tipos de militantes. Por un lado están aquellos dirigentes que rescatan las formas de organización y las jerarquías tradicionales de la etnia mapuche fuertemente estructurada en torno a los linajes y a las personas identificadas como las cabezas de los linajes. Esta tendencia parece ser la seguida por la Coordinadora de Comunidades en Conflicto, organización descentralizada creada en 1995. Un dirigente decía: “la línea que estamos marcando nosotros a través de la Coordinadora (de la Comunidades Mapuches en Conflicto) cuenta con el rol protagónico de los *lonkos* y de los *werkenes*, los voceros; ellos son los que articulan, en conjunto con las comunidades, nuestra tarea”. Sin embargo, para movilizar a la organización se ha buscado como militantes a jóvenes dirigentes de las comunidades, de preferencia que tengan al menos una formación técnica (Barrera, 1999: 109).

Por otro lado, también hay dirigentes que provienen de los estratos profesionales y de entre empresarios y comerciantes más acomodados que se enorgullecen de ser de ascendencia indígena. O líderes que han hecho de la militancia en organizaciones internacionales o en ONGs su campo de acción. Pero tal vez un signo común a todos ellos y que los diferencia de los liderazgos indígenas de las décadas pasadas es que la dirigencia indígena del '90 tiene más años de educación formal, se mueve fácilmente tanto en el ámbito rural como en el medio urbano, es capaz de sentarse a negociar mano a mano con dirigentes políticos y funcionarios estatales, y se vincula fluidamente con sus pares de otros países o con funcionarios de organismos interna-

cionales. Como ha hecho notar Bengoa (2000), el objetivo de estos nuevos dirigentes no es la integración a la sociedad chilena sino su diferenciación, siendo su principal ventaja el hecho de que dominan los códigos tanto de la sociedad chilena como de la mapuche.

#### LAS ORGANIZACIONES DEL MOVIMIENTO SOCIAL

Existe un denso entramado institucional que vehiculiza la participación social y política del pueblo mapuche: tanto las asociaciones comunales o vecinales que son entidades organizadas bajo las leyes del Estado chileno con fines específicos, como las organizaciones de carácter reivindicativo que agrupan a varias comunidades o a comuneros de varias comunidades. De estas últimas, tres organizaciones parecen ser las más importantes para el movimiento social: la Coordinadora de Comunidades en Conflicto de Arauco-Malleco, el Consejo de Todas las Tierras, y la Identidad Lafquenche.

La razón de la elección de estas tres organizaciones no proviene de su representatividad en términos numéricos. Uno de los dirigentes de la Coordinadora ha reconocido que representan a sólo cuarenta comunidades mapuches. De las otras dos no se sabe con certeza. Pero tampoco hay una organización que pueda arrogarse la representación de todo el pueblo mapuche: están organizados en varios cientos de asociaciones comunales sin que exista una organización mayor que las reúna.

Mas bien el interés en estas tres organizaciones proviene de sus propuestas, enmarcadas en la reivindicación de la autonomía del pueblo mapuche dentro de un Estado pluriétnico, retomando así las propuestas de la vieja Federación Araucana. También por sus propuestas tácticas, basadas en el reclamo de las tierras usurpadas pero ya no sólo a través del diálogo y los reclamos judiciales, sino también presionando a través de las ocupaciones de tierras, y por sus tácticas movilizadoras, que incluyen las manifestaciones, los actos públicos, las marchas a pie y las ocupaciones de edificios públicos. Por último, porque comprendiendo la nueva etapa del capitalismo globalizado recurren a los foros internacionales y a la presión de organizaciones y organismos internacionales para apoyar sus demandas.

Tampoco es ajena a la elección de estas organizaciones las propias definiciones del adversario. En un cónclave llevado a cabo entre el presidente y sus ministros a raíz de la ola de ocupaciones que agitaron al país en 1999, la prensa destacaba que entre las conclusiones de

dicha reunión se aseveraba que “...detrás de las acciones de fuerza y las múltiples tomas de la última semana, hay dos organizaciones: la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco y el Consejo de Todas las Tierras” (Barrera, 1999: 131).

Sin embargo, es preciso recordar que las formas arriba enunciadas no son las únicas formas de participación social y política de los mapuches. Como se intentó dejar claro a lo largo del relato histórico realizado, los mapuches participaron intensamente en la vida política y social del país a través de y perteneciendo a organizaciones civiles de la sociedad chilena tales como partidos políticos, movimientos campesinos u organizaciones sindicales. En ellos siempre hicieron valer su condición de etnia diferente, haciendo incorporar a los programas y a las reivindicaciones de dichas organizaciones los reclamos específicos del pueblo mapuche, pero subordinándose a la estrategia general de la organización mayor a la cual pertenecían. En este sentido la cuestión étnica siempre quedó relegada frente a la estrategia de los partidos políticos o la cuestión de clase. En esta nueva etapa del movimiento social del pueblo mapuche y de las organizaciones que lo integran –y por ello se puede hablar de una nueva etapa, *la cuestión étnica es la que define la estrategia del movimiento*.

#### LOS RECURSOS MATERIALES

El pueblo mapuche tiene una base territorial importante constituida por las 2.900 comunidades que se reconocen como tales. Si bien es cierto que en muchas de ellas se encuentran los índices de pobreza mayores, también es cierto que las tierras que poseen en las reducciones les sirven no sólo de sustento material sino también como base de su vida espiritual y simbólica. Es la pertenencia a una comunidad y a un linaje lo que define el ser mapuche. Por otro lado existe una capa de empresarios, comerciantes y profesionales de origen mapuche que también pertenecen al movimiento social. Estos contribuyen con recursos materiales y con las habilidades propias de su formación.

A lo largo del siglo XX muchos mapuches participaron en la vida política del país incorporándose a los partidos tradicionales y ocupando cargos de representación desde los cuales defendieron los intereses de su colectividad. Siempre hubo fracciones de los mapuches que participaron bajo los gobiernos de cualquier signo. En épocas recientes, fueron izquierdistas bajo el gobierno de la Unidad Popular y participaron activamente de las tomas de tierras de la déca-



da del '60 y de la Reforma Agraria. Luego el gobierno militar reprimió brutalmente a los activistas mapuches, pero hubo otros grupos que apoyaron abiertamente a la dictadura de Pinochet. Se podría decir que las características del movimiento social permiten que distintas "alas" del mismo apoyen alternativamente a uno u otro gobierno sin perder de vista los objetivos del conjunto: obtener de la sociedad chilena su reconocimiento como pueblo.

En las últimas dos décadas el pueblo mapuche ha obtenido el apoyo de una serie de ONGs y redes de solidaridad tanto dentro como fuera del país. En lo interno hay organizaciones como *Treng-Treng*, que se define como una corporación de comunicaciones y desarrollo del pueblo mapuche. Creada en 1990, con sede en Temuco, dice responder a la carencia de una estructura comunicacional de la cultura mapuche (Barrera, 1999: 63). Otro ejemplo es el menos conocido grupo *Pegún Dugún*, organización estudiantil mapuche de la Universidad de Concepción a la cual se la acusa de liderar grupos violentistas (Barrera, 1999: 67).

Pero tal vez una de las cuestiones más interesantes es el apoyo que el pueblo mapuche ha ganado en el exterior del país. Por un lado en Internet existe una profusa documentación sobre el pueblo mapuche, su situación, sus reivindicaciones, sus reclamos. Por otro lado existen grupos de activistas mapuches en distinta partes del mundo, pero principalmente en los países europeos como consecuencia de la emigración forzada durante la represión pinochetista. Estos grupos alimentan la red virtual y también realizan múltiples actividades concretas de difusión y defensa. La Red Internacional de Apoyo a las comunidades mapuches ha presentado un informe al juez Baltasar Garzón de España, quien es además Presidente de la Comisión Internacional de Defensa de los Pueblos Indígenas. También se han hecho muchas presentaciones ante la ONU y ante organizaciones de Derechos Humanos (Barrera, 1999: 84). Todas estas actividades han destacado la situación y los reclamos del pueblo mapuche, obligando al gobierno chileno, signatario de muchos acuerdos internacionales, a prestar más atención a sus reclamos.

#### LOS ADVERSARIOS

En la medida en que uno de los ejes del conflicto de los mapuches es la recuperación de las tierras usurpadas por los *winkas*, aquellos que las detentan se convierten en los principales adversarios. En los últi-

mos años el adversario por excelencia son las empresas forestales que bajo las leyes de subsidio del gobierno militar compraron miles de ha, algunas de ellas tierras reclamadas por los mapuches: al concentrar y reunir nuevamente grandes extensiones de tierras que otrora estaban fragmentadas en múltiples propietarios, se han convertido en un blanco fácil de los reclamos mapuches.

Adversarios también son aquellos sectores de la sociedad chilena que niegan los derechos del pueblo mapuche, los que bajo distintas formas de racismo los desprecian, los relegan, niegan sus derechos y aún su existencia como pueblo. Pueden ser los parlamentarios que se han negado a reformar la Constitución para reconocer a Chile como una sociedad pluriétnica, los políticos que no cumplen con los acuerdos pactados en Nueva Imperial, los carabineros que reprimen con saña y violencia desproporcionada las ocupaciones, los jueces que interpretan las leyes sesgadamente y no reconocen los títulos de merced, los propietarios de tierras que aprovechándose del analfabetismo les hacen firmar papeles fraudulentos para quedarse con las tierras mapuches, las empresas como ENDESA que con sus proyectos de obras hidroeléctricas han anegado tierras de los comuneros, aquellos maestros que menosprecian a los niños que hablan mapuche o se niegan a colaborar con los programas de educación bilingüe, etcétera.

## LOS CONFLICTOS

De los diez millones de hectáreas que los mapuches controlaban al sur del Bío-Bío antes de la guerra de conquista iniciada en 1881, el Estado chileno les otorgó unas 500 mil hectáreas con títulos de merced “y los dejó ocupando otro tanto en Osorno y Valdivia sin protección alguna” (Bengoa, 1999: 61). En un siglo muchas tierras fueron usurpadas, y la población rural se duplicó, sin contar los 650 mil que viven en las ciudades. Por lo tanto, es claro que un importante conflicto que los mapuches sostienen con la sociedad chilena es por la tierra. A este reclamo en los documentos más recientes se le adscriben otras reivindicaciones conexas, como la indemnización a las comunidades por los daños causados a los ecosistemas por la tala indiscriminada de las especies forestales autóctonas y la suspensión de las plantaciones de pinos y eucaliptus.

También se reclama por la suspensión de los megaproyectos hidroeléctricos o de infraestructura vial que afectan principalmente tierras mapuches: no sólo para preservar tierras productivas para las

comunidades rurales, sino también porque en algunos casos están involucrados espacios sagrados o rituales.

Por lo tanto es posible sostener que, a diferencia de los reclamos campesinos (o de cuando los indígenas se disfrazaban de campesinos<sup>42</sup>) centrados en la tierra como factor productivo, el reclamo actual es por territorios que incluyen a la tierra como medio de producción pero que también al espacio en el cual existen ecosistemas de los cuales los indígenas recogen alimentos, extraen leña y plantas medicinales, obtienen materiales para sus viviendas y artesanías, utilizan las aguas de ríos y lagos en los que pescan y extraen productos varios, y en donde se encuentran los lugares donde están enterrados sus antepasados y se ubican los espacios sagrados y rituales. De esta manera, en los reclamos actuales centrados en la autonomía territorial se hace coincidir al reconocimiento y respeto por los indígenas con la protección ambiental y el equilibrio ecológico (Bengoa, 2000).

Hay un rechazo a las organizaciones locales basadas en la institucionalidad impuesta por el Estado chileno –asociaciones vecinales, sindicatos, partidos políticos– y un fuerte reclamo de respeto de la institucionalidad del pueblo mapuche, sus jerarquías internas, su estructura institucional y el respeto al *Lof*.

Como era de esperar dada la concentración de situaciones de pobreza en las comunidades mapuches, se reclaman planes de desarrollo y recursos estatales para proporcionar empleo y aliviar la pobreza, llegando a reclamar que el Estado invierta en ellos el 7% de los recursos. Se reclama la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas que supere a la actual CONADI.

Asimismo se reclama no sólo una educación bilingüe sino también el derecho a planificar la educación y a administrar su ejecución en coordinación con el Ministerio de Educación chileno.

## LA UTOPIA

Para el movimiento mapuche, el reconocimiento de su existencia como pueblo diferenciado de la sociedad chilena es hoy un reclamo de mayor fuerza que la devolución de las tierras usurpadas. Esto diferencia al actual movimiento de los reclamos agraristas campesinos de las

---

42 “[los mapuches] han demostrado poseer una extraordinaria capacidad para la negociación política pues han sabido unir...la cuestión étnica con la cuestión social. De acuerdo a las circunstancias han desdoblado su personalidad apareciendo en la escena a veces como campesinos, a veces como indios y, cuando las buenas condiciones se dan, como ambos a la vez”, (Mires, 1991: 95).

décadas del cincuenta y del sesenta, de los cuales los mapuches eran actores principales<sup>43</sup>.

El movimiento mapuche reclama el reconocimiento constitucional como pueblo y por lo tanto el reconocimiento de que Chile es una nación pluriétnica, por la existencia no sólo de mapuches sino también de aymaras, pascuenses, atacameños, etcétera.

La idea central es la reivindicación de un estatuto de autonomía y autodeterminación en lo que fuera el territorio histórico del pueblo mapuche del Bío-Bío al sur. En dicho territorio se reconocería la existencia y la convivencia de dos pueblos: el mapuche y el chileno, cada cual con su propia identidad y cultura. Aunque posiblemente la idea de la autonomía sea todavía poco precisa, en ese territorio se reivindican los derechos fundamentales: “la autodeterminación, la propiedad de las tierras, el reconocimiento de nuestras instituciones tradicionales, que sustentan nuestra cultura, el reconocimiento del *Lof*, en base a la práctica y concepción cultural mapuche, y el derecho a ejercer y practicar nuestra justicia y las normas que regulan la vida al interior de cada *Lof*” (Consejo de Todas las Tierras, citado por Barrera, 1999: 160).

Para lograrlo se reconoce la necesidad de que se elabore una nueva Constitución política del Estado chileno que permita establecer una “nueva relación que surja del reconocimiento y respeto recíproco [que] nos encaminará a construir y definir el futuro de una sociedad diferente, más justa y solidaria y humana, capaz de aceptar la diversidad y una que nos encamine a crear una nueva cultura, una nueva mentalidad, basada en la aceptación y la tolerancia cultural” (Consejo de Todas las Tierras, citado por Barrera, 1999: 166).

---

43 Darcy Ribeiro en su libro *Las Américas y la Civilización* transmite fielmente la imagen sesentista de que los mapuches eran un pueblo sojuzgado y deteriorado por la miseria y cuya única redención provendría de la lucha como campesinos: “Los araucanos de hoy están integrados en la economía de las regiones en las que sobreviven como su contingente más miserable. Se distinguen de los campesinos chilenos principalmente por la conservación de su lengua materna, hablada por lo general nada más que en el ámbito doméstico y por la autoidentificación étnica como indígenas. Vale decir, como gente que no sólo se juzga sino que es considerada y tratada como diferente e inferior por parte del chileno común. A través de siglos de opresión retrogradaron a una cultura de la pobreza, y perdieron el orgullo étnico que ostentaban antiguamente por haberse tornado incompatible con su posición social: la de estrato más pobre de las capas más desheredadas del campesinado chileno. Los que conservan un trozo de tierra comunal tienen, no obstante, sobre el *inquilino* y el *roto* comunes, el privilegio de poder escapar periódicamente a la explotación latifundista refugiándose en la comunidad tribal. Este refugio, sin embargo, apenas aplaza su destino final que es la inmersión en el submundo de los *rotos* como parte indiferenciada, y *del que podrán emerger con una revolución social que vuelva las condiciones de vida de todos los campesinos chilenos deseables de ser vividas*” (las cursivas son nuestras), Darcy Ribeiro, *Las Américas y la Civilización*, Tomo 2, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, Argentina, 1969, pp: 272-273.

## CAPÍTULO V

# “CUANDO LO PRIVADO ES POLÍTICO”: EL MOVIMIENTO DE MUJERES AGROPECUARIAS EN LUCHA DE ARGENTINA<sup>44</sup>

### INTRODUCCIÓN

El debate sobre las formas actuales de articulación de intereses colectivos, así como las formas de expresión de conflictos en la sociedad del siglo XX, abarca manifestaciones de distinta naturaleza. El Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha (MMAL) que surge en la pampa argentina a mediados de la década pasada puede ser considerado un caso de emergencia de la nueva protesta social agraria en este país. Tiene la particularidad de ser un movimiento de mujeres convocado inicialmente en torno a una reivindicación concreta no específicamente de género –la injusticia del endeudamiento de los pequeños y medianos productores– con el objetivo de defender la tenencia de la tierra. Tanto el proceso de configuración del movimiento como la modalidad de la confrontación y la evolución del repertorio de sus reivindicaciones lo sitúan en un lugar distinto al de los “tradicionales” y los “nuevos” movimientos sociales, así al de los más conocidos movimientos de mujeres.

---

44 Este capítulo fue escrito en co-autoría con María Elena Lournaga, del Departamento de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, Uruguay.

El trabajo recorre dos vertientes de reflexión teórica: la caracterización del movimiento en el marco de las nuevas modalidades de articulación de interés colectivo en la Argentina de fin de siglo desde la perspectiva de su ubicación estructural e histórica; y el análisis de estas expresiones desde la perspectiva de género.

Desde la primera línea de indagación, el caso del Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha atiende una forma particular de conflictividad social, articulada en torno al tema de la tierra, la vida en el campo, la familia y el impacto de la crisis económica global, que interpela a las tradicionales organizaciones gremiales rurales argentinas. Este debate remite a las distintas lecturas sobre las nuevas expresiones de protesta; por un lado aquellas perspectivas que privilegian la mirada desde la configuración histórica y estructural del movimiento jerarquizando sus condiciones de emergencia y consolidación, centralmente preocupadas por la racionalidad de la acción colectiva<sup>45</sup>. Por otro, los enfoques más volcados a la interpretación de la identidad en los movimientos colectivos (Alberto Melucci, 1994) o aquellas lecturas que intentan una síntesis de ambas tradiciones (McAdam et al, 1996).

La reflexión desde la dimensión de género pretende incorporar a este libro el único caso protagonizado exclusivamente por mujeres, y permite abordar un debate también problematizador de los propios movimientos de mujeres en la Argentina: cómo interviene esta dimensión en la constitución del movimiento, en qué medida las mujeres agropecuarias se reconocen en ella, por qué surgen movimientos de protesta o de conflicto liderados por mujeres en esta etapa del desarrollo capitalista, cuál ha sido su relación con las distintas expresiones del movimiento de mujeres, qué tienen en común las Mujeres Agropecuarias en Lucha con otros movimientos sociales analizados en este mismo proyecto. En este capítulo se indaga la dimensión de la identidad del Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha vinculándolo en particular con el tema de la propiedad de la tierra y con el tipo de producción que caracterizó a los chacareros. ¿Por qué mujeres, y por qué en la región pampeana? ¿Es posible identificar diferencias entre estas mujeres rurales y mujeres entrerrianas, del norte del país o de otros sectores del campo? ¿En qué radica la particularidad de la identidad de estas mujeres? Es posible adelantar que las respuestas a estas preguntas se vinculan a la hipótesis del “mandato origina-

---

45 Desde Mancur Olson a sus más recientes intérpretes, en especial la teoría de la movilización de recursos (Tarrow, 1997).

rio del proyecto gringo”<sup>46</sup> en la región pampeana como proyecto social, familiar y personal que estas mujeres realizan<sup>47</sup>. Finalmente, cabe preguntarse si este tipo de expresiones no representa simbólicamente un grito de defensa de un proyecto de país, la Argentina de la modernidad, que se resiste a desaparecer.

Subyace a estas líneas de indagación un tema de fondo que trasciende el propósito de este trabajo pero que constituye un eje ineludible de referencia: el cambio de la estructura social argentina como consecuencia de la aplicación de un modelo económico de corte liberal y de una reforma política que transformó totalmente el modo de regulación y articulación de las esferas pública y privada en el país, consolidados durante la década de los noventa.

Desde el punto de vista metodológico, el trabajo se basa en información secundaria y en entrevistas a investigadoras que aportaron su reflexión sobre el movimiento<sup>48</sup>. La información secundaria analizada se compone de estudios e investigaciones publicadas, documentos del MMAL, entrevistas a sus protagonistas publicadas por la prensa, archivo de prensa y documentos de otras organizaciones gremiales rurales. Por las propias características de horizontalidad y labilidad organizacional del movimiento, se optó por no realizar entrevistas a las protagonistas, y analizar en cambio sus expresiones a través las historias de vida y entrevistas publicadas por estas distintas fuentes.

Como procedimiento de trabajo se sistematizó la información existente sobre el movimiento, que tiene un carácter fragmentario y disperso. Al mismo tiempo se elaboró una cronología de los sucesos más relevantes de la década y de la conformación del movimiento. La cronología expresa la lógica con que se abordó la sistematización del trabajo: un primer punto de periodización de los principales eventos políticos que contextualizan las expresiones de protesta en la Argentina de la década del noventa; un segundo aspecto referido a los antecedentes económicos; y finalmente una cronología de los princi-

---

46 En el campo argentino, “gringo” es el inmigrante europeo que llegó a fines del siglo XIX y principios del siglo XX y colonizó las tierras no ocupadas por los estancieros, en los límites externos de la región pampeana y en el Chaco.

47 Esta idea es sostenida por Ruth Corcuera, historiadora y antropóloga argentina asesora del MMAL, a quien agradecemos este y otros aportes realizados a través de un rico intercambio mantenido con ella específicamente para este trabajo.

48 Agradecemos en particular a Norma Giarracca y Karina Bidaseca, del Grupo de Estudios Rurales del Instituto Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, que nos aportaron la información recogida en años de trabajo constante, así como su tiempo para compartir ideas y debates.

pales eventos y expresiones públicas del Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha.

Un punto sobre el que se avanza en el trabajo, pero que requiere sin duda de mayor profundización, es la relación del movimiento con otras gremiales rurales, en particular la Federación Agraria Argentina. Este aspecto es relevante para entender la expresión del conflicto en su relación con los intereses colectivos que las distintas gremiales representan, teniendo en particular como temas de fondo el impacto diferencial de las políticas económicas sobre el agro y el tema de la estratificación de los sectores rurales en función de la propiedad de la tierra (pequeños, medianos y grandes propietarios).

Otro aspecto relevante que tampoco puede ser abordado en detalle es la relación del Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha con el sistema político y con otras expresiones de conflicto social en la Argentina, no necesariamente rurales, pero que son expresivos de la fragmentación social que caracteriza a la época, en particular la situación de los comerciantes, los trabajadores rurales, los desempleados, los piqueteros, los trabajadores de agro-industrias.

## EL CONTEXTO NACIONAL

### EL CONTEXTO POLÍTICO ARGENTINO EN LA DÉCADA DEL NOVENTA

Los tiempos políticos en los que ubicar histórica y socialmente la emergencia de acciones colectivas como la del Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha reconoce dos etapas: el proceso de redemocratización, que corresponde al gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), y la década de los noventa, donde se desarrollan las dos presidencias de Carlos Saúl Menem. El justicialismo sucede al gobierno radical después de la crisis de la hiperinflación, que llegó a 5.000% y que obligó a anticipar las elecciones nacionales. La forma en que la sociedad civil y el empresariado argentino vivieron el período de “revolución productiva” que propuso el gobierno justicialista estuvo marcada por dos ejes problemáticos que perduran en el imaginario colectivo: la gobernabilidad democrática y la hiperinflación. El período de gobierno de Raúl Alfonsín estuvo centrado en el primero, y su desafío fue la sustentabilidad democrática; el gobierno menemista tuvo como principal tarea –y también como principal logro político en su primer mandato– dar sustentabilidad económica al sistema. En este sentido, vale la pena recordar que después de la reforma constitucional de 1994, que habilitó al



presidente a aspirar a la reelección, Menem llega a su segunda presidencia con más del 50% de los votos válidos.

La propuesta política de Menem de reforma estructural del Estado, caracterizada por muchos analistas como neoliberal en su formato, se sostuvo en los logros económicos de sus primeros años de gestión, derivados del control de la inflación a través de la implantación del Plan de Convertibilidad. Se inicia en ese período una fase de reformas del sector público procesadas a través de medidas de desregulación y privatizaciones, con marcado énfasis en una perspectiva de “Estado mínimo” y de orientación pro-mercado. Esta primera generación de reformas se implanta con base en el liderazgo político centralizado del menemismo, que es ratificado en la reelección de 1995. Sin embargo, sus costos en materia de fragmentación social, concentración del ingreso y empobrecimiento de la población comienzan a generar un escenario de incertidumbre, descontento y contestación social que da lugar a lo que se ha dado en llamar la “nueva protesta social argentina”.

Federico Schuster y Sebastián Pereyra sostienen que ha habido un cambio sustantivo en la matriz de las protestas en Argentina y en el tipo de reivindicaciones de sus agendas. De una matriz predominantemente sindicalista y vinculada a intereses colectivos de base económica se pasa a reivindicaciones más asociadas a derechos ciudadanos, en un contexto de fragmentación de los intereses y de los actores sociales. Sobre la base de los datos relevados sobre la protesta social argentina en el período de la redemocratización (1983-1999), ellos identifican tres períodos.

En una primera etapa (de 1983 a 1988), el 75% de las protestas son lideradas por sindicatos; solamente las protestas vinculadas a los derechos humanos adquieren en ese momento visibilidad pública y relevancia. En esa fase las reivindicaciones tienen dos tipos de preocupaciones: aquellas vinculadas al mundo del trabajo (económicas) y aquellas derivadas de la preocupación por la redemocratización (ética y de derechos), tales como los crímenes de la dictadura o el destino de los desaparecidos.

En una segunda fase, de 1989 a 1994, el 60% de las protestas sigue siendo de matriz sindical pero corresponde a otro tipo de trabajadores, y comienzan a surgir manifestaciones vinculadas a la demanda de reactivación de las economías regionales, expresiones locales, etcétera. Este segundo período corresponde a la primera presidencia de Carlos Menem, y el tipo de reivindicaciones se vincula fundamen-

talmente a temas de la reforma del estado: privatizaciones masivas, desregulación, racionalización administrativa, desindustrialización, política de precios, desprotección.

A partir de 1995, ya en la segunda presidencia de Menem, se evidencia una diversificación de la protesta: expresiones más urbanas que las del primer quinquenio, manifestaciones de desocupados y subempleados, cortes de ruta, piquetes. “En primer lugar se observa una desarticulación de la matriz sindical de las protestas, dando paso progresivamente a la emergencia de protestas de matriz cívica o de derechos; en segundo lugar, puede apreciarse una progresiva fragmentación de la protesta, entendiéndola dicha fragmentación como una complejización y multiplicación de las identidades sociales y políticas involucradas en las protestas, así como una particularización de las demandas y una ampliación de los formatos de protesta” (Schuster y Pereyra, 2001: 52).

La reelección de Menem en 1995 es un punto de clivaje en la política de confrontación y protesta, ya que significa el respaldo político a un modelo económico que generó costos sociales importantes. De acuerdo a Schuster y Pereyra, a partir de ese momento declinan las formas tradicionales de protesta, tanto porque negocian con el poder como porque la matriz sindical va perdiendo progresivamente base material (desempleo, desindustrialización, precariedad laboral). Las nuevas formas de protesta se organizan en torno a la demanda de derechos, aunque tanto sus modalidades como sus contenidos también se diversifican pasando de la preocupación por la sustentabilidad democrática a la demanda por “calidad de la democracia”.

Estos cambios se acompañan en lo político de transformaciones en la correlación de fuerzas de los partidos. Ya en las elecciones parlamentarias de 1997 el justicialismo y la alianza empatan en votos. En 1999 las elecciones serán ganadas por el Frepaso y la Unión Cívica Radical, con Fernando de la Rúa que asume como presidente. A nivel de gobiernos provinciales el mapa sigue siendo sin embargo contradictorio. En La Pampa, lugar de origen del MMAL, la continuidad del justicialismo con un gobernador que comienza su tercer período consecutivo es un dato importante a la hora de comprender los recursos en juego en la negociación.

#### EL CONTEXTO ECONÓMICO Y SOCIAL

Durante la década de los noventa comenzó a aplicarse en Argentina una política económica que siguió los lineamientos de corte neolibere-

ral, profundizando un modelo de acumulación que se inició en las dos décadas anteriores. Se clausura así el modelo de sustitución de importaciones, iniciándose una fase de reformas estructurales del Estado tendientes a minimizar su presencia y desregular su relación con el mercado y la sociedad: es el debate sobre la crisis y el fin del Estado de bienestar social.

En 1991, el Plan de Convertibilidad, que instauro la equivalencia peso/dólar, impulsa un ciclo de flexibilización, desregulación, privatizaciones y liberalización económica orientado a buscar la inserción en el mercado internacional. La estabilidad de precios lograda mediante la convertibilidad generó un apoyo político que habilitó un ajuste estructural aplicado según el presidente Menem “sin anestesia ni paracaídas”<sup>49</sup>. Se privilegia al sector financiero por sobre los sectores productivos, evidenciándose efectos distintos del modelo sobre los distintos grupos económicos y sectores de población. En términos generales, en los primeros cinco años de la década se evidencian logros económicos de la política de estabilidad y convertibilidad tales como el incremento del PBI y el aumento de la capacidad de compra vía control de la inflación, que comienzan en la segunda mitad de la década a describir efectos negativos: caída del salario real, incremento creciente de la desocupación, e incremento de inequidad en la distribución del ingreso. A finales de los noventa, el desempleo y la subocupación más que duplican a los parámetros de los ochenta: de 13,6% ascienden a un 30%.

Los logros iniciales de la política generaron efectos positivos indirectos que fueron insostenibles en el tiempo. De acuerdo a Teubal y Rodríguez, el incremento de la producción de los primeros años del menemismo se debió más al aumento del consumo que a la inversión, con lo cual la capacidad exportadora se vio restringida en el mediano plazo salvo en productos agropecuarios. El mismo instrumento de dinamización interna de los primeros años operó como factor central de la crisis, ya que la convertibilidad estableció precios de exportación de los productos nacionales muy elevados que conspiraron contra su colocación exterior. En suma, una economía pensada para su inserción internacional terminó configurando un escenario local de escasa atracción para la inversión de capitales y de restricciones para la competencia externa. Asimismo, como sucede con todas las economías de la región, el grado de dependencia externa aumentó la vulnerabilidad

---

49 Esta cita y los datos planteados en este apartado son tomados de Teubal y Rodríguez (2001: 66 en adelante).

de la economía nacional a las crisis externas, en particular la crisis financiera ocurrida en México conocida como “efecto tequila”, y la crisis brasileña, que afectaron sensiblemente la economía local. “Si bien pareció que el shock externo había sido absorbido en 1997 y 1998... Hacia finales de la década la crisis se manifestó nuevamente y en forma plena... se estanca el crecimiento de la producción global, se producen retrocesos cada vez mayores en la demanda global, caen aún más los salarios reales, se incrementan la desocupación y subocupación, y los márgenes de pobreza en vastos sectores sociales. El cambio de gobierno en 1999 generó expectativas que fueron rápidamente traicionadas debido a la aplicación de nuevos ajustes por parte del gobierno” (Teubal y Rodríguez, 2001: 71).

Este proceso menemista, habitualmente caracterizado por los analistas como “modernización conservadora”, ha sido definido por Teubal y Rodríguez como “crecimiento con desarticulación social”, lo que anticipa la crisis y los conflictos que comienzan a hacerse visibles en particular a partir de la segunda mitad de la década.

La política de liberalización y desregulación de mercados tuvo un impacto negativo sobre el sector agropecuario, en particular los pequeños y medianos empresarios. El decreto de desregulación económica de 1991 desactivó la red nacional que reguló las actividades agropecuarias por más de seis décadas, con base en un discurso que vinculaba estos organismos a costos innecesarios e ineficiencias que se esperaba que el sistema liberalizado modificara. “Se disolvieron mercados de concentración, institutos de investigación (fue reestructurado el INTA), instituto de fiscalización de la actividad agraria y mercados de hacienda. Se disolvieron la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, la Dirección Nacional del Azúcar y muchos otros organismos de fiscalización y regulación de los productos regionales... También se eliminó el sistema de precios sostén. De golpe el sistema agropecuario argentino se convirtió en uno de los más desregulados del mundo” (Teubal y Rodríguez, 2001: 74).

Sin embargo, Teubal y Rodríguez señalan que para entender el impacto de esta política sobre el sector agropecuario, en especial los pequeños productores y los trabajadores agrarios, hay que tener en cuenta tanto los efectos de las reformas estructurales antes señaladas como las transformaciones en el sistema agroalimentario argentino. El aumento de la integración vertical en sus diversas formas es consecuencia de los procesos de desindustrialización, concentración del ingreso y extranjerización de la industria; con la mayor integración

vertical crecieron la agricultura de contrato y otras formas de articulación, adquiriendo mayor poder las grandes empresas extra-agrarias en relación con los medianos y pequeños productores agropecuarios, que tendieron a perder autonomía de decisión.

En este contexto económico general, el sector agropecuario y en particular las explotaciones de pequeña y mediana escala tienen que enfrentar diversos problemas que están en la base de la explicación de la situación de endeudamiento a la que llegan al finalizar la década: los problemas vinculados a la productividad del sector; los problemas y desafíos derivados del cambio tecnológico en el agro y los costos de “modernización” para los pequeños y medianos productores; las transformaciones en los precios relativos y la estructura de costos, el sistema de créditos y las tasas de interés.

Como resumen de esta situación hay que señalar que en la última década del siglo se produce una concentración de la tenencia de la tierra evidenciada por la reducción del número de explotaciones agropecuarias, acompañada de un incremento de la producción y la productividad. Esta tendencia es visible en las economías regionales. Tomando en consideración algunos datos para la región pampeana, es posible estimar que el número de explotaciones agropecuarias se redujo un 31% en el período comprendido entre 1992 y 1997<sup>50</sup>. No hay datos oficiales del número de explotaciones en esta década, ya que el último censo agropecuario argentino es de 1988. El Censo Experimental de Pergamino realizado por el INDEC en 1999 muestra que las explotaciones agropecuarias se redujeron en esa región un 24,2% en el período 1988-1999.

Estos indicadores son el reflejo material de una concepción de política económica y agropecuaria expresada crudamente por un alto funcionario de la Secretaría de Agricultura y Ganadería cuando señaló que “debían desaparecer 200.000 minifundistas que por naturaleza son ineficientes”<sup>51</sup>.

#### EL ENDEUDAMIENTO DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS

La emergencia del Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha (MMAL) se enmarca dentro de lo que se ha denominado como la

50 Estos datos provienen de una encuesta de Mora y Araujo (1997) citada por Teubal y Rodríguez (2001: 111).

51 Esta cita es tomada del texto ya citado de Teubal y Rodríguez, pág. 111. Los autores desarrollan información muy interesante por sectores, que no es incorporada a este trabajo por trascender su objetivo.

“nueva protesta agraria” en la Argentina de la década de los noventa (Giarracca, 2001a). El endeudamiento de los pequeños y medianos productores agropecuarios fue el tema central en torno al cual se articula inicialmente el discurso del Movimiento, así como la reacción del sistema político y la banca acreedora. El MMAL denuncia el trámite que da lugar a la deuda como injusto y usurario, mientras que determinados actores políticos sostienen que el endeudamiento de los productores se debe al uso irresponsable de los créditos.

El decreto de desregulación económica que instaura el Plan de Convertibilidad en Argentina en 1991 es señalado como el momento fundante de una política económica que tiene impactos diferenciales para las explotaciones agropecuarias en función de su escala, siendo los pequeños y medianos empresarios quienes sufrieron los efectos negativos de estas medidas.

La estabilidad relativa de los precios lograda por el Plan de Convertibilidad liberó una serie de recursos antes localizados en el sistema financiero que favorecieron el otorgamiento de créditos y el llamado “boom del consumo” que caracterizó los primeros cinco años de la década del noventa hasta la crisis mexicana (Giarracca y Teubal, 2001: 149). En este período hubo una política de estímulo a la “modernización”, invirtiendo en renovación de maquinarias agrícolas. El endeudamiento financiero del sector aumentó de 1.883 millones de pesos en 1990 a 7.145 millones en 1994<sup>52</sup>. De acuerdo a información brindada por CONINAGRO en 1996, en el período posterior al control de la inflación las tasas de interés reales y los costos financieros superaron en promedio el 20% anual: 24% en 1991 y 20% en los años siguientes. Giarracca y Teubal señalan que la estabilidad de los precios lograda a partir de los años noventa con el Plan de Convertibilidad no fue acompañada por las correspondientes caídas de las tasas nominales de interés y las tasas reales aumentaron, haciendo más rentable el negocio financiero pero con perjuicios para los tomadores de crédito. Asimismo, las tasas de interés nominales fueron muy diferentes para las medianas y pequeñas empresas con relación a las grandes (Giarracca y Teubal, 2001: 150).

Otro mecanismo de endeudamiento fue el manejo de los contratos bancarios de cuentas corrientes, operando por ejemplo el mecanismo de crédito por cuentas en descubierto. De acuerdo a informes de la Asociación Agro-Ganadera de La Pampa, las entidades financieras

---

52 En este período los pesos son equivalentes a dólares.

ponen condiciones no previamente acordadas con el tomador de crédito, o establecen mecanismos de difícil control por parte de los titulares de las cuentas, tales como la potestad de definir unilateralmente las tasas de interés constituyendo la forma de crédito más cara. Esta entidad denuncia que muchos bancos inducen al cliente a tomar este tipo de manejo financiero restringiendo otras modalidades y estimulando un proceso que redundará en el encarecimiento crediticio<sup>53</sup>.

Esta situación de desajuste entre precios y tasas de interés fue generando un proceso de endeudamiento progresivo que se sumó a la estructura de impuestos y los aportes patronales, constituyendo agregados que resultaron demasiado onerosos para los pequeños empresarios.

De acuerdo a información manejada por la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, sólo el 30% del total de las deudas de los productores pampeanos corresponde al capital original; el resto corresponde a intereses "punitivos", gastos administrativos, etcétera. El Banco Provincia y el Banco Nación finalmente aceptaron re-financiar deudas: en el primer caso se bajaron las tasas de interés del 19% al 9,5% anual con dos años de gracia, y el Banco Nación asumió el compromiso de suspender las ejecuciones judiciales de productores agropecuarios.

Esta situación de endeudamiento, que inicialmente involucró a los pequeños y medianos productores, se fue expandiendo en los últimos años de la década del noventa a otros sectores económicos. En este período alrededor del 30% de los créditos de las diez entidades bancarias más importantes de la Argentina estaban con retraso de pago (*Clarín*, 10/7/1999, citado por Giarracca, 2001b).

## LAS CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO DE MUJERES AGROPECUARIAS EN LUCHA

### LOS ANTECEDENTES DEL MOVIMIENTO

El punto de partida simbólico de la nueva situación económica que da lugar al ciclo de protesta argentino donde se enmarca la emergencia del Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha es el decreto de desregulación económica del presidente Carlos Menem en 1991. A

---

53 Trabajo mimeográfico, Asociación Agroganadera de La Pampa, "Necesidad y lineamientos de una ley de refinanciación de las deudas de los productores pampeanos", 1996, citado por Giarracca y Teubal (2001: 150).

partir de esa medida se producen transformaciones en la política económica cuyas consecuencias dan lugar a la eclosión de nuevas modalidades de acción colectiva tanto en el campo como en los espacios urbanos. En el campo en particular, el impacto de las transformaciones económicas sobre los pequeños y medianos productores los distancia de otros sectores económicos que se vieron beneficiados por esas mismas medidas. Esto contribuye a fragmentar la hegemonía que hasta ese momento tuvieron las entidades corporativas rurales que tradicionalmente articularon al sector agropecuario: la Federación Agraria Argentina, que representa a productores pequeños y medianos de la región pampeana con fuerte implantación en la Provincia de Santa Fe; la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO); la Sociedad Rural Argentina, que reúne a los cabañeros y grandes propietarios de tierra; y las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que reúnen a las sociedades ganaderas de todo el país.

Giarracca sostiene que este decreto de desregulación “marca un límite temporal importante debido al efecto producido en los procesos agrarios y los mundos rurales. Con esta medida, se disolvieron la mayor parte de las normas regulatorias, así como las instituciones que las llevaban a cabo y que habían permitido, a partir de las primeras décadas del siglo XX, la coexistencia de las pequeñas y medianas explotaciones agrarias con la gran explotación agraria ganadera o mixta” (Giarracca, 2001a).

La emergencia de conflictividad en el ámbito rural en Argentina describe dos fases: una primera fase comprendida entre 1991 y 1993, caracterizada por la emergencia de expresiones locales de protesta que nuclearon a distintos sectores de la producción; y una fase de nacionalización de la protesta que se inicia a partir de la marcha agraria del 27 de julio de 1993 sobre la Plaza de Mayo y que tiene como efecto la visibilización de esa conflictividad rural en el centro del sistema financiero y del poder político. Para Giarracca esta marcha constituye un enclave simbólico de fragmentación entre las gremiales rurales, fundamentalmente en lo que respecta a sus estrategias frente al sistema político y a los intereses económicos que representan.

Esta marcha fue convocada por las organizaciones que representan a pequeños y medianos productores (Federación Agraria Argentina, CONINAGRO, Frente Agropecuario Nacional) y fue rechazada por la Sociedad Rural, abriendo un ciclo de manifestaciones y protestas que en los años siguientes se dirigirán a la capital para



“mostrar” al mundo urbano la condición crítica de las fracciones subordinadas del agro argentino.

De acuerdo a Norma Giarracca, durante la década de los ochenta la Sociedad Rural Argentina logró nuclear también a los pequeños y medianos productores en torno a sus propias reivindicaciones “... pero la política impulsada por el gobierno de Menem los convierte en un sector beneficiado por ellas en cuanto apuestan a la gran escala, mientras que los sectores medianos y pequeños son claramente afectados por sus efectos” (Giarracca 2001a). Se produce allí una fractura explícita entre esta gremial y los pequeños y medianos productores que llegará a momentos de confrontación en los años subsiguientes.

Píriz, Ringuelet y Valerio (1999) vinculan también la emergencia del Movimiento a los cambios económicos globales de acumulación capitalista y a las transformaciones sociales generales que modifican el espacio agrario regional. Pero señalan que estos factores no son suficientes sin vincularlos a la dinámica endógena local del Municipio de Olavarría y la región pampeana, cuna del Movimiento. Desde la década del cincuenta, la región pampeana experimentó un proceso de modernización agraria que fue correlato de las transformaciones mundiales del agro<sup>54</sup>.

En este marco local y regional, estos autores diferencian metodológicamente dos tipos de precondiciones sociales que están en la base del estallido social contemporáneo a la emergencia del Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha: circunstancias técnicas y económicas que configuraron un escenario de nuevas limitaciones financieras, dando lugar a nuevas exigencias organizativas de determinadas capas de explotaciones agrarias; y la configuración histórica de un nuevo escenario regional y local en donde las localidades del interior sufrieron la quiebra de muchísimos pequeños y medianos emprendimientos productivos, generándose así un creciente desaliento de la población. Estos cambios fueron impregnando todo el tejido social: el sistema productivo, el hábitat, las organizaciones familiares, etcétera. Señalan que en la década del noventa la situación “... es de crisis regional generalizada, que se viene desarrollando a partir de la acumulación de capital y centralización de actividades en centros extraregionales y en ámbitos ciudadanos dentro de la región... En los últimos años asistimos a un cierto movimiento de contrarreflujo, de

---

54 En ese período se instala en Olavarría la Agencia de Extensión Rural del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

“vuelta al campo”, que podríamos interpretar como parte de la crisis generalizada. En este sentido, el grupo busca asegurar o consolidar su núcleo histórico de relaciones sociales totales (económicas, políticas, culturales). Los cambios regionales... atacan las formas públicas de sociabilidad” (Píriz et al., 1999: 20).

Respecto a las formas de sociabilidad y cultura local, Ringuelet señala que existe una matriz sociocultural de la región vinculada a una tradición de arraigo a la tierra ya sea como colonos o como estancieros. Es desde esta matriz, y en un contexto de crisis que afecta al núcleo mismo de subsistencia de la familia, en un clima donde el desaliento ha afectado centralmente a los hombres y debilitado su rol, que las mujeres asumen un protagonismo particular.

El propio Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha sitúa su emergencia como consecuencia de la crisis económica que afecta específicamente a las explotaciones familiares pequeñas y medianas, señalando también como punto de partida la puesta en vigencia del Plan de Convertibilidad en 1991. Señalan que este hecho marca el comienzo de un ajuste estructural y un proceso de “desguace del Estado por medio de privatizaciones y ausencia de mecanismos de regulación de la economía”<sup>55</sup> que desencadena el proceso de deterioro de la rentabilidad de las unidades productivas. Mientras en el período 1979-1983 un agricultor debía producir 38 ha propias para obtener un ingreso de 1.200 pesos mensuales, en 1992-1993 debía producir 344 ha. Otros analistas advierten, sin embargo, que ya en ese momento el 60% de las explotaciones agropecuarias, en particular las medianas y pequeñas de la llanura pampeana, eran inviables<sup>56</sup>.

El movimiento sostiene que este deterioro forma parte de la política económica y cita al subsecretario de Política Agropecuaria del momento, Jorge Ingaramo, quien declaró que “a partir de ahora el que no se adapta desaparece... pienso que muchos productores chicos, aquellos que sólo facturan 15.000 dólares al año no van a subsistir”, asumiendo que aproximadamente 200 mil productores chicos y medianos, que representaban casi la mitad de las explotaciones agro-

---

55 El diagnóstico de la crisis que el MMAL realiza es tomado del Petitorio Nacional presentado a la ciudadanía en 1995, así como de la fundamentación de un proyecto de instalación de una fábrica artesanal de pastas elaborado por el MMAL en 1998 y publicado como anexo en Píriz et al., 1999: 105.

56 Interesa señalar que de las 380 mil explotaciones agropecuarias de todo el país el 42% corresponde a escalas pequeñas y medianas, lo que significa aproximadamente 158 mil productores.

pecuarias argentinas declaradas en el Censo Nacional Agropecuario de 1998, estaban en situación crítica (Píriz et al., 1999: 108).

En este mismo documento se argumenta que la situación agropecuaria no responde a cuestiones coyunturales sino a un profundo cambio en las reglas de juego que se habían sostenido durante el período de sustitución de importaciones y el ciclo de decadencia de ese modelo. Uno de los principales efectos de este nuevo modelo de acumulación es la generación de economías de escala y la concentración de poder económico, a lo que se suman las políticas impositivas y de crédito que no contemplan al sector productivo. “A este universo de exclusión pertenecen las familias que constituyen el Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha” (MMAL, citado por Píriz et al., 1999: 109).

#### ORIGEN Y CRONOLOGÍA DEL MOVIMIENTO

La primera acción social colectiva que da lugar al Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha surge espontáneamente de un acto individual desesperado de una mujer, Lucy de Cornelis, en la localidad de Winifreda, en la provincia de La Pampa. El 28 de mayo de 1995 la familia de Lucy recibe la orden de remate de sus bienes por parte del Banco de la Provincia, por una deuda generada a partir de un crédito bancario de junio de 1991 de \$15.000<sup>57</sup>. Los intereses y sucesivas refinanciaciones de ese crédito se multiplicaron hasta configurar una deuda de \$123.400 cinco años después.

Ante la inminencia del remate judicial de su casa y en un clima de desesperación después de haber “golpeado todas las puertas”, Lucy de Cornelis va a la radio de su pueblo a contar lo que le pasa, presentándose como esposa de un agricultor endeudado<sup>58</sup>: “...a la noche algo me decía que vos podés, una fuerza, una energía venía y me decía: ¿qué me está pasando? ¡Yo estoy loca! me dije. Pensé: ¡ay Dios mío! ¡Ayúdame, decíme lo que tengo que hacer! ¿Qué hago? Y lo primero que me salió es la radio del pueblo. Y en la radio del pueblo conté lo que me pasaba y a la salida había más mujeres esperando que les pasaba lo mismo...” (entrevista a Lucy de Cornelis, citada por Bidaseca 2000: 11).

57 Según la Ley de Convertibilidad vigente en ese momento, un peso es igual a un dólar.

58 Ella se presenta a través de la radio de esa manera.

A partir de ese momento se comienza a convocar a las mujeres a una reunión que se celebró el 3 de junio de 1995 y que se constituyó en la primera Asamblea de Mujeres Agropecuarias, en el Club Social y Deportivo de Winifreda, donde se reúnen 350 mujeres de distintas localidades de la provincia. “El teléfono sonaba y sonaba y nos preguntamos ¿qué hacemos? Y bueno, hacemos una asamblea. Yo no había ido nunca a una asamblea. Y bueno, armamos una; fuimos a los diarios a decir que íbamos a tener una asamblea y a los que llamaban también (les decíamos). Y bueno, fue el 3 de junio de 1995. Eran las cuatro menos diez y no había nadie. ¡Nadie! Estábamos antes de empezar... y entonces yo digo tráiganme el Himno Nacional. Así, todo espontáneamente, no hay nada pensado y planificado” (entrevista a Lucy de Cornelis, citada por Bidaseca 2000: 12).

A esta asamblea asisten también mujeres comerciantes de las localidades urbanas de la región que comparten los efectos de la situación de endeudamiento. Ponen en común las diversas situaciones económicas en que se encuentran, todas ellas difíciles, y la situación de sus familias y de sus esposos, a quienes perciben derrotados o “bajando los brazos”. Ante la impotencia del jefe de la familia ellas plantean que “tienen que hacer algo”. Los temas de la reunión fueron: la situación de endeudamiento, la imposibilidad de pagar esas deudas, los altos intereses bancarios que agudizaron la situación de endeudamiento, la falta de rentabilidad del campo, y como condición más inmediata y material, que se constituye en su primera reivindicación, la necesidad de suspender las ejecuciones judiciales de los campos y los implementos agrícolas de los productores endeudados.

Esta primera asamblea ofrece al gobernador Rubén Marín encabezar el movimiento para llevar adelante un proceso de negociación y articulación de sus demandas frente a las autoridades nacionales. Se elabora allí un petitorio de ocho puntos que constituye la primera plataforma reivindicativa del MMAL:

1. Suspender las ejecuciones judiciales en forma inmediata.
2. Rever las deudas originales y actualizarlas a una tasa de interés que no supere el promedio de las tasas internacionales desde la fecha del otorgamiento del crédito.
3. Refinanciar los montos resultantes convirtiéndolos en nuevos créditos con plazos no inferiores a diez años, con tres años de gracia, y a tasas que no excedan las tasas internacionales, adap-

tando a cada caso (según tipo de producción y capacidad de pago) la forma de amortización y cancelación de los mismos.

4. Favorecer el arreglo de los deudores agropecuarios evitando las ejecuciones judiciales que provocan depreciación del valor de los bienes agropecuarios, en perjuicio incluso de quienes, no estando enfrentados a la angustia de la venta compulsiva, verán mermar día a día el valor de su patrimonio.

5. Suspender el IVA a los intereses, lo que significa un aumento del costo financiero.

6. Facilitar el acceso a nuevas líneas de crédito para impulsar la producción, una vez revisado y analizado cada caso, de acuerdo a los proyectos de inversión y rentabilidad que cada uno presente.

7. Se solicita al gobernador el respaldo para interceder ante el Banco de la Nación Argentina, el Banco de La Pampa y otros bancos.

8. Se manifiesta una gran preocupación por el corte de los servicios de ISSARA y se solicita considerar un acuerdo para reincorporar al productor agropecuario mediante aportes a la obra social provincial, debido a los altos costos de las obras sociales privadas<sup>59</sup>.

En esta oportunidad se solicitó también a los legisladores nacionales y provinciales su apoyo para ponerse al frente de estos reclamos y, conjuntamente con el gobernador, buscar soluciones para el sector. En esta fase inicial las mujeres agropecuarias apuestan a los criterios de representación de sus intereses por parte de los organismos de gobierno y de los representantes locales de los partidos.

La Asamblea define una comisión directiva provisoria, constituida por mujeres de cada una de las localidades presentes con el propósito de coordinar acciones. Las gestiones que se proponen realizar en esta fase son: negociación e interlocución con las autoridades, información a la población y otras mujeres a través de la prensa, y la acción directa en los remates de bienes agropecuarios para impedir la ejecución judicial.

El 13 de junio de 1995 las Mujeres son recibidas en audiencia por el gobernador, Dr. Rubén Marín, y otros funcionarios de su gobierno. El jerarca recibe el petitorio y solicita ocho días para analizar la

---

59 Plataforma al gobernador Rubén Marín, documento del MMAL, junio de 1995.

propuesta. Los funcionarios destacan tres temas centrales: la suspensión de remates y ejecuciones, la refinanciación de deudas bancarias y la solicitud de créditos a largo plazo para impulso a la producción. Esta sería la única audiencia concedida por el gobernador, ya que posteriormente, las mujeres se reúnen con algunos de sus ministros pero sin lograr nada de lo solicitado. Por el contrario, los funcionarios las estimulan a dirigirse directamente a las autoridades bancarias, y dejan entrever sus dudas respecto a la legitimidad de algunas de sus demandas. En particular, el ministro de Producción de la Provincia sugiere que el problema del endeudamiento no es de la política económica sino de los productores que no saben manejar sus créditos.

La convocatoria que hace el movimiento se dirige a las mujeres para “proteger a las familias de la desintegración”, y tiene una inmediata respuesta que comienza a multiplicarse espontáneamente en La Pampa y en otras localidades de la región sur y del resto del país: “...al mes de su surgimiento ya tenían significación nacional... La mayoría son mujeres sin experiencia ni trayectoria política y/o en participación. Se trata del Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha” (*La Arena*, Santa Rosa, 2/2/1997, citado por Píriz et al., 1999: 71).

Denuncian la situación de endeudamiento de los productores rurales y se autodefinen inicialmente como “esposas de chacareros fundidos”. Comienzan su acción también espontáneamente y deciden hacerse presentes en los remates de campos de sus familias, rezando y cantando el Himno Nacional como instrumentos para impedir la ejecución de los mismos. Posteriormente comienzan a fotografiar a los compradores y difundir sus nombres, porque “queremos conocer quiénes compran nuestros campos”.

A fines de junio las mujeres realizan la Segunda Asamblea del Movimiento para informar sobre el desarrollo de las negociaciones con las autoridades. En esa oportunidad deciden elevar el petitorio al Banco de la Provincia al mismo tiempo que definen asistir a todos los remates judiciales para tratar de evitar su realización. En esta segunda asamblea se define el nombre del movimiento y fundamentalmente su carácter: un movimiento horizontal de mujeres que sólo quieren condiciones justas para producir y sostener el núcleo familiar afincado en el campo.

Las mujeres siguen haciendo reuniones periódicas en distintas localidades. En julio de 1995 se reúnen en Winifreda y deciden asistir a la Exposición Rural de Palermo para hacer oír sus reivindicaciones. Asisten mujeres de Buenos Aires, Santa Fe y del Movimiento de

Mujeres Formoseñas de Pie, Formosa. El objetivo era convocar a una primer Gran Asamblea Nacional de la Mujer a realizarse en setiembre en Winifreda, con la finalidad de extender la acción al resto del país. En la Exposición Rural de Palermo de ese año no son muy bien recibidas, pero convocan a su Primer Asamblea Nacional a realizarse en Santa Rosa, La Pampa, el 21 de setiembre.

En agosto de 1995 el movimiento tiene la suficiente articulación como para posicionarse como actor frente a interlocutores políticos. En ese momento responden públicamente al presidente de la Asociación Ganadera Agropecuaria de la localidad de Ing. Luiggi, cobrando ya una dimensión programática y articulando un discurso crítico y reivindicativo. A partir de esta etapa el movimiento comienza a interpelar directamente al poder político y al sistema financiero, reclamando ser recibidos por representantes de estas esferas para analizar las reivindicaciones concretas. En una primera etapa se inicia un ciclo de interlocuciones con el gobernador de la provincia de La Pampa, con quien se inicia una larga cadena de enfrentamientos. Se desarrollan también encuentros y planteos frente a las organizaciones provinciales de los partidos políticos, con el parlamento provincial, con el parlamento nacional, y finalmente en forma directa con los representantes del Banco Provincia y el Banco Nación.

La primera asamblea de las mujeres agropecuarias se realiza en Santa Rosa, La Pampa, el 21 de setiembre de 1995, con la participación de aproximadamente trescientos cincuenta mujeres. Allí se constituyen formalmente como movimiento y definen su estructura organizativa y su forma de funcionamiento. Configuran la Mesa Directiva, integrada con una mujer de cada pueblo que asistió, y se define la presidencia del movimiento, conferida a Lucy de Cornelis, su fundadora. Participan mujeres de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Formosa, Neuquén y Río Negro. Se elabora un nuevo petitorio de quince puntos dirigido a las autoridades nacionales, en particular al entonces presidente Carlos Menem. En este petitorio se agregan a las reivindicaciones iniciales demandas vinculadas a las economías regionales, así como a una mejor administración de justicia por parte de las autoridades nacionales, provinciales y municipales.

Desde setiembre de 1995 hasta fines de 1996 se desarrolla un proceso de rápida expansión del movimiento, con reconocimiento a nivel nacional, y se multiplican también sus acciones de interlocución con actores provinciales y nacionales del ámbito político y financiero. Es decir, se han constituido en un actor visible y reconocido.

El 8 de marzo de 1996 participan en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en Plaza de Mayo y realizan una “marcha del tractor” que recibe el apoyo de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), la Confederación de Agremiaciones Rurales de Buenos Aires y la Pampa (CARBAP), y el Frente Agrario Nacional (FAN). Ese día confluyen en la Plaza de Mayo las reivindicaciones públicas de las mujeres con reivindicaciones rurales.

La segunda Asamblea Nacional tiene lugar en mayo de 1996 en Pergamino, la tercera en Casbas en noviembre del mismo año, y la cuarta se realiza también en noviembre en la provincia de Formosa. Durante el período, el MMAL participa de las movilizaciones nacionales de las gremiales rurales, en particular la “Marcha del Millón de reclamos” sobre la Plaza de Mayo el 9 de septiembre, así como otras acciones públicas. Sus reivindicaciones comienzan a incorporar un diagnóstico más riguroso sobre las causas del endeudamiento, la política económica general, y la responsabilidad del Estado en la materia.

A partir de 1996 se institucionaliza la realización de una Asamblea Nacional anual y la participación en el acto central del Día Internacional de la Mujer, y el movimiento tiene una presencia relevante en las movilizaciones y acciones de protesta que las distintas entidades agropecuarias convocan, en particular los “tractorazos” de septiembre hacia la Plaza de Mayo. El 8 de marzo de 1998 convocan a “abrazar” el Banco Nación para impedir su privatización, desarrollando una enorme cadena humana que lo envuelve. En julio de ese año participan de la Marcha Nacional de los Pobres del Campo sobre Plaza de Mayo, gesto que se repite en marzo y en junio de 1999 en oportunidad del Paro Nacional Agropecuario.

La suspensión de remates judiciales sigue siendo el instrumento de mayor impacto del movimiento, pero también continúan con su política de negociación y de articulación con espacios compartidos con otros movimientos y organizaciones<sup>60</sup>. Participan de las mesas provinciales y municipales rurales en distintas regiones, en particular en La Pampa, pero resisten la voluntad de diversas instancias de “integrarlas” dentro de esas organizaciones.

Desde 1997 el MMAL impulsó otra estrategia de acción que se ha utilizado en países de la región: la creación de la Asociación Permanente de Usuarios de Servicios Financieros, que no tuvo mucha

---

<sup>60</sup> Desde su fundación hasta el año 2000 se estima en 350 los remates judiciales de bienes agropecuarios que han tenido que ser suspendidos por la acción del MMAL.



fortaleza pero que se constituyó en más de 14 provincias. Esta actividad está asociada con su vinculación con organismos de deudores del exterior, en particular El Barzón de México y la Asociación de Deudores de Bolivia.

Actualmente el movimiento sigue existiendo, aunque con menor visibilidad en el contexto de la crisis que afecta a la Argentina. Otras expresiones de acción pública, también con fuerte presencia de mujeres, parecen ocupar el centro de la escena. Sin embargo, el MMAL ha logrado más reivindicaciones de las que el reconocimiento público podría suponer, aunque es posible que la magnitud de la crisis opaque el impacto de esos logros. Durante el período pasado diversos legisladores nacionales se hicieron eco de sus reivindicaciones presentando proyectos de ley dirigidos a suspender las ejecuciones judiciales por deudas de productores agropecuarios, a refinanciar los montos con tasas compatibles con la rentabilidad productiva, a tener la opción de convertir la deuda a valor producto, a crear una Comisión Nacional para el Saneamiento Financiero de las Explotaciones Familiares, etcétera<sup>61</sup>. En diciembre de 1999 el Banco de la Nación y otros bancos públicos declaran el cese de ejecuciones judiciales, y en marzo del 2001 finalmente se logra la transferencia de las deudas del Banco de la Provincia al Banco Nación. A partir de este período varias de las reivindicaciones del MMAL son tomadas por otras agrupaciones rurales como la Federación Agraria Argentina, que hace suya la demanda histórica de rebajar los intereses de la deuda a no más del 5% anual, solicitando su recálculo.

#### PERFIL Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL MMAL

Las mujeres del movimiento son “esposas de” productores agropecuarios que se han endeudado en los últimos quince años; sin embargo, tienen distintas situaciones personales. Algunas trabajan directamente en funciones productivas en el campo de propiedad familiar (como es el caso de Joaquina Moreno, quien vive sola en su predio y es responsable de la unidad productiva); otras desarrollan una tarea reproductiva y son “colaboradoras”; otras desarrollan actividades laborales fuera de la explotación familiar como maestras, profesoras o emplea-

---

61 Estos proyectos fueron presentados en el período pasado por el diputado Antonio Berhongaray de la Unión Cívica Radical y por Rodolfo Gazia del Partido Justicialista. Si bien no han sido aprobados hasta la fecha, en su momento dieron lugar a debates en las cámaras con la presencia de las mujeres del MMAL.

das de comercio; algunas son profesionales, como en el caso de Lucy de Cornelis, contadora pública que vive en el pueblo cercano a su propiedad rural. En algunos testimonios de las protagonistas se plantea esta diversidad de la composición social del movimiento, señalando que existen incluso mujeres asalariadas y empleadas domésticas. No obstante, la reivindicación que las reúne está asociada claramente a la propiedad de la tierra y al trabajo en el campo.

Otro aspecto a destacar es que estas mujeres no tienen experiencia previa de organización social ni política, y menos aún experiencias de liderazgo de ningún tipo. Su participación surge como una reacción desde la esfera privada, particular, familiar, a la situación de depresión y desánimo que derrota a sus maridos. Constituye una respuesta colectiva localizada inicialmente en el plano de la reproducción familiar y la subsistencia del núcleo, sin otras motivaciones políticas o sociales más trascendentes que denunciar la ilegalidad de la deuda y la injusticia de sus consecuencias, y demandar su derecho a trabajar en el campo y alimentar a sus hijos.

El rol protagónico de la mujer y su acceso al mundo público es desencadenado por la situación de emergencia en la crisis ante el debilitamiento del rol masculino. Como muchas veces sucede en las biografías de las mujeres, se produce un empoderamiento de su papel en la estructura familiar como consecuencia de la desaparición de quien desempeña el rol dominante de proveedor. La derrota masculina como proveedor y productor tiene un contenido simbólico que puede asimilarse a una especie de muerte civil, lugar que es ocupado por la mujer.

Tanto el proceso de emergencia como la consolidación del movimiento responden a la expansión de un sentimiento, un estado de ánimo compartido que se institucionaliza en forma muy laxa y dinámica. El perfil del MMAL parece situarse a medio camino entre un movimiento social y un grupo de acción pública<sup>62</sup>. Se caracteriza por no tener una estructura organizacional ni un grado de formalización comparables con los de los movimientos sociales tradicionales. Y aspira a no tenerlos, porque su forma hace también a sus contenidos: son mujeres que tienen cosas en común, que no buscan el poder político ni

---

62 Se define como "expresión colectiva de interés público" a la manifestación de una conjunción de personas convocadas por un mismo sentimiento de cercanía o pertenencia, con un carácter puntual y no estructurado orgánicamente. El movimiento social, en cambio, implica una organización establecida y un propósito explícito de influencia o modificación de relaciones de poder.

social, y por tanto prescinden de estructuras jerárquicas que denotarían una determinada concepción del poder en su interior y que no quieren tener. La institucionalización y organización es una condición necesaria para su eficacia, y por tanto adoptan una determinada forma que les permita autorreconocerse, ser reconocidas y funcionar respondiendo a requerimientos crecientes en la región y en la nación. Pero esta configuración es lábil, espontánea, con escasos niveles de organicidad y con una lógica de articulación horizontal que no expresa jerarquías o estructuras de liderazgos que puedan asemejarse a las organizaciones gremiales, sindicales o sociales tradicionales.

Se autodefinen y constituyen como Movimiento en la Primera Asamblea Nacional cuando deciden autorreconocerse como Mujeres Agropecuarias. En esa misma instancia definen una estructura mínima que será su característica: una presidenta, Lucy de Cornelis, y una Mesa Directiva constituida con mujeres “de cada pueblo”. El movimiento establece las asambleas anuales, provinciales y zonales como forma de mantenerse en contacto y de reflexionar sobre los cursos de acción. Las mismas se constituyen en el acto central de la organización. La forma de expansión del movimiento es a través de reuniones a demanda de las mujeres de cada localidad que están en situación de endeudamiento y quieren apoyo o información. Así, Lucy y sus compañeras comienzan una serie de visitas a distintos lugares de La Pampa y luego se trasladan a otras provincias. El ingreso al movimiento no implica una adhesión formal institucionalizada, sino que en cada localidad se conforma una mesa entre las participantes intentando mantener el criterio de representación de mujeres de todos los pueblos y ciudades desde donde provienen las asambleístas.

“...fuimos con Lucy, armamos el movimiento. Nos habían armado tres reuniones, en Cipoletti, en Plotier y en Centenario. Al mes, o mes y medio, ya había doce pueblitos de ahí del Alto Valle organizados como movimiento (...) vamos a un lugar, llamamos a la prensa local... Hacemos una reunión con quince, veinte, siete, las que sean y dejás armada la filial del movimiento. Labramos un acta y esas mujeres se encargan de que eso se reproduzca, empiezan a hablar a través de los medios se van enterando, se acerca una mujer que tiene problemas con el Banco Provincia, otra con el Banco Nación, la acompañamos al Banco” (Ana Galmarini, dirigente santafecina, relato tomado de Bidaseca, 2001: 19).

El movimiento se expande por toda la región pampeana y otras provincias con una rapidez imprevista. Como se señaló previamente, en dos meses el MMAL era reconocido como expresión colectiva a través de los medios de comunicación en todo el país. Y los llamados de las mujeres (y de algunos hombres) se multiplican.

Establecer el nivel de representación del movimiento o la matriz orgánica de su estructura es contradictorio con su propia definición e identidad: la espontaneidad y laxitud. Sin embargo, se ha reconstruido a través de prensa nacional y regional los escenarios donde existen expresiones locales del movimiento. En el año 2000 el Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha poseía núcleos organizados en los siguientes lugares<sup>63</sup>.

Provincia	Localidades
La Pampa	Winifreda, Trenel, 25 de Mayo, Jacinto Arauz, Colonia Barón Agustoni, General Pico, San Martín, Ingeniero Luggi, Dorila, Rancul, Trenel, Embajador Martini, Santa Rosa, Trelew.
Buenos Aires	Arribeños, Pergamino, Baradero, Guamini, Carlos Casares, Villa Iris, Pigué, Junín, Necochea, San Cayetano, San Nicolás, Villa Ramallo, Coronel Pringles, San Pedro, Baradero, Trenque-Lauquen, Pellegrini.
Santa Fe	Rosario, Zavalla, Totoras, Teodolina, Reconquista, Ramona, Las Parejas, Chabás, Berabevú, Arteaga, Galvez, San Jerónimo, Roldán, Maciel; Vera-Vera, San Jorge.
Formosa	Capital, Palo Santo, Gaboto, Ibarreta.
Mendoza	San Martín, General Alvear, Bowen.
Chubut	Trelew.
Entre Ríos	Hernandarias, Maciel.
Córdoba	Camilo Aldao, Coronel Moldes, Río Cuarto, Villa María, La Carlota, Río Tercero.
Santiago del Estero	Fernández.
Tucumán	Famaillá.
Río Negro	Alto Valle del Río Negro, El Bolsón.
Chaco	Capital

A diferencia de otras instituciones más formales en su estructura y en su dinámica de funcionamiento, no es posible establecer los mismos indicadores de continuidad o estabilidad en el tiempo de estas expresiones ins-

63 Tomado de Bidaseca (2000: 19) y de un anexo del proyecto de instalación de una fábrica artesanal de pastas para el MMAL de La Pampa (Píriz et al., 1999: 105).

titucionalizadas. Sin embargo, esto parece no debilitar su incidencia, legitimidad o capacidad de representación, sino que constituye su “forma de organización”, poniendo en cuestión los criterios tradicionales.

Si se considera por ejemplo el reconocimiento de los otros como indicador de consistencia organizacional, sin duda que el MMAL ha sido crecientemente reconocido en sus primeros años de existencia por parte del sistema político, la sociedad civil, las otras gremiales rurales (tanto para adherir a ellas como para cuestionarlas), y fundamentalmente los destinatarios de sus propias reivindicaciones: los representantes de la banca provincial y nacional.

Al tiempo que cobra dimensión y presencia a nivel nacional, el movimiento comienza también a ser reconocido a nivel internacional por movimientos y organizaciones del exterior; en particular movimientos de deudores de Perú, México, Venezuela, Brasil y Bolivia. En 1996 reciben al movimiento mexicano El Barzón, que reúne a un millón de productores de ese país. A fin del mismo año, el movimiento es convocado por el BID y por la delegación diplomática de la Comunidad Europea. Entre 1997 y 1998 se vincula con la organización internacional Jubileo 2000, y Lucy es invitada al Vaticano para una entrevista con el Papa.

Esta potenciación del movimiento se produce también como consecuencia del proceso de socialización, apoyos y soportes técnicos solidarios que comienzan a recibir de parte de algunas organizaciones de mujeres, de expertas y de gente que se siente sensibilizada por la experiencia.

El apoyo y el reconocimiento del movimiento tienen su correlato también de críticas y cuestionamientos. Surgen así voces que aparecen como protectoras de la independencia y autonomía del movimiento planteando que temen que este sea usado por otros, en particular por el sistema político. La cooptación del movimiento por parte de grupos de poder, sectores políticos o instituciones más fuertes es un riesgo que parecen haber sorteado con éxito<sup>64</sup>.

La relación del MMAL con el movimiento de mujeres también ha sido autónoma, aunque solidaria. Desde su presentación inicial, las mujeres del movimiento trataron de poner distancia respecto de una

---

64 En algún caso mujeres militantes del movimiento fueron candidatas políticas. Es el caso de Joaquina Moreno, que se postuló a una banca al senado por el ARI. Sin embargo, el movimiento como tal trató de mantenerse distante de compromisos o alineaciones que hubiesen dividido al grupo.

interpretación “feminista” de sus posturas, insistiendo en su perfil de esposas y madres sin un planteo específico de transformación de su condición de género. Asimismo, el contenido de las demandas estuvo siempre directamente vinculado a los intereses económicos del sector, sin incorporar ninguna de las reivindicaciones tradicionales del movimiento de mujeres e incluso sin incorporar reivindicaciones propias de otros sectores de mujeres. De todos modos, la relación con las organizaciones públicas y no gubernamentales ha sido cordial, en particular coincidiendo con ellas en la conmemoración nacional del Día Internacional de la Mujer.

#### LA PLATAFORMA REIVINDICATIVA, O CUANDO “LO PRIVADO” ES POLÍTICO

Las demandas del Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha comienzan con un fuerte perfil de reivindicación particular de los “casos”, con el propósito inmediato de detener las ejecuciones de campos de productores agropecuarios endeudados. En un proceso tan rápido como el de su propia expansión, las demandas van adquiriendo un creciente contenido político, trascendiendo el perfil particularista de cada situación para configurar como tema la cuestión del endeudamiento, sus causas y sus consecuencias sobre la familia rural, para plantear finalmente el impacto de la política económica sobre las explotaciones pequeñas y medianas no como una situación “individual” sino como una cuestión social. Y en consecuencia, como una cuestión política.

Así como en los aspectos organizativos se pasa de la reacción de una mujer a un movimiento de acción pública de protesta, sus contenidos se amplían hasta abarcar un cuestionamiento a la política económica, en particular la política bancaria, monetaria y tributaria. La voracidad financiera es la denuncia sintomática del movimiento y el punto crucial de las protestas. El discurso adquiere entonces un contenido de denuncia de la política económica, del modelo de país y del lugar que en ese contexto ocupan los sectores productivos.

La reivindicación del movimiento se articula en torno a un contenido económico material al que se suma un contenido ético: se aspira a la suspensión de los remates judiciales y al recálculo de la deuda porque se entiende que la deuda es “inmoral” debido a los intereses usurarios y las condiciones en que se generó<sup>65</sup>. Ese contenido ético de

---

65 En este sentido, el caso de la deuda de Lucy es paradigmático.

denuncia se sostiene asimismo en otros valores que ellas pretenden encarnar: la dignidad de trabajar para pagar la deuda a través de la demanda de “rentabilidad”, el derecho a educar a sus hijos en el campo, el derecho a mantener la propiedad y la tenencia de la tierra.

La agenda de talleres de la Cuarta Asamblea Nacional realizada en Santa Rosa es expresiva de esta conjunción económica, ética y política: El endeudamiento: legitimidad y usura; El rol de la justicia frente a la usura y las ejecuciones; Paralización de los remates y negociación colectiva por sector; Salvatajes y políticas alternativas; Recupero, mantenimiento y reconocimiento de los derechos sobre la tierra<sup>66</sup>.

El análisis de contenido del discurso reivindicativo permite reconocer fases tanto en función de los destinatarios del mensaje como en relación a los tonos del mismo. En una primera fase, el mensaje es dirigido a las propias mujeres para contribuir a tomar conciencia de que la situación no es “particular”, sino una cuestión social y política que abarca a todo el sector en mayor o menor medida. El tono de este discurso es angustiado y convoca directamente a la solidaridad de sus pares, sin proponerse inicialmente la envergadura que asumirá posteriormente. En este plano, la condición de mujeres agropecuarias, de madres de familia y de responsables de un hogar en situación de riesgo es el eje legitimador de la apelación; la transformación de un tema privado en cuestión de agenda pública es su resultado. Simultáneamente se desencadena un proceso en el que la denuncia de una mujer se transforma en un acto colectivo, social y político.

En una segunda fase, el mensaje se dirige directamente a los principales actores del sistema político y en particular al sistema financiero, adquiriendo creciente contenido político e incorporando un diagnóstico de las causas de la situación denunciada así como planteando propuestas concretas. El discurso se dirige directamente al sistema político local, personificado inicialmente en el gobernador de la provincia de La Pampa. En la medida en que la reacción convoca adhesiones de todos lados y el movimiento asume una dimensión nacional, la interpelación se dirige a los actores políticos nacionales: el Parlamento Nacional y el propio Presidente de la Nación. En lo que respecta a los interlocutores económicos, inicialmente la reivindicación se dirige al Banco Provincia, y ya en 1996 se focaliza en el Banco Nación y en la política económica en general.

---

66 Citado por Garmendia Ana Pía, 2000, FLACSO.

A las condiciones económicas que se denuncian y que dan lugar a la eclosión de la crisis se suma un componente cultural en la plataforma del movimiento: la reivindicación de un modo de vida, que más que asociarse a un modo de producción se vincula a un proyecto histórico de país, a un modelo de familia y a una particular relación de estas mujeres con el campo<sup>67</sup>.

El 8 de marzo de 1996, en la primera gran movilización convocada por el MMAL sobre la Plaza de Mayo, puede afirmarse que la plataforma reivindicativa que allí se manifiesta conquista el escenario nacional en el lugar simbólicamente más representativo de la nación. Lo que hasta el momento ha sido socializado por la prensa y por la propia gente se instituye en ese gesto colectivo masivo en otro campo, el político institucional, con la presencia real de las mujeres en el centro político y financiero del país.

Se materializan así los nuevos términos de la relación: mujeres agropecuarias enfrentadas a actores políticos y económicos de carácter nacional. Se suceden reuniones de las dirigentes del MMAL con representantes de los partidos políticos, en particular la Unión Cívica Radical y el Frepaso; se solicita audiencias al presidente del Banco Nación para plantear que se transfieran a ese banco las deudas del Banco Provincia; se denuncia la política agropecuaria del modelo menemista y se demanda al reelecto presidente Carlos Menem una audiencia para presentarle directamente las demandas del movimiento.

La dimensión pública del movimiento se consolida con las movilizaciones sociales de gran dimensión que deciden encabezar. A partir del 8 de marzo de 1996 asumen el Día Internacional de la Mujer como una fecha de movilización del MMAL, realizando una multitudinaria marcha en Buenos Aires sobre Plaza de Mayo donde confluyen representantes de todas las provincias. Lucy de Cornelis sostiene en esa oportunidad "... empezamos siendo 350 personas en una asamblea (en 1995), hoy podemos decir que hemos recorrido 45.000 kilómetros, hoy somos 4.000 mujeres en esta protesta espontánea, pura y apolítica" (Píriz et al., 1999: 77).

---

67 En este mismo sentido es interesante recordar una reivindicación que también hace la Asociación Nacional de Grupos de Mujeres Rurales en Uruguay (ANGMRU) cuando sostiene: "porque podemos y queremos vivir en el campo". Este movimiento agrupa a mujeres rurales de sectores medios y pequeños, propietarios de la tierra. Ver Lournaga Ma. Elena, Asesoría a la ANGRMU, Fundación Friedrich Ebert, Montevideo, 2000.



Participan también de las diferentes formas de expresión de la protesta social en la provincia y en el resto del país, siendo protagonistas activas y muchas veces convocantes de grandes movilizaciones del agro.

En las Jornadas de la Mesa Agropecuaria de Olavarría en setiembre de 1996 el movimiento anuncia un petitorio que presenta al Poder Ejecutivo Nacional con los puntos siguientes: suspender los embargos, las ejecuciones de campos y maquinarias; aceleración de los sistemas de financiación; refinanciación de las deudas con un plazo de veinte años; nuevos créditos para la producción, con un plazo de diez años; rehabilitación de las cuentas corrientes; disminución de las cargas tributarias; ley antimonopolio; mayor presencia del poder judicial y legislativo en la problemática rural; barreras arancelarias; emergencia climática; elaboración de políticas regionales; políticas nacionales de promoción rural; revisión o reforma de la obra social ISSARA; créditos blandos a tasas no usurarias; evitar la mal venta de los bienes; eliminar el IVA. El mero enunciado de estos reclamos muestra la heterogeneidad social de quienes los hacían.

Al mismo tiempo se continúan las gestiones a nivel de la provincia: el trámite de la Ley de Moratoria que se está procesando en el senado de la provincia de Buenos Aires es supervisado por ellas, y se convoca directamente a las mujeres a asistir a las sesiones respectivas en el parlamento provincial para hacer más efectiva la presión. El MMAL acepta la refinanciación del Banco Provincia que rebajó los intereses a 9,5%, pero señala que deja fuera a muchos deudores. Acompaña el diagnóstico que hace de estas medidas con la propuesta de creación de un Banco Rural que tenga potestades para dar créditos al sector supervisados por instituciones como el INTA.

El 8 de marzo de 1998 el movimiento convoca a una gran marcha de protesta sobre Plaza de Mayo que comienza en el edificio de la Dirección General Impositiva y culmina en las puertas del Banco Nación. Lucy de Cornelis y una representante del MMAL de Santa Fe logran ser recibidas por Arturo Di Pietro y otros jefes del directorio del banco, y demandan ayuda de esa entidad. A partir de aquí, el Banco Nación será uno de los destinatarios centrales de las reivindicaciones y de las posturas políticas del MMAL. El movimiento solicita que las deudas del Banco Provincia sean asumidas por esta entidad (*La Nación*, 7/03/98).

El último período del gobierno menemista coincide con una fase de radicalización del tono del discurso reivindicativo del movi-

miento, en particular una actitud de confrontación con los actores políticos dominantes. La campaña electoral multiplica las promesas por un lado y la búsqueda de diferenciación por otro, en un contexto de nacionalización de las protestas agrarias que se multiplican a lo largo del país. Este escenario coincide también en el ámbito de las gremiales con un proceso de diferenciación de las estrategias, y de división o fragmentación entre ellas.

#### LOS MEDIOS DE LUCHA

El Movimiento de Mujeres Agropecuarias combina varios instrumentos de lucha:

- la acción directa, irrumpiendo en el momento de la realización de los remates judiciales de bienes agropecuarios con el propósito de impedir la acción judicial. En estas ocasiones las mujeres cantan el Himno Nacional y oran, tratando de impedir pacíficamente el remate. En los casos en que no logran este propósito, toman fotografías de los compradores “para mostrar quien se queda con nuestros campos”.
- seguimiento de los casos de las mujeres que piden ayuda al movimiento, tratando de acompañarlas para informarse adecuadamente de su situación económica y apoyarlas en la búsqueda de asesoría jurídica. Ante la demanda proveniente de distintas localidades, las representantes del MMAL organizan reuniones locales para informar, sensibilizar y apoyar a las mujeres que se encuentran en situación similar.
- la negociación con los actores políticos y financieros, las autoridades bancarias, las demás gremiales rurales y otras organizaciones sociales es una estrategia permanente. Esta negociación llegó hasta el punto de reunirse directamente con un alto jerarca del Banco Nación, ante quien plantearon sus demandas de justicia, recálculo de las deudas y rebaja de intereses y moras.

Estas acciones están acompañadas por actividades de sensibilización y difusión pública sobre la situación de endeudamiento de los pequeños y medianos productores agropecuarios a través de los medios de comunicación y de otras acciones masivas de difusión. Estos medios configuran un estilo de acción más personalizado que mediático, ya que ni ellas son expertas comunicadoras ni los medios les brindan un espacio tan relevante como para ello. El recurso organizacional es la

reunión allí donde hay mujeres que la solicitan, la asamblea de mujeres, y el seguimiento caso a caso.

Una de las razones que permite explicar la rápida expansión y la eficacia del Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha radica en una característica particular de los instrumentos o medios que despliegan para la acción: la sencillez de los recursos movilizados, su accesibilidad, su inmediatez, y fundamentalmente el lugar desde donde se movilizan estos recursos, la sensibilidad. Su fuerza parece provenir de la capacidad de identificación que suscita en el público provocando simpatía, adhesión emocional y no racional, solidaridad y empatía. En suma, el Movimiento logró movilizar recursos localizados más en la esfera de la ética y de la sensibilidad que en el plano de la política y la racionalidad.

Estos recursos se caracterizan por su vinculación con la subjetividad y por su apelación a los “valores más universales de la nación” argentina: la oración y el canto del Himno Nacional en forma pacífica, la defensa de la familia de la producción están al alcance de cualquier ciudadano o ciudadana, constituyen un “gesto cotidiano” que evoluciona en “instrumento político”. Esta subjetividad no parece involucrar solamente a las protagonistas, sino que conmueve por distintas razones también a los destinatarios de la acción: el rematador, que no sabe qué hacer inicialmente; el juez, que se enfrenta al dilema ético entre justicia e ilegalidad; el poder público, que no sabe bien cómo actuar frente a un grupo pacífico de mujeres cuya acción consiste en cantar y tomar fotografías; el representante del comprador, que no quiere ser identificado.

Un aspecto interesante es el recurso de la fotografía del comprador. Si bien tiene el sentido material de ponerle rostro a la situación que se denuncia, lo que contribuye a la sensibilización y toma de conciencia es una medida política que está orientada a desenmascarar la opacidad de los procesos de concentración de la tierra y los cambios en la estructura agraria argentina. En oportunidad de un remate de maquinaria agrícola en Eduardo Castex, las mujeres registraron fotográficamente los hechos planteando que... “nos están invadiendo los “pools” de siembra... queremos ver las caras de quienes compran nuestros campos” (diario *La Arena*, 29/6/96, citado por Píriz et al., 1999: 37). Obviamente los compradores se resisten y en muchos casos abandonan el lugar del remate.

La invocación a la familia, la oración religiosa y el Himno Nacional parecen operar como garantías de la intencionalidad de la

acción: acción pacífica, que no pretende alterar el orden sino demandar justicia. Sin embargo, tanto la condición de mujer como el estrato social al que las fundadoras pertenecen son variables que seguramente inciden en el impacto de sus instrumentos de lucha. La condición de mujer es invocada desde su función de reproductora, y es desde ese lugar en la estructura familiar que asume el rol de defensa del núcleo. La defensa de la propiedad del campo aparece así como la defensa de la unidad productiva que garantiza la integración familiar y su subsistencia. Esa fundamentación tiene fuerte implantación en la cultura local y regional, haciendo más difícil la acción pública disuasiva.

En relación al estrato social de pertenencia de las mujeres que originaron el movimiento, por lo menos en la región pampeana son percibidas como mujeres pertenecientes a sectores medios o acomodados del ámbito local o regional. Un juez se expresaba de esta manera en un programa televisivo en Olavarría: “no es lo mismo sacar a damas y sobre todo de cierto sector de alcurnia social”<sup>68</sup>.

#### ENTRE LA JUSTICIA Y LA LEGALIDAD

La acción que realizan las mujeres del movimiento en las situaciones de interrupción de los remates se sitúa en el delicado límite entre el derecho a la expresión pública y la ilegalidad. Parece existir en las mujeres una cierta confianza casi irracional en que la justicia del acto está por encima de cualquier posible discusión sobre su legalidad o ilegalidad. Son mujeres en función de protección de sus familias y sus crías, y por ello sostenidas en un sentimiento de fortaleza aunque también de miedo frente a las eventuales consecuencias de su acción. Esto generó un debate importante en el momento de la emergencia del movimiento, aspecto que fue manejado como factor de amedrentamiento de la organización y que atemorizó sin duda a muchas mujeres al momento de tomar parte de este tipo de acciones.

Surge así un conjunto de cuestiones relevantes para cualquier acto de protesta: la articulación entre la legitimidad de un acto de defensa de un derecho y las consecuencias de una acción que interrumpe otra legalidad: la del demandante que procede a la ejecución judicial. Esto dio lugar a un encendido debate en la sociedad local provincial, donde intervinieron representantes del Poder Judicial y de la sociedad civil. Este

---

<sup>68</sup> Esta expresión hace referencia a la dificultad de ordenar a la fuerza pública que intervenga para disolver la manifestación (Píriz et al., 1999: 32).

debate plantea cuestiones tales como cómo se ocasiona el mal menor, si interrumpiendo el remate o haciéndolo; si la acción del movimiento no implica hacer justicia por propias manos; la responsabilidad de la justicia de velar también por el derecho de la contraparte acreedora; la promoción o no de una acción legal contra las propias mujeres que reivindicaban la injusticia e ilegalidad de la deuda que da origen al remate; el rol de la policía en el acto concreto, donde las mujeres pueden ser acusadas por producir “desorden” de forma absolutamente pacífica.

Este dilema entre justicia e ilegalidad se instala en la agenda pública regional y da lugar a diversas confrontaciones. Llega a debatirse por qué se endeudaron los productores, si fue por un manejo irresponsable o inadecuado de los recursos financieros y los préstamos (es decir, una responsabilidad individual) o como consecuencia de una política que tiene sus responsables; si es usurario el interés sobre la deuda que el sistema bancario cobra y los efectos que esto produce; si es legítimo recurrir a medios que implican confrontarse con otras disposiciones legales.

Estas preguntas constituyen en suma el centro de cualquier acto de protesta o acción pública basada en una reivindicación social de derechos que intente modificar aspectos del orden vigente en alguna de sus formas (jurídica, cultural, política). Es también el centro de cualquier discusión política vinculada a los límites del sistema: cómo se transforma el orden social vigente, en este caso a través de una confrontación pacífica y de carácter ciudadano.

Tal vez el ejemplo más representativo de esta forma particular de confrontación con el poder lo expresa Joaquina Moreno cuando, en la mesa de un alto funcionario del Banco Nación, pone sus manos como garantía de que el endeudamiento no es fruto de la falta de trabajo sino del manejo de la política económica y financiera: “...Pero una vez un funcionario del Banco Nación, que tenía una pinta de señorito, nos dijo que nosotras no trabajábamos. “Las mujeres ¿qué van a trabajar?”. Entonces le dije: aquí hay mujeres de Río Negro, Mendoza, La Pampa, que trabajan la tierra en una chacra. Que sacan la fruta y carpen el suelo. Ponga sus manos delante de las nuestras (Joaquina Moreno pone sus curtidas manos sobre el escritorio junto a las manos del funcionario). Mire nuestras manos y vea si no son de trabajo. Mire las suyas...”<sup>69</sup> (Píriz et al., 1999: 64).

---

69 Entrevista a Lucy de Cornelis, citada por Píriz et al., (1999: 64) y relatada asimismo por Ruth Corcuera en entrevista realizada para este trabajo.

## LA RELACIÓN CON OTRAS AGREMIACIONES RURALES, EMPRESARIALES Y SOCIALES

Las principales agremiaciones rurales que tienen una presencia protagónica en la región pampeana en el período analizado son: la Federación Agraria Argentina, organización con larga trayectoria que nuclea a pequeños y medianos productores y tiene su sede en Rosario; la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO); la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP); y la Sociedad Rural Argentina, que reúne a los grandes capitales vinculados al agro tanto en el sector productivo como agroindustrial. Aparecen también organizaciones más pequeñas o de más reciente fundación como la Unión General de Tamberos, la Federación de Cámaras de Comercio y el Frente Nacional Agropecuario, fundado en 1993.

La articulación de intereses en el agro argentino hasta la década del ochenta fue exitosamente realizada por las gremiales tradicionales, que lograron conciliar la diversidad de intereses entre pequeños, medianos y grandes propietarios de tierras. Los efectos de la política económica del menemismo provocan escisiones contundentes entre los sectores agropecuarios beneficiados por esa política y aquellos que se vieron afectados. A partir de allí, las gremiales comienzan a evidenciar diferencias, tanto en relación a sus posturas frente a la política económica como respecto de las estrategias a llevar adelante.

El vínculo del MMAL con esas otras organizaciones empresariales o sectoriales se produce en torno al tema de la deuda y a la política bancaria, pero tiene dificultades para traducirse en una agenda común. El movimiento representa a un sector determinado –los pequeños y medianos productores vinculados a la agricultura– y a una situación particular: el endeudamiento. Sin embargo, desde la emergencia de las primeras acciones públicas sus integrantes aclaran que no están ligadas a ninguna entidad agropecuaria ni tampoco a ningún partido político. Se presentan desde el origen como una expresión autónoma respecto de las gremiales regionales a las que sus maridos pertenecen o pertenecieron<sup>70</sup> con una postura crítica de la gestión de estas corporaciones que consideran fueron funcionales al sistema sin ser capaces de enfrentarse al centro de poder. Esta tensión entre adhesión y crítica a las organizaciones corporativas tradicionales cruza al

---

70 Esta referencia a las instituciones “de sus maridos” surge de las propias protagonistas.

movimiento, y es estimulada por las propias organizaciones, que les reclaman su integración a la corporación para fortalecer la acción conjunta<sup>71</sup>.

Esta actitud es vista por algunos observadores como una maniobra de cooptación desde los sectores más tradicionales del agro, que desearían contar dentro de sus filas con estas mujeres que han logrado visibilidad y eficacia pero cuyas demandas entienden incorporadas en las reivindicaciones de las sociedades rurales. La Sociedad Rural Argentina focaliza centralmente su discrepancia en los mecanismos utilizados por el MMAL para hacer oír sus demandas, calificándolas de ilegales y planteando que sus reivindicaciones forman parte de la gremial. "...Nosotros las queremos en las instituciones", dice un dirigente de la Sociedad Rural de Olavarría.

La Federación Agraria Argentina comienza a incorporar en su plataforma recién a partir de 1997 una postura más crítica sobre el tema de la deuda, la suspensión de ejecuciones judiciales y la refinanciación, lo que inicia un ciclo de aproximación con el MMAL. Este cambio de posturas es demostrativo de conflictividad al interior de la Federación Agraria, donde surgen corrientes críticas de la conducción tradicional que finalmente conquistan la dirección de la gremial<sup>72</sup>.

En relación al sistema político, las mujeres del MMAL siempre declararon su independencia y autonomía, en la medida en que se vinculan al mundo público para incidir en la toma de decisiones desde su rol de actores sociales y ciudadanas, pero sin pretender transformaciones en las relaciones de poder. Una interrogante necesaria es en qué medida una lucha que se carga crecientemente de un contenido de confrontación en términos de modelo económico no termina, para subsistir, estableciendo redes de cercanías con estructuras partidarias que le aseguren cierta visibilidad, eficacia y consistencia en su relación. Esto sucedió con El Barzón en México, y sucede individualmente con algunas líderes del MMAL. En la última elección legislativa argentina, algunas de las principales dirigentes fueron requeridas desde diversas tiendas políticas, y algunas de ellas, como Joaquina

---

71 Para señalar un ejemplo, el grupo de mujeres desarrolló acciones conjuntas con la Sociedad Rural de Olavarría (de arraigo regional amplio) para solucionar problemas comunes del campo que trascienden el tema del endeudamiento: caminos rurales, comisión vial, abigeato, revalúo inmobiliario, etc. Un grupo de mujeres terminó integrándose a la entidad, mientras que otras reafirmaron una lucha autónoma.

72 En este período se incrementa el nivel de conflictividad en el campo argentino, con expresiones muy fuertes de campesinos en Santiago del Estero (MOCASE), grupos agropecuarios en Corrientes y en la provincia de Santa Fe.

Moreno, fueron candidatas a senadoras. Sin embargo, por lo menos en esa instancia el movimiento logró mantener su independencia.

La relación con organizaciones internacionales ha dado legitimidad interna y externa al movimiento, aunque desde nuestra perspectiva también ha contribuido a posicionarlo políticamente en una postura de creciente radicalización. Se destaca la experiencia de El Barzón en México, que el MMAL conoce en 1997, y el vínculo con otras organizaciones de deudores de América Latina, a partir del cual se les invita a participar del Foro para la Discusión de la Deuda Externa y la Fundación de Lucha contra la Usura. Asimismo, se les invita a conformar un movimiento latinoamericano de mujeres agropecuarias que no ha tenido hasta el momento un desarrollo efectivo, pero señala el reconocimiento que el MMAL recibe.

#### LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD

El Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha expresa la confluencia de la doble adscripción de sus integrantes: es un movimiento de mujeres sin una reivindicación específica de género, y es un movimiento rural de defensa de intereses de pequeños y medianos productores agropecuarios propietarios de sus tierras. Por tanto, el análisis de la identidad recorre estas dos adscripciones: su configuración como movimiento social, y su condición de género. En este marco la complejidad radica en tres elementos: su autoidentificación como un movimiento que representa los intereses específicos de pequeños y medianos productores agropecuarios, distanciándose tanto de las agremiaciones rurales tradicionales como de otras acciones públicas de corte popular que han formado parte del llamado “ciclo de protesta” en la Argentina de fin de siglo; su constitución como un movimiento de protesta focalizado en intereses prácticos, más que como un movimiento social orientado a modificar relaciones de poder; y su configuración como un movimiento de mujeres que actúa desde un rol tradicional de maternazgo sin una reivindicación específica de intereses estratégicos de género.

#### EL ANÁLISIS DE GÉNERO APLICADO A LA CONDICIÓN DE MUJERES RURALES

El concepto de género es una categoría compleja que refiere al carácter social y cultural de atribuciones y competencias asignadas a las personas en función de su sexo. El sexo es la diferencia biológica entre varo-



nes y mujeres, mientras que el género es una construcción social, cultural e histórica que convive con otros sistemas de estratificación existentes en un contexto determinado. En consecuencia, el sistema de género es el conjunto de normas, pautas, expectativas y valores asignados a los roles y funciones de las personas según su sexo, que aparece en la cultura occidental como natural, y en consecuencia invisibilizado. Con base en esa atribución construida de las diferencias sexuales se naturalizan también relaciones, normas y estructuras institucionales que consolidan una determinada forma de distribución y reproducción desigual de poder. En suma, “el género es la forma básica de representación de relaciones de poder en que las representaciones dominantes se presentan como naturales e incuestionables” (Joan Scott, 1990).

Esta diferenciación social que expresa un sistema de género tiene su base en una dimensión material sostenida por la división sexual del trabajo productivo y reproductivo sobre el que se basa también un determinado modo de producción. Esta doble condición material y simbólica del sistema de género explica las profundas resistencias que provoca, y la connotación transformadora que suele asignárseles a las acciones colectivas que consciente o inconscientemente contribuyen a modificarlo. El análisis de género es transversal, y puede aplicarse a cualquier relación social, con mayor o menor grado de visibilidad. Por tanto, la condición de género no está presente exclusivamente cuando hay un propósito explícito de los actores sociales, sino que refiere a una condición previa desde donde estos actores realizan su práctica, independientemente del grado de conciencia que tengan de ella.

A partir de esta conceptualización nos interesa distinguir entre “condición de género” –que refiere a la posición que el sujeto ocupa en un determinado sistema de valores– y “conciencia de género”, que es la conciencia que cada actor social –hombre o mujer– tiene de su posición en ese sistema. Esta diferenciación es relevante para el análisis aplicado a las acciones sociales donde el tema de género no aparece como propósito explícito de un grupo o movimiento aunque esté profundamente implicado en sus contenidos o en sus prácticas como en el caso del MMAL.

Vale la pena agregar otra herramienta conceptual sobre el proceso de constitución de los intereses de género. En un texto del Instituto de la Mujer de España se establece una distinción ya clásica entre intereses estratégicos de género e intereses prácticos de género. Intereses estratégicos son aquellos que las mujeres y los hombres

identifican deductivamente a partir del análisis de su subordinación y las acciones que toman para revertirlos. Los intereses prácticos de género se identifican inductivamente y surgen de la posición concreta de las mujeres dentro de la división sexual del trabajo. Los intereses prácticos son una respuesta a las necesidades inmediatas y no incluyen una meta estratégica como la emancipación de las mujeres o la igualdad de género (Instituto de la Mujer, 1998).

El abordaje de género ha sido cuestionado teórica y políticamente desde distintas tradiciones, dando lugar a debates ya clásicos. A modo de ejemplo pueden mencionarse: la relación entre estructura y cultura, la articulación de una esfera pública (predominantemente masculina, vinculada al mercado y al estado) y otra privada (femenina, vinculada a la familia), o la relación entre clase o estratificación socioeconómica y género. El estructuralismo resistió en muchas de sus expresiones la perspectiva de género, ya que esta implica reconocer la existencia de un sistema de estratificación diferente al económico, que permea o trasciende el sistema de clases. Esto supondría aceptar que puede haber sujetos subordinados desde la perspectiva del sistema de clases (obreros, campesinos, trabajadores rurales, etc.) que ocupen una posición de dominación en el sistema de género. Las teóricas feministas en sus distintas corrientes han planteado que el sistema de género es previo históricamente y diferente del socioeconómico, con lo cual dentro de una clase social existen (o preexisten) relaciones de poder diferenciales sustentadas en la división sexual del trabajo. El análisis del MMAL justamente se localiza en una zona de confluencia entre estos dos sistemas de estratificación.

Desde los estudios feministas, el análisis de la condición de la mujer rural ha sido tímidamente abordado y en general se ha dedicado a la mujer rural asalariada o de sectores populares. Se señalan por lo menos dos causas para este “silencio feminista” en torno a las mujeres del mundo rural en los países industrializados: en primer lugar, porque el espacio rural ha sido contemplado como “marginal” en el marco de la racionalidad industrial y en culturas sobredeterminadas por el factor urbano; en segundo lugar, porque los análisis feministas se han ocupado básicamente de poner en cuestión la dicotomía entre producción y reproducción, trabajo y familia, sin haber podido prescindir de tales categorías analíticas, omnipresentes en el pensamiento social y económico contemporáneo, que han dejado de lado la configuración de la condición femenina en un ámbito donde el espacio del trabajo coincide con el espacio familiar,

con límites imprecisos entre las esferas productiva y reproductiva (Instituto de la Mujer, 1998: 64).

La sociología rural también ha encontrado serios obstáculos para la incorporación de la perspectiva de género en su reflexión. Una fuerte orientación “comunitaria” de la sociología rural y el dogma de la fortaleza de la institución familiar, así como cierta noción de estabilidad del sistema y de cambio focalizado en agentes externos al entorno rural, han contribuido a desatender la relevancia de las relaciones familiares como expresivas de tensión y conflicto (Instituto de la Mujer, 1998: 65). La empresa agropecuaria familiar pone de manifiesto esta proximidad entre producción y reproducción, relaciones de trabajo y vínculos familiares, identidad entre roles familiares y roles laborales dentro de la familia. Desde esta tradición, la familia campesina fue considerada en los análisis sociológicos como un espacio de colaboración y complementariedad que explicaba su capacidad de resistencia y de supervivencia económica.

La asociación entre estas dos tradiciones es removedora. La cuestión central está en que las categorías elaboradas desde las teorías de género contribuyen a mostrar la existencia de relaciones de poder y subordinación entre los miembros del propio grupo doméstico. Con todo, sigue siendo difícil romper con esa imagen de mujeres rurales integradas en un mundo de lealtades familiares y comunitarias, en las que aparentemente el conflicto de género no tiene razón de ser. “Así, el comportamiento ocupacional femenino en el campo tiende a ser sistemáticamente presentado como una función del comportamiento masculino...”<sup>73</sup>. Y el caso del MMAL seguramente lo sea.

Pero a la condición de mujeres rurales hay que agregar su condición de esposas de... En la literatura especializada hay algunos estudios que muestran una preocupación específica por el status laboral y la función social que en el sistema de relaciones familiares ocupan las esposas de los agricultores. Para Whatmore, citado en el trabajo del Instituto de la Mujer (1998), por ejemplo, la implicación de las esposas de los agricultores en circuitos laborales no agrarios depende fundamentalmente del grado de “mercantilización” de la explotación y no es significativa en sí misma para la reformulación

---

73 La incorporación de las teorías de género a los estudios de la sociología rural reconoce dos trabajos pioneros: el de Lagrave en 1987 sobre la identidad profesional de las agricultoras en Francia, y el análisis del trabajo de la mujer en la agricultura familiar que Whatmore realiza en Gran Bretaña. Las referencias al trabajo de Whatmore son tomadas de IME (1998).

de las relaciones de género si la mujer –como esposa– no tiene control sobre los productos de su trabajo. En general, lo que ella produce fuera de la unidad familiar se revierte en la supervivencia del núcleo. Ese autor trata de evitar esta separación artificial entre esferas laborales distintas en esas condiciones; por el contrario, habla de “circuitos laborales” como interrelacionados de hecho, formando parte de una misma lógica y estrategia familiar, se den “dentro de la unidad familiar o fuera de ella”. Señala que el proceso de trabajo dentro de la explotación comprende cuatro circuitos laborales principales: el trabajo agrícola, el trabajo doméstico, el trabajo no agrícola y el trabajo remunerado fuera de la explotación. Si bien los mismos pueden distinguirse, en la práctica están interrelacionados, ya que constituyen la totalidad de las estrategias familiares para la subsistencia, la obtención de mercaderías o la reproducción de la empresa. Desde esta visión del trabajo familiar no tiene sentido hablar de estrategias laborales individuales, y por tanto de procesos de ruptura de las relaciones tradicionales de género a través de la configuración de espacios laborales independientes, sino que hay que analizar es si como consecuencia de esa actividad se modifica el lugar de la mujer en el sistema de relaciones del núcleo familiar.

En este mismo sentido Martíne Bernam señala que nos encontramos ante una nueva transfiguración de la “ayuda” familiar agraria que tradicionalmente han brindado las mujeres, y que acorde con la nueva situación de modernización de la agricultura aportan un nuevo capital: “De esta forma, los tradicionales beneficios que reporta el matrimonio al agricultor –una esposa que se hace cargo del trabajo doméstico y eventualmente de parte del trabajo en la producción–, pueden ser parcialmente sustituidos o aumentados por la ventaja que representa la apropiación del salario de la esposa y ...de su capital cultural en términos de acceso a un determinado estilo de vida y de socialización de los hijos en la cultura de la clase media”<sup>74</sup>.

Esta lectura tiene la capacidad de incorporar algunas de las visiones de las teorías feministas, pero también continúa siendo agrocentrista. El desafío queda planteado, aunque trasciende los propósitos de este estudio: cómo explicar los nuevos modelos de familias agrarias desde el estudio de la pluriactividad y, en ese marco, cómo explicar el rol de género.

---

74 Martíne Bernam (1988: 272), citado por IME (1998).

## AUTOIDENTIFICACIÓN DE LAS PROTAGONISTAS DEL MOVIMIENTO

Las mujeres del movimiento se autoidentifican como *esposas de chacareros endeudados*, unidas entre sí por compartir los efectos negativos de la política económica sobre los pequeños y medianos propietarios de tierras. Las une la solidaridad que surge de su condición de esposas y madres de familia que salen a defender sus casas y la propiedad de la tierra frente a los remates judiciales, así como su amor por el campo como lugar o espacio de realización del proyecto familiar. Comparten el diagnóstico de la situación que llevó a los productores al endeudamiento, focalizado primero en los intereses usurarios de los créditos que debieron tomar, en la escasa rentabilidad de la empresa y en la consecuente imposibilidad de hacer frente a esas deudas. Finalmente, el análisis de la situación las lleva a ubicar la confrontación en el plano de la política económica del gobierno, y denuncian el proceso de concentración de la tierra que se está produciendo en la región pampeana en la década del noventa.

Existe diversidad de situaciones en las condiciones socioeconómicas de las mujeres agropecuarias aunque “el campo” y “la tierra” son un referente identitario común. “El terrateniente es el que tiene tierras y el hacendado hacienda, pero suenan a otra cosa más grandilocuente. Yo prefiero decir hombre de campo... el de afuera nos dice estancieros”. “Está la que heredó el campo y está la que lo compró... está la que es docente y se casó con un hombre de campo y está la señora que logró heredar un pedazo de campo y con la producción comprar otro pedazo de campo [...] Yo siempre digo que nos une el amor a la tierra” (Cristina Sabatini, titular del Movimiento de Olavarría, citado por Píriz et al., 1999: 32).

La apelación a la tierra y la pertenencia a una cultura del campo son invocadas como elemento común a todas las mujeres movilizadas por el movimiento. En este gesto se reúne el vínculo actual con la tierra pero fundamentalmente la historia de sus antepasados inmigrantes, chacareros propietarios o arrendatarios que construyeron el proyecto moderno de La Pampa argentina. La tierra representa entonces “su” familia, pero también la historia familiar, el “proyecto gringo”.

La relación de estas mujeres con el trabajo del campo es diversa, teniendo en común la escala “familiar” de estas explotaciones agropecuarias. Algunas trabajan directamente en la explotación, ya sea en tareas productivas (ordeño, cuidado de los animales, conducen un tractor) o reproductivas (cuidado y alimentación de los animales de granja,

la huerta, etc.). Otras asumen el papel clásico de colaboradoras de sus maridos en las tareas de administración y manejo del establecimiento. Algunas viven en el predio rural y otras en el ámbito urbano; hay mujeres que son profesionales, maestras o empleadas de comercio y perciben ingresos provenientes de diversas actividades laborales.

Fundan su acción en la defensa de sus esposos que ante la crisis han bajado los brazos. La acción colectiva surge en torno a esa "necesidad" de género: mantener la subsistencia de su familia, para lo cual irrumpen en la acción pública desde su rol tradicional en el mundo privado. La separación entre el mundo público y el mundo privado, entre roles productivos y roles reproductivos, entre ámbito familiar y ámbito laboral y político-social, no es nítida. Podría sostenerse que la identidad de género de estas mujeres refuerza un rol tradicional en el sistema patriarcal, desde el "maternazgo" como eje articulador de su función social en el núcleo; hablan desde su rol de "reproductoras", independientemente de que ellas mismas sean productoras y compañeras del esposo o complementen los ingresos familiares con sus propios ingresos generados fuera de la unidad productiva familiar.

Si consideramos las categorías de Molyneux antes señaladas, podría sostenerse que el Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha está articulado en torno a una necesidad práctica que no se ha traducido hasta el momento en un interés estratégico de género. Por el contrario, en su discurso aparecen tomando distancia de eventuales posturas caracterizables como "feministas" a fin de reivindicar un rol tradicional de madres y esposas; no se plantean por lo menos explícitamente la transformación de su lugar en la estructura de poder intrafamiliar. Asumen ser las defensoras de sus hijos y de "sus hombres, los hombres de campo".

Para Elizabeth Jelin esto es típico de todo movimiento por lo menos en su fase inicial: "ser madre y ama de casa constituyen roles tradicionales de la mujer que resulta de la división del trabajo prevaleciente... a partir de esa inserción tradicional las mujeres se movilizan públicamente, con demandas dirigidas al estado, con protestas dirigidas a cuestionar el orden de cosas vigentes y con propuestas de transformación de los patrones de relaciones sociales y políticas. Son los casos donde lo privado y lo personal se convierten en el eje de actuaciones y enfrentamientos públicos, no por una elaboración ideológica abstracta sino a partir de los efectos y de las necesidades de las personas particulares con quienes las mujeres se relacionan..." (Jelin, 1985: 33).

La paradoja, que el MMAL comparte con muchas otras expresiones colectivas orientadas a la supervivencia surgidas en estos últimos años, es que actúan en la esfera de lo público en función de sostener un determinado orden en lo privado. Esta condición de síntesis entre lo público y lo privado constituye una de las diferencias sustantivas del MMAL con la práctica de las organizaciones corporativas y sociales a las que sus maridos pertenecen: ellas no actúan para usar el poder, para conseguirlo o reproducirlo, es decir, no actúan por una racionalidad pública o política, sino que intervienen en lo público “desde” lo privado para asegurar la supervivencia de ese universo.

¿Cuánto de transformador tiene este movimiento en la estructura real material y simbólica de roles de género? Esto es difícil de responder, ya que requeriría un estudio que caracterice las transformaciones operadas en el ámbito de las familias, en el imaginario de estas mujeres y de los hombres que la integran. Sin embargo, es posible suponer que la socialización de las militantes del MMAL en la confrontación pública, y su práctica de intercambio, transforman aspectos que tienen que ver con la realidad objetiva y también con la realidad subjetiva. En este sentido, muchos hombres resistieron inicialmente la acción pública de sus mujeres porque, además de la “derrota económica”, se sintieron expropiados de su rol masculino en el sistema familiar. Sin embargo, paulatinamente fueron ampliando su protagonismo.

En diversas situaciones la ausencia masculina produce “empoderamiento” de la mujer. En este caso, se produce algo que puede asimilarse a la “muerte civil” del hombre ante la pérdida de su centralidad. La consecuencia, aún desde el papel tradicional que las mujeres reivindican, es el incremento de poder de las protagonistas y seguramente ciertas transformaciones en la estructura de roles al interior de la unidad familiar.

Sería necesario en el caso del MMAL seguir las biografías de las mujeres que se organizaron y de sus hombres para elaborar conclusiones respecto al impacto del movimiento sobre la estructura de género. Es decir, para evaluar si hubo o no una efectiva transmutación de intereses prácticos en intereses estratégicos de género.

#### LOS ADVERSARIOS Y LA CONSTITUCIÓN DEL CONFLICTO

Inicialmente el conflicto se expresa entre los productores endeudados y los acreedores, en particular la banca pública (Banco de la Provincia

de La Pampa y Banco Nación). Los actores políticos regionales y nacionales son interpelados como intermediarios aspirando inicialmente a que sean portavoces de sus intereses. Ante la ineficacia o indiferencia de estos actores, las mujeres del movimiento interpelan directamente a las autoridades bancarias, al Parlamento nacional, al presidente de la nación, y se constituyen en interlocutoras directas del sistema financiero.

Las reivindicaciones que articulan al movimiento y le permiten expandirse corresponden a un sector socioeconómico de pequeños y medianos propietarios agrícolas. Tanto el discurso de las protagonistas como la plataforma del movimiento están orientados a la defensa de la propiedad de la tierra y a la revisión de medidas de política económica a fin de proteger la productividad de estos sectores. El endeudamiento de los pequeños y medianos productores agropecuarios, vinculados particularmente a la agricultura, es el problema central: precios, condiciones de los créditos, costos de la modernización agrícola, la concentración de la propiedad de la tierra, impactos sobre este sector productivo de la industrialización agrícola, efectos de los intereses de deuda. Posteriormente, la reivindicación cobra una dimensión más política y salen en “defensa de la banca nacional”, oponiéndose a la privatización del Banco Provincia y del Banco Nación y solicitando que las deudas sean transferidas del primero a la entidad nacional.

No aparecen en el discurso ni en los documentos del MMAL reivindicaciones vinculadas a otras situaciones económicas, como por ejemplo el acceso a la tierra para quienes no la poseen, reivindicaciones salariales para el área rural o condiciones de trabajo de las mujeres en el área urbana. Hubo sí expresiones de solidaridad e intercambios con otros sectores con problemas de viabilidad económica como el comercio, pero sin integrarlos efectivamente al grupo. En esos casos el eje de la articulación también fue el endeudamiento. Respecto a otro tipo de movilizaciones sociales como las de derechos humanos, los desempleados, los piqueteros o las movilizaciones por tierra en el norte del país, el movimiento ha mostrado compromiso y apoyo aunque sus demandas son claramente diferentes.

#### ¿MOVIMIENTO SOCIAL O GRUPO DE ACCIÓN PÚBLICA?

Como señala Elizabeth Jelin, los debates sobre los movimientos sociales en América Latina han brindado escasa atención a la dimensión de



género, seguramente proveniente de cierta relevancia subsidiaria de las consideraciones socioeconómicas y estructurales. Sin embargo, esta realidad coloca la cuestión de la dimensión de género en la configuración del movimiento, en su práctica y en sus efectos sobre la sociedad, desde una mirada que intenta identificar –en la presencia y en las ausencias– el significado particular que la lucha, la acción colectiva y la crisis de un modelo de desarrollo tienen para las mujeres.

En general, la concepción más tradicional de movimiento social es tributaria de los paradigmas que interpretaban las relaciones sociales en términos de poder, vinculándolas necesariamente con la configuración de movimientos o instituciones que representaban intereses. Por tanto, los llamados “nuevos movimientos sociales” de los ochenta fueron interpretados por algunos como protestas o momentos prepolíticos a ser encauzados posteriormente por partidos o instituciones de “representación”. Esa mirada fue generando la perspectiva de que más que una nueva forma de hacer política, esos movimientos expresarían una nueva forma de sociedad. Esta visión suponía la existencia de lo social, su capacidad de representación por parte de grupos organizados, y su finalidad de participación de un nuevo modo en las relaciones de poder.

El interés analítico de los movimientos sociales reside en buscar en ellos evidencias de transformación profunda de la lógica social, como señala Jelin. Lo que está en cuestión es una nueva forma de hacer política y una nueva forma de sociabilidad. Pero más profundamente, lo que se intuye es una nueva manera de relacionar lo político y lo social, el mundo público y la vida privada, en la cual las prácticas sociales cotidianas se vinculan e interaccionan directamente con lo ideológico y lo institucional-político (Jelin, 1987: 6).

En este plano, el MMAL ofrece la posibilidad de analizar la articulación de una acción colectiva, autodefinida como “movimiento”, que se sitúa exactamente en la confluencia entre el mundo público y el privado; entre la familia y la sociedad, entre la unidad productiva y el mercado, entre el ciudadano y el sistema político. Melucci justamente resalta la importancia de la familia como ámbito social político público y como espacio privilegiado para ver en proceso de formación a los movimientos sociales, planteando que se observa “...en la espontaneidad, falta de institucionalización, ambigüedad de demandas, sentidos contradictorios y multifacéticos, pero acción y prácticas colectivas, más que propuestas ideológicas o aparatos institucionales”. Al mismo tiempo advierte que es el investigador quien provoca la lectura de

estas prácticas como movimiento social, otorgándole un sentido en el tiempo: "...partimos de la concepción de los movimientos sociales como objetos contruidos por el observador, que no coinciden con la forma empírica de la acción colectiva. Los movimientos sociales... no son sólo el producto de la crisis, los últimos efectos de una sociedad que se muere. Por el contrario, son los signos de aquello que está naciendo" (Mellucci, 1982: 7).

El Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha se sitúa en un punto indefinido entre el movimiento y la acción colectiva de protesta; y esa es su identidad. Podría ser considerado un movimiento social si se asume una definición ecléctica del mismo, ya que su historia expresa más que nada una forma de construcción de la identidad compleja. Tiene rasgos compartidos con los movimientos sociales tradicionales, pero también particularidades más próximas a las formas de expresión colectiva no estructuradas que se han evidenciado en los últimos años del siglo. El MMAL está articulado en torno a un sistema de solidaridad que confiere unidad e identidad a sus miembros. La definición de mujeres rurales y el rol de esposas de pequeños y medianos productores agropecuarios es un factor central aglutinador de las acciones colectivas y constituye un rasgo de identidad que se superpone a otras diferencias en la condición o situación de cada una de las mujeres que lo integran. En segundo lugar existe un conflicto manifiesto entre dos actores, la banca acreedora y los productores endeudados, que da lugar a recursos de poder y medios diversos: de negociación con distintos actores, acción directa, difusión y concientización.

Sin embargo, el movimiento no tiene como propósito específico modificar relaciones de poder o situarse en una posición de confrontación con el sistema. Por el contrario, parece explicarse más por la reacción de un sector económicamente postergado por el sistema que lucha por mantenerse en él o mejorar su posición dentro del mismo. Desde el punto de vista de su condición estructural, corresponde a una cultura de clase media que, enfrentada a un proceso de movilidad social descendente y a situaciones adversas producto del modelo económico, lucha por mantener su posición. Respecto al tipo de organización, el MMAL también tiene un rasgo particular acorde con la noción de poder que ellas sostienen; en consecuencia configuran una organización lábil, flexible y democrática, sin estructuras jerárquicas más allá de una simbólica presidenta y una mesa coordinadora. No responden a un diseño institucional orientado a la conquista de poder, sino que apelan a esta concepción como factor diferenciador de otras

instituciones corporativas y de otros movimientos sociales; hacen de la forma una seña de identidad, un contenido en sí mismo. La espontaneidad de la acción, la inmediatez de la respuesta y la focalización en un interés práctico parecen aproximarlas más a un grupo de protesta que a un movimiento social, aunque estas características no han logrado menguar la permanencia en el tiempo del movimiento y su relativa eficiencia en el logro de resultados.

Otro rasgo novedoso de este movimiento respecto a los tradicionales es que las mujeres surgen como actores centrales, visibles, definidas en cuanto tal como protagonistas, articuladas en torno a una reivindicación que no es de género. Tradicionalmente las mujeres no son visibles a priori en los movimientos sociales, aunque sean mayoritariamente mujeres quienes los integren. Estos movimientos no se preguntan sobre el carácter que el género imparte a la participación, las prácticas colectivas o la acción pública que desarrollan. Los movimientos de mujeres, por el contrario, se han articulado en general en torno a esta categoría para hacer visible su condición; sin embargo, el MMAL comienza como una acción pública de mujeres en torno a una reivindicación no genérica: también en este plano se sitúa en un punto de intersección entre esas dos adscripciones.

#### COMPATIBILIDAD CON LOS LÍMITES DEL SISTEMA

El sentido político del movimiento parece tener por lo menos dos adscripciones. Una está vinculada al contexto nacional y regional de crisis económica, donde el endeudamiento y la reivindicación concreta de sus agendas es la cuestión central. Sin embargo, detrás de la demanda específica, el gesto de defensa de estas mujeres puede asociarse también al contexto más general de “incertidumbre y malestar” del proyecto moderno en Argentina y al lugar que en ese proyecto ocupa el sector productivo, en particular en ese enclave de la cultura regional. Es la defensa de la chacra, del campo, de la unidad productiva, de la subsistencia de la familia, pero también es la reacción frente a la incertidumbre y la amenaza de ruptura del “gran proyecto” de la modernidad: el trabajo, el futuro más o menos asegurado, la justicia del producto del esfuerzo como compensación vital, etcétera.

El fuerte componente vital de la reacción y acción colectiva de las mujeres está muy ligado a una doble amenaza de pérdida: de la identidad (familias de campo, hacendados, chacareros) y de la certidumbre como referente de época. En el contexto de emergencia del

MMAL estallan dos enclaves de identidad: la viabilidad del proyecto moderno representado por la explotación agrícola introducida por los inmigrantes en la Argentina, y el papel del trabajo productivo, representado por la figura masculina del núcleo familiar que “baja los brazos”. El vector de ese proyecto moderno de desarrollo económico productivo que fue históricamente el hombre, los chacareros arrendatarios o propietarios, hoy están “deprimidos”, y sus organizaciones no son creíbles. Se asiste a la crisis de un rol masculino sostenido sobre la base de valores que el desarrollo actual del capitalismo en el campo ha puesto en cuestión: la producción, la negociación, la provisión de certidumbres y seguridad<sup>75</sup>.

Rosana Rossanda señala que las mujeres tienen una enorme capacidad de actuación en momentos de extrema tensión. “Las mujeres disponen de un enorme poder social basado en la inmediatez del afecto, pero se adecuan mal a una institucionalidad política fundada en la lógica masculina del poder. Capaces de pasión política, sólo actúan en momentos de extrema tensión. Su larga historia de opresión las ha convertido en conservadoras brillantes o anarquistas ardientes, nunca en administradoras de la paz civil (Rossanda, 1985). Parece entonces que las mujeres participan más en movimientos de protesta coyunturales que en organizaciones duraderas, formalizadas, institucionalizadas, que implican una carga de responsabilidades, dedicación de tiempo y esfuerzo a la organización y, también la oposición de los varones (Jelin, 1987: 317).

Coincidentemente con esta percepción, el MMAL parece adecuarse más a un perfil de “movimiento/expresión” por sobre un perfil más tradicional de “movimiento/organización”. La concepción de poder que manejan y que se transfiere al diseño organizacional del movimiento logra reproducir una función de “expresión pública” y acción colectiva basada en la comunidad de esa expresión y no en la fuerza de una estructura institucional.

En síntesis, este movimiento no plantea una ruptura sistémica con la estructura social, política o económica de la Argentina de fin de

---

75 Rosanvallón plantea que en el malestar contemporáneo se superponen dos incertidumbres. El más visible es el procedente de las conmociones económicas; pero hay también otro, más subterráneo, que remite a los efectos destructores del individualismo moderno. Es una crisis económica y antropolítica, a la vez crisis de civilización y del individuo. Fallan simultáneamente las instituciones que hacen funcionar el vínculo social y la solidaridad (crisis del estado providencia), las formas de la relación entre la economía y la sociedad (crisis del trabajo) y los modos de constitución de las identidades individuales y colectivas (crisis del sujeto) (Rosanvallón, 1998: 14).

siglo. Más bien constituye una reacción de defensa del mismo y de su posición en él. La reivindicación apunta a encontrar los medios para mantenerse dentro del sistema, desempeñar un rol productivo en la economía regional, y asegurar las condiciones que hagan posible dar cuenta de sus compromisos: pagar las deudas y mantener la propiedad de la tierra. El conflicto central es con la política económica, con un tipo de política. Posiblemente el MMAL deba ser interpretado como un movimiento de reacción de un modelo de capitalismo productivo que intenta sobrevivir a un modelo liberalizado de capitalismo financiero.

Si esta es su racionalidad en términos económicos, también hay una vocación de integración sistémica en términos culturales y en la adscripción de género del movimiento. La propiedad de la tierra significa también la pertenencia a una estructura social tradicional, a un sistema de prestigios con base en ese elemento sustantivo como centro del reconocimiento de una identidad común. Desde la perspectiva de género, hasta el momento puede afirmarse que el movimiento es funcional al sistema de relaciones de género dominante en ese contexto cultural. Esto no implica valoración alguna sobre este rol tradicional ni tampoco pretende desconocer el proceso subyacente de transformación de género que este tipo de acciones en sí mismas desencadena.

Sin embargo, más allá de los contenidos explícitos de la acción colectiva del MMAL, es necesario decir que sus estrategias de acción y fundamentalmente *el lugar* desde donde se articula la acción en un plano de *intersubjetividad*, es en sí mismo transformador de un orden tradicional de “lo político”, siempre habituado a situarse en el plano de lo racional y desde códigos exclusivamente masculinos.

#### LA UTOPIA Y EL MANDATO DE LA TIERRA

El análisis de las mujeres rurales se enfrenta al desafío de superar la disociación habitual entre la esfera de la vida cotidiana y la esfera pública, la esfera de la producción y la de la reproducción, básicamente en su dimensión económica y social. En este sentido, la esposa del chacarero, que ha cumplido históricamente un papel de reproducción ideológica del sistema dominante, parece haber asumido en este contexto un rol de productora de identidades y portadora de otras ideologías de dominación que tiene la potencialidad de transformar la condición de género originaria.

Desde esta perspectiva, las mujeres del MMAL han construido su identidad en la práctica cotidiana en torno al campo, pero reproducen otra identidad previa: la del “mandato de la tierra”. Este cometido histórico responde al “mandato” de otros hombres de su historia: sus padres y abuelos inmigrantes. La tierra significa para ellas entonces la sobrevivencia de su núcleo familiar, pero mucho más que eso, representa la garantía de continuidad del proyecto gringo: es decir, de la Argentina de la modernidad.

Las siguientes consideraciones de Elizabeth Jelin sobre los movimientos sociales de mujeres pueden aplicarse adecuadamente al análisis del MMAL: señala que en general estos movimientos surgen del impacto de las condiciones económicas sobre sus vidas cotidianas, lo que permite redefinir el margen de lo político y lo privado, y plantea que la configuración del actor colectivo se realiza en la acción directa que sume un significado de acción política desde una reacción privada individual. En consecuencia, se politiza lo privado y se socializa lo político, y aspiran al control de un campo de autonomía o independencia frente al sistema y no a la conquista del poder por el poder mismo (Jelin, 1987).

Efectivamente, en el caso del MMAL el endeudamiento y la escasa rentabilidad son lo que constituye el “problema social”. De ese modo adquieren status de problema social cuestiones que hasta ese momento eran percibidas como individuales, y que por eso mismo producen empatía y una rápida respuesta. EL MMAL logra transformar la cotidianeidad en acción social y política. Su configuración como actor colectivo se realiza en la acción directa que transforma la reacción privada en acción política. Las mujeres del MMAL logran superar esa dicotomía entre lo privado y lo político, politizando lo privado y socializando lo político. Las unen, como a otros movimientos de acción pública, un sentimiento común, una condición común y una comunidad de “emoción”. En relación a su especificidad como movimiento de mujeres, el MMAL constituye una organización sin una reivindicación específica de género, pero que potencialmente contribuye a modificar también el sistema de relaciones de poder en el ámbito familiar. Cuánto y cómo no puede señalarse, pero sí los indicios de un proceso de transformación ineludible. Estas identidades desafían las categorías tradicionales de disociación entre lo reproductivo y lo productivo, lo público y lo privado, lo familiar y lo social. Su identidad es de mujeres tradicionales, reivindicando su papel en el ámbito familiar desde un rol de protección, reproducción y defensa

del núcleo. En consecuencia, no se proponen estratégicamente un cambio que probablemente se produzca, como señala Jelin, a partir de las transformaciones que dentro de su familia y en cada una produce la acción colectiva. Plantean en su reivindicación una dimensión económica y material, pero la fundan en un aspecto ético: “queremos vivir en el campo, la deuda es inmoral e injusta, queremos trabajar, queremos pagar”. El MMAL pretende un campo de autonomía o independencia frente al sistema y no la conquista del poder por el poder mismo. No tienen finalidad política en este sentido, de compartir o acceder al poder.

En resumen, desde una perspectiva macro el Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha puede ser considerado como un movimiento de ampliación de derechos de ciudadanía, y desde una perspectiva micro como un movimiento asociado a la defensa de la identidad y de apropiación de un campo cultural, como un movimiento de afirmación del derecho a la especificidad y la diferencia. Ambas tendencias van juntas y constituyen procesos colectivos dinámicos.

## CAPÍTULO VI

# RENTABILIDAD O MUERTE: LA PROTESTA RURAL EN EL URUGUAY<sup>76</sup>

### INTRODUCCIÓN

Durante los primeros meses de 1999 se desenvuelve en Uruguay una protesta de productores agropecuarios de características inusitadas por su rapidez, por su profundidad y por el consenso que suscita en todo el espectro de las entidades gremiales del sector.

Este capítulo describe estos acontecimientos, discute interrogantes e intenta encontrar una explicación para las razones y la forma que adquiere la acción colectiva. La principal hipótesis es que se está frente a una movilización motorizada por productores rurales golpeados por los procesos de integración regional y apertura económica que afectan a pequeños y medianos productores de rubros menos competitivos, y por una política monetaria que afectó, endeudándolos, a productores más grandes de rubros competitivos. De esta manera se produjo una conjunción de intereses que facilitaron la confluencia de todas las organizaciones gremiales del agro en la Mesa

---

<sup>76</sup> Colaboró como asistente de investigación el Lic. Emilio Fernández, Departamento de Sociología, Universidad de la República.



Coordinadora de Gremiales Agropecuarias, una coalición de organizaciones que lideró la protesta rural.

El próximo apartado se extenderá en una descripción de la evolución histórica del agro uruguayo, aproximándose a lo ocurrido en los últimos años del siglo XX, para profundizar en una de las claves del conflicto: su relación con los avatares de los mercados internacionales agropecuarios en especial con los mercados de la región. En el tercer apartado se analiza la estructura social agraria del Uruguay y se resumen las principales características de las organizaciones de productores rurales del país, actores principales en las negociaciones y en la coordinación de las acciones que signaron el proceso. En el cuarto apartado se relata la cronología de los acontecimientos, y finalmente en el quinto se discuten las características del conflicto, se plantean interrogantes y se ensayan explicaciones para comprender la protesta rural.

## LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO URUGUAYO

### UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA

Desde los albores de su existencia, como colonia española, Uruguay jugó el papel de proveedor de cueros y tasajo (carne seca y salada) para las poblaciones de trabajadores esclavos del norte del continente americano. Posteriormente, ya como país independiente, será proveedor de carnes y lanas para los países europeos. La demanda de subproductos de origen ganadero, sumada a sus excepcionales características ecológicas para esta actividad, produjo una temprana apropiación de la tierra con este fin. Los campos fueron alambrados y la propiedad delimitada, agotándose la frontera agrícola hacia fines del siglo XIX, muy tempranamente en comparación con otros países de América Latina. Emerge un sistema de producción, con predominio de la estancia ganadera, que establece relaciones salariales de producción, eliminando los excedentes poblacionales, expulsándolos hacia el ejido de los pueblos y ciudades del interior y hacia Montevideo (Barran y Nahum, 1967).

A principios del siglo XX el régimen político liderado por el Partido Colorado y por José Battle y Ordoñez, construido como alianza entre las emergentes clases medias y fracciones de los trabajadores, logra imponer un pacto tácito al sector de los estancieros mediante el cual sus derechos territoriales no se cuestionan a cambio de una considerable extracción de excedentes que les realizará el Estado. Con

ellos se construyó, también muy tempranamente, un estado de bienestar característico del Uruguay de la primera mitad de este siglo (Finch, 1980).

En las décadas del cuarenta y del cincuenta se produce una fuerte urbanización del país como consecuencia de al menos dos procesos. Por un lado un fuerte proceso de industrialización substitutiva de importaciones, aprovechando el vuelco de las industrias de los países centrales hacia el esfuerzo bélico, y por otro lado un proceso de mecanización agraria que expulsó población rural aún en un momento de plena expansión de la agricultura cerealera. Este período se conoce como el de la “agriculturización” del país, porque además de la expansión cerealera mencionada crecerá la superficie con oleaginosos, remolacha y caña azucarera, fruticultura, vides, horticultura, etc., en un esfuerzo consciente y planificado por llegar al autoabastecimiento alimentario en todos los rubros posibles por las condiciones ecológicas. Sin embargo, aún en esta época la superficie máxima plantada nunca superó los 1,5 millones de hectáreas sobre los 16 millones que el país posee de superficie útil. El resto siempre fue predominio de la ganadería de carne y lana, agregándosele recientemente la lechería.

La estructura social agraria ha sido extraordinariamente estable en el correr de este siglo. El censo agropecuario de 1908 registró aproximadamente unas 3.800 explotaciones mayores de 1.000 ha sobre un total de 44 mil explotaciones que, siendo el 9% de las explotaciones, controlaban el 64% de la superficie aprovechable del país. Este conjunto de estancias ganaderas permanece prácticamente estable a lo largo del siglo. Por otro lado, a principios de siglo había una proporción limitada de pequeños productores que sin embargo crecen sostenidamente a impulsos de las políticas que tienden a desarrollar el mercado interno y el autoabastecimiento de alimentos. Así se llega a la década del sesenta, en que 65 mil explotaciones de menos de 100 ha representan el 75% del total de las explotaciones pero controlan sólo el 9% de la superficie (Piñeiro, 1991).

La estancia ganadera estableció tempranamente relaciones salariales de producción. En presencia de un exceso de oferta de trabajadores, pudo imponer una relación social en la cual contrató primordialmente trabajadores solteros, expulsando a la familia rural de la estancia. Así, la reproducción social de los trabajadores se llevó a cabo sólo parcialmente en el establecimiento rural, y principalmente en pequeños poblados y villorrios del interior rural o en los minifundios de producción familiar (CINAM, 1962).

Luego de la crisis del treinta, la ganadería uruguaya entra en un largo período de cincuenta años en que los índices de productividad no crecen. El estancamiento ganadero tuvo profundas repercusiones, no sólo a nivel agropecuario. Siendo el principal productor de excedentes que luego eran redistribuidos en el conjunto de la sociedad, su falta de crecimiento repercutió en las agroindustrias procesadoras, el empleo, la generación de divisas imprescindibles para las importaciones, y en general el crecimiento del mercado interno. Este estancamiento contribuye a explicar los conflictos sociales de la década del sesenta, que conducen al golpe militar de 1973 y al cambio de modelo económico.

#### LOS ÚLTIMOS TREINTA AÑOS

Durante la década del setenta y del ochenta, Uruguay realiza fuertes cambios en la orientación económica. Por un lado se lleva a cabo un proceso de ajuste estructural y de apertura económica que tendrá repercusiones en todos los ámbitos de la economía, y que en el sector agropecuario significó redistribuir la importancia de los distintos rubros de producción. En efecto, en Uruguay, la actividad pecuaria, ocupando el 85% de las tierras aptas del país, proveía aproximadamente dos tercios del valor de las exportaciones. Sin embargo, en estos años se le dio un impulso considerable a otros rubros productivos mediante un decidido apoyo estatal. Así, la producción láctea, de arroz, citrus y cebada cervecera (entre otros) se vio favorecida por esta políticas, aumentando su presencia en el mercado interno y aumentando los saldos exportables. De esta manera, las exportaciones agropecuarias uruguayas se diversifican y aumentan en volumen.

Los procesos de apertura económica y de desregulación estatal tuvieron efectos distintos en los diferentes rubros de producción. Aquellos rubros que siempre tuvieron competitividad internacional como la carne, la lana y los cueros, se vieron ampliamente beneficiados al percibir directamente la demanda y los precios del mercado internacional con escasas mediaciones. Otros rubros como los lácteos, el arroz, la cebada y los citrus (y más recientemente los vinos) también se beneficiaron en la medida en que gozaron en alguna medida de apoyo estatal hasta que lograron ponerse en pie por sus propios medios. Otros rubros, como los cereales y los oleaginosos, la producción azucarera, la horticultura y la fruticultura, tuvieron desempeños diferentes y con variaciones según las oscilaciones de los mercados

regionales, pero en general se podría decir que no tuvieron un desempeño positivo (Piñeiro, 1995).

Los mencionados procesos también tuvieron impactos diferentes según la capacidad económica del productor, que es uno de los principales elementos que definen la posibilidad de transformación y de adaptación de su establecimiento a las nuevas condiciones de juego. Así, los productores con mayor capacidad económica realizaron las inversiones necesarias para cambiar a los rubros con más competitividad o para cambiar las formas de producir adecuándose al nuevo contexto. Los productores con menor capacidad económica no lograron realizar estos cambios, y muchos de ellos debieron vender sus tierras y emigrar hacia las ciudades. La consecuencia de ello se percibe en el análisis comparativo de la evolución de la cantidad de explotaciones de menos de cien ha entre 1960 y 1990, que disminuye a la mitad. En consecuencia, los censos también muestran una concentración en menos manos de la tierra y de los principales activos agropecuarios.

A principios de la década del noventa se crea el MERCOSUR, que en materia agrícola reduce los aranceles para el comercio dentro de la región mientras establece un Arancel Externo Común moderado, de entre 12% y 20%. Se armonizan también las barreras para-arancelarias (por ejemplo las fitosanitarias), tratando de facilitar el comercio entre los países de la región. Uruguay fue beneficiado por este acuerdo comercial, ya que sus exportaciones a los países de la región crecieron. Así, Brasil se transforma en el primer mercado de exportación, siendo receptivo particularmente a las exportaciones de arroz, cebada malteada y productos lácteos. Argentina también recibirá productos uruguayos, pero principalmente productos agropecuarios manufacturados o de origen industrial. Ambos países se constituyen en el principal socio comercial del Uruguay, ya que se les exportará entre el 60% y el 70% de sus exportaciones totales.

Durante la década del '90 crecen el PBI agropecuario, la inversión y las exportaciones. Los mayores volúmenes físicos coinciden con mejores precios agrícolas en los mercados internacionales, en los cuales ahora los productores uruguayos colocan directamente sus productos, captando esta mejoría. Es un período de bonanza económica, aumentando las inversiones y sustancialmente el crédito. En 1998 el endeudamiento del sector agropecuario llega al 70% de su PBI (Picerno, 1998). Por otro lado, la sobrevaluación del peso uruguayo debida a la política monetaria provoca una transferencia de recursos

desde el agro a otros sectores de la economía, principalmente a los servicios y al sistema financiero.

#### LA EVOLUCIÓN RECIENTE: 1998-2000

A partir de 1998 una serie de circunstancias negativas permite vislumbrar la aproximación de una situación de crisis para el agro uruguayo. Tres hechos de la economía internacional influirán negativamente entre 1998 y 2000: la suba gradual de las tasas de interés a nivel internacional, que encarecen el crédito también a nivel local; la suba de los precios del petróleo durante el último año, que serán trasladados a los precios de los combustibles y de muchos insumos agropecuarios; y la devaluación del euro frente al dólar, siendo que Europa es uno de los principales destinos de nuestras exportaciones agropecuarias (Antía, 2000).

A comienzos de 1999 la devaluación de la moneda brasileña inicia una serie de acontecimientos negativos para el sector agropecuario uruguayo. La devaluación gradual del real continuará a lo largo de los dos años siguientes, desmejorando crecientemente la competitividad de las exportaciones al Brasil, su principal plaza compradora. A ello se sumarán durante el último año trabas de carácter no arancelario que dicho país impone sobre las exportaciones uruguayas de arroz y productos lácteos. En tercer lugar, en Argentina se instala una profunda recesión económica, afectada también por la pérdida de competitividad de sus exportaciones, el plan de convertibilidad y las dificultades en el manejo de su balanza de pagos, y la creciente pérdida de credibilidad política del gobierno aliancista.

Durante la primavera de 1999 y el verano de 2000 una sequía producirá efectos importantes, en especial en los cultivos de verano y en las pasturas, que verán desmejorada su producción forrajera. Esta sequía será seguida por abundantes lluvias e inundaciones en el otoño de 2000, que afectan parte del país.

En quinto lugar, estos años fueron signados por la caída de los precios internacionales de la mayoría de los productos agropecuarios exportables, lo cual, sumado a las dificultades de colocación por pérdida de competitividad monetaria, deprime los precios en el mercado interno. El precio del novillo gordo, que en agosto de 1998 (post-zafra) había superado la barrera del dólar, situándose en 1,07 dólares el kilo, se ha reducido a 0,80 en igual momento de 1999. Al año siguiente experimenta una recuperación hasta la aparición del brote aftósico en

la primavera, que dislocará los mercados cárnicos. El arroz, que se había vendido a 12 dólares la bolsa en la campaña de 1998, desciende a 7,80 dólares la bolsa en el año siguiente, y vuelve a bajar a 5,20 dólares la bolsa en el 2000. Ante los bajos precios y el alto endeudamiento resultante, durante el 2000 se redujo el área sembrada, cayendo la producción y las exportaciones. Por los productos lácteos se pagó un promedio 14 centavos de dólar por litro de leche durante 1999, cuando había llegado a pagarse 19 centavos en 1996. Al año siguiente se experimenta una leve mejoría, siendo el precio promedio anual de 15 centavos de dólar el litro. Sin embargo, la producción de leche de ese año experimentó una reducción del 10% con respecto al año pasado, quebrando una tendencia al crecimiento continuo que llevaba ya diez años, como consecuencia de la sequía que afectó la disponibilidad forrajera. Por la lana se pagó durante 1999 un promedio de 1,16 dólar por kilo, precio similar al de la zafra anterior, pero la mitad de lo que se pagaba en 1991. Durante el año 2000 los precios de la lana de la finura que más produce el país se tonifican levemente, llegando a un promedio de 1,20 dólar por kilo. Sin embargo, ese año quedará registrado como el de la más baja producción de lana en la historia del país como consecuencia de la reducción del stock ovino. Por el trigo se pagó alrededor de 110 dólares la tonelada luego de los máximos alcanzados en 1996 (140-150 dólares la tonelada), pero también hay una sustancial reducción de las áreas sembradas. Algo similar ocurrió con la cebada, ya que los precios durante 1998 y 1999 fueron descendentes por tercer año consecutivo luego de los precios récord alcanzados en 1996. En las hortalizas y las frutas, los precios internos están continuamente jaqueados por las importaciones de productos que se efectúan desde los países vecinos en cuanto los precios internos superan los niveles de precio de la región, situación cada vez más frecuente por la sobrevaluación de la moneda uruguaya.

Como corolario de esta situación, las ventas de maquinaria agrícola durante 1999 cayeron un 70% con respecto al año anterior. El Valor Bruto de la Producción Agropecuaria también se contrae como lo muestra el cuadro siguiente.

## CUADRO 5

*URUGUAY: VALOR AGREGADO BRUTO DEL SECTOR AGROPECUARIO  
EN MILES DE DÓLARES CORRIENTES Y PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL NACIONAL*

<b>Año</b>	<b>Valor Agregado Bruto</b> Miles de dólares corrientes	<b>Participación Total Nacional</b> En %
1996	1.616.924	8,21
1997	1.600.501	7,72
1998	1.514.202	7,08
1999	1.148.948	5,72

Fuente: información suministrada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Por lo expuesto, al comienzo de 1999, a la endémica difícil situación de los pequeños y medianos productores se le suman las dificultades que comienzan a despuntar en los distintos mercados agropecuarios regionales e internacionales y que afectan a todos los sectores y grupos de la producción agropecuaria nacional. El panorama político comienza a enrarecerse, sumándose las reacciones de preocupación y protesta. Es en este ambiente que comienza a gestarse una protesta agraria que no tendrá antecedentes en la historia del gremialismo agropecuario uruguayo.

Es conveniente hacer notar que, si bien la crisis que aqueja al sector agropecuario uruguayo es de carácter estructural y tiene que ver con la distribución de la tierra y de los activos físicos, con el agotamiento de un modelo tecnológico productivista, con la predominancia de un modelo económico-financiero que privilegia al sistema financiero antes que al sistema productivo, con las formas de inserción del país en los mercados internacionales, en lo inmediato (y así aparece ante los ojos de la mayoría de los productores) aparece como una crisis de endeudamiento provocada por la caída de los precios agrícolas en los mercados internacionales.

## ESTRUCTURA SOCIAL AGRARIA Y ORGANIZACIONES SOCIALES

### LA ESTRUCTURA SOCIAL

En los análisis de la estructura social del agro uruguayo generalmente se diferencian dos grandes tipos de productores. Los productores empresariales son aquellos que utilizan principalmente mano de obra asalariada en sus establecimientos. Siendo sólo el 18% del total de los productores del país, controlan 12 millones de ha, es decir, el 75% de

las tierras explotadas. Los productores familiares son en cambio los que emplean principalmente mano de obra familiar en las tareas de su explotación. La mayoría de los productores del Uruguay, el 82%, son productores familiares pero detentan sólo el 25% de las tierras. En síntesis, de las 57 mil explotaciones agropecuarias del país se estima que 10 mil son explotaciones empresariales y 47 mil son de productores familiares.

La gran mayoría de las explotaciones del Uruguay –tanto empresariales como familiares– se dedica a la ganadería de carne y lana (63%), y en ello ocupan el 86% de las tierras explotadas del país. Esta proporción crece aun más si se le agregan los productores que tienen a la lechería como su principal rubro productivo, un 12% del total. Por ello es más acertada la visión del Uruguay como un país principalmente ganadero en el cual se desarrollan algunas actividades agrícolas.

Entre los rubros agrícolas en que más productores intervienen está la producción hortícola (con el 10% de los productores), la fruticultura con el 4% de los productores, y la producción de cereales y oleaginosos, que ocupa al 3% de los productores. Sin embargo, algunos de los rubros agrícolas, a pesar de ocupar pocos productores y poca superficie agrícola, juegan un papel muy importante en las exportaciones agropecuarias del país. Entre ellos está el arroz, la cebada cervecera y los cítricos. Otros rubros, que poco se exportan, como la horticultura y la fruticultura, juegan un papel muy importante en el abastecimiento interno de productos alimenticios.

Es explicable entonces que el 60% de los productores familiares del país sean productores ganaderos. Le siguen en importancia los productores familiares en la lechería y en la horticultura, con 13% cada uno. La imagen más probable de un productor familiar en el Uruguay es la de un pequeño o mediano productor dedicado a la producción de carne, de lana o de leche, y que tal vez combine ese rubro principal con alguna actividad agrícola de carácter secundario. Sólo una proporción minoritaria de los productores familiares tiene a la agricultura (huerta, frutas, cereales) como su rubro principal.



## CUADRO 6

## URUGUAY: EXPLOTACIONES FAMILIARES Y EMPRESARIALES SEGÚN RUBRO QUE PROVEE PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS (2000)

	Familiares	Empresariales	Total	%
<b>Ganadería</b>	25.428	6.914	32.342	63
<b>Lechería</b>	5.561	476	6.037	12
<b>Cereales</b>	870	612	1.482	3
<b>Horticultura</b>	5.146	117	5.263	10
<b>Frutivicultura</b>	1.520	534	2.054	4
<b>Cítricos</b>	158	136	294	1
<b>Aves y cerdos</b>	2.388	145	2.533	5
<b>Forestales</b>	824	191	1.015	2
<b>Total</b>	41.895 82%	9.125 18%	51.020 100%	100

Fuente: elaboración propia a partir del Censo General Agropecuario, 2000.

Nota: el total de explotaciones no coincide con el total de explotaciones del país porque son sólo aquellas que declaran tener un rubro principal.

Además de los 57 mil productores agropecuarios que posee el país, es preciso tener en cuenta a los trabajadores familiares y asalariados que trabajan en los mismos. Según el Censo de Población, unos 76 mil trabajadores asalariados se emplean en los establecimientos agropecuarios. No todos ellos residen sin embargo en el campo. Crecientemente los trabajadores rurales residen en los pequeños pueblos y ciudades del interior. Se estima que un 38% del total de los trabajadores agrícolas tienen residencia urbana. Si a ello se le suma el ausentismo del 40% de los productores rurales que viven fuera de sus explotaciones, no es de extrañar que los censos de población detecten una disminución gradual de la población rural, a tal punto que en 1996 sólo el 10% de la población del país residía en áreas rurales.

La distribución de la población no es homogénea en el territorio. Por razones ecológicas –las mejores tierras agrícolas se encuentran en el litoral del Río Uruguay y del río de la Plata– la agricultura y las principales ciudades se ubican en los departamentos del oeste y sur del país, y allí se concentra la mayor parte de la población rural. En los departamentos del centro, norte y noreste del país predomina la producción ganadera extensiva con grandes establecimientos; tienen menos productores familiares y en general menos trabajadores y menos población.

Otros indicadores sociales muestran que en Uruguay la población rural tiene algunas características distintas a las que predominan en otros países latinoamericanos. Así, por ejemplo, la tasa de analfabetismo es muy baja, sólo el 6%, mientras una proporción importante de la población rural ha terminado la escuela primaria; el tamaño medio de la familias se aproxima al tamaño de las familias urbanas, con 3,8 personas por grupo familiar.

#### LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DEL AGRO URUGUAYO

El agro uruguayo tiene un alto grado de asociatividad. Existen una docena de organizaciones de segundo grado y alrededor de 300 organizaciones de productores agropecuarios de primer grado (Asociaciones Rurales, Sociedades Rurales, Sociedades de Fomento Rural, Cooperativas Agropecuarias, etc.). Los trabajadores asalariados rurales, en cambio, tienen un bajo nivel de organización. En la actualidad no pasan de media docena las organizaciones sindicales rurales activas. Los trabajadores asalariados rurales se han mantenido al margen del conflicto que se está reseñando, y por lo tanto no nos extenderemos en su caracterización (Astori, 1982; Gonzalez Sierra, 1994). A continuación se describen las principales organizaciones de productores agropecuarios.

La Asociación Rural del Uruguay (ARU) es la organización rural más antigua del país. Fundada en 1871 con el impulso de las fracciones modernizantes de los ganaderos, cumplió un papel fundamental en la difusión del alambramiento y del mejoramiento del ganado a través de la incorporación de las razas inglesas. Desde entonces cumple una función importante en el mejoramiento de las razas, llevando los registros genealógicos y efectuando anualmente exposiciones ganaderas cuyos discursos inaugurales son importantes definiciones de política agropecuaria. Representa a los productores más grandes, cabañeros e invernadores, siendo socialmente el grupo más aristocrático y concentrado del país, con vínculos con el sector comercial exportador y financiero.

El accionar político, la función específica de grupo de presión, queda preferentemente en manos de la Federación Rural del Uruguay (FRU). Esta institución, fundada en 1915, agrupa a las sociedades rurales del interior del país, constituyendo por lo tanto una organización gremial de segundo grado. Sus estatutos, su historia y el accionar de sus dirigentes la señalan como el principal instrumento de repre-

sentación y defensa de los intereses de los ganaderos. Se ha señalado que el funcionamiento de estas dos instituciones debe verse como complementario antes que como competitivo (Astori, 1979). Representan en términos generales los intereses de los ganaderos, sus directorios están frecuentemente entrecruzados, pero sus funciones son ligeramente diferentes: una más orientada al mejoramiento y promoción de sus negocios, la otra más orientada a la defensa pública de sus intereses. Sin embargo, también se ha sugerido que mientras la ARU representa mejor los intereses de cabañeros e invernadores, la FRU representa mejor los intereses de los grupos criadores dentro de la ganadería. En la medida en que es en esta fracción de la ganadería donde se encuentran los eslabones más débiles del proceso productivo, la FRU también representa a los pequeños y medianos productores ganaderos y en este aspecto puede tener diferencias con la ARU.

La Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), fundada también en 1915, es la más antigua y la más grande de las organizaciones que representan a los productores familiares. De segundo grado, tiene como sus afiliadas a las Sociedades de Fomento Rural y a un conjunto de cooperativas agropecuarias como instituciones de primer grado. Si bien cubre todo el país, está más fuertemente representada en las áreas sur y oeste del país, donde hay más presencia de este tipo de productores. En ella están representados principalmente los productores familiares de la horticultura, la fruticultura, los lácteos, los granos, etc., llegando su ámbito de representación a incluir a productores familiares capitalizados que utilizan trabajo asalariado. Posiblemente sus políticas expresen mejor a los productores familiares medianos y más capitalizados que al pequeño productor familiar, que además es un semi-asalariado. Esta institución tuvo su origen como instrumento de acción gremial rural del battlismo. Fue creada como organización rural de productores granjeros y agrícolas para oponerse a la acción gremial de la ARU y de la FRU, que representaban a los ganaderos. De allí que hasta muy recientemente esta organización tuviese vínculos estrechos con el Partido Colorado, en contraste con las simpatías que la FRU y la ARU tenían por el Partido Nacional.

La Asociación de Colonos del Uruguay nuclea a los beneficiarios de las asignaciones de tierra que realiza el Instituto Nacional de Colonización. Esta institución, creada en 1948, ha realizado una menuada labor, distribuyendo 430 mil hectáreas (3% de la superficie nacional) entre 3.900 beneficiarios agrupados en 187 colonias. La ACU se creó en 1977 como organismo reivindicativo de los colonos.

Su accionar ha estado orientado a reclamar una distribución de la tierra a través de una mayor cesión de recursos al Instituto por parte del Estado. Sus reclamos además están dirigidos a aliviar los pagos de rentas y amortizaciones que sus representados adeudan al gobierno, a reclamar condiciones crediticias y comerciales más favorables para sus asociados, y a exigir la inversión estatal en infraestructura en las colonias como el complemento indispensable para poder desarrollar su actividad económica.

La Asociación Nacional de Productores de Leche es la principal gremial de los productores lecheros. Fundada en 1933, con 3.700 asociados, es estatutariamente una gremial de primer grado pero que sin embargo cuenta con 19 entidades de primer grado adheridas. Nace por la preocupación de algunos productores lecheros de Canelones y Florida por problemas generados por la producción, el transporte y la comercialización de leche hacia Montevideo. La respuesta que se genera desde los poderes públicos es la creación de la Cooperativa Nacional de Productores de Leche (CONAPROLE) en 1935. La historia de esta gremial está íntimamente vinculada a la de la Cooperativa.

En la actualidad, de los cinco miembros del Directorio de CONAPROLE que representan a los productores, cuatro lo hacen por la ANPL, reservándose sólo un lugar para la lista minoritaria. La gremial, además de su tarea reivindicativa frente a los poderes públicos y de su participación en la Cooperativa, presta una cantidad de servicios de carácter tanto productivo (maquinaria vial, campos de recría, etc.) como social (servicios de atención a la salud, recreación, etc.). La ANPL posiblemente represente mejor los intereses de los empresarios lecheros más grandes que los de los pequeños y medianos productores lecheros (lecheros familiares). Es por ello que han surgido otras entidades que intentan representar a esta última fracción.

La Asociación de Remitentes de CONAPROLE es una gremial de primer grado que nuclea a pequeños y medianos productores lecheros de la cuenca de Montevideo. Como su nombre lo indica, su principal característica es su pertenencia a la Cooperativa láctea. Tradicionalmente han operado como la oposición electoral a la ANPL, siendo la lista minoritaria en las elecciones de CONAPROLE y ocupando el único lugar en el Directorio reservado para la oposición.

La Intergremial de Productores de Leche es una institución de segundo grado que reúne a diez asociaciones de primer grado de productores lecheros. Fue fundada en 1980. Sus objetivos son encauzar la acción individual de las asociaciones que la integran con

el fin de defender los intereses de los productores lecheros y promover la formación de gremiales de productores lecheros. A través de sus instituciones socias se presta una serie de servicios tanto productivos (maquinaria agrícola, almacenaje de granos, provisión de semillas, campos de recría, etc.) como de tipo social (servicios médicos, de extensión, etc.). La fortaleza de la Intergremial está más bien en las diez entidades de primer grado que la integran y los 4.400 socios que declaran.

Cuando se fundó, como reunía a gremiales lecheras del interior, representaba a instituciones que estaban fuera del área de influencia de la cuenca de Montevideo y que por lo tanto no necesariamente remitían a CONAPROLE. En la actualidad esta empresa láctea ha comprado a la mayoría de las fábricas regionales. Por lo tanto, su ámbito de representación se superpone con el de las otras dos gremiales.

La Confederación Granjera es también una institución de segundo grado creada en la década del treinta, que a su vez reúne a diez instituciones de primer grado. Estas reúnen a productores mayormente dedicados a la producción frutícola. Posiblemente entre sus asociados haya tanto productores familiares como empresarios de la fruticultura, pero son estos últimos los que dominan a la gremial.

Las Cooperativas Agrarias Federadas constituyen una entidad de segundo grado que reúne a todas las cooperativas del sector. Sus intereses principales están puestos en la agricultura extensiva (cereales y oleaginosos) y la ganadería. Sin embargo, como algunas de sus asociadas también tienen injerencia en la hortifrutivicultura, esta institución también se interesa por la problemática de la granja. Su acción gremial ha estado muy orientada a la defensa de las cooperativas como empresas que han pasado por muchas dificultades económicas y financieras en años recientes. Representan más bien los intereses de productores empresariales medianos y grandes, orientados a la producción agrícola-ganadera.

El Centro de Viticultores del Uruguay, institución de primer grado creada en 1934, nuclea a los productores vitícolas de menor tamaño que no tienen bodegas. Son los que han tenido más dificultades para incorporarse a los procesos de reconversión de los viñedos. Se diferencian así de la Asociación de Bodegueros, que nuclea a los empresarios más fuertes del rubro, viticultores y bodegueros a la vez.

La Intergremial de Productores de Carne y Lana se crea en el correr del año 1997. Su base social pareciera estar constituida por pequeños y medianos productores ganaderos de los departamentos

más pobres y extensivos del país: Cerro Largo, Treinta y Tres, Rocha, Artigas y Salto. La mayoría parecen ser productores criadores (antes que invernadores) y ovejeros. La estrepitosa caída de los precios de la lana ha perjudicado su ecuación productiva. Son productores que viven en el campo y del campo, en suelos de basalto, más bien pobres, en áreas alejadas de centros poblados importantes. En eso se diferencian de otras fracciones de ganaderos que son de carácter más rentístico y residen en las ciudades. Organizaciones de productores ganaderos radicalizadas, como el movimiento “No va más” en Salto, tuvieron un papel importante en su constitución. Es una organización gremial que agrupa a productores que ocupan distintas posiciones en el proceso productivo, que no tiene una estructura gremial formalizada (ni edificios, ni infraestructura, ni autoridades permanentes, ni estatutos) sino que actúa a partir de convocatorias a asambleas y a marchas, con fuerte presencia en los medios locales de comunicación.

#### CRONOLOGÍA DE LA PROTESTA AGRARIA

El 13 de enero de 1999, como consecuencia de un proceso económico que implicaba profundas tensiones y ponía en peligro la estabilidad del país, Brasil devaluó su moneda, el real, como forma de superar contradicciones macroeconómicas, intentando solucionar algunos de sus profundos problemas económicos y productivos.

Para la economía uruguaya, esa medida significó un trauma del que no se ha logrado recuperar. Para el sector agropecuario, que concentraba gran parte de sus exportaciones hacia el mercado brasileño, las repercusiones de la medida tomada en el país norteamericano lo condicionaron enormemente, acentuando algunas tendencias que ya se venían perfilando en lo concerniente a rentabilidad del sector; a tal punto que en muchos renglones productivos era la viabilidad misma la que estaba en tela de juicio. Ya el 15 de enero, en una asamblea en la sede de la Asociación Agropecuaria de Dolores, más de trescientos productores denuncian la difícil situación del sector, agravada ahora por la devaluación brasileña.

A principios de marzo el presidente Sanguinetti anunció los objetivos de la política económica, ubicando en primer lugar el equilibrio fiscal, y los ministros de Economía, de Industria y de Ganadería anunciaron medidas para el sector agropecuario. Los presidentes de la Asociación Rural del Uruguay y de la Federación Rural del Uruguay

señalaron que si bien las medidas eran insuficientes, de alguna manera eran el comienzo de un camino en la dirección correcta.

En ese momento, como forma de marcar sus diferencias con la política “oficial” de las gremiales tradicionales, el Movimiento de Productores del Norte “No va más”, de Salto, propone una movilización de todos los gremios agropecuarios para el 13 de abril de 1999 a realizarse en Montevideo.

Probablemente no estuvieron exentos en el cálculo de la propuesta de movilización, dos elementos coyunturales pero de gran significación. En primer lugar, el hecho de que hacía poco que se había retomado la actividad parlamentaria luego del receso estival. En segundo término, se daba el caso de que 1999 era un año electoral en el cual se iba a inaugurar una nueva modalidad de elección presidencial con una segunda vuelta con balotaje entre los dos candidatos más votados en la primera.

Se faculta entonces al presidente de la Intergremial de Productores de Carne y Lana para que comience la organización de una movilización para dicha fecha con todos los sectores del agro a desarrollarse en Montevideo, frente al Palacio Legislativo. Este emprende la tarea comunicándose con la Asociación Rural, con la Federación Rural y con la Comisión Nacional de Fomento Rural, las tres gremiales más antiguas, a los efectos de tratar de coordinar entre todos la organización del evento.

Mientras tanto, una corriente interna disidente del oficialismo dentro de la Federación Rural convoca a una reunión de presidentes de las asociaciones federadas, y por escaso margen otorga mandato a las autoridades del gremio para asistir a la reunión. Esta decisión empuja a asistir a la Asociación Rural y a las Cooperativas Agrarias Federadas, que no quieren quedar afuera.

Por su parte, la Comisión Nacional de Fomento Rural cita a una reunión de los presidentes de sus gremiales asociadas a la que asisten también representantes de otras gremiales. Deciden adherir a la jornada de movilización del 13 de abril, dando su apoyo y comenzando a organizar y convocar a otras gremiales agropecuarias.

Todos estos esfuerzos confluyen el 23 de marzo en una reunión citada por la Comisión Nacional de Fomento Rural donde queda conformada la Mesa Coordinadora de Gremiales Agropecuarias (MCGA) con el fin de conducir un proceso de protesta rural que se iniciaría con una movilización el día 13 de abril, con las siguientes organizaciones: gremiales con carácter nacional, como la Asociación Rural del

Uruguay, la Federación Rural, la Comisión Nacional de Fomento Rural, la Asociación de Colonos del Uruguay; otras de carácter local o regional, como por ejemplo la Asociación Agropecuaria de Dolores, la Asociación de Productores de Leche de San José, la Asociación de Productores de Leche de Paysandú; y las restantes de carácter sectorial, como la Intergremial de Productores de Carne y Lana, la Asociación Nacional de Productores de Leche, el Centro de Viticultores del Uruguay y la Federación Nacional de Productores de Cerdos.

Si bien la medida de movilización que se planea expresa el descontento que existía entre los productores en un primer momento, quizás por prudencia, quizás por estrategia, el carácter no es antigubernamental. En una primera instancia se plantea desarrollar una concentración frente al Palacio Legislativo y dar lectura a una proclama donde se plantea una serie de medidas para dar solución a los problemas que enfrenta el sector.

Como se advierte, en la conformación inicial de la MCGA había contradicciones tales como la presencia conjunta de gremiales representativas de distintos intereses en torno a una misma mesa, patrocinando movilizaciones conjuntas, o el hecho de que hubiera organizaciones con distinto nivel de representatividad, de primero, segundo y hasta tercer grado, sentadas en pie de igualdad. Estas diferencias fueron superadas en un primer momento porque era necesario organizar la movilización. Por otro lado, resultaba “funcional” dar cierto espacio de participación a organizaciones regionales y sectoriales, que estaban llamadas a tener un papel protagónico en la movilización, por cuanto significaba ampliar el poder de convocatoria.

#### LA MARCHA DEL 13 DE ABRIL

La marcha del 13 de abril tuvo un extraordinario éxito que sorprendió a propios y extraños. En el entorno del Palacio Legislativo, punto de encuentro de las distintas columnas de manifestantes, se juntó una multitud difícil de cuantificar, pero que osciló entre 10 mil y 30 mil personas. Para la escala uruguaya, aun suponiendo la cifra más conservadora, esta representaba un éxito extraordinario para los organizadores y un importante aviso para el sistema político.

Reunidos los manifestantes en la explanada del Palacio Legislativo, un conocido periodista radial leyó a la concurrencia una proclama elaborada por las entidades organizadoras. Luego los manifestantes encolumnados atravesaron el corazón de la ciudad para diri-



girirse hacia el Edificio “Libertad”, sede del Poder Ejecutivo, donde esperaban ser recibidos por el presidente. La marcha impactó en la ciudad, en sus habitantes y en los medios políticos no sólo por la cantidad de gente que reunió, sino también por su diversidad, colorido e imaginación. Abría la marcha una nutrida columna de “caballería gaucha”, le seguían luego tractores, algunos viejos de la década del ‘30 (haciendo referencia a la descapitalización de los productores) y otros con implementos de trabajo, había familias en carros tirados por caballos, le seguían luego cientos de camionetas y automóviles, desde viejas “cachilas” hasta costosos vehículos utilitarios 4x4, y una interminable columna de ómnibus en los cuales la mayoría de los manifestantes se habían desplazados desde sus hogares en el interior del país hacia Montevideo. Abundaban carteles de todo tipo y color, banderas, pasacalles con inscripciones, en general haciendo referencia a la difícil situación económica de los productores rurales.

El acto contó además con el apoyo de amplios sectores de la sociedad civil organizada. El movimiento obrero, el movimiento cooperativista, así como también otros sectores populares, se solidarizaron e inclusive participaron de forma espontánea en la movilización.

En la sede del Poder Ejecutivo el presidente se negó a recibirlos, siendo atendidos por el secretario de la Presidencia, quien recibió el pliego de reclamos de los manifestantes. Luego las columnas de manifestantes se disolvieron, regresando a sus lugares de origen.

En la proclama leída en la concentración se solicitaban los siguientes puntos: aplazar los vencimientos impositivos agropecuarios; prórroga de vencimientos bancarios, reestructuración del endeudamiento; adecuación de tasas de recargo y multas de obligaciones impositivas; modificación de exigencia de certificados de Dirección General Impositiva y Banco de Previsión Social para el otorgamiento de créditos bancarios; eliminación del Impuesto a los Activos Bancarios (IMABA); integración del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca al equipo económico; elaboración de un paquete de medidas que facilitaran el retorno del sector a condiciones de viabilidad, rentabilidad y competitividad.

Identificaban al Estado y hacia él apuntaban con el grueso de las reivindicaciones, con dos ejes claros: el alivio del endeudamiento con la banca y la reducción de la carga tributaria sobre el sector. Tan sólo un punto estaba dirigido a factores más estructurales, aunque sin precisar mucho cuáles deberían ser esas medidas que facilitarían

“el retorno del sector a condiciones de viabilidad, rentabilidad y competitividad”.

#### DESPUÉS DE LA MARCHA

La MCGA no se disolvió luego de la marcha del 13 de abril, sino que continuó como instancia superior de coordinación de las negociaciones que todas las organizaciones del sector llevaban a cabo con el gobierno. Por otro lado, también coordinó una serie de movilizaciones de carácter local que se llevaron a cabo en los meses siguientes. En mayo se realiza un Cabildo Abierto en la ciudad de Paysandú convocado por el “Movimiento Paysandú Entre Todos” que reunió a 2.500 personas, una asamblea popular cuyos ejes temáticos gravitaron en torno a la situación productiva, comercial y social del departamento reuniendo reclamos y manifestantes tanto de raíz urbana como rural.

Dos meses después de realizada la marcha las respuestas instrumentadas por el Poder Ejecutivo no satisfacen a las organizaciones integrantes de la MCGA, que deciden apurar el paso organizando nuevas movilizaciones. Sin embargo, a diferencia de la marcha de abril, ahora se inclinan por realizar movilizaciones de carácter local como forma de fortalecer el apoyo desde sus bases sociales.

El 19 de junio se realizan actos en cada una de las capitales departamentales del país –Artigas, Bella Unión, Las Piedras, Melo, Colonia, Durazno, Trinidad, Florida, Minas, Aiguá, Paysandú, Fray Bentos, Young, Rivera, Rocha, Lascano, Salto, San José, Dolores, Tacuarembó y Treinta y Tres– en los cuales se lee una proclama común a todas redactada por la MCGA y complementada con un análisis de la situación en cada localidad. La prensa señala la asistencia de unas cincuenta mil personas entre todos los actos.

En agosto se realiza una huelga de hambre por parte de un dirigente gremial y un grupo de granjeros reclamando la eliminación de las ejecuciones, en defensa de la producción nacional y la rentabilidad de la misma, y la sustitución de la ley de sociedades anónimas. Ante dicha medida la MCGA “brindó su sentimiento de respeto desde el punto de vista gremial a la medida resuelta por un grupo de productores granjeros ante la desesperante situación de su sector”.

A mediados del mismo mes se realiza un paro de abastecimiento de frutas y hortalizas por 72 horas resuelto por la Mesa de la Granja (CAF, Federación Nacional de Productores de Cerdos, Asociación de Productores Agrícolas de Canelones y el Centro de Viticultores), al

tiempo que en Soriano y Colonia se realizaron manifestaciones de productores con camiones y maquinarias estableciendo su solidaridad con los granjeros en conflicto. La medida es juzgada como exitosa y se reestablece el abasto de frutas y verduras a Montevideo el día 17 de agosto.

Por esa fecha se produce una doble interpelación en el Parlamento a los ministros de Ganadería y de Economía. A raíz de las diferencias entre los integrantes del Ejecutivo, el primero, del Partido Nacional, presenta su renuncia a la cartera. Ante la interpelación, y como medida de presión, la MCGA convoca a un paro general agropecuario, invitando a asistir al Parlamento, y exhorta a las mesas coordinadoras departamentales a organizar movilizaciones locales. La convocatoria al paro no es refrendada por todas las gremiales, votando en contra ARU, ACA y CAF, mientras que doce gremiales apoyaron la medida. La medida es acatada por la mayoría, y se señala el comienzo de un paro general agropecuario que involucra a la totalidad de las producciones granjeras, siendo la única excepción a la medida la remisión de leche.

Sin embargo, apremiada por los disensos internos y por las dificultades prácticas para instrumentarlo, el día 20 se suspende el paro agropecuario –para “contribuir a una nueva instancia de negociaciones”– al tiempo que se le reitera la solicitud de entrevista al presidente Sanguinetti y la MCGA decide “apelar a la sensibilidad del Ejecutivo a los efectos de que arbitre soluciones a la problemática del sector, para que de esta manera se evite la continuación de la huelga de hambre” según reza un comunicado emitido por la MCGA en esa ocasión (*El País*, 21/8/99).

Se aprecia entonces, en perspectiva, una espiral ascendente de movilizaciones que trata de conjugar las reivindicaciones planteadas con la presencia del sector movilizado, al tiempo que se intenta descentralizar las mismas. Si bien puede parecer que en términos nacionales esto dispersa al movimiento, a nivel zonal tiene un impacto marcado, al tiempo que otros sectores no agrarios de la sociedad local adhieren, en algunos casos, potenciando la repercusión de las medidas adoptadas. Sin embargo, el paro decretado, al no lograr en una primera instancia los resultados esperados, comienza a desgastar a las fuerzas gremiales, al tiempo que surgen con mayor fuerza las disidencias internas, fundamentalmente de la Federación Rural y Asociación Rural, que preconizan una política gremial de negociación y de diálogo sin movilización.

Por otro lado, el gobierno y el Poder Legislativo instrumentaron diversas instancias de diálogo y negociación con las entidades gremiales. No hay que olvidar que en el trasfondo de estas actitudes todos los actores estaban jugando con el hecho de que en noviembre de ese año había elecciones generales para renovar el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Por lo tanto, se está en un escenario de alta fluidez política donde todos los actores esperan obtener réditos de sus actitudes. El gobierno delega en el Ministerio de Agricultura el grueso de la negociación, constituyéndose una comisión con técnicos ministeriales y líderes gremiales para revisar cada uno de los reclamos gremiales, buscando alternativas de solución. También se realizan reuniones de negociación con representantes del Banco Estatal, que es el gran acreedor del sector, con representantes del Ministerio de Economía, con las Intendencias para negociar los impuestos municipales, etcétera.

La estrategia de la MCGA es clara: concurrir a todas las instancias de diálogo posibles, pero por otro lado presionar continuamente a través de movilizaciones. Esta estrategia no es del agrado de las organizaciones más conservadoras que presentan a los sectores de productores más grandes del país, que siempre han estado muy vinculadas al poder político. Así, para el mes de septiembre, tanto la Asociación Rural del Uruguay como la CAF dejan de asistir a las reuniones de la MCGA, si bien su retiro formal se producirá recién en marzo del año siguiente. La FRU, aquejada por una división interna, oscila entre apoyar a la MCGA y salirse de ella según como se componen las relaciones de fuerza al interior de la misma, pero acompañará a la MCGA todavía durante el año 2000.

La acción gremial de los productores obtiene algunos resultados. El gobierno dicta medidas que reducen los aportes patronales a la seguridad social, reduce algunos impuestos, alivia la presión impositiva prorrogando el vencimiento de otros impuestos, y promete que estudiará una refinanciación de las deudas que los productores mantienen con la banca estatal. Sin embargo, el tipo de política económica predominante que renuncia al manejo de los precios de los productos y se somete al dictado de los precios de los mercados agrícolas internacionales, y que por lo mismo tampoco puede manejar las tasas de interés del dinero, queda reducida al manejo de la única variable sobre la cual tiene algún grado de control, que es la política impositiva. Por lo tanto, hacia allí se dirigirán los principales esfuerzos del gobierno, con resultados que sin duda no satisfacen a la MCGA.

Una de las principales reivindicaciones de los productores es la solución al endeudamiento. Esta tiene sin embargo apoyos distintos. Es sin duda la principal reivindicación para las gremiales que reúnen a los productores más grandes y para aquellas que reúnen a los productores vinculados a producciones que utilizan mucho crédito en su actividad productiva anual, como los productores de cereales, oleaginosas y arroceros. Por lo tanto para gremiales como ARU, ACA, y CAF, y en menor medida la ANPL, Confederación Granjera y FRU, esta también es una medida muy sentida. En las otras gremiales lo es para algunos productores pero no para otros, y puede no ser la principal medida para aquellas gremiales que representan los intereses de los pequeños productores, cuyo nivel de endeudamiento es bajo o inexistente porque no son sujetos de crédito del sistema bancario. Las negociaciones para postergar los vencimientos bancarios y para reformular los créditos otorgados se harán caso a caso, frente a la resistencia gubernamental a otorgar un “perdonazo” generalizado.

#### EL AÑO 2000

Luego de las elecciones nacionales de fines de 1999, en el mes de marzo asume el nuevo presidente, el Dr. Jorge Batlle, quien había sido presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería en el Senado y líder de la fracción más neoliberal del Partido Colorado. Necesariamente la MCGA abre un compás de espera mientras se designa al nuevo gabinete ministerial y se elabora el perfil del nuevo gobierno.

El 13 de abril la MCGA realiza un acto en Salto en el cual se recuerda la marcha de 1999. La Federación Rural adhirió al acto. En el mismo se declara al 13 de abril como “Día del Productor Agropecuario y la Familia Rural”, y se lee una proclama en la que se afirma que el problema del agro es un problema de Estado; se insiste en el tema de la rentabilidad del sector; se emplaza al gobierno, dándole como fecha tope el 15/04/2000, para que instrumente las medidas tendientes a solucionar los problemas del sector; se señala la presión tributaria e impositiva, el atraso cambiario y la política de rebaja de aranceles a las importaciones como principales factores que afectan al sector.

Ante la falta de respuestas positivas para resolver la crisis del sector, se profundiza la agenda de movilizaciones. El 31 de mayo se realiza un cabildo abierto en Villa Sara, departamento de Treinta y Tres. El 6 de junio se realiza un cabildo abierto en Tarariras, departamento de Colonia, donde se señala la participación de 600 productores, y simultá-

neamente se realizaron siete concentraciones con maquinaria agrícola al costado de las rutas, formándose piquetes en Tarariras, San Pedro, Conchillas, Palo Solo, Paso Antolín, Miguelete y Carmelo, localidades del mismo departamento.

El 19 de junio se realiza un cabildo abierto en Sarandi del Yí, departamento de Durazno, que convocó a más de 500 productores, contando con la asistencia de diputados departamentales y donde el endeudamiento y la rentabilidad fueron los temas centrales. El 15 de julio se realiza un cabildo abierto en San José, departamento de San José.

Las movilizaciones continúan. El 31 de agosto se realiza una movilización en Río Negro, que consta de una concentración y posteriormente un paro en la ciudad de Young, convocado por una decena de instituciones que representan a distintos sectores: lecheros, comerciantes, productores rurales, jubilados y pensionistas, transportistas y trabajadores. El 2 de septiembre se realiza un cabildo abierto en Carmelo, en el departamento de Colonia.

El 10 de septiembre, en el discurso de cierre de la Exposición del Prado 2000, el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, que ya ha abandonado la MCGA, define la política de la organización expresando su coincidencia con algunos diagnósticos efectuados por el ministro de Agricultura y Ganadería al tiempo que señala los avances obtenidos gracias a algunas medidas tomadas por el gobierno y enumera medidas a tomar por parte del sector y el sistema político para profundizar en las soluciones necesarias para el agro.

Unas horas antes de que se desarrollase el acto central de la Exposición del Prado, la MCGA ha convocado a una movilización denominada “Día de los Brazaletes Negros” que tiene lugar en el Monumento a los Charrúas ubicado en el barrio del Prado, próximo a donde se estaba desarrollando la Exposición Ganadera organizada por la ARU. Hasta allí llegan columnas de jinetes y algunos vehículos, ómnibus con productores desde el interior y público “urbano” de organizaciones amigas (cooperativas, asociaciones vecinales, organizaciones de transportistas, etc.). Desde un tablado se escucha la proclama de la MCGA leída por un popular periodista radial del interior. Los parlantes a todo volumen hacen inevitable que los paseantes de la cercana Exposición Rural del Prado escuchen también el mensaje.

A principios de octubre se lleva a cabo un cabildo abierto en Durazno, con la presencia de más de doscientas personas.

El 20 de diciembre, a sugerencia de la Intergremial de Productores de Carne y Lana, se convoca a una movilización en el Palacio Legislativo con motivo de la interpelación de los ministros de Economía y de Agricultura y Ganadería. La Federación Rural no se plegó.

Las presiones ejercidas por las organizaciones gremiales de la MCGA (así como también las negociaciones que llevan adelante las organizaciones rurales que ya se han salido de ella) comienzan a dar algunos resultados. El 7 de julio el ministro de Ganadería anuncia que el BROU refinanciará deudas de los pequeños productores, trayendo así alivio a este sector. La medida abarca a quienes tienen deudas de hasta 10 mil dólares, que suman 7.600 y representan al 44% de los deudores del agro con el banco oficial. El presidente de la CNFR saluda la medida diciendo que “era un buen comienzo”, mientras que el presidente de la Confederación Granjera sostuvo que “no nos debemos olvidar de los que tienen deudas mayores a esa cifra”. Por su parte, el presidente de la Federación Rural señaló “que es una acción positiva.” Días después se realiza una reunión del ministro de Ganadería con la Federación Rural en la cual el representante del Ejecutivo anunció el estudio de reperfilamiento de deudas para productores endeudados entre 10 mil y 50 mil dólares.

Finalmente el nuevo gobierno propuso para los deudores mayores a 50 mil dólares la refinanciación de las deudas bancarias del agro mediante el “Bono Cupón Cero”, que otorga tres años de gracia durante los cuales sólo hay que pagar los intereses (la amortización de la deuda comienza recién luego de tres años) y extendió los plazos de las deudas a veinte años. Esta propuesta será fuertemente resistida por las gremiales, pero sin embargo la mayoría de los deudores terminarán acogiéndose a ella por decisión individual en junio de 2001 cuando termine el plazo acordado para hacerlo.

Inevitablemente, las disparidades existentes entre los productores agropecuarios, dadas por su diferente capacidad económica, distintos rubros productivos, distintas formas de organizar el trabajo (empresarios terratenientes, empresarios capitalistas, productores familiares, etc.) hacían muy difícil organizar y vertebrar la representación de intereses más allá de ciertas coincidencias básicas, superadas luego de las primeras negociaciones con el gobierno encaradas durante 1999. A partir de allí las diferencias crecen y se expresan abiertamente durante el 2000.

Crece los disensos en torno a cual debía ser el papel de la MCGA. Las organizaciones con mayor permanencia y tradición histó-

rica –ARU, FRU, CNFR– creían que la MCGA debía ser una coalición de organizaciones gremiales que reunieran fuerzas en torno a una situación coyuntural, pasada la cual debía disolverse para que dichas organizaciones reasumasen su protagonismo. Una serie de organizaciones más pequeñas y más recientes, como la Intergremial de Productores de Carne y Lana y los Movimientos de Productores de Colonia, de Paysandú, de Río Negro, y el Movimiento “No va más” de Salto, que eran los que más habían trabajado y más habían apostado en torno a la MCGA, aspiraban a transformarlo en una herramienta unitaria de carácter permanente de los productores rurales. Esta tensión es permanente en la MCGA y se advierte fácilmente en las actas de las reuniones y en la interpretación de las ausencias y presencias en las reuniones y movilizaciones convocadas por la MCGA a lo largo de 1999 y 2000.

La Asociación Rural de Uruguay y las Cooperativas Agrarias Federadas se retiran a principios del 2000. En la primavera lo harán la Confederación Granjera, la Comisión Nacional de Fomento Rural, la Asociación de Colonos, la Asociación Nacional de Productores de Leche y la Intergremial de Productores de Leche, dejando claro que en relación a la posición sobre el futuro de la MCGA el “corte” no es pequeños y medianos contra grandes productores, sino más bien gremiales “tradicionales” contra “advenedizos”. Poco después se retira la Federación Rural de Uruguay. La Mesa Coordinadora de Gremiales Agropecuarias languidece hacia fines de 2000.

## AÑO 2001

Durante el primer semestre de 2001 la MCGA aún llevará a cabo algunas actividades, pero ya sin el poder de convocatoria que había tenido. Promueve la elección de un representante patronal en el Directorio del Banco de Previsión Social en alianza con otras organizaciones de pequeños y medianos empresarios, manifestando así la voluntad de abrir las fronteras hacia otras organizaciones no rurales.

En abril de 2001 se produce un foco de fiebre aftosa en los departamentos del Litoral oeste, poniendo en peligro la categoría sanitaria del país. El gobierno intenta frenar el avance de la enfermedad aplicando el rifle sanitario (la eliminación del ganado enfermo tanto en el foco como en las áreas adyacentes). Los productores de los departamentos involucrados, Soriano y Colonia, con la experiencia organizativa adquirida en los años anteriores, se opusieron a estas



medidas con el apoyo de organizaciones urbanas y fuerzas políticas locales, y con la anuencia de la policía local, cortando las rutas por varios días e impidiendo la efectivización de la medida. El gobierno finalmente debe ceder y reinstaura la vacunación obligatoria en todo el país, perdiendo la categoría de país libre de aftosa que le permitía vender la carne en mercados de mayor poder adquisitivo.

A mediados de año, la Federación Rural, que ya se ha separado de la MCGA, elige una nueva conducción política surgida de la opositora Lista 19, que ha asumido medidas de lucha más combativas. De esta manera la organización tenderá a ocupar el espacio de la MCGA, fundamentalmente entre los sectores ganaderos.

En los últimos meses de vida de la MCGA, una corriente interna trata de impulsar su transformación en otra organización a la cual denominan Coordinadora Agropecuaria del Uruguay (CADUR). Esta nueva estructura se asentaría, según sus impulsores, sobre la base de la participación directa de los productores, haciéndola extensiva al núcleo familiar, por lo que sería una organización de primer grado que competiría con las organizaciones existentes. Sin embargo, la propuesta también terminará fracasando. La MCGA terminó disolviéndose en el aire a lo largo de 2001.

#### “RENTABILIDAD O MUERTE”: UNA DISCUSIÓN EN TORNO A LA CARACTERIZACIÓN DE LA PROTESTA RURAL<sup>77</sup>

En las páginas anteriores se ha realizado una caracterización del agro uruguayo y de sus actores sociales. Se han repasado los principales hitos del desarrollo agropecuario en las últimas tres décadas, focalizando en los últimos ocho años, a partir de que comienza a cobrar fuerza el proceso de integración regional. Finalmente se ha mostrado la estrepitosa caída de los mercados internacionales agrícolas, y sus consecuencias sobre la economía de los productores agropecuarios uruguayos. La interpretación de los propios productores agropecuarios acerca de su falta de rentabilidad señala la enorme transferencia de recursos a otros sectores de la economía, resultado de la sobrevaluación del peso. También se ha intentado dejar claro

---

77 “Rentabilidad o Muerte” era la bandera de un grupo de productores afiliados al Movimiento de Productores de Colonia. Rápidamente adoptada por otros grupos y repetidamente fotografiada por la prensa, como toda consigna exitosa, lo es por su poder de síntesis. Para los productores su significado es que si sus establecimientos no logran una rentabilidad adecuada, terminarán arruinados y desaparecerán como tales.

que aquello que ante los ojos de los productores es una crisis de mercados oculta problemas mucho más serios de la estructura social agraria del Uruguay y del modelo económico aplicado por quienes conducen los destinos del país.

También se ha analizado la estructura social agraria, y se ha descrito a las principales gremiales agropecuarias que formaron la coalición denominada MCGA. Se realizó una cronología de los acontecimientos que iniciaron y continuaron las acciones de movilización y protesta agropecuaria.

Por las características que asumió el conflicto, varios son los hechos que llaman la atención. Por un lado, la rapidez con que se desencadenan los acontecimientos: en el término de un año se pasa de una situación de bonanza y de idilio con las políticas de gobierno a un duro enfrentamiento. Por otro lado, las medidas de lucha que se toman en un sector social que siempre se ha caracterizado por su capacidad negociadora, y más bien por frecuentar los pasillos del poder antes que por enfrentarlo. En tercer lugar, sorprende la creación de una coalición de las gremiales de un sector social que no registra antecedentes de emprender acciones conjuntas de esta naturaleza. En cuarto lugar, la ocasión para desencadenar el conflicto cuando se está en pleno período electoral. En quinto lugar, tampoco deja de sorprender la relativa escasa capacidad de maniobra que demuestra un gobierno que parece atado a principios de ortodoxia económica más que a la praxis política.

## LOS ORÍGENES

En la cronología de las acciones llevadas a cabo por la Mesa Coordinadora de Gremiales Agropecuarias se explicó cómo desde algunas gremiales agropecuarias, que no eran ni las más grandes ni las tradicionales, se hizo un llamamiento a realizar una Marcha de Productores hacia Montevideo como forma de protestar contra la política agropecuaria implementada por el gobierno. A partir de una actitud dubitativa de las gremiales mayores, la presión de las bases empujó a la realización de la marcha.

Para conducirla se crea una Coordinadora de las gremiales que participaban de la misma. La rapidez con que se gesta (veinte días antes de la marcha) hace pensar que la idea original era crear un organismo cuya función acabase con la misma. Sin embargo, la respuesta multitudinaria que tuvo la convocatoria, y la cascada de reuniones

con la prensa y con los Ministerios y comisiones del Parlamento que suceden después, motivaron a las organizaciones gremiales a continuar con la Mesa Coordinadora aún después de la marcha. Esta decisión no fue del agrado de las gremiales “tradicionales”, disgustadas por la participación en igualdad de condiciones y de voto de gremiales recientemente formadas o con menor capacidad de representación. Tal situación hizo que desde su creación la MCGA fuese el centro de un áspero debate en torno a su capacidad de representación.

#### LOS RECURSOS MATERIALES

La MCGA contó con muy pocos recursos materiales propios. Más bien usufructuó los recursos de algunas de las organizaciones que la cobijaban. Durante todo el primer año la Mesa empleó el espacio y los recursos secretariales y de comunicaciones provistos por la Comisión Nacional de Fomento Rural. Posteriormente se trasladó a la Asociación de Remitentes de Conaprole. En un principio se había fijado una cuota que debían pagar los gremios miembros de la Mesa, pero pocos la pagaron. En general, los miembros de la Directiva de la Mesa solventaron sus propios gastos.

La Mesa sí hizo buen uso de los contactos que sus miembros tenían con los distintos medios de comunicación y la prensa especializada. En el fondo, libró una batalla por la voluntad pública: sabía que la legitimidad de sus reclamos tenía mucho que ver con la percepción que el público, mayormente urbano, tuviese de la justicia de sus reclamos. Por ello libró una verdadera batalla mediática. Todas sus acciones y resoluciones eran transmitidas a la prensa, que por lo general estaba esperando en la antesala la finalización de las reuniones. Para que la presencia en la prensa fuese equilibrada, se ideó un mecanismo consistente en que las reuniones eran rotatorias en la sede de cada una de las gremiales. A su vez, el dueño de casa designaba de entre sus filas al único vocero autorizado. Sin embargo, las intervenciones en la prensa fueron una fuente continua de conflictos. Para muchos dirigentes era demasiada la tentación de los micrófonos, y muchas veces se hacían declaraciones con matices distintos, cuando no con versiones contradictorias.

#### LOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN

El análisis debe discurrir en dos niveles. Por un lado, el de las organizaciones gremiales integrantes de la Mesa Coordinadora de Gremiales

Agropecuarias. Por otro lado, las personas, los asociados a las distintas organizaciones gremiales, que fueron quienes concurren a las movilizaciones y con su esfuerzo, imaginación, entusiasmo, rabia y frustración dieron contenido a los reclamos.

En el primer nivel, la MCGA estaba constituida por dieciséis gremiales: las tradicionales, de más antigua y reconocida trayectoria (ARU, FRU, CNFR); las gremiales por producto; algunas gremiales locales; y un conjunto de gremiales de muy reciente formación y de representatividad menos definida. La conducción de la MCGA tuvo claro, al menos en el inicio, que la presencia de las gremiales empresariales era muy importante para que el diálogo con el gobierno fuese atendido. Por ello se hizo todo lo posible para incluirlas, aunque no hubiesen estado entre las más entusiasmadas por organizar la marcha.

Las dos principales organizaciones gremiales de los ganaderos, la Asociación Rural del Uruguay y la Federación Rural del Uruguay, han estado dominadas por los sectores empresariales de la ganadería. La primera representa mejor los intereses de invernadores y cabañeros, y la segunda los intereses de los criadores. Siempre han tenido estrechos contactos con el poder político, y las principales decisiones en materia de política agropecuaria son consultadas con dichas organizaciones. Dirigentes gremiales han ocupado reiteradamente el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, mientras que sus dirigentes ocupan cargos honorarios y rentados en más de una docena de juntas e institutos que regulan la política agropecuaria. La posición de las gremiales ha sido siempre dialoguista y temporizadora con el poder político.

Una pregunta clave que es preciso hacerse se refiere al comportamiento en este conflicto de la Federación Rural de Uruguay. Para ello es preciso volver a analizar la creación y el posterior accionar de la Intergremial de Productores de Carne y Lana. El proceso comenzó por la constitución de movimientos locales de productores con independencia de las dos grandes gremiales ganaderas. Se ensayó una metodología de organización y movilización altamente participativa, nucleando a los pequeños y medianos ganaderos del interior, de las partes más alejadas y extensivas del país. Luego de un proceso de acumulación de fuerzas, crean la Intergremial de Productores de Carne y Lana (IPCL), que se diferencia y critica fuertemente a la Federación Rural y a la Asociación Rural, caracterizándolas como organizaciones de cúpula, de dirigentes rurales urbanizados que han perdido contacto con sus bases rurales y que no responden bien a los reclamos de los

pequeños y medianos productores ganaderos, quienes están soportando una fuerte crisis económica y de rentabilidad.

Sin embargo, también es posible ver a la IPCL como una lista interna disidente con la conducción mayoritaria de la Federación Rural más que como a una nueva organización rural. Candidatos cercanos a la IPCL finalmente terminan, en mayo de 1999, compitiendo e imponiéndose en las elecciones internas de la Federación Rural. Su victoria sobre la lista oficialista, aunque por escaso margen, refleja que el equilibrio de fuerzas internas ha sido ganado por los sectores ganaderos más radicalizados. Esta victoria hará que la Federación Rural apoye inicialmente la protesta agraria que se desenvuelve a partir del 13 de abril. Sin embargo, como la victoria ha sido por escaso margen, la Federación oscilará repetidas veces entre su apoyo y pertenencia a la MCGA según los cambiantes equilibrios internos entre sus dirigentes. Posiblemente haya sido el apoyo que la FRU debió brindar a la MCGA lo que empujó a la Asociación Rural del Uruguay y a las Cooperativas Agrarias Federadas a apoyar, a regañadientes, las movilizaciones que se iniciaron en abril de 1999. Un año después, obtenidas razonables certezas de que sus principales reclamos tendrían respuesta (disminución de la presión impositiva y refinanciación bancaria), se bajarán de este carro.

Por otro lado están los productores rurales que participaron de las distintas instancias de movilización, tan heterogéneos como distinta es la composición social del sector. Los trabajadores asalariados rurales no participaron de las movilizaciones, y los sindicatos no fueron invitados a integrar la Mesa Coordinadora.

Por consiguiente, en principio, aquellos productores rurales que estaban en condiciones de participar de las movilizaciones eran por lo menos los que pertenecían a las organizaciones gremiales rurales. Es imposible saber a ciencia cierta cuál es el número de afiliados a dichas organizaciones, porque en general no hay registros. Sin embargo, es posible pensar que la convocatoria de las gremiales rurales superó su campo de asociados, tanto en la marcha del 13 de abril como en las movilizaciones posteriores. El 19 de junio, cuando se organizaron movilizaciones en cada uno de los departamentos del país en forma simultánea, la MCGA estimó, en total, sumando a los productores y sus familias que asistieron a las distintas movilizaciones, una concurrencia de 50 mil personas. Aunque es posible suponer a esta cifra como muy optimista si se piensa que hay 57 mil product-

res rurales en todo el país, es preciso reconocer que la movilización debe haber incluido a una proporción considerable de los mismos.

Por otro lado es posible esbozar algunas hipótesis en cuanto a la composición social de los productores que participaron de las movilizaciones. Salvo la movilización del 13 de abril y la Marcha de los Brazaletes Negros seis meses después, ambas en Montevideo, todas las demás se llevaron a cabo en el interior, convocando a los productores de la región. Este hecho seguramente posibilitó la asistencia de aquellos productores que estaban en mayores dificultades: pequeños y medianos productores muy endeudados, que no tenían recursos para emprender una marcha más costosa hasta la capital. Ello puede explicar por qué las movilizaciones locales siempre tuvieron una tónica de mayor combatividad y virulencia que las realizadas en Montevideo. En estas últimas posiblemente hayan tenido un peso mayor los productores granjeros que rodean la capital que los productores ganaderos extensivos localizados a mayor distancia. Pero es claro que la disposición de quienes participaban en las movilizaciones era distinta a la de los dirigentes que asistían a las reuniones de la MCGA y a las reuniones con los poderes públicos. Estos se sentían respaldados, pero también “empujados” por quienes participaban de las movilizaciones.

#### IDENTIDAD Y AUTODEFINICIÓN

A diferencia de las organizaciones y movimientos sociales analizados en los capítulos precedentes, la marcha del 13 de abril de 1999 dio lugar a la creación de una coalición de organizaciones que por su carácter efímero no perduró en un movimiento social. Una de las razones para ello es que no se logra constituir una identidad común: la extrema heterogeneidad en la composición social de los que participaron de las mismas es uno de los elementos que explica la dificultad para dar continuidad a las acciones.

La Mesa Coordinadora de Gremiales Agropecuarias no se constituirá en un movimiento social ni en una organización social nueva: se lo impiden las organizaciones gremiales que la formaron. A pesar de que algunos de los dirigentes gremiales iniciadores de la movilización pretendieron transformar a la MCGA en una organización de carácter permanente, el fuerte instinto de conservación institucional de las organizaciones constitutivas abortó este intento.

La pregunta que es preciso hacerse entonces es: ¿cómo se construyó la solidaridad mínima que llevo a que 20 o 30 mil personas se

movilizasen juntas en la marcha del 13 de abril? Y ¿qué es lo que hizo que luego se volviesen a movilizar en numerosas manifestaciones de carácter local?

La identidad mayor estuvo dada por la condición rural, o tal vez más acotadamente por la condición de productor agropecuario. Esto era fácilmente identificable mediante una serie de símbolos: la caballada que abría la marcha, los tractores y maquinarias agrícolas, la vestimenta de muchos de ellos, algunos de los vehículos utilitarios, etcétera. Pero también era manifiesta una identidad más restringida, dada por el carácter local de muchas de las organizaciones convocantes. Así, en la marcha del 13 de abril muchos de los que marcharon lo hacían bajo una bandera o un pasacalle de la Asociación Rural, de la Sociedad de Fomento o de la Cooperativa Agropecuaria, que les confería su identidad primaria. La existencia de una identidad local fue más evidente en las numerosas movilizaciones que se dieron en el interior del país a lo largo de 1999, en las que sobresalían, además de las reivindicaciones de carácter nacional, aquellas de carácter local vinculadas a los rubros de producción de la región o a determinadas reivindicaciones ligadas a los gobiernos departamentales.

Por lo tanto es posible suponer una doble identidad: la rural, que separa un “nosotros” de un “ellos” constituido por el público, presumiblemente montevideano y ciudadano; y la pertenencia a una entidad rural y/o a una localidad del interior del país, que separa, pero a la vez une, a aquellos que se movilizaron juntos.

#### LOS ADVERSARIOS

En ningún momento la MCGA identifica a sus adversarios como enemigos. En términos generales, la mesa está “contra el modelo económico” o “contra la política neoliberal”, o identifica a la conducción económica del gobierno como el adversario al cual debe vencer o más bien convencer. En el sistema bancario se hace una distinción entre la banca privada y la oficial. A pesar de que es con esta última que están contraídas la mayoría de las deudas, los productores tienen claro que el sistema bancario oficial, el Banco República, es la gran nave nodriza de la cual todos se deberán abastecer en el futuro. Los “mercados” son criticados por su comportamiento errático. Tanto en el blanco de las críticas como en el tenor de las mismas hay considerables diferencias según la organización gremial integrante de la Mesa que las profiera. Las gremiales granjeras serán más proclives a

criticar el modelo económico y la apertura comercial, mientras que los ganaderos elegirán como su principal blanco el “costo del estado”, su tradicional cantilena<sup>78</sup>.

El referente de la movilización del 13 de abril y de todas las movilizaciones posteriores será siempre el gobierno, en sus distintas versiones: el Parlamento cuando se trata de buscar la resonancia de los reclamos rurales en los representantes o de impulsar una ley que condone o alivie el endeudamiento; el Poder Ejecutivo cuando se trate de morigerar la presión fiscal o de buscar la forma para devolver la rentabilidad a las explotaciones; el sistema judicial cuando se trata de impedir los remates por deudas; el sistema bancario oficial cuando es preciso encontrar una solución al endeudamiento y renegociar los vencimientos de las deudas.

Otro saldo de este conflicto es la percepción de la escasa capacidad de maniobra del Estado nacional para intervenir en situaciones como la que se analiza. Por un lado, el gobierno renuncia a intervenir para amortiguar el impacto del deterioro de los precios en los mercados agrícolas. Al renunciar a emplear los aranceles de importación como instrumento de política económica, permite que el deterioro de los precios se transmita sin mediaciones a los mercados internos. Por otro lado, al ser Uruguay un tomador de precios en los mercados internacionales, tampoco puede influir sobre ellos. Sin embargo, el derrumbe de los precios en los mercados agrícolas internacionales se debe en muchos casos a la intervención de los gobiernos (en particular de los países desarrollados), que subsidian la producción agropecuaria y vuelcan los excedentes en dichos mercados a precios de dumping (lácteos, arroz, cereales, etc.). Por lo tanto, se trata de una lucha desigual entre gobiernos que intervienen en los mercados y gobiernos –como los nuestros– que no lo hacen, en nombre de una política de libre mercado cuyos mentores no cumplen.

El Estado también renuncia a actuar sobre las tasas de interés de los créditos, ya que estas se regulan por los equilibrios macroeconómicos generales, o sobre las condiciones de amortización de los mismos, con el pretexto de que no debe intervenir en el mercado financiero. Cuando se idea una forma de amortiguar los efectos del endeudamiento (el Bono Cupón Cero) se prorrogan los vencimientos

---

78 Al respecto ver Piñeiro, Diego, “Cuando el Estado viene Aplanando. El Estado en la visión de los empresarios ganaderos”, en Diego Piñeiro (editor) *Nuevos y no tanto. Los actores sociales en la modernización del agro uruguayo*, Editorial Banda Oriental-CIESU, Montevideo, 1991, pp. 107-144.



de las deudas, llevándolas veinte años para adelante. Con este mecanismo se logra aliviar a los productores endeudados, mientras que también se protege al sistema bancario de una cartera morosa que hubiese influido negativamente en sus resultados. Casi el único instrumento que le queda es la política impositiva. Es en este ámbito donde el gobierno hará concesiones de alivio impositivo. En resumen, por voluntad propia, por apego a una política económica que privilegia las leyes del mercado antes que la intervención en los mismos, el Estado nacional y el gobierno tienen muy pocos instrumentos para actuar en la crisis planteada.

Frente a esta situación, la pregunta que surge inmediatamente es: ¿cuál es el lugar de la política agropecuaria? Cuando el Estado nacional renuncia al uso de instrumentos de política en aras de una concepción económica que privilegia el funcionamiento del mercado, pero que a su vez no puede protegerse de la incidencia de la acción de otros estados en los mercados internacionales, ¿dónde y cómo se hace la política?

Al escamotearse el lugar de la política, que ya no radica solamente en el Estado nacional, cambian las reglas de juego para la gremiales agropecuarias. El Estado nacional ya no es el lugar donde se generan las políticas agropecuarias. En un mundo globalizado donde los mercados agropecuarios están unificados, estas se generan en el ámbito de otros gobiernos, en los despachos de las multinacionales agroalimentarias, en los pasillos de los organismos internacionales que regulan el comercio de las materias primas, en las oficinas de los ministerios de los países desarrollados donde se utilizan las donaciones de alimentos como instrumentos de política internacional, etcétera. Pero este nuevo escenario es difícilmente comprensible para muchos productores, y más aun, es un escenario en el cual es muy difícil actuar. Es por ello que las gremiales insisten en obtener concesiones de un Estado que en realidad está exhausto y con poca capacidad de maniobra.

#### LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD

Es la primera vez que en el agro uruguayo se logra conformar una Mesa Coordinadora de Gremiales Agropecuarias en la cual están representadas de una forma o de otra todas las gremiales, y que se logra emprender acciones reivindicativas con este instrumento. En la historia del gremialismo agropecuario del país sólo se registra una instancia

anterior que guarda ciertos parecidos. En 1984 se convoca a la Concertación Nacional Programática. La CONAPRO fue un instrumento político que se dieron los principales partidos políticos a la salida de la dictadura (1973-1984), convocando a todos los partidos y organizaciones sociales para preparar un acuerdo político que aislase al gobierno militar. Luego de algunas desinteligenacias internas, las gremiales agropecuarias logran preparar un programa común que finalmente se incorpora al programa de la CONAPRO<sup>79</sup>. Pero intentos posteriores de articular acciones de carácter común para lograr una solución al endeudamiento agropecuario fracasaron por desinteligenacias entre gremiales que en el fondo representaban intereses diferentes.

La Mesa Coordinadora de Organizaciones Gremiales no puede verse como un movimiento: debe analizarse como una coalición de organizaciones de carácter coyuntural y transitorio, por más que el núcleo dirigente (el cerno) haya tratado de proyectarle una continuidad. Se constituye a raíz de la movilización del 13 de abril, de la cual son convocantes muchas organizaciones rurales de muy variado tipo y representatividad, y por lo tanto participan de ella tanto organizaciones gremiales tradicionales de larga historia y raigambre en el campo como organizaciones nuevas o formadas al calor de las movilizaciones. Esta composición heterogénea fue por un lado una fortaleza, por cuanto permitió saltar las vallas de las organizaciones tradicionales, llegar hasta muchos productores decepcionados con su accionar, y convocar a través de organizaciones de carácter local a mucha mayor cantidad de productores. Pero por otro lado, a la larga se convirtió en una debilidad por cuanto las organizaciones formales, tanto las que representan a los grandes productores como las que representan a los pequeños, y aún aquellas por producto, se sintieron molestas porque organizaciones recientemente conformadas y a veces de discutible representatividad según su entender, sin historia ni medios materiales, se arrogaban y disputaban, en igualdad de condiciones pues todas tenían un voto, las decisiones en las reuniones de la Mesa.

Es preciso tener en cuenta que el pequeño grupo de personas que tenían más influencia en la MCGA y que ocupaban los cargos directivos alentaban la participación de las organizaciones locales y

---

79 Para una discusión más detallada de este episodio ver Piñeiro, Diego, "El Plenario de Pequeños y Medianos Productores: un intento de crear un movimiento de agricultores familiares", en Carlos Filgueira (compilador) *Movimientos Sociales en el Uruguay de Hoy*, CLACSO/CIESU/Ediciones de la Banda Oriental, Montevideo, s/f., pp: 121-154.

departamentales con el fin de restarle fuerza a las organizaciones tradicionales. Esto ocurría al menos por dos razones: por un lado porque las veían muy vinculadas al gobierno, y en ese sentido creían firmemente que no estaban interpretando el sentir de la mayoría de los productores rurales sino que sólo representaban a los productores más grandes (en el caso de la FRU y de la ARU), o que eran estructuras anquilosadas y burocráticas (para el caso de la CNFR); por otro lado, porque ya aspiraban a crear una nueva organización rural sobre la base de la MCGA.

Con esta composición de fuerzas no es de extrañar que la vida de la MCGA haya estado signada por el equilibrio inestable, y que la unidad, además de efímera, haya sido el resultado de una trabajosa construcción. Cuando se convoca a la movilización del 13 de abril y cuando se constituye la MCGA con el fin de conducirla, se lo hace en nombre de todas las organizaciones. Posteriormente a la movilización del 13 de abril, la propia fuerza de esta movilización sorprendió a sus organizadores y ahora integrantes de la MCGA, y los hizo caer en la cuenta de que tenían un formidable instrumento gremial y político entre manos. La cuestión consistía en lograr mantener la unidad. La conducción y los puestos principales de la MCGA estaban en las manos de dirigentes locales muy críticos de la línea oficial y “oficialista” de las principales organizaciones. Por lo tanto, las tres organizaciones que representaban a los productores empresariales (la ARU, la FRU y la CAF) estaban en una situación incómoda. No podían dejar de estar, pero no querían estar en una coalición de organizaciones que no conducían. En los meses siguientes esta ambivalencia se ve reflejada en las continuas tensiones al interior de la MCGA y las advertencias repetidas de estas tres instituciones de que se retirarían de ella. La situación se hace más confusa aún al ganar las elecciones de la Federación Rural en mayo de 1999, por escaso margen, la lista opositora próxima a los dirigentes de la MCGA.

## EL CONFLICTO

El conflicto reconoce varios orígenes o fuentes. Algunas de las razones son de carácter más estructural, otras son de tipo coyuntural. Entre las primeras están las medidas políticas que llevaron al país a formar parte del MERCOSUR. La integración regional es un proceso que significó profundizar la apertura del mercado nacional a la entrada de productos de los países asociados. Esta medida, dado que era recíproca, significó

mejorar las condiciones comerciales de los rubros tradicionales en los cuales Uruguay siempre fue competitivo (carne y lanas y cueros) y de otros rubros en los cuales con gran esfuerzo había construido sus condiciones de competitividad, como el arroz, los lácteos y los citrus. Pero significó dificultades para rubros como los cereales y los productos hortícolas y frutícolas, o incluso la desaparición, como en el caso del azúcar. El proceso de integración implicó ganadores y perdedores. Entre los últimos, algunos se reconvirtieron, otros desaparecieron como productores, y muchos aún luchan por mantenerse en carrera.

Pero aún dentro de los mismos rubros productivos la situación de un productor es muy diferente según la disponibilidad de recursos productivos con que cuente –tierra y capital principalmente– para adaptarse a las nuevas condiciones impuestas por la apertura de la economía. Incluso dentro de los rubros más “exitosos” los productores pequeños y medianos (generalmente de carácter familiar) tuvieron muchas más dificultades económicas, sociales, tecnológicas y culturales para procesar los cambios a nivel de sus explotaciones que los productores medianos y grandes de carácter empresarial. Entre los primeros, por lo tanto, se reclutan naturalmente los principales reclamantes y los principales actores en el momento de las movilizaciones.

Por otro lado, durante varios años, aproximadamente entre 1992 y 1997, los precios altos que obtenían varios productos en los mercados internacionales, y el excelente mercado para muchos productos agrícolas en que se constituyó Brasil mientras instrumentó el Plan Real, hicieron pensar que por fin se estaba en una época de bonanza para el sector agropecuario, como fueron las décadas del cuarenta y el cincuenta. Bajo su influjo los empresarios rurales (más que los productores familiares) invirtieron en mejoras, pasturas, genética animal. El campo vivió un período de inversión como hacía tiempo que no se experimentaba. Sin embargo, estas inversiones no se hicieron con recursos propios sino con créditos bancarios en moneda extranjera (dólares), de tal modo que en 1998 la deuda del sector equivalía a un año del PBI agropecuario. Por lo tanto se estaba frente a una situación que generó frustración entre los productores. Porque luego de un período de crecimiento de las inversiones como hacía muchos años que no ocurría, y por consiguiente de altas expectativas de obtener ganancias, el sector agropecuario se precipita a una crisis<sup>80</sup>.

---

80 Ted Gurr, desde la teoría de la privación relativa, denominaba a esta situación como “privación por decrecimiento”. Citado por Pérez Ledesma, 1994.

Por otro lado, según estimaciones realizadas desde las propias entidades agropecuarias, la sobrevaluación del peso uruguayo había generado un traslado de recursos del sector agropecuario hacia los otros sectores de la economía valuado en 11.900 millones de dólares. Esta situación podía ser soportable en un momento de ganancias para el sector, pero no cuando estas ganancias se achicaban o desaparecían como consecuencias de los cambios en los mercados.

#### LA ESTRUCTURA DE OPORTUNIDADES POLÍTICAS

Tarrow ha hecho notar la importancia del contexto político en que se desenvuelve la acción colectiva para comprender la oportunidad de su ocurrencia. Define a la estructura de oportunidades políticas como “las dimensiones... del entorno político que ofrecen incentivos para que la gente participe en acciones colectivas al afectar a sus expectativas de éxito o fracaso” (Tarrow, 1997: 155).

La convocatoria a la marcha del 13 de abril debe comprenderse en el marco de la situación política en que el Uruguay está inmerso. Se está en un año electoral, renovándose la totalidad de los cargos, nacionales y departamentales, ejecutivos y legislativos. En octubre se llevará a cabo la primera ronda, y de no lograrse la mayoría por ningún partido político, en noviembre se llevará a cabo la segunda vuelta.

Gobierna el Partido Colorado, pero al no contar con los votos necesarios en el Parlamento debe hacerlo en una suerte de coalición con el Partido Nacional. La oposición está constituida por el Frente Amplio, que es la primera fuerza política pero no ha logrado el gobierno por la alianza de los dos partidos tradicionales en la segunda vuelta electoral. Esta situación es particularmente propicia para que los grupos de interés obtengan réditos. En especial cuando las diferencias electorales son muy pequeñas. El voto rural, de esta manera, a pesar de ser escaso –sólo un 10% de la población es rural, puede definir la elección.

En esta situación, el Partido Nacional, que ha tenido tradicionalmente sus bases principales en la campaña y en el interior del país, es el que está más interesado en congraciarse con el electorado rural. De las diecinueve Intendencias departamentales, Montevideo la ganó el Frente Amplio, cuatro las ganó el Partido Colorado, y catorce el Partido Nacional. Por ello el Partido Nacional deberá practicar en este año electoral una maniobra difícil: despegarse de su aliado lo suficiente como para captar los votos contra el gobierno, pero no tanto como

para restarle gobernabilidad a la coalición. Para ello, mientras sus dirigentes nacionales apoyan moderadamente y con cautela a los reclamantes rurales, a nivel local sus punteros políticos apoyan, y a veces hasta lideran, los reclamos. Un ejemplo de esta situación es el equilibrio particularmente difícil que debe realizar el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, un dirigente nacionalista proveniente además de las filas del gremialismo rural, quien quiere ceder a los reclamos ruralistas más de lo que le permite la coalición de gobierno y finalmente se ve obligado a renunciar.

#### SISTEMA/ANTISISTEMA

Finalmente cabe analizar hasta dónde los reclamos y las movilizaciones emprendidas por la MCGA y las entidades gremiales que la integran contienen una crítica al sistema capitalista, o si son conflictos que sólo pretenden lograr beneficios para sus integrantes dentro del sistema actual de un capitalismo globalizado.

Las movilizaciones no son un instrumento de lucha que haya sido usado con frecuencia en la historia del gremialismo agropecuario uruguayo. En los últimos cincuenta años es posible contar con los dedos de una mano las movilizaciones de productores agropecuarios<sup>81</sup>. Recuérdense los cabildos abiertos convocados por Benito Nardone “Chicotazo”, que convocaba al sector de chacareros y pequeños productores ganaderos perjudicados por el fin de la política de apoyo a la agricultura a fines del la década del cincuenta<sup>82</sup>. Recuérdese el paro agrario en 1958 de todos los productores laneros, que al negarse a comercializar la zafra de lana provocaron un serio desequilibrio económico y forzaron la devaluación de la moneda, con lo cual mejoraron su posición como exportadores<sup>83</sup>. Más recientemente, en 1983 y 1984, recuérdense las amplias convocatorias generadas por los

---

81 En la década del sesenta los trabajadores de la caña de azúcar y del arroz llevaron a cabo varias movilizaciones con marchas hacia Montevideo y campamentos en torno al Palacio Legislativo. Ver Mauricio Rosencoff *La rebelión de los cañeros. Y los hombres del arroz*, Editorial TAE, Montevideo, 1987.

82 Para un análisis del ruralismo ver Abulafia Salinas, Julio, “La ofensiva ruralista de la década del ‘50 y las relaciones entre el Estado y la sociedad uruguaya”, en *Estudios Rurales Latinoamericanos*, Vol. 2 N° 1, enero-abril 1979, pp. 56-76, y Cosse, Gustavo, “Acerca de la democracia, el sistema político y la movilización social: el caso del “ruralismo” en Uruguay”, en *Estudios Rurales Latinoamericanos*, Vol. 5 N° 1, 1982, pp: 77-100.

83 Para un interesante análisis de este paro ver Panizza, Francisco, “Poder estructural y hegemonía: Estado y ganaderos en la década del ‘60”, en *Revista de Ciencias Sociales* N° 3, Montevideo, 1988, pp: 115-120.

Congresos de la Federación Rural, cuando, cortados por la dictadura los canales de expresión política, desde sus tribunas se reclamaba por el retorno a la democracia y por la licuación de las deudas agropecuarias generadas por la devaluación de 1982<sup>84</sup>.

El agro uruguayo se ha caracterizado por tener una baja conflictividad social, en especial si lo comparamos con la conflictividad en el medio rural de los vecinos, en particular Brasil y Paraguay.

Esta característica se explica por un lado por la existencia en la sociedad uruguaya de mecanismos generales de integración social y de amortiguación de los conflictos. El Estado ejerce el monopolio de la fuerza y lo hace sin dudas: no existe la posibilidad de que otros ejerzan el poder y la fuerza con aceptación social tal como a veces pareciera suceder por ejemplo en Brasil, ya sea con la UDR o con las policías particulares financiadas por los hacendados. El derecho a la propiedad de la tierra y de los medios de producción no está en cuestión. La sociedad uruguaya es profundamente propietarista, y sería impensable que nadie (impunemente o con aceptación social) atentase contra los derechos de propiedad establecidos. La invasión de tierras rurales privadas –no existen tierras públicas– está fuera de cuestión. Entre los mecanismos de integración social más extendidos y eficaces está la escuela pública: casi no hay analfabetismo entre la población rural, con lo que esto significa como factor de integración social; el maestro ha jugado en la campaña uruguaya el papel de articulador social. El clientelismo político y la inclusión en el aparato estatal como trabajador público han sido otro factor de integración: el ejército, la policía, las intendencias, han sido eficazmente utilizados para proporcionar empleo, pagando votos y aliviando el desempleo rural. Más recientemente, programas de alivio a la pobreza rural y de apoyo a la producción familiar han actuado de amortiguadores de tensiones: son programas gubernamentales financiados con créditos provenientes de organismos financieros internacionales o programas de alivio a la pobreza. Los planes de vivienda subsidiada, la electrificación rural, la construcción de caminos, la telefonía rural, en un país pequeño, de distancias cortas –geográficas y sociales, han facilitado la adopción creciente de pautas urbanas de vida y la efectiva integración social de la mayoría de los uruguayos que viven en el campo.

---

84 Piñeiro, Diego, "Gremialismo Rural y Transición Política: ¿Estancieros vs. Agricultores Familiares?", CIESU, DT, N° 78/84.

Cuando a pesar de lo anterior aparecen los conflictos, estos son canalizados a través de las organizaciones del agro. Existen espacios de participación para estas organizaciones –más para las organizaciones empresariales que para las de productores familiares– en múltiples comisiones gubernamentales y en instituciones públicas, a través de las cuales se canalizan las demandas.

¿Qué ha pasado entonces que este conflicto se traduce en movilizaciones y paros con escasos antecedentes en la historia de la conflictividad en el agro uruguayo? ¿Cuáles son las bases sociales del conflicto? ¿Cómo se logró la unidad entre las mismas?

En algunas situaciones, muy raras en la historia del agro uruguayo, el conflicto no logra ser administrado por las organizaciones ni canalizado a través de la institucionalidad vigente, y estalla, irrumpiendo en la arena política. Para el caso que estamos analizando, los canales de negociación habituales han sido insuficientes para canalizar las demandas, y por ello el conflicto irrumpe en la escena política, si bien liderado por las organizaciones gremiales. La falta de respuestas positivas para los gremialistas por parte del gobierno agudiza el conflicto. La dirigencia gremial también está presionada por los reclamos de sus representados, que no le dejan mucho margen de negociación.

Todos los productores agropecuarios parecen estar participando del conflicto, reunidos bajo una coalición de sus organizaciones gremiales. Parecería que estas formas de protesta rural fueron lideradas por sectores de las clases medias rurales: medianos y pequeños productores ganaderos, los criadores de la cadena productiva, los que tienen tierras pobres y marginales y menos alternativas productivas; los grupos de granjeros; los productores lecheros pequeños y medianos que no resisten los bajos precios, es decir los más castigados por la apertura económica y comercial; los que tienen menos posibilidades de integrarse al MERCOSUR. Pero también apoyaron las movilizaciones y negociaciones posteriores los grandes empresarios rurales que, confiando en la estabilidad y prosperidad que la política económica transitoriamente promovió, se endeudaron, invirtiendo en sus establecimientos. El cambio en las condiciones de intercambio comercial con los mercados internacionales y la abultada deuda precipitaron la crisis. Tal vez como nunca se lo hubiesen podido imaginar antes, también salieron a marchar por las calles de Montevideo.

Para asegurar la unidad la MCGA recurrió a reclamar por un programa mínimo en el cual todos estuviesen de acuerdo. Por ello no



hay reclamos de carácter estructural ni hay una crítica al sistema capitalista globalizado, aceptándose las reglas de juego generales impuestas por el modelo económico. No se denuncian los procesos regresivos en la distribución de la tierra, los procesos de concentración de los activos físicos, ni la creciente extranjerización de la tierra. No está planteada la pregunta más inquietante respecto de si los pequeños productores, los productores familiares, los productores de tierras marginales realmente tienen lugar en este modelo económico. No se reclama –como se había hecho con anterioridad– una política diferenciada para los pequeños y medianos productores. Se reclama por los precios de los productos, las deudas y los impuestos que atentan a todos los productores.

En síntesis, la amplitud de la base social estructurada por la coalición obligó a crear una base mínima de acuerdo que se centró en los aspectos más superficiales, inmediatos y evidentes de la crisis, dejando sin resolver los aspectos más estructurales de la misma.

## CAPÍTULO VII

# ENSAYO DE SÍNTESIS: UNA MIRADA TRANSVERSAL

EN EL CAPÍTULO INICIAL hacíamos referencia a las preguntas centrales que habían guiado la investigación que dio lugar a este libro. La hipótesis fue que los procesos de acción colectiva que dieron lugar a conflictos agrarios en las últimas décadas del siglo XX fueron distintos de las organizaciones sindicales y movimientos campesinos que predominaron desde los inicios del siglo. Aquellas organizaciones que expresaban relaciones de clase, masivas, verticales, con fuertes relaciones con el poder político, tuvieron su momento de esplendor y jugaron un importante papel en las reformas agrarias y los procesos de modernización agrícola en el continente. Luego perdieron legitimidad y desaparecieron, o quedaron sin poder real. En las décadas del setenta y el ochenta se construyen organizaciones de pobladores rurales desde las bases: comités locales, asociaciones de productores, comisiones de todo tipo, que reúnen a conjuntos muy diversos de actores sociales rurales. Emergen además organizaciones que reivindican la condición femenina, y organizaciones de los pueblos originarios que reclaman su reconocimiento y la concesión de la ciudadanía real. En la década del noventa muchas de esas organizaciones locales y regionales confluyen hacia la formación de organizaciones y movimientos de mayor envergadura y hacen su aparición pública, ganando

un espacio en los medios de comunicación y convirtiéndose en interlocutores del poder político.

La composición social heterogénea de quienes constituyen estas organizaciones nos movió a preguntarnos cómo se construían, cuál era la identidad común, la amalgama que permitía construir la unidad de estas acciones colectivas. En este sentido compartimos con Melucci (1994) la idea de que la unidad de los movimientos sociales no debe considerarse dada como algo “natural”, sino que por el contrario, en la comprensión de cómo se construye/deconstruye y reconstruye nuevamente la unidad está la clave para comprender la acción colectiva. Por ello, en el análisis de cada proceso de acción colectiva nos detuvimos largamente en la descripción y la explicación de los factores que concurrían a constituir una identidad común, en el entendido de que es ella la que permite construir la unidad de la acción colectiva.

Pusimos mucho esfuerzo en tratar de identificar a los distintos tipos de acción colectiva mediante el estudio de cada caso particular. Partimos de la constatación de que los procesos de acción colectiva en el medio rural del continente eran de muy variado tipo. Cuando seleccionamos los casos a estudiar tratamos de recoger esta variedad, aunque sabemos que puede haber muchas más formas de organización colectiva que las reflejadas en los cinco casos elegidos. También constatamos que en la bibliografía sobre la acción colectiva hay un uso a veces abusivo, a veces poco preciso, del término *movimiento social*. Por ello nos extendimos en el primer capítulo en una discusión que apuntó a tratar de reseñar las distintas vertientes teóricas sobre este concepto y a definir como usaríamos nosotros el término. Con estas herramientas nos fue más sencillo luego estudiar los cinco casos y sugerir cuáles son en nuestra opinión movimientos sociales, cuáles son organizaciones sociales, y cuáles movilizaciones de protesta.

Para ello partimos de una definición restrictiva del término movimiento social que fuera propuesta por Melucci (1996: 28): “La noción de movimiento social es una categoría analítica. Designa aquella forma de acción colectiva que (i) invoca a la solidaridad, (ii) hace manifiesto un conflicto, y (iii) conlleva una brecha en los límites de compatibilidad del sistema en el cual se lleva a cabo la acción”. Luego, para cada proceso de acción colectiva seleccionado estudiamos los elementos constitutivos contenidos en la definición: ¿cuál era el conflicto que daba lugar a la acción colectiva? ¿Cómo se construye la identidad común y cómo se construye la unidad de la acción? La

acción colectiva que estamos estudiando, ¿provoca disrupciones en los límites del sistema? La respuesta a estas preguntas se encuentra en el texto de cada estudio de caso, pero también está sintetizada en las páginas siguientes.

Muchas otras preguntas fueron surgiendo a medida que escribíamos este libro. Creemos que la inclusión de una síntesis de estas reflexiones contribuye a enriquecerlo y agrega temas que no nos habíamos planteado en el inicio pero que no por ello dejan de ser importantes. ¿Cómo influye el contexto político en el desarrollo de las acciones colectivas? ¿Cuál es la relación entre organizaciones y movimientos sociales y los partidos políticos? ¿Qué otros mediadores hay y cuál es la relación con ellos? ¿Cuáles son las relaciones de poder al interior de los movimientos que estudiamos? ¿Cuál es la legitimidad de las acciones colectivas, y hasta dónde son legales? ¿Cuál la relación entre la respuesta de los movimientos y las distintas formas de violencia que permean nuestras sociedades? Todas estas son preguntas cuyas respuestas atraviesan a todos o a la mayoría de los procesos de acción colectiva que estudiamos. Dejamos para el final algunas reflexiones que son particulares al movimiento de mujeres estudiado, en el convencimiento que ellas pueden también aportar a una discusión más general sobre las acciones colectivas de otros movimientos de mujeres en el campo latinoamericano.

## LOS CONFLICTOS

Todas las acciones colectivas estudiadas, independientemente de que las caractericemos como *movimiento social*, *organización social* o *movilización de protesta*, se constituyen en torno a un conflicto que moviliza a quienes en él participan. Los conflictos que orientan las acciones de los cinco procesos de acción colectiva estudiados giran en torno a la posesión de bienes materiales y simbólicos. En principio pueden dividirse en tres tipos distintos. El primer tipo es el de la lucha por la tierra y por la ciudadanía, los bienes por los cuales más frecuentemente luchan los campesinos, expresados en el Movimiento de los Sin Tierra y en el Movimiento Campesino del Paraguay. El segundo tipo es el de la lucha por un bien simbólico, el derecho de los mapuches al reconocimiento de su etnia y de sus derechos. El tercer tipo es la lucha del capital productivo contra el capital financiero y por el derecho a la elección del modo de vida rural, expresado en los dos procesos de acción colectiva estudiados en el área rioplatense.

En el conflicto del MST y del Movimiento Campesino del Paraguay el eje es la posesión de la tierra. Las acciones colectivas amalgaman no sólo a campesinos sin tierra, sino también a aquellos que tienen poca tierra o están en riesgo de perderla. En ambos casos estamos en presencia de países en los cuales la frontera agrícola aún está abierta o lo estuvo hasta hace muy poco, y situaciones en las cuales la propiedad de la tierra en muchos casos está cuestionada por confusos episodios de apropiación indebida, fraguado de títulos de posesión o apropiación más allá de los límites establecidos por los títulos de propiedad. También se registra una historia de expulsión de campesinos –con o sin derechos adquiridos– por parte de los grandes propietarios. Se pueden distinguir dos tipos de situaciones sobre la cuestión de la tierra: en una de ellas se intenta la recuperación, por parte de los campesinos, de tierras de las que han sido expulsados o de las cuales los actuales tenedores no tienen derechos. La otra situación es aquella en la cual se ocupan tierras que no están explotadas o que están subexplotadas argumentando el derecho al uso social de la tierra.

Para el campesino, el acceso a la tierra es además la llave para el acceso a otro tipo de bienes materiales y simbólicos. Con el trabajo de la tierra produce los alimentos para su familia, con el bosque tiene madera para construir su vivienda y leña para cocinar y abrigarse. Con su trabajo en la tierra obtiene los productos que, una vez vendidos, le permitirán comprar la vestimenta y todos aquellos bienes que él mismo no puede producir. La localización le confiere la posibilidad de acceder a la educación y a la salud en el poblado cercano y, tal vez lo más importante, el sentido de pertenencia a una comunidad determinada. Con la tierra es alguien; sin ella, no es nadie.

En el caso del pueblo mapuche el conflicto principal es con la sociedad chilena por el reconocimiento de su derecho a existir como pueblo y como una etnia originaria y distinta de la sociedad de origen europeo. Es el reclamo por el reconocimiento de que Chile es una sociedad pluriétnica en la que la sociedad chilena convive con los pueblos indígenas: mapuches, atacareños, pascuenses, quechuas, entre los principales. Este reconocimiento lleva implícito el reclamo por los territorios que fueron el sitio original de asentamiento de la sociedad mapuche antes de la llegada de los españoles. El reclamo por los territorios incluye el reclamo por la tierra como medio de producción, ya que muchos de ellos son pequeños agricultores y ganaderos. Pero también incluye las montañas, valles y laderas en los cuales los indígenas recogen alimentos y extraen leña, plantas medicinales,

materiales para sus viviendas y para sus artesanías; las aguas de ríos y lagos en los que pescan y extraen productos varios; y las tierras donde están enterrados sus antepasados y se ubican los espacios sagrados y rituales. El reconocimiento al derecho de existir como pueblo originario también pasa por el derecho a mantener su estructura social, su lengua, su religión y sus creencias, sus ritos y sus costumbres, e incluso su sistema de valores y de administración de las disputas entre las personas.

No es casual que los dos procesos de acción colectiva que estudiamos en las planicies que circundan el Río de la Plata tengan muchos aspectos en común y algunas diferencias, explicadas por la similitud de los procesos de poblamiento, de apropiación del territorio y de la estructura social que se construyó. En el caso del Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha se asiste a la conformación de una acción colectiva orientada por mujeres pero donde el conflicto –al menos en su inicio– no es de género. Creemos posible afirmar que el conflicto central se puede resumir en una disputa entre el capital productivo y el capital financiero. Este conflicto, por otro lado, está presente en varios otros procesos de acción colectiva estudiados en este libro. Tiene que ver con el particular momento por el que pasa el sistema de producción capitalista, dominado por el sistema financiero, globalizado y altamente concentrado y centralizado. El conflicto se expresa entonces para impedir el remate de las propiedades que han sido puestas como garantías de créditos otorgados por los bancos, pero se transforma gradualmente en un cuestionamiento a todo el sistema financiero y al modelo de desarrollo capitalista que subordina al capital productivo, no permitiéndole obtener la rentabilidad necesaria para seguir produciendo.

Sin embargo, esta lectura sería muy corta si no apuntase a otros bienes inmateriales que se ponen en juego al estar cuestionada la reproducción de la explotación familiar, y que explican la fuerza y la determinación con que las mujeres luchan para evitar el remate de su establecimiento. Estas mujeres son descendientes de inmigrantes europeos que en la Argentina y a través de la tierra cumplieron el sueño del inmigrante. Encontraron un lugar donde asentarse, prosperar, ascender socialmente y legar a sus hijos una vida mejor. El establecimiento familiar es el resumen de esta herencia, es el lugar en el mundo, confiere status y prestigio social, y es también un capital. Mantenerlo es el mandato de los abuelos, perderlo es destruir el sueño del inmigrante.

La compleja amalgama de productores pequeños, medios y grandes que concurren a la Marcha de Productores en el Uruguay y que se asocian en la Mesa Coordinadora de Gremiales Agropecuarias para las negociaciones posteriores con el gobierno está luchando para que sus establecimientos recuperen la rentabilidad perdida, destruida por un modelo económico que privilegió los aspectos financieros en detrimento de los productivos, la gran extensión frente al establecimiento familiar, la tecnología concentradora frente a una tecnología propia y apropiada, al capital agroindustrial frente al capital agrícola, y que no dudó en promover la apertura y la desprotección de los mercados internos sin lograr una adecuada y compensatoria inserción en los mercados externos. Pero también luchan por la ruralidad, por el derecho a construir una forma de vida propia, no anclada en la tradición sino reconstruida a partir de ella para insertarse en una sociedad rural abierta al mundo.

En síntesis, mas allá de la variedad de acciones colectivas estudiadas y de la variedad de conflictos expresados, emerge con mucha fuerza el papel central de la tierra como eje vertebrador común de todos los conflictos. Sin embargo, es la tierra entendida de modos distintos. Es la tierra como medio de producción como se entendía en los análisis estructuralistas clásicos, pero es mucho más que eso. Es la tierra como legado de los antepasados, originarios o inmigrantes; es la tierra como lugar de residencia de dioses y creencias; es la tierra como sustento material que provee abrigo, alimentos y protección; es la tierra como expresión del derecho a vivir en relación dialógica con la naturaleza.

## LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD

En todos los procesos de acción colectiva estudiados nos encontramos con una composición de clases heterogénea. ¿Qué es lo que une a personas que provienen de estratos sociales distintos en una acción colectiva?

La composición de los miembros de la organización MST es muy variada. Son ex pequeños agricultores expulsados del campo, hijos de agricultores familiares, arrendatarios, medieros, *posseiros*, ocupantes de tierras ajenas. Pero también hay asalariados rurales permanentes, trabajadores zafrales, *boias frias*, changadores, desocupados y subocupados del campo. También confluyen trabajadores y desocupados de las ciudades y pueblos vecinos. Son hombres y mujeres,

la mayoría jóvenes. Los hay de ascendencia inmigratoria europea, africana o *caboclos*. Pertenecen a distintas religiones, católicos muchos pero también de otras denominaciones cristianas y sectas de variado origen. El afán común que los une es el objetivo de conseguir un pedazo de tierra en la cual trabajar y vivir. Para ello están dispuestos a pasar por muchos trabajos y fatigas, y no pocas situaciones de riesgo físico. La identidad del ocupante y acampado se construye a lo largo de un largo proceso que comienza con la socialización del sujeto en instancias previas de organización: comunidades eclesiales de base, organizaciones de campesinos desplazados, sindicatos de trabajadores, organizaciones vecinales, etcétera. Que se continúa con el proceso de llevar a cabo la ocupación de las tierras, la construcción del campamento, la larga resistencia y la negociación resultante con los propietarios, la policía, los funcionarios del Estado y los políticos locales. En ese proceso, que puede durar varios meses, se foguea el temple del acampante y se construye la identidad del campesino que se siente parte del MST.

Algunos de ellos, los que más se destacan en este proceso, profundizan su inserción asistiendo a las escuelas de formación, visitando otros asentamientos, capacitándose de muchas maneras distintas través de un proceso dirigido por la organización para formar militantes. En un campamento o en una ocupación tenemos entonces identidades distintas: la del acampado que no pertenece al MST y la del que sí pertenece. Entre estos últimos es preciso distinguir al que simplemente se siente parte de la organización del que milita en ella, ya sea como un dirigente local o en los distintos niveles de la organización. Cada uno de estos niveles exigirá creciente entrega y dedicación. La pertenencia a la organización es reforzada por una variedad de símbolos que nutren la identidad: las canciones, la bandera, las palabras de orden. Pero la pertenencia al MST no está restringida a los agricultores con o sin tierra. Pueden participar de él todos aquellos que quieran luchar por la tierra: así se encontrarán profesionales, técnicos, maestros (posiblemente de origen campesino) que, guiados por sus convicciones, son parte del MST y colaboran activamente en él, algunos de ellos en los niveles de dirección.

Sin embargo, en la constitución de la identidad de los miembros del MST hay una contradicción insalvable que se genera cuando el campesino sin tierra se transforma en un asentado. A partir de ese momento, sus intereses devienen los de un pequeño agricultor –es decir, los intereses de un “Con Tierra”– y posiblemente divergen de los



intereses de aquellos que aún no han conseguido la tierra. Esta tensión es permanente dentro del MST. En una etapa temprana del movimiento se debatió la conveniencia de constituir una organización aparte con los asentados, pero se decidió mantenerlos dentro y tratar de manejar la tensión resultante.

En el Movimiento Campesino del Paraguay confluyen personas que se identifican en primer lugar como campesinos. Por lo tanto, en las reivindicaciones de este movimiento a través de las distintas organizaciones primarán los reclamos típicos del campesinado: mejores precios y condiciones de comercialización para sus productos, créditos y asistencia técnica subsidiada, etcétera. Pero hay distintos tipos de campesinos: siendo todos campesinos parcelarios, los hay con muy poca tierra y también aquellos que tienen suficiente tierra para atender las necesidades familiares. Algunos sólo trabajarán en sus tierras y otros se contratarán como trabajadores zafrales, mientras que algunos emplearán trabajadores. Algunos emplearán parte de la fuerza de trabajo familiar en atender un pequeño negocio o prestarán un servicio, ampliando así las fuentes de percepción de ingresos. Pero también hay campesinos sin tierra: hijos de campesinos con poca tierra, campesinos expulsados de sus tierras por el mercado o por la fuerza, trabajadores asalariados permanentes y zafrales, changadores, obrajeros del monte. En la medida que el movimiento campesino los incorpora, agrega a sus reclamos el de la distribución de la tierra. Participan hombres y mujeres, siendo muchos muy jóvenes. Étnicamente son criollos descendientes del mestizaje español y guaraní. Todos tienen la lengua guaraní como materna, y muchos de ellos como única lengua.

La identidad campesina, reconocible por el trabajo de la tierra, en el amor por la tierra, en una forma de vida, es la amalgama que cimienta la unidad del movimiento: una unidad difícil, trabajosamente construida, permanentemente jaqueada y raramente lograda. Desde que el movimiento campesino paraguayo inicia su reconstrucción hacia fines de la dictadura, lo hace a través de cientos de organizaciones de base que gradualmente van confluyendo hacia organizaciones de carácter local primero y regional en segundo término; algunas logran construir organizaciones de nivel nacional. Este proceso inductivo terminará generando muchas organizaciones distintas pero pocas veces diferentes. Ello permite que en la década del '90 se consolide un proceso de unificación de las distintas organizaciones en una sola, que sin embargo será de corta vida. Las organizaciones vuelven a divi-

dirse en dos bloques que permanecen hasta ahora, intentando coordinar acciones comunes. ¿Qué las divide? Ciertamente no la composición social de sus miembros, ni siquiera los objetivos estratégicos. Se dividen en torno a planteos tácticos, por las diferentes concepciones acerca de cómo construir una organización representativa, por adoptar posiciones diferentes en la negociación con el Estado, por la influencia de los partidos políticos, apareciendo también a veces divididas por las apetencias de poder de los dirigentes.

Entre los mapuches la identidad está dada por la pertenencia al pueblo originario. Por la comunidad de valores, de creencias, por la historia compartida. Por la posesión física de los territorios o por el reclamo al derecho de su posesión. Por una lengua común. Por compartir el desprecio y el racismo del que los hace objeto la sociedad chilena. Pero también están divididos por la pertenencia a comunidades étnicas diferentes, a troncos familiares distintos, a estratos sociales distintos; por las divisiones que en ellos generan los partidos políticos y las iglesias y las organizaciones que se construyen a semejanza de la sociedad chilena. La unidad del pueblo mapuche es por lo tanto inexistente, y el movimiento sólo una construcción del observador. Sin embargo, a pesar de que los mapuches nunca hasta ahora han conseguido construir un movimiento unitario o una coordinación de las múltiples organizaciones existentes, es posible hablar de un movimiento mapuche, de reciente construcción, en la medida que en la década del noventa han emergido con un objetivo y un reclamo común: el derecho al reconocimiento como pueblo originario y por lo tanto distinto y distinguible dentro de la sociedad chilena. Para lograr este objetivo el pueblo mapuche tiene muchas organizaciones distintas, que se proponen lograr el objetivo por vías diferentes, como ha sucedido muchas veces en su historia.

En el Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha de la Argentina, la identidad se recorta con mucha nitidez del conjunto de productores agropecuarios. Está formado por mujeres, esposas o familiares de hombres que manejan establecimientos agropecuarios pequeños y medianos, endeudados con el sistema bancario. Pertenecen a la pequeña burguesía local; algunas trabajan en el establecimiento en tareas productivas o reproductivas y otras fuera de él; algunas viven en el campo, otras en el pueblo; algunas trabajan con sus manos, otras son maestras o profesionales; la mayoría son descendientes de inmigrantes europeos que llegaron al país para “hacer la América” y lo lograron. Hay una identidad de género y una identidad de pertenencia

a un grupo familiar de productor agropecuario endeudado que se cruzan, formando la identidad de quienes adhieren al MMAL. La unidad está dada por la voluntaria adhesión a la organización en función del reclamo por la defensa del capital productivo contra el capital financiero. El objetivo común es salvar las explotaciones endeudadas y a punto de ser rematadas por los bancos. En la medida que la organización tiene una estructura laxa, la pertenencia a la misma no restringe que sus miembros tengan otras pertenencias y adhesiones.

En el extremo se encuentra la coalición de organizaciones formada por la Mesa Coordinadora de Organizaciones Agropecuarias de Uruguay. Hay una identidad común mínima, que es la base para la construcción de la movilización de protesta: la cualidad de productor rural y la convicción de que el modelo de desarrollo económico instrumentado desde el gobierno los está llevando a la ruina. Los participantes de la movilización de protesta inicial y de las movilizaciones subsiguientes pertenecen a su vez a organizaciones de nivel local o de nivel nacional que asistirán a las mismas no sólo por propia convicción sino también porque responden a los acuerdos logrados a nivel de la cúpulas de las organizaciones gremiales rurales. Los participantes de las movilizaciones pertenecen a su vez a distintos estratos sociales: hay productores familiares pequeños y medianos y también empresarios rurales pequeños, medios y grandes. La unidad construida es principalmente para las movilizaciones: para las negociaciones posteriores con el elenco de gobierno cada organización envía a sus representantes, aunque la negociación sea común. La coalición de organizaciones será por ello efímera, en la medida en que luego de poco más de un año de negociar en conjunto, y luego de pasadas las elecciones nacionales y habiendo obtenido algunas reivindicaciones mínimas, las distintas organizaciones que componían la coalición vuelven a separarse y a negociar cada una por su cuenta.

En síntesis, como sostenía Melucci (1994), la unidad de los participantes de una acción colectiva es permanentemente construida y reconstruida. La unidad nunca es un hecho dado, sino por el contrario un proceso negociado y complejo cuyo resultado es preciso explicar antes que dar por supuesto. La unidad está cimentada en una identidad común. Cuanto más fuerte sea esta identidad común, más fácil será construir la unidad y más duradera podrá ser. En los procesos de acción colectiva estudiados, la identidad no se construyó sobre la base de la identidad de clase, ya que en la mayoría de ellos la composición es muy heterogénea. Más bien la identidad común se cons-

truyó a partir de compartir condiciones comunes: la identidad de sin tierra, la identidad campesina, la identidad étnica, la identidad de género, la identidad de productor agropecuario endeudado, la identidad de productor rural arruinado.

## LOS LÍMITES DE COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA

Como ya se discutió en el primer capítulo, la cuestión de la capacidad de los movimientos sociales para producir una disrupción en el sistema es uno de los aspectos más debatidos de la teoría de la acción colectiva. En líneas generales, mientras por un lado los autores europeos, mayormente tributarios de una línea de pensamiento preocupada por identificar los procesos de cambio social, suponen que esta es una condición necesaria para definir un movimiento social, por otro lado los autores norteamericanos más interesados en explicar cómo las sociedades se mantienen unidas no lo consideran así. Los primeros buscan afanosamente a los nuevos portadores del cambio social una vez que los movimientos de la clase obrera se han desmitificado como la clase revolucionaria luego del fin de la “sociedad salarial”, y los encuentran en los movimientos de desempleados, en los ecologistas, en el movimiento feminista o en los movimientos de los sin techo o de los inmigrantes.

Mucho de este debate queda oscurecido por la dificultad en ponerse de acuerdo respecto de qué se entiende por “el sistema” y cuál es el alcance del concepto de disrupción. En todo caso, corresponde sintetizar las posiciones de los procesos de acción colectiva que hemos estudiado en relación a este tema para luego extraer conclusiones.

La dirección del MST ha sido muy explícita en el sentido de afirmar que la organización apunta a la construcción del socialismo. El conflicto entablado es por la tierra, pero también por la forma de organizar a los “asentados” una vez que se ha conseguido la tierra. En este sentido, el MST ha organizado los asentamientos haciendo fuerte énfasis en la importancia de la cooperación en el trabajo. Los dirigentes del MST tienen claro que con el tiempo la reproducción de un campesinado parcelario llevará nuevamente a la expulsión de las tierras. Por ello apuntan a estructurar formas de trabajo cooperativas y organizaciones cooperativas en los asentamientos, para romper con la producción individual que lleva otra vez a la concentración de la propiedad. Incluso se han experimentado formas de trabajo colectivas de la tierra, que no tuvieron mayor éxito. Críticos del MST han explicado

este fracaso atribuyéndolo a una imposición de la Dirección del MST no necesariamente compartida por los agricultores asentados (Navarro, 2002)

El reclamo central del MST es la realización de una reforma agraria en el Brasil. Stédile ha sido explícito en decir que hay varios tipos de reforma agraria pero la que ellos proponen no es de tipo capitalista, basada sólo en la distribución de la tierra, sino que apunta al grave problema de la concentración de la tierra, distribuyéndola entre 4,5 millones de brasileños, con el objetivo preciso de terminar con la pobreza y las desigualdades sociales. Para ello, en la visión de este dirigente, no basta con distribuir la tierra sino que también es preciso democratizar el capital y el acceso al conocimiento a través de un amplio programa de educación (Stédile y Fernandes, 2000).

La crítica a los valores del sistema capitalista es una constante en los documentos del MST, los discursos, las entrevistas y las actividades de formación de sus militantes. Más allá de enunciados generales, en las actividades concretas que se desarrollan en los campamentos y en los asentamientos se trata de reforzar los valores de solidaridad, cooperación, fraternidad. Pero también es cierto que el MST no ha avanzado en la definición de la forma de organización social que estaría dispuesto a apoyar, con el argumento de que estas definiciones serán fruto de un proceso que se construirá en el futuro con el concurso del pueblo.

En el caso del Movimiento Campesino del Paraguay, constituido por una treintena de organizaciones, debemos recordar la predominancia del campesinado parcelario en su composición social, que inclina el peso de sus reivindicaciones hacia aquellas dirigidas a obtener una mejor integración en el sistema productivo: la obtención de créditos y asistencia técnica subsidiada, la mejoría en los precios de sus productos y en los canales de comercialización, etcétera. Es claro que, al estar sus productos dirigidos al mercado interno, son también firmes sostenedores de las políticas sociales y de redistribución de ingresos a favor de los sectores populares. Debido a la integración de muchos jóvenes campesinos y de organizaciones de Sin Tierra, el reclamo de este movimiento también pasa por la reforma agraria y a través de ella por la obtención de la ciudadanía, es decir, el ejercicio de todos los derechos que hoy son inalienables en la sociedad: el derecho a la educación, a la atención de la salud, al progreso económico, a una vida digna, a la participación política sin temor a la represión, etcétera.

La exigencia de la reforma agraria es más difícil de cumplir en el Paraguay actual sin afectar a las clases propietarias. En los últimos años del stronismo y en los años de regímenes constitucionales posteriores hubo un fuerte proceso de apropiación de las tierras fiscales que quedaban, que pasaron a manos de los militares y empresarios con estrechas vinculaciones con el poder. Hoy se ha terminado la frontera agraria que existía hasta hace veinte años atrás, y todo proceso de redistribución de la tierra que dé cuenta de las necesidades del campesinado paraguayo debe necesariamente afectar a sus actuales poseedores. En este sentido, una reforma agraria en el Paraguay, como en Brasil, afectará los intereses que sostienen la actual alianza de grupos en el poder.

La principal reivindicación del movimiento del pueblo mapuche es el reconocimiento de que Chile es una nación pluriétnica y que los pueblos originarios tienen derechos civiles y políticos. En el capítulo correspondiente hemos mostrado cómo la sociedad chilena –representada en el sistema político– ha denegado ese derecho impidiendo la reforma de la Constitución y desarticulando el Acuerdo de Nueva Imperial. Sin embargo, lo que el pueblo mapuche pide ya ha sido concedido en otras constituciones –en Paraguay, en Ecuador– sin que se produjesen grandes alteraciones. Más difícil es lograr la implementación de las reformas políticas y legislativas que se derivan de una Constitución que reconozca estos derechos: la delimitación de un territorio propio con un estatuto de autonomía, el derecho al uso y la enseñanza de su lengua, el respeto a sus valores, creencias y costumbres, etcétera. Como lo sostiene Bengoa (1999), creemos que el principal reclamo del pueblo mapuche es por la integración a la sociedad chilena en el respeto a su diferencia. El aspecto más difícil posiblemente sea la cuestión de los territorios y de la tierra. Pero también los cambios solicitados implicarían profundas modificaciones en las relaciones entre las razas, en los vínculos de dominación cotidiana y en la cultura política.

En el caso del Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha y de la Mesa Coordinadora de Gremiales Agropecuarias, estamos en presencia de movilizaciones de protesta por las duras condiciones a las que quedan sometidos los productores rurales por los organismos financieros, el capital agroindustrial y los mercados internacionales. Pero las críticas no son contra el sistema capitalista sino contra los gobiernos que han estimulado un modelo de desarrollo económico

que castiga al capital productivo y tiene a los pequeños y medianos productores rurales como la variable de ajuste.

### ¿QUÉ FORMAS DE LA ACCIÓN COLECTIVA?

Con la discusión que se ha dado en las páginas precedentes podemos volver a intentar definir con mayor precisión el tipo de acción colectiva que hemos estudiado en cada caso. Tal vez sea más sencillo comenzar por decir que en el caso del Paraguay se ve con más claridad que se está frente a un movimiento social compuesto por muchas organizaciones que han logrado coincidir en los objetivos estratégicos aunque mantengan diferencias en los aspectos tácticos. La construcción de una coordinación unitaria de todo el movimiento campesino paraguayo entre 1996 y 1998 ha sido un hito de mucha importancia, a pesar de su posterior división en dos bloques. El MST, en cambio, es a nuestro juicio la organización más importante de los agricultores del Brasil. Sin embargo, no existe un movimiento campesino en la medida en que la política del MST parece haber sido más la de hegemonizar que la de compartir un movimiento con otras decenas de organizaciones de campesinos de nivel nacional, regional y estadual que existen en el Brasil, y cuyo conocimiento y existencia ha quedado opacado por la fuerte presencia del MST. Más aún, es posible que el MST haya sido el obstáculo para la concreción de un vasto movimiento campesino unitario en el Brasil.

En el caso del pueblo mapuche en Chile, creemos que también estamos frente a un movimiento social. Es la coincidencia en los objetivos estratégicos y el hecho de haber llegado a ciertos acuerdos básicos –como los que se firman entre casi todas las organizaciones mapuches y el futuro presidente chileno en 1985 en Nueva Imperial– lo que permite visualizar un movimiento mapuche a pesar de que tienen cientos de organizaciones de todo tipo y nivel que no necesariamente coinciden en los caminos para llegar a los objetivos. Este polimorfismo de las organizaciones mapuches puede ser visto como una debilidad pero también como una fortaleza, en la medida que ofrece –como la hidra mitológica– muchas cabezas para un solo movimiento.

El MMAL, que exige un umbral relativamente bajo para participar y tiene una forma organizativa horizontal y particularmente laxa, se originó como una movilización de protesta y se encamina a transformarse en una organización de mujeres rurales. La Mesa Coordinadora de Organizaciones Rurales del Uruguay debe ser identi-

ficada como una coalición de organizaciones que conducen una movilización de protesta, que no logra constituirse en una organización y que termina disolviéndose para permitir que cada organización gremial recupere su autonomía.

En 1992, en un libro en coautoría en que se hacía un análisis de la situación del campesinado latinoamericano, escribimos: “de organizaciones campesinas de alcance regional o nacional que predominaron en las décadas anteriores, [en la década del ‘80] predominarían las organizaciones de carácter local, mucho más preocupadas por problemáticas específicas que por problemas nacionales emergentes de las políticas agrarias o macroeconómicas” (Calderón, Chiriboga y Piñeiro, 1992: 56). Es muy posible que la situación descripta<sup>85</sup> obedeciese a la desarticulación de las organizaciones populares que había ocurrido bajo las dictaduras del cono sur de América Latina. Por los estudios que hemos hecho en este libro, parecería que en la década siguiente las organizaciones locales encontraron la forma de reconstruir las organizaciones para volver a ser actores de importancia a nivel nacional. Como saldo positivo se puede contabilizar que este proceso de reconstrucción de las organizaciones desde lo local, a partir de comités o asociaciones de base, ha conferido a las organizaciones de carácter nacional una fortaleza de la que antes carecían.

## LA ESTRUCTURA DE OPORTUNIDADES

Varios son los autores que estudian a los movimientos sociales que han insistido en la importancia de los cambios en la estructuras de oportunidades para comprender las acciones colectivas. Tarrow (1997) ha insinuado que estos cambios también importan para comprender los ciclos de acción y de latencia que tienen los movimientos sociales. Según ellos, los cambios en las alianzas políticas, las divisiones entre las élites, los realineamientos de los partidos, etcétera, son elementos que confluyen para activar o desactivar la acción colectiva.

---

85 Rivarola y Galeano, citando un trabajo de Zamosc y Martínez (1997), señalan algo parecido: “Al presentar los estudios sobre varios casos nacionales de los movimientos campesinos latinoamericanos verificados hasta principios de la década actual (la década del ‘90), se señala que las experiencias más recientes tienen un estilo menos radical que las anteriores, y que se caracterizan por la marcada dispersión de las movilizaciones y la proliferación de las organizaciones, hecho este último que “presenta grandes dificultades para cualquier intento de centralización”. Aunque en aquellos contextos nacionales en los que el presente proceso de democratización está abriendo mayores espacios políticos las movilizaciones vislumbran nuevas posibilidades para la acción colectiva campesina... (Rivarola y Galeano, 1998: 141).



Estos procesos son muy perceptibles en la forma en que se reorganiza el movimiento campesino paraguayo. Luego de la represión que desarticuló a las Ligas Agrarias Cristianas pasan varios años sin que hubiese intentos de organización. En la década del ochenta una nueva división de las élites posibilitó los tímidos intentos de reorganización del campesinado. Este proceso se acelera a medida que el régimen stronista pierde legitimidad y comienzan a aparecer las divisiones en el Ejército que posteriormente llevarán al relevo del dictador por otro general. El movimiento campesino aprovecha las divisiones que ocasiona el General Lino Oviedo en el otrora poderoso Partido Colorado para continuar creciendo. Posteriormente, cuando se produce el asesinato del vicepresidente Argaña, nuevamente aprovechan las divisiones internas para obtener la condonación de las deudas del campesinado a cambio del apoyo político para deponer al presidente Raúl Cubas.

En el MST también es perceptible la influencia de los cambios externos en la acción colectiva. Se organiza a la salida de la dictadura en 1985, alentado por la liberalización política que sobreviene con el nuevo gobierno constitucional. Durante el gobierno de Sarney crece y se expande a todo el país. Se repliega durante el gobierno de Color de Mello, que les ofrece una oposición frontal, replegándose a la consolidación de los asentamientos, disminuyendo la cantidad de ocupaciones de nuevas tierras. Vuelve a cobrar impulso y protagonismo durante los dos gobiernos de Cardoso en la medida en que hay un gobierno más respetuoso de las libertades públicas, llegando al máximo de las ocupaciones de tierras.

En el movimiento mapuche sucede algo similar. Luego de la desarticulación de las organizaciones mapuches y de la desaparición de cientos de militantes durante el régimen militar, las organizaciones mapuches, aún las que continúan operando débilmente desde la clandestinidad, entran en una fase de latencia. Nuevamente es una división en las élites de poder el hecho que permite la reorganización. Bajo el manto protector de la Iglesia Católica se convoca a las primeras reuniones de las dirigencias mapuches, que llevan a la creación de los Centros Culturales Mapuches a mediados de la década del ochenta. Estos serán los embriones de muchas de las organizaciones mapuches que se crean en los años siguientes. El movimiento cobra un vigor inusitado con la redemocratización del país y con el reconocimiento que significa la firma del Acuerdo de Nueva Imperial con el futuro presidente Aylwin. Con el nuevo gobierno y la creación de la

CONADI, las principales organizaciones mapuches se convierten en interlocutores gubernamentales en todos los aspectos que tienen que ver con la política indígena.

Pero tal vez es en el caso uruguayo donde se ve con más claridad la influencia de los acontecimientos políticos externos en la constitución de una movilización de protesta. En la convocatoria de las organizaciones del campo a marchar hacia Montevideo el 13 de abril de 1999, las organizaciones ruralistas tienen muy presente que es un año electoral. Las relaciones de fuerza entre los principales partidos políticos potencian las posibilidades de incidencia de una manifestación sectorial. Se sabía que los dos partidos tradicionales que conformaban la coalición de gobierno –el Partido Colorado y el Partido Nacional– se enfrentarían en la segunda vuelta electoral (régimen de *ballotage*) a la oposición encarnada en el Frente Amplio, casi en paridad de fuerzas. En el contexto de una elección que se preveía como muy reñida, las organizaciones rurales, a pesar de que movilizan a una pequeña proporción del electorado, pensaban que podían obtener importante ventajas políticas.

También influyó la situación interna de la coalición de gobierno. El Partido Nacional, socio minoritario de la coalición, necesitaba desprenderse y diferenciarse del Partido Colorado para que este no lo fagocitase en la primera vuelta electoral. Como el Partido Nacional tiene importantes bases electorales en el campo, alentó y estimuló la movilización rural como forma de desmarcarse del Partido Colorado, por lo menos hasta la primera vuelta electoral. Luego cerró filas con su socio de la coalición para la segunda vuelta electoral. Es significativo que mientras el candidato de la coalición, Jorge Batlle, asiste a la convocatoria que le formulan las organizaciones rurales para exponer su programa de gobierno en una asamblea, el ya presidente Batlle “ningunea” y niega una entrevista a la Mesa Coordinadora al año siguiente, pero se reúne y negocia por separado con las dos gremiales de grandes productores, siendo este un factor más que precipita la disolución de la MCGA.

## LA RELACIÓN ENTRE MOVIMIENTOS SOCIALES Y PARTIDOS POLÍTICOS

Los casos estudiados muestran que entre organizaciones rurales, movimientos y movilizaciones de protesta y partidos políticos hay una densa y por momentos también tensa trama de relaciones.

Por un lado están los vínculos que se establecen con los partidos tradicionales. En Paraguay hemos visto cómo la mayoría del campesinado puede militar y movilizarse en las marchas organizadas por el movimiento campesino, pero luego a la hora de depositar su voto en las elecciones nacionales vota por los tradicionales Partido Colorado o Partido Liberal Radical Auténtico. Los intentos que han hecho los líderes campesinos de establecer partidos de oposición han recibido muy pocos votos. Los análisis han demostrado que los líderes campesinos que decidieron competir en las urnas por un cargo a nivel municipal obtuvieron más votos cuando lo hicieron compitiendo desde las listas de un partido tradicional que cuando lo hicieron desde un partido de oposición. En el caso del movimiento del pueblo mapuche, hemos observado cómo sus líderes han optado con mucha frecuencia por competir electoralmente, tanto desde los partidos tradicionales como desde los partidos de izquierda: los mapuches han tenido líderes políticos en todas las tiendas políticas. No parece haber sido una táctica explícita, sino más bien una expresión de que el pueblo mapuche está tan imbricado en la sociedad chilena que tiene expresiones políticas en todos los partidos. En el caso de Brasil, los líderes del MST no tienen afinidades con los partidos tradicionales, pero no está claro cómo vota el campesinado. En el caso de Uruguay, los productores rurales son en su gran mayoría votantes de los partidos tradicionales, y vimos cómo estos coquetearon con la Mesa Coordinadora de Gremiales Agropecuarias en el período electoral. En el MMAL es posible suponer que algunos vínculos entre líderes y partidos existieron cuando una de sus principales dirigentes aparece en las listas partidarias de un pequeño partido provincial en las elecciones de 1999.

Si bien es arriesgado atribuir un comportamiento similar a todos los partidos tradicionales, es posible sugerir que estas relaciones han sido de tipo clientelar, y de cooptación de dirigentes de los movimientos que fueron tentados a presentarse en las listas para captar los votos rurales, pero sin que su presencia se haya reflejado en una modificación en las plataformas programáticas de los partidos para recoger los reclamos de los movimientos o en una incidencia en las acciones y decisiones de gobierno.

En el caso de las relaciones entre movimientos sociales rurales y partidos de oposición, generalmente partidos de izquierda, contamos con pocas evidencias debido a que esta investigación se ha realizado sobre material secundario y esos vínculos raras veces quedan registrados. Sí se sabe que en el caso chileno ha habido militantes de estos

partidos que eran de origen mapuche, pero los observadores han hecho notar que la cuestión étnica generalmente quedó relegada frente a la contradicción capital-trabajo.

En el caso de Brasil se sabe que el MST ha mantenido estrechos vínculos con el Partido de los Trabajadores. En determinado momento el PT crea el departamento Nacional de Trabajadores Rurales para impulsar una política propia en el medio rural. Esta estructura tuvo un importante papel en la lucha entre el MST y la CONTAG por la hegemonía en la conducción de la lucha en el campo, y ayudó a inclinar la balanza a favor del primero.

En el caso de Paraguay, parecería que el Partido de los Trabajadores ha hecho pie captando algunos dirigentes de la Federación Nacional Campesina, mientras que por otro lado un pequeño partido socialista, Convergencia Socialista, tiene influencia en la MCNOC. También parecería que los partidos de izquierda están jugando un papel importante en la formación ideológica de algunos dirigentes campesinos.

En todo caso, nos parece que hay una tensión muy fuerte entre los movimientos sociales y los partidos políticos en torno a la cuestión de cómo llegar al poder para instrumentar los cambios que se creen necesarios. Es cierto que no todos los movimientos u organizaciones sociales que hemos analizado en este libro se plantean este dilema. Tampoco esta pregunta se la hacen todos los dirigentes. Pero para aquellos que se la hacen, la pregunta siguiente es si los movimientos sociales son el instrumento adecuado para llegar al poder, ya sea influyendo en un partido o siendo el movimiento la expresión rural del partido. Cuando la respuesta del dirigente que se plantea la pregunta es que el movimiento no es un instrumento adecuado, lo más probable es que inicie la migración hacia un partido que él identifica como el instrumento adecuado para acceder al poder.

Sin embargo, la respuesta de otros dirigentes a este dilema es que el movimiento no es ni debe transformarse en un partido político. El movimiento social debe portar y expresar las reivindicaciones de sus bases y exigir a los partidos que en sus programas reflejen los intereses del movimiento, y luego controlarlos para que cumplan con lo prometido. Esta posición termina siendo duramente cuestionada por la realidad cuando las bases votan a los partidos tradicionales que, controlados por los adversarios de los movimientos sociales, terminan dándoles la espalda.

## LA CUESTIÓN DE LA DEMOCRACIA INTERNA EN LAS ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES

¿Cómo son los procesos mediante los cuales se aseguran los canales de representación interna en las organizaciones y movimientos sociales rurales? El estudio del movimiento campesino paraguayo ha sido muy útil para discernir entre dos formatos de organización distintos. Este movimiento se ha escindido en dos grandes bloques. Es posible que esta división refleje, más que estrategias distintas, diferentes tácticas. Pero también expresa dos formas distintas de entender los mecanismos de representación. La MCNOC tiene una forma de funcionamiento que coordina las acciones de las organizaciones asociadas. Cuando la Mesa debe tomar decisiones, el procedimiento pasa por la consulta a las bases que se expresan a través de las mesas departamentales. Este mecanismo garantiza una amplia base de representación pero tiene el inconveniente de ser lento y a veces poco apto para la toma de decisiones de carácter político.

El bloque conformado por la Federación Nacional Campesina, la Organización Nacional Campesina (ONAC) y el Movimiento Juvenil Campesino Cristiano (MJCC) comenzó en 1998 un proceso de unificación de las organizaciones que le llevó cuatro años y estuvo dirigido a centralizar las decisiones en un Consejo Nacional de Delegados. Este modelo organizacional tiene la ventaja de permitir una más rápida transmisión de las decisiones del Ejecutivo nacional, pero tiene más dificultades para recoger la opinión y las propuestas que vienen de las bases. Es un mecanismo más apto para las movilizaciones y para tomar decisiones políticas.

El MST brasileño ha recibido fuertes críticas, a algunas de las cuales se ha hecho referencia en el Capítulo II. Según algunos observadores, ha centralizado excesivamente las decisiones en la Dirección nacional, un órgano de veintidós personas que son votadas a nivel de los Congresos Estaduales y ratificadas en Encuentros Nacionales. Mientras algunos observadores piensan que el proceso de elección de dichos integrantes se realiza en un intenso proceso de debate y de filtros en los distintos niveles de la organización, otros opinan que en realidad es la Dirección nacional la que escoge, entre los candidatos que llegan nominados desde los Congresos Estaduales, a aquellos dirigentes que comparten su línea política.

Por otro lado, estos mismos críticos han acusado al MST de ejercer un estricto control social de los asentados que, comenzando

por el manejo discrecional del crédito agrícola, puede llegar a la agresión física y a la expulsión. También manifiestan dudas acerca de la representatividad de muchos dirigentes que no se someten a elecciones ni tienen controles, y señalan una permanente postergación de los reclamos provenientes de las mujeres, subsumidas en una problemática contradicción principal. Esto llevaría a que las movilizaciones y las ocupaciones de tierras no necesariamente conducirían a la emancipación de los campesinos (Navarro, 2002).

Desde otro ángulo generalmente se tiende a mirar con sospecha a las direcciones campesinas integradas por líderes que ya no trabajan la tierra, que residen en las ciudades y están enteramente dedicados a las tareas de representación. El problema sin embargo es de difícil resolución. Sus defensores arguyen que es imposible dirigir un movimiento grande, importante y activo con productores rurales o campesinos que se dedican sólo parcialmente a la dirección de la organización o movimiento. Cuando el dirigente no está permanentemente al servicio de la organización, ocurre que en realidad las decisiones las toman los asesores o funcionarios de la organización.

Otra crítica que se hace con menos frecuencia es con relación a la extracción de clase de los dirigentes de las organizaciones. A medida que las organizaciones crecen las tareas se complejizan y requieren de líderes con mejor formación. En el MST, por ejemplo, un tercio de los integrantes de la Dirección nacional tiene formación universitaria. El argumento es que son hijos de agricultores que han llegado a estudiar en la universidad, a veces incluso con el apoyo de la propia organización. La complejidad de esta organización, la diversidad de los problemas que deben encarar, requiere que sus directivos tengan una mayor formación: en caso contrario, las decisiones importantes, que suelen ser complejas, quedan en manos de técnicos, afines a la organización pero no representantes de las bases.

## LA MEDIACIÓN DE OTROS GRUPOS

Varios de los autores que han estudiado a las organizaciones y movimientos sociales rurales han apuntado al papel de grupos y organismos integrados por personas de otras extracciones sociales en la orientación y en la formulación de las propuestas políticas de las primeras (Martins, 2000; Novaes, 1997; Galeano, 1991; Bengoa, 1999). El papel más relevante ha sido desempeñado por la Iglesia Católica, pero

también se menciona a los partidos políticos de izquierda y más recientemente a las ONGs.

La Iglesia Católica experimenta un importante cambio de orientación a partir de la década del sesenta con la aparición de las corrientes “progresistas” orientadas por la llamada Teología de la Liberación. Por ella la Iglesia hacía una opción por los pobres, buscando hacer realidad en la tierra el reino de Dios. No es éste el lugar para debatir si esta fue una opción verdadera o sólo una opción funcional para una renovación del poder secular de la Iglesia, como también se ha sostenido. Lo cierto es que a través de esta corriente renovada de la Iglesia se dio un fuerte impulso a los sectores más comprometidos en el trabajo con los sectores más pobres de la sociedad: trabajadores, campesinos, desplazados y excluidos de todo tipo. En el campo en particular se desarrolla la Pastoral Rural, que enfoca en los problemas del campesinado y de los trabajadores rurales, centrandó la explicación de la pobreza en la falta de acceso a la tierra y por lo tanto en la necesidad de una reforma agraria. Con algunas diferencias temporales y aún de profundidad en el enfoque, es posible identificar el accionar de estas tendencias de la Iglesia en los distintos países que estamos estudiando. En Chile la Iglesia realiza voluntariamente el reparto de sus tierras a principios de la década del sesenta. La Democracia Cristiana chilena propugna una reforma agraria, y el gobierno de Eduardo Frei a mediados de la misma década lleva adelante una distribución de tierras que sería la antesala de la más profunda reforma agraria luego realizada por el gobierno socialista de Allende. En Brasil, también en la década del sesenta, se crean las Ligas Camponesas con un decidido apoyo de la Iglesia y también del Partido Comunista, que serán reprimidas y disueltas con la dictadura militar. En Paraguay, a fines de la década del sesenta, se crean las Ligas Agrarias Cristianas que serán luego disueltas por Stroessner en 1976. En la Argentina se crean en 1971 las Ligas Agrarias con fuerte apoyo del Movimiento de la Juventud Agraria Católica, disueltas por la dictadura que se instaura en 1976. Impulsada por los cambios renovadores, la Iglesia en casi todos los países del cono sur apoya la constitución de organizaciones de campesinos y pequeños agricultores. Luego, y en parte para sofocar el descontento agrario, se instauran las dictaduras militares que anularon estos intentos de organización. Sin embargo, los estudios que hemos hecho en estas páginas muestran cómo la Iglesia Católica volvió a apoyar la reconstitución de las organizaciones campesinas aún bajo los regímenes militares. En Chile, en 1978, es la Iglesia la

que convoca a más de cien líderes y personas amigas de los mapuches a reunirse en la Casa de Ejercicios del Obispado de Temuco para debatir el proyecto de ley indígena que preparaba el gobierno militar y las formas que podría adquirir la reorganización del pueblo mapuche. De esta iniciativa surgen los Centros Culturales Mapuches, la forma institucional que adquiere este pueblo por varios años hasta que vuelven a darse las condiciones políticas para recrear organizaciones propias. A partir de la década del '90 los Centros Culturales se desdoblaron y transformaron en varias y diversas organizaciones de diferentes orientaciones de la acción colectiva, algunas con mayores afinidades políticas con partidos de izquierda.

En Brasil la Comisión Pastoral por la Tierra (CPT) realizó un formidable trabajo de organización campesina impulsando las Comisiones Eclesiales de Base (CEBs) desde principios de la década del ochenta, substrato a partir del cual se reorganizaron los trabajadores rurales en varias decenas de organizaciones locales y estatales. El principal resultado de este trabajo fue el aporte que las CPT y las CEBs hicieron a la creación del Movimiento de los Sin Tierra.

En Paraguay, también desde inicios de la década del ochenta, la Pastoral Social fue el escudo protector debajo del cual se comenzó a reorganizar el movimiento campesino. Al principio el trabajo fue muy lento, porque la represión había sido muy dura y el control político continuaba vigente. Los esfuerzos se dirigían a la formulación y la ejecución de proyectos para el financiamiento de acciones dirigidas al mejoramiento de la producción agrícola y la incorporación de prácticas tecnológicas más modernas. Pero gradualmente, a medida que el régimen perdía legitimidad y se producían resquebrajamientos en las alianzas de los grupos sociales en el poder, las organizaciones locales se fueron uniendo en organizaciones regionales y se fueron extendiendo en el tratamiento de temas y de reivindicaciones de contenido más contestatario del poder vigente.

De esta forma, al menos para los casos de Brasil y de Paraguay, la Iglesia Católica ha influido fuertemente en la configuración de la agenda de reclamos del movimiento social, su interpretación de la situación política, la formación de sus cuadros, el adiestramiento de sus líderes, etcétera. Muy importante fue la presencia de los religiosos en el medio rural, ya que en los inicios, aún bajo las dictaduras, muchas veces eran los únicos con cierto nivel de formación intelectual que podían trabajar sin sospechas en la capacitación de las dirigencias campesinas. Sin duda, al hacerlo también transmitían su visión



del mundo –la “mística”– y de ella aún hoy están teñidas algunas de las organizaciones campesinas que hemos estudiado. En Brasil, por ejemplo, la presencia de la Iglesia ha sido un frecuente motivo de disputa y de quejas al interior de las organizaciones del MST, en cuyas asambleas y congresos no pocas veces se debatió arduamente el tema de los “asesores espirituales”, curas y monjas que trabajando en la organización intentaban dirigirla, o pesaban con sus opiniones más de lo que querían muchos líderes campesinos.

La Iglesia también ha jugado un papel fundamental en proveer los recursos materiales para la movilización social, especialmente en las etapas iniciales de las organizaciones. Con mucha frecuencia, las asambleas y congresos, los cursos de formación y las reuniones operativas, se realizaban en los seminarios, conventos y escuelas que la Iglesia posee. Las parroquias también cumplían funciones de lugar de reunión y punto de encuentro para los líderes campesinos, posiblemente porque era en las reuniones de catequesis y de pastoral donde se trataban los problemas más acuciantes del campesinado y de allí surgían los embriones de organización y de movilización. La Iglesia con su aval también fue un importante medio para acceder a los donativos de fundaciones católicas de los países desarrollados que proveían los fondos, al menos en las etapas iniciales de las organizaciones, para desarrollar los aspectos de formación y de capacitación de los campesinos y de sus líderes.

Con diferencias según los países, también es necesario marcar la presencia de las ONGs en la organización del campesinado y de los agricultores familiares. La expulsión de numerosos técnicos del aparato del Estado por razones políticas durante los gobiernos dictatoriales es una de las razones que más frecuentemente se esgrimen para explicar el surgimiento de las ONGs durante la década del ochenta. También lo fue la política explícita de fundaciones confesionales vinculadas a partidos políticos o de los gobiernos de países desarrollados de canalizar donaciones para paliar el efecto de políticas impopulares y para mantener activos ciertos reflejos políticos de la sociedad civil durante la larga noche de las dictaduras del cono sur. Algunas de estas ONGs se dedicaron a trabajar en el medio rural con pequeños y medianos productores y campesinos en proyectos de transferencia tecnológica, capacitación técnica, creación de infraestructura sencilla para comercializar y industrializar los productos agrícolas, etcétera. Sin duda estas acciones también colaboraron con la organización de estos sectores sociales, a veces incluso en forma explícita. Técnicos de

distintas profesiones y orientaciones trabajaron así con los campesinos y agricultores, transmitiendo no sólo sus conocimientos técnicos sino también sus valores. Por ejemplo, la expansión del movimiento cooperativo agrario en estos años tuvo su base en este tipo de intervenciones.

## LA CUESTIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA LEGALIDAD

En el Capítulo II se discutió ya la cuestión de la violencia en el campo. Citando la clasificación de Santos se identificaron cuatro formas distintas de violencia que están incrustadas en las relaciones sociales. La violencia cotidiana es aquella que emerge de las relaciones de dominación en la sociedad en general y en la sociedad rural en particular, y que en su origen proviene de las formas históricas de apropiación de la tierra y de la estructura social agraria resultante. La violencia política es aquella de carácter físico ejecutada contra los campesinos, agricultores, trabajadores rurales, hombres y mujeres, por los grupos dominantes a través de sicarios o policías privadas, y también a veces por las propias fuerzas de seguridad estatales. La violencia programada es aquella instrumentada por el Estado cuando conquistó los territorios de las poblaciones originarias para permitir el apoderamiento de las tierras por parte de los terratenientes y facilitar los procesos de colonización con poblaciones “trasplantadas” (Ribeiro, 1969), o cuando trasladó a los contingentes de ocupantes de tierras feraces en el centro y sur del Brasil a la amazonía ejerciendo violencia no sólo contra las personas sino también contra la naturaleza, depredada por la acción colonizadora. La violencia simbólica es aquella ejercida a través de los discursos cotidianos y la acción de los medios de comunicación, que ocultan la realidad, trastocan los valores e intentan naturalizar las relaciones de dominación (Santos, 1992; Santos, 2000).

Posiblemente, de todos los casos estudiados la situación del Brasil sea la peor de todas. La violencia está incrustada en las relaciones sociales en el campo brasileño, emerge de una estructura social profundamente desigual e injusta, se nutre de los procesos históricos de la apropiación de la tierra, de la matriz del trabajo esclavo y de las relaciones de trabajo actuales y no cesará mientras no se modifiquen estas desigualdades. Ya se citaron los cientos de asesinatos, ejecuciones, matanzas y torturas que se perpetran contra los dirigentes y líderes sindicales y agrarios y contra todos aquellos que osan hacer causa común con sus reclamos sin importar su condición social. También

se mencionó la impunidad de estos crímenes. La objetivación sociológica mostró, a través de las estadísticas de la violencia, cómo ésta disminuye cuando aumentan los procesos de distribución de tierras y otros recursos.

En el caso de Paraguay, la concentración de la tierra, la dominación ejercida por los terratenientes y propietarios de empresas forestales y yerbateras, la imbricación de estos grupos con el poder político, produjeron una sociedad rural con marcadas relaciones de dominación. Los trabajadores de los obrajes, de los yerbatales y de las estancias ganaderas, y los campesinos parcelarios, fueron los que sufrieron la violencia de estas relaciones asimétricas. Los partidos políticos tradicionales, durante décadas de ejercicio del poder, establecieron prácticas políticas clientelísticas que disimularon el autoritarismo y el ejercicio crudo de la violencia política con los disidentes. Esto fue muy evidente con la represión ejercida contra los principales dirigentes de las Ligas Agrarias Cristianas, y más recientemente, aún bajo el régimen de gobierno constitucional actual, con los asesinatos de 35 ocupantes de tierras y líderes campesinos ejecutados por milicias privadas y por la policía estatal. Tal vez una de las mayores violencias simbólicas ejercidas contra el campesinado paraguayo haya sido la prohibición de hablar la lengua materna en el sistema educativo y en toda situación pública, como expresión del profundo desprecio que se inculcó a la población hacia todo lo que era guaraní, contribuyendo de esa manera a la negación de una de las principales señas de identidad popular.

En Chile, durante trescientos años los mapuches se opusieron fieramente a todos los intentos de la corona española por dominarlos. Fue el Estado chileno el que a fines del siglo XIX armó un fogueado ejército que luego de una dura campaña militar logró someterlos y ocupar sus territorios. La Ley de Tierras posterior otorgó títulos de merced a los cabezas de los linajes mapuches, correspondiéndoles un diez por ciento de las tierras que poseían. Pero aún así, en el correr de los años posteriores, el despojo continuó de diversas maneras. La violencia estatal se acompañó de un dispositivo ideológico que justificó la guerra y el despojo en la necesidad de poner a producir las tierras no aprovechadas por la indolencia y la ignorancia de los mapuches. A lo largo del siglo XX fueron numerosos los episodios de desalojos y de usurpación de tierras mapuches por parte de terratenientes chilenos. El reverso fueron las ocupaciones y las recuperaciones de tierras de los mapuches vía reforma agraria ocurridas en la década del sesenta.

La violencia política del régimen dictatorial posterior se ensañó con los mapuches, quienes registraron proporcionalmente la mayor cantidad de muertos y desaparecidos. La sociedad chilena no ha podido desembarazarse de una visión racista, que ubica a los mapuches como inferiores o como un pueblo al que, paternalmente, hay que proteger. Nunca pudo reconocer la existencia del pueblo mapuche en pie de igualdad. El fracaso del gobierno de Aylwin, quien en nueve años de debate no pudo convencer al Parlamento de modificar la Constitución para reconocer que Chile es un Estado pluriétnico, es una cabal expresión de esta situación.

Las reformas que promueven las organizaciones y movimientos que hemos estudiado, al menos para los casos de Brasil, Paraguay y Chile, pueden entenderse como formas de desarticulación de las razones profundas de la violencia. En la construcción de la organización, en las ocupaciones de tierras, en las marchas y manifestaciones y en los raros hechos de violencia ejecutados por las organizaciones y movimientos campesinos e indígenas, también deben leerse las manifestaciones de la defensa y del rechazo a tanta violencia.

Un debate que transcurre en paralelo al de la violencia es el de la legalidad y la legitimidad de las acciones de organizaciones y movimientos. ¿Hasta dónde las ocupaciones son legales? Sin duda que mucho depende de la situación legal de las tierras ocupadas y de la legislación vigente en cada país. Las organizaciones y movimientos que han respaldado las ocupaciones generalmente han ocupado tierras cuyos títulos de propiedad eran dudosos, abiertamente fraguados o inexistentes, lo cual facilitó los procesos posteriores. Pero todos estos hechos en el fondo se apoyan en el criterio de que la tierra no es un bien individual sino un bien social, tal como lo proclaman la doctrina de la Iglesia Católica y muchas de las constituciones vigentes. Por ello también hay ocupaciones que se realizan en tierras que tienen títulos saneados, pero que están manifiestamente no trabajadas o subexplotadas. Estas situaciones han dado lugar a innumerables controversias acerca de qué se considera una tierra correctamente explotada, y cuáles las situaciones en que no lo está. Las controversias parlamentarias y jurídicas al respecto han ocupado mucho tiempo y esfuerzo, intentando discernir en ese delgado límite entre la decisión jurídica y la decisión política. Es por ello que los ocupantes de tierra siempre intentan transformar la ocupación en un problema político, ya que si queda sólo en el ámbito policial y jurídico la negociación se

torna mucho más larga y difícil. Se busca así, en la legitimidad política, crear las condiciones para la legalidad jurídica.

En el caso del Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha y de la Mesa Coordinadora de Gremiales Agropecuarias, estamos en presencia de otra situación. Las familias de pequeños y medianos agricultores y ganaderos que ven peligrar la propiedad de la tierra que es el sustento familiar soportan al menos tres tipos de violencia. Una es la de la usura a que las somete el sistema financiero. Otra es una violencia difusa, simbolizada por la imposición de un sistema que no permite que medianos propietarios de feraces tierras agrícolas puedan vivir y prosperar con su trabajo. Una tercera es una violencia simbólica ejercida por aquellos funcionarios e ideólogos del neoliberalismo que propagan a los cuatro vientos la idea de que hay un proceso de “selección natural” que lleva a que miles de pequeños y medianos productores sean “inviabiles”. De esta manera se oculta que los procesos que llevan a la inviabilización de una importante capa de productores pequeños y medianos son construidos socialmente y dependen de decisiones políticas de la clase dominante. Explicar un proceso que es social como un proceso natural escamotea e invisibiliza las decisiones políticas que conducen a dicha situación.

Cuando las mujeres del MMAL interrumpen un remate cantando el himno nacional, rezando o arengando al público, están realizando una acción cuya legalidad puede ser cuestionada, pero que ellas entienden como legítima porque es un rechazo a las formas de violencia que se han ejercido sobre ellas y sus familias. Los jueces tampoco saben bien qué hacer y se declaran no competentes para intervenir: el derecho a la protesta es legítimo, y como las mujeres no ejercen violencia para interrumpir un remate, no hay bases para declarar la acción ilegal. La policía, convocada por los rematadores, no interviene al no tener orden judicial para hacerlo. Los acreedores creen estar en su derecho al reclamar la ejecución de las hipotecas para recuperar el dinero prestado y los intereses pactados previamente en un contrato que es legal. En suma, el desconcierto creado por la anómala situación ha facilitado la acción colectiva.

## LA CUESTIÓN DE GÉNERO

Finalmente cabe rescatar algunas conclusiones particulares que emergen del análisis del Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha

que pueden ser de utilidad a la comprensión de otras acciones de género en el medio rural.

En primer lugar conviene destacar que las mujeres que participan de esta acción colectiva constituyen su identidad en dos vectores, como movimiento social rural y como movimiento de mujeres, lo que confiere mayor complejidad al caso. La “autoidentificación” se procesa desde el valor más aceptado por la sociedad, la referencia al sector productivo rural. La práctica de constitución del actor colectivo se produce sin embargo desde el espacio más discriminado: su condición de género. El estudio realizado muestra que la organización se configura desde su autoidentificación como mujeres rurales desde un rol tradicional de género, y posteriormente van asumiendo un rol público que las distancia de ese comienzo para situarlas en un punto de incertidumbre respecto a la transformación efectiva de esos “intereses prácticos” en intereses estratégicos de género. Como se ha señalado en otros trabajos sobre el tema posiblemente este sea un proceso común a otras organizaciones de mujeres rurales (Jelin, 1987; Lournaga, 2000).

En segundo lugar, la acción colectiva realizada por las mujeres del MMAL consiguió transformar lo privado en político, en un proceso que permea el habitual modo de gestión política.

En tercer lugar, la transformación de las mujeres en actor político describe habitualmente un proceso inductivo partiendo de intereses prácticos de género, desde la cotidianeidad o el mundo privado, hasta constituir una cuestión social, es decir, un nuevo tema en la agenda pública. En este caso, el endeudamiento, vivido por los hombres como una cuestión privada (ya que los fracasos y los éxitos económicos se viven como logros o déficit individuales y privados), es transformado en una cuestión pública y por lo tanto política. La transformación de lo privado en político impacta en el centro ideológico de la matriz neoliberal dominante en la Argentina de los noventa: el debilitamiento de los actores colectivos sustituidos por la lógica de competencia individual, y la disociación entre la esfera de lo político y de lo social. Las mujeres del MMAL resisten el modelo en ese eje central que podríamos denominar el “efecto liberal”: la “naturalización” del desempeño económico de los individuos en un mercado de competencias desiguales, y la ruptura de la fragmentación típica del modo de producción en el ámbito rural.

En cuarto lugar, con este gesto las mujeres rompen la “naturalización” de los roles tradicionales de género del sistema patriarcal:

asumen su protagonismo desde un rol de madres y esposas, pero subvierten (aún sin proponérselo) ese orden patriarcal en la medida en que generan acción pública desde el mundo privado, asumen el papel masculino de provisión y negociación, se posicionan como actores políticos y enfrentan al mundo masculino en dos aspectos centrales: el rol masculino dentro del núcleo y el desafío a las instituciones del orden patriarcal (justicia, sistema financiero, corporaciones rurales tradicionales, partidos).

## REFLEXIONES FINALES

### LAS ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES: ¿DINOSAURIOS O PRECURSORES?

En estas últimas páginas quisiéramos volver sobre algunos temas de carácter más general, luego de un proceso de reflexión y de investigación que esperamos haber reflejado. No está en nuestro ánimo ensayar respuestas, sino más bien plantear nuevos problemas que surgen a la luz de los estudios realizados.

Cuando iniciamos esta investigación propusimos una línea de análisis que suponía que los actuales procesos de globalización neoliberal estaban produciendo un proceso de *exclusión* económica, social y política de vastos sectores de la población rural. La hipótesis era que estos procesos de exclusión explicaban en buena parte el surgimiento de la protesta rural y de las organizaciones y movimientos del agro. Sin embargo, en el transcurso de la investigación decidimos descartar esta hipótesis, reforzando la que a la postre se convirtió en la hipótesis central. Las organizaciones y movimientos estudiados construyen su identidad a través de una condición que les es común: una identidad étnica, de género, de productor endeudado, de campesino sin tierra, etcétera. La identidad no está dada por una condición que surge de su posición en la estructura social ni como reacción ante una situación de exclusión.

A medida que comenzamos a trabajar sobre el concepto de exclusión lo encontramos poco apropiado para comprender los procesos de acción colectiva. Ha sido definido de distintas maneras, frecuentemente se utiliza en forma poco precisa, y tampoco parece ser un término más feliz que los ambiguos términos de pobreza o marginalidad. En realidad, el concepto de exclusión fue reactualizado en la década del noventa, en las sociedades desarrolladas, para explicar la situación en que quedaban aquellos trabajadores que al perder el

empleo también perdían otros derechos que le estaban adscriptos. Robert Castel sugirió que el incremento de las tasas de desempleo en los países desarrollados en realidad marcaba el fin de lo que él llamó la sociedad salarial, es decir, el fin de sociedades centradas no en el trabajo sino en el empleo. Éste le garantizaba al trabajador el acceso a otros bienes adscriptos a su condición de asalariado: la vivienda, la seguridad social, la prevención de la salud, la capacitación laboral y la educación, el retiro, etcétera. El notable incremento de las tasas de desempleo y su mantenimiento por largo tiempo significó la ruptura del pacto social que mantenía cohesionada a la sociedad en torno al empleo. Aquellos desafortunados trabajadores que caen en el desempleo prolongado o permanente se transforman en *excluidos*, porque no sólo han perdido el empleo sino también otros vínculos con la sociedad adscriptos a su condición de empleados. Castel (1997) utilizó para designar esta situación el concepto de “desafiliación”.

Ahora bien, la aplicación de la categoría de exclusión a los grupos sociales del campo no resulta demasiado convincente. Por un lado hay que tener en cuenta que la residencia rural suele estar unida a la posesión de tierra. Aquel que la posee, aunque sea en pequeñas cantidades, produce alimentos u otros bienes y difícilmente pueda ser categorizado como un excluido. Generalmente produce para sostenerse a sí mismo, pero en la sociedad rural actual siempre tiene algún tipo de vínculo con los distintos mercados (de productos, de trabajo, de consumo). Por lo tanto, la categoría de exclusión, tal como fue definida originalmente, no se podría emplear sin violentarla, a los campesinos y pequeños y medianos agricultores.

Por otro lado, los que no poseen tierra generalmente viven en pequeños pueblos rurales o en los suburbios de las ciudades, y trabajan en el medio rural como asalariados permanentes o zafrales en cualquiera de sus acepciones: changadores, temporeros, *boias-frias*, etcétera. Si trabajan, podrán ser explotados, pero no son excluidos.

Quedan las categorías de desocupados y subocupados del mundo rural, quienes sí podrían ser considerados como excluidos. Aunque en este caso también habría que descartar la hipótesis de que son “ejército de reserva”, es decir la masa de desempleados o subocupados cuya función es presionar a la baja los salarios de los ocupados –los peones rurales, porque si se aceptara que esa es su funcionalidad, también dejarían de ser excluidos. José de Souza Martins, hablando frente a un auditorio de militantes de la Comisión Pastoral por la Tierra, lo expresaba de esta manera: “...*nao existe exclusao...Voces cha-*



*man exclusao aquilo que constitui o conjunto de dificuldades, dos modos e dos problemas de uma inclusao precaria e instável, marginal”* (Martins, 1997: 26).

El estudio de las organizaciones y movimientos sociales en el agro que hemos realizado mostró que grupos de excluidos –como los desocupados o subocupados del campo– participan de movimientos como el MST de Brasil o el movimiento campesino de Paraguay, pero que los movimientos en sí no pueden ser considerados como movimientos de excluidos. Si bien el fenómeno de la exclusión puede ayudar a comprender lo que está ocurriendo, su utilización como hipótesis central significaría un error reduccionista. Las organizaciones y movimientos sociales estudiados cobijan a actores sociales que tienen motivos mucho más profundos y permanentes de agravio que aquellos que se desprenden de la actual etapa transitoria por la que está pasando el capitalismo. Reducir al análisis de la exclusión la lucha de los pueblos originarios por el reconocimiento de su identidad, o la lucha de las mujeres por el derecho a una identidad de género, o la lucha de campesinos, pequeños productores y trabajadores del campo por un lugar digno bajo el sol, es no haber comprendido cabalmente la profundidad de los reclamos y las utopías que alientan a estos movimientos sociales. En el caso de las expresiones de protesta analizadas en Argentina y Uruguay, su constitución sí expresa una reacción a una política económica expropiativa aplicada al sector productivo, pero mal podríamos caracterizar como excluidos a los pequeños y medianos productores agrícolas y ganaderos que constituyen su base social.

Una segunda reflexión que surge del análisis que hemos hecho de las organizaciones y movimientos sociales en el campo latinoamericano tiene que ver con el intento de avanzar en la comprensión de la fase del capitalismo en que nos hayamos. Por un lado hemos ensayado la hipótesis de la contradicción entre capital productivo y capital financiero como una de las características centrales que han impulsado a algunos de estos procesos de acción colectiva. Al menos dos de las organizaciones estudiadas se comprenden mejor si su análisis se realiza a la luz de esta contradicción. Esto significa que lo que ha sido definida como la contradicción principal del capitalismo, la contradicción entre capital y trabajo, no parece jugar un papel en el análisis de estos procesos de acción colectiva. Más aun, dentro de algunos de los movimientos sociales analizados convergen trabajadores y pequeños y medianos productores, mientras que en el movimiento mapuche intervienen actores que están en posiciones muy distintas de la estruc-

tura social. No desconocemos que en el agro latinoamericano también hay organizaciones de empresarios o de trabajadores asalariados rurales cuyo principio de representación está basado en la clase social. Pero para las organizaciones y movimientos sociales estudiados en este libro, la contradicción de clases parece tener poco sentido como elemento aglutinador y estructurador del movimiento. Los elementos que confieren identidad provienen más de una condición –étnica, de género, poseedores o no de tierra, productores endeudados– que de la posición en la estructura social. Esta es la hipótesis central sobre la cual se ha estructurado este libro.

El tercer problema que queremos plantear es el carácter pre-moderno o moderno de las organizaciones y movimientos estudiados. En reiteradas oportunidades se ha planteado la hipótesis de que en realidad los movimientos estudiados responden a reacciones de grupos sociales que no logran incorporarse a la modernidad: que son grupos sociales perimidos, sus propuestas obsoletas, una especie de *dinosaurios sociales* que insisten en reclamos que ya no tienen lugar en la etapa actual de capitalismo globalizado. Quisiéramos referirnos a este tema trayendo a colación la cuestión de la tierra.

Se ha sostenido frecuentemente el argumento de que la tierra ya no es un bien que debe ser reclamado por campesinos o pequeños productores. Quienes lo hacen no han comprendido la forma en que evoluciona el mundo capitalista globalizado, ya que su importancia como medio de producción es declinante. A medida que se desarrollan los complejos agroindustriales, el valor final de cualquier producto que se compra en las góndolas de un supermercado hoy contiene muy poco valor agregado por la agricultura. El mayor valor proviene de la industria procesadora de los productos agrícolas y de la industria para la agricultura. ¿Quién va a querer invertir en tierra cuando su contribución al valor agregado es cada vez menor? A pesar de estas valoraciones, la tierra es aún hoy un bien apreciado. Por un lado las recientes crisis financieras de nuestros países han hecho volver los ojos –y los bolsillos– de los inversionistas nuevamente a la tierra como reserva de valor. Por otro lado, creemos que es un error pensar que la tierra adquiere valor sólo como medio de producción.

En todos los procesos de acción colectiva estudiados reaparece la cuestión de la tierra. Sin embargo, este tema tiene un significado distinto para las distintas organizaciones y movimientos sociales. Lo interesante del caso es que la tierra reaparece no sólo como un bien económico –como un medio de producción– sino también, y con

mucha fuerza, como un bien simbólico. Lo es para los mapuches, pero también para las mujeres pampeanas, estando presente además en los actores de los demás procesos analizados. La Iglesia Católica siempre ha sostenido como doctrina el principio de que la tierra es un bien social, es decir que sobre ella tienen derechos no sólo quienes detentan el título de propiedad sino toda la sociedad, ya que constituye un bien único e irreproducible. Varias de las constituciones latinoamericanas sostienen el mismo principio. Puede pensarse que tanto la doctrina de la Iglesia como las constituciones forman parte del pasado. Sin embargo, el debate sobre los derechos sobre la tierra es hoy reeditado en la agenda de los países más adelantados del mundo occidental, como es el caso de Francia. Gracias al desarrollo tecnológico, hoy es necesario cultivar mucha menos superficie de tierra para alimentar a la sociedad. Esta situación, que se presenta por primera vez en la historia humana, permite valorar la tierra de modo diferente. Debido a las alteraciones ambientales creadas por una agricultura expoliadora y por el desarrollo industrial, la tierra es hoy vista no sólo como medio de producción, sino también como reserva de biodiversidad, como sustento de ecosistemas a los que hay que proteger, como paisaje que adquiere valor. En esta nueva situación, ¿por qué sólo el propietario de la tierra puede tener derechos sobre ella? ¿No debería ser toda la sociedad la que tiene derechos, ya que depende de los servicios varios que la tierra presta? Es así como la tierra adquiere en estas sociedades nuevamente un valor simbólico y no sólo un valor económico (Perrier-Cornet, 2002). Ahora bien, este planteo ¿no es similar a lo que sienten y reclaman las personas que integran los procesos de acción colectiva que hemos estudiado? En este sentido, estos movimientos ¿son rémoras del pasado porque reclaman algo tan anticuado como la tierra, o son anticipaciones del futuro?

Otra serie de reflexiones tiene que ver con el vínculo entre movimientos sociales y sistema de partidos. Como se dijo en la presentación, la selección de los cinco casos de estudio se hizo entre otras razones con la intención de que la situación del contexto fuese similar en todos los casos. En los cinco países la constitución fue avasallada, los derechos políticos suspendidos, y las garantías individuales desdeñadas durante los regímenes militares de la década del setenta. Durante la década del ochenta, y con diferencias propias de cada sistema político, en los cinco países se implementa una lenta y difícil transición hacia la democracia. Restaurada la democracia política, las organizaciones y movimientos sociales estudiados se transforman en

interlocutores del poder político. Son varias las interrogantes que surgen acerca de la relación entre sistema político y estas organizaciones. Por un lado, las personas que pertenecen a las organizaciones y movimientos sociales, a la hora de votar, suelen hacerlo por los partidos tradicionales. ¿Por qué ocurre esto? Una interpretación posible es que se reproduce la disociación liberal entre economía y política: canalizan a través del MS los reclamos de carácter económico, y a través de los partidos los reclamos políticos. Sin embargo, no queda claro en esta interpretación por qué no canalizan sus votos a través de los partidos de izquierda que supuestamente serían capaces de representarlos mejor. Otra interpretación es que en realidad los partidos tradicionales son partidos policlasistas que logran incluir a todos los grupos sociales en su representación. Una tercera es que al momento de votar se reproducen mecanismos de dominación y de clientelismo que históricamente han formado parte de nuestra cultura política.

Otra interrogante tiene que ver con la capacidad del sistema de partidos de representar y canalizar las demandas de organizaciones y movimientos sociales. Cuando los partidos no son capaces de representar estas demandas, ¿qué otros caminos quedan abiertos que no sean los conflictos? ¿Cómo es posible construir sistemas sociales con mayor cohesión en los que el conflicto no sea el único camino abierto para la expresión de los intereses de estos grupos sociales? Los partidos tradicionales que gobernaron en los cinco países durante estos años mantuvieron tensas relaciones con las organizaciones y movimientos sociales, como lo demostró esta investigación. Esta tensión, ¿se debe al desinterés de los partidos tradicionales en dar respuesta a las demandas? Si bien esta es la explicación más simplista y algo de esto puede existir, más bien creemos que el núcleo de la cuestión está en las limitaciones a la política impuestas desde la economía. La fase del modelo capitalista en que nos encontramos deja poco margen de maniobra a los partidos que gobiernan los estados nacionales. El capitalismo globalizado hace que las principales líneas de política económica y muchos de los resortes del manejo de la economía –las tasas de interés, la protección de los mercados internos, los precios de la energía, la deuda externa, para poner algunos ejemplos– estén fuera del alcance de los gobiernos latinoamericanos y más bien en los gobiernos de los países centrales y en las oficinas de los organismos internacionales. Las restricciones económicas impiden la formulación de políticas públicas que vayan en el sentido de dar respuestas a los reclamos que surgen desde los sectores más débiles y necesitados de la sociedad a

través de las organizaciones y movimientos sociales. De esa manera, las restricciones económicas se transforman en un obstáculo para la democracia. Este razonamiento es doblemente importante porque podría establecer los límites para posibles gobiernos de izquierda.

En el inicio del siglo XXI en algunos de los países llegan al gobierno coaliciones dominadas por partidos de izquierda: Lagos en Chile y “Lula” en Brasil. ¿Qué se puede adelantar respecto a las consecuencias de este hecho? Es preciso profundizar en la forma en que estas coaliciones llegan al poder. En ambos países –y posiblemente ocurra lo mismo con el Frente Amplio en el Uruguay en las elecciones de 2004– se llega al poder por medio de coaliciones partidarias hegemónicas por partidos de izquierda, pero que se han inclinado hacia el centro con el fin de recoger los votos de este sector del espectro, decisivos para ganar. Por lo tanto, el control del Parlamento es de alguna coalición o alianza entre partidos, pero no necesariamente del partido de izquierda, obligándolo a gobernar atendiendo a un amplio espectro político. Los nuevos gobiernos de coalición de izquierda tampoco tienen mucho margen para modificar las principales políticas macroeconómicas, en la medida en que los principales resortes del manejo de la economía están colocados fuera de su alcance. Por estas dos razones –restricciones de la política y restricciones de la economía– las reformas posibles podrían no ser demasiadas. Las coaliciones de izquierda que gobiernan, si bien posiblemente hayan contado con el apoyo de los movimientos sociales, corren el riesgo de defraudarlos en el ejercicio del gobierno. Es más, es posible que pasada una etapa inicial de apoyo a los nuevos gobiernos, los movimientos sociales pasen nuevamente a la oposición. ¿Implicaría esto un conflicto inmanejable para la coalición de izquierda? No necesariamente. En la medida en que no controla el Parlamento, es posible que al gobierno le sea conveniente tener al movimiento social en la oposición y dejar que opere como “empuje” de aquellas medidas que por sí sólo no es capaz de tomar. Pero esto nos vuelve a colocar en el punto inicial: ¿cómo hacer para que el sistema político sea capaz de representar (sin conflictos) las demandas de los MS?

## BIBLIOGRAFÍA

- Abulafia Salinas, Julio 1979 “La ofensiva ruralista de la década del 50 y las relaciones entre el Estado y la sociedad uruguaya”, en *Estudios Rurales Latinoamericanos* (Bogotá), Vol. II, N° 1.
- Allegretti, Mary 1997 “Ambientalismo Político y Reforma Agraria. De Chico Mendes al Movimiento de los Sin Tierra”, en *Nueva Sociedad* (Caracas), N° 150.
- Alvarez, Sonia 1999 “Feminismos diversos y desplazamientos desiguales” en <<http://www.fempres.cl/base/fem/alvarez.html>>.
- Antía, Fernando 2000 “La evolución de la economía uruguaya en 2000 y perspectivas para 2001” en *Oficina de Programación y Planeamiento Agropecuario. MGAP. Informe de Coyuntura 2000*.
- Arrighi, Giovanni, Terence Hopkins, Immanuel Wallerstein 1999 *Movimientos Antisistémicos* (España: Ediciones AKAL).
- Astori, Danilo 1979 *La Evolución Tecnológica de la Ganadería Uruguaya. 1930-1977* (Montevideo: Editorial Banda Oriental).
- Astori, Danilo 1982 *Neoliberalismo y Crisis en la Agricultura Familiar Uruguaya*. Colección Temas Nacionales N° 10 (Montevideo: Fundación de Cultura).
- Balbuena, Belarmino 2002 Entrevista realizada por el autor a Belarmino Balbuena, Coordinador General de la MCNOC (Asunción).
- Bareiro, Victor 2001 *Antecedente y Situación Actual de las Organizaciones Campesinas del Paragua*” (Asunción) Mimeo.
- Barrán, José P. y Benjamín Nahum 1967 *Historia Rural del Uruguay Moderno (1851-1885)* Vol. I (Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental).
- Barrera, Aníbal 1999 *El Grito Mapuche (Una historia inconclusa)* (Santiago de Chile: Editorial Grijalbo).
- Barrios, Oscar 2000 “La Pobreza en el Paraguay: Distribución del Ingreso y Características Socio-Económicas”, en *Revista Paraguaya de Sociología* (Asunción), Año 37, N° 108.
- Beck, Ulrich 1998 *La Sociedad del Riesgo. Hacia una nueva modernidad* (Barcelona. Editorial Paidós).
- Bengoa, José 1996 *Historia del Pueblo Mapuche* (Santiago de Chile: Editorial Sur).
- Bengoa, José 1999 *Historia de un Conflicto. El Estado y los Mapuches en el Siglo XX* (Santiago de Chile: Editorial Planeta/Ariel).

- Bengoia, José 2000 *La Emergencia Indígena en América Latina* (Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica).
- Bergamasco, Sonia y Luis A. Cabello Norder 1996 *O que sao Assentamentos Rurais* (Sao Paulo: Ed. Brasiliense).
- Berry, Albert septiembre-diciembre 1999 “Las Causas de la Pobreza Rural en América Latina y Políticas para Reducirla, con Referencia Especial al Paraguay”, en *Revista Paraguaya de Sociología* (Asunción), Año 36, N° 106.
- Bidaseca, Karina y Mariotti, Daniela 2001 “Viejos y nuevos actores en la protesta rural en América Latina. Una reflexión desde la cuestión de género”, en *Sociología* (Porto Alegre: UFRGS, IFCH, Programa de Posgraduação en Sociología), N° 5.
- Bidaseca Karina 2000 “El Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha. La emergencia de acciones colectivas, nuevos actores rurales y alianzas en el escenario del MERCOSUR” en Cuadernos para el Debate (Buenos Aires: Programa de Investigaciones Socioculturales en el Mercosur, IDES) N° 12.
- Bruna, Susana 1985 “Chile: las luchas campesinas en el siglo XX” en González Casanova, Pablo *Historia Política de los Campesinos Latinoamericanos* (México: Siglo XXI Editores).
- Brunini Pereira, Poppy 2001 *Mulheres rurais organizadas e suas perspectivas de género* (Brasil: Mimeo) Dissertação de Mestrado, Programa de Posgraduação em Extensao Rural. Universidade Federal de Santa Maria (UFSM-RS).
- Calderón, Fernando, Chiriboga, Manuel y Piñeiro, Diego 1992 *Modernización Democrática e Incluyente de la Agricultura en América Latina y el Caribe*. Serie Documentos de Programa N° 28 (San José de Costa Rica: IICA).
- Câmara, Antônio s/f “A Atualidade de reforma agraria. De canudos aos Sem-Terra: a utopia pela Terra” en *Olho da Historia*, N° 3. En Internet <<http://www.ufba.br>>.
- Revista del Centro de Promoción Rural* 1995 “Campesinas” (Buenos Aires) N° 2.
- Campos, Daniel R. 1987 “Lucha por la tierra y políticas públicas: un intento de periodización socio-histórica, 1811-1954”, en *Revista Paraguaya de Sociología* (Asunción: CPES) Año 24, N° 70.
- Castel, Robert 1997 *Las Metamorfosis de la Cuestión Social* (Barcelona: Paidós).
- Ceceña, Ana E. 2002 “Rebeldías Sociales y Movimientos Ciudadanos” en *Observatorio Social de América Latina* N°8 (Buenos Aires: CLACSO).

- Centro de Documentación y Estudios 1996-2001 *Informativo Campesino* (Asunción), Números 124 de Enero de 1999 al 164 de mayo de 2002.
- Centro Nacional de Coordinación de Beijing/Consejo Nacional de la Mujer, 1996. "Informe Nacional Situación de la Mujer en la última década en la República Argentina" (Buenos Aires: Centro Nacional de Coordinación. Preparatorio de la IV Conferencia Mundial de la Mujer). Mimeo.
- Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos 2001 "Pasado y Presente de la Realidad Social Paraguaya" en *La Cuestión Agraria en el Paraguay* Vol. III (Asunción: Ediciones y Arte SRL).
- Cháneton, July 1992 "Feminismo y movimiento social de mujeres: historia de un malentendido", en *Revista Feminaria* (Buenos Aires) Vol. V, N° 8.
- Chaves, Christine de Alencar 2000 "A marcha nacional dos Sem-Terra: um estudo sobre a fabricação do social" en *Relume Dumará: UFRJ* (Río de Janeiro: Núcleo de Antropología da Política).
- Chonchol, Jacques 1994 *Sistemas Agrarios en América Latina. De la etapa prehispánica a la modernización conservadora* (Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica).
- Cinam-Claeh 1962 *Situación Económica y Social del Uruguay Rural* (Montevideo: Centro Latinoamericano de Economía Humana).
- Cipae-Cpes 1995 *Conflicto de Tierra y Defensa Jurídica de Campesinos* (Asunción: Ediciones y Arte SRL).
- Cosse, Gustavo 1982 "Acerca de la democracia, el sistema político y la movilización social: el caso del 'ruralismo' en Uruguay", en *Estudios Rurales Latinoamericanos* (Bogotá), Vol. V, N° 1.
- Diani, Mario 1992 "The Concept of Social Movement", en *The Sociological Review* (Keele University), Vol. XL, N° 1.
- El Mercurio* 4/4/1999 Santiago, Chile. "Denuncian Estrategia Armada entre Mapuches".
- El Mercurio* 12/6/99 Santiago, Chile. "Gobierno Defendió Diálogos con Mapuches".
- El Mercurio* 17/7/1999 Santiago, Chile. "Primer Diálogo entre Pehuenches y Enersis".
- El Mercurio* 10/12/1999 Santiago, Chile. "SNA reitera inquietud por "terrorismo rural".
- El Mercurio*. 16/12/1999. Santiago, Chile. "Gobierno No Variará la Forma De Abordar Conflicto Mapuche".



*El Mercurio* 20/2/2000 Santiago, Chile. “Emboscada Mapuche Deja Tres Heridos”.

*El Mercurio* 22/4/2000 Santiago, Chile. “Mapuches cumplen 5 días de ayuno”.

*El Mercurio* 2/5/2000 Santiago, Chile. “299 familias recibirán subsidios”.

*El Mercurio* 15/6/2000 Santiago, Chile. “\$ 1.000 Millones para Mapuches Damnificados”.

*El Mercurio* 21/8/2000 Santiago, Chile. “Rebote de Violencia En la Zona Mapuche”.

*El Mercurio* 22/11/2000 Santiago, Chile. “Detienen a 7 Mapuches en Desalojo de Fundo”.

*El Mercurio* 22/12/2000 Santiago, Chile “Mapuches Acusan a Gobierno De Favorecer a Más Violentos”.

*El Mercurio* 27/12/2000 Santiago, Chile. “Violenta Emboscada a Camiones de Forestal”.

*El Mercurio* 28/12/2000 Santiago, Chile. “Habla líder de Coordinadora de Comunidades”.

*El Mostrador* 29/3/2000 Santiago, Chile. “Detenido líder de la Coordinadora Arauco-Malleco Víctor Ancalaf”.

*El Mostrador* 9/6/2000 Santiago, Chile. “Desalojo con 30 detenidos en la Conadi”.

*El País* 21/08/1999 “Se levantó el paro”. Pág. 7. Montevideo, Uruguay.

*El Sur* 19/2/1998 Periódico de la Octava Región, Chile. “Tomas mapuches preocupan a la CORMA”.

*El Sur* 25/2/1998 Periódico de la Octava Región, Chile. “Devuelven predio ocupado en Puren”.

*El Sur* 22/4/1998 Periódico de la Octava Región, Chile. “Conflicto de suelo con mapuche en su punto más crítico”.

*El Sur* 10/10/1998 Periódico de la Octava Región, Chile. “Nueve mapuches detenidos pasan a fiscalía militar”.

*El Sur* 14/10/1998 Periódico de la Octava Región, Chile. “Forestal reanudó la tala de bosque en el fundo Cuyinco”.

*El Sur* 15/10/1998 Periódico de la Octava Región, Chile. “Forestal dio orden de explotar bosque en el fundo Cuyinco”.

*El Sur* 17/10/1998 Periódico de la Octava Región, Chile. “Juez se constituyó en fundo ocupado por los mapuches”.

- El Sur* 26/10/1998 Periódico de la Octava Región, Chile. “Juez resuelve situación procesal de tres mapuches”.
- El Sur* 19/4/1999 Periódico de la Octava Región, Chile. “Encapuchados atacan un camión de Mininco en área de conflicto de Traiguén”.
- El Sur* 28/4/1999 Periódico de la Octava Región, Chile. “CORMA cuestiona gestión oficial en el tema mapuche”.
- El Sur* 28/7/1999 Periódico de la Octava Región, Chile. “Ataque mapuche hace peligrar el plan de vecindad”.
- El Sur* 3/8/1999 Periódico de la Octava Región, Chile. “Gobierno es débil frente a ataques de los mapuches”.
- El Sur* 20/3/2000 Periódico de la Octava Región, Chile. “Cacería de brujas en contra de mapuches”.
- El Sur* 1/6/2000 Periódico de la Octava Región, Chile. “Justicia y orden en las relaciones con indígenas”.
- El Sur* 5/10/2000 Periódico de la Octava Región, Chile. “S.E. entregó tierras a comunidades indígenas”.
- Equipo Expa 1982 “En Busca de la ‘Tierra Sin Mal’. Movimientos Campesinos en el Paraguay. 1960-1980” (Bogotá: Indo-American Press Service).
- Faron, Louis C. 1997 (1964) *Antüpaiñamko. Moral y Ritual Mapuche* (Buenos Aires: Editorial Nuevo Extremo).
- Federación Nacional Campesina 2001 *Por la Producción e Industrialización del Algodón* (Asunción: Tevecine SRL).
- Fernandes, Bernardo Mançano 2000 *A Formação do MST no Brasil* (Rio de Janeiro: Editora Vozes).
- Ferrara, Francisco 1973 *Qué son las Ligas Agrarias. Historia y Documentos de las organizaciones campesinas del Nordeste argentino* (Buenos Aires: Siglo XXI Editores).
- Finch, Henry 1980 *Historia Económica del Uruguay Contemporáneo* (Montevideo: Editorial Banda Oriental).
- Fletcher, Lea 1992 “La mujer y el lenguaje: no a la violencia sí al poder”, en *Revista Feminaria* (Buenos Aires), Vol. V, No. 8.
- Fogel, Ramón 1986 *Movimientos Campesinos en el Paraguay* (Asunción: Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos).
- Fogel, Ramón 1992 “Los Conflictos Agrarios y la Intervención del Estado”, en *Revista Paraguaya de Sociología* (Asunción), Año 29, N° 83.

- Fogel, Ramón (comp.) 1999 *La Investigación Socioambiental. Repaso de Lecciones Destiladas* (Asunción: Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios).
- Fogel, Ramón 2001 *Las Luchas Campesinas: Tierra y Condiciones de Producción* (Asunción: CERI-CIPAE).
- Galeano, Luis y Yore, Myriam 1994 *Poder Local y Campesinos* (Asunción: Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos).
- Galeano, Luis 1984 *Ensayos sobre Cultura Campesina* (Asunción: Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos).
- Galeano, Luis 1991 “Las Transformaciones Agrarias, las Luchas y los Movimientos Campesinos en el Paraguay”, en *Revista Paraguaya de Sociología* (Asunción), Año 28, N° 80.
- Galeano, Luis 1993 “Modernización Inconclusa y Transición Democrática en Paraguay”, en *Revista Paraguaya de Sociología* (Asunción), Año 30, N° 87.
- Galeano, Luis 1995 “La Exclusión Social en el Sector Rural del Paraguay”, en *Revista Paraguaya de Sociología* (Asunción), Año 32, N° 94.
- Gallegos, Norma y G. Miralles. 1998 “Afrontando la Crisis. Mujeres Trabajadoras del Alto Valle del Río Negro”, en *Revista La Aljaba, Segunda época. Revista de Estudios de la Mujer* (Universidad Nacional de Luján, Universidad Nacional del Comahue y Universidad Nacional de La Pampa), Vol. III.
- Garmendia, Ana Pía 2000 *Mujer y Agro: las mujeres, nuevos actores sociales en los movimientos agrarios argentinos. Análisis del Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha* (Universidad Nacional de Mar del Plata/FLACSO).
- Giarracca, Norma y Teubal, Miguel 2001 “El Movimiento de Mujeres agropecuarias en Lucha. Las mujeres en la protesta rural en Argentina” en Giarracca, Norma (comp.) *La protesta social en la Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país* (Buenos Aires: Alianza Editorial).
- Giarracca, Norma 1997 “Movimientos sociales o protesta social agraria en el Sur de América Latina” (UBA: mimeo, versión preliminar).
- Giarracca, Norma 1999 *El Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha: acerca de las nuevas formas de organización y acción colectiva* (Buenos Aires: Idelcoop).
- Giarracca, Norma 2000 “El Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha. La emergencia de acciones colectivas, nuevos actores rurales y alianzas en el escenario del Mercosur”, en *Cuadernos para el Debate* (Buenos Aires), N° 12.

- Giarracca, Norma 2001a (comp.) *La protesta social en la Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país* (Buenos Aires: Alianza Editorial).
- Giarracca, Norma 2001b *Movimientos sociales y protesta en los mundos rurales latinoamericanos: nuevos escenarios y nuevos enfoques* (con especial referencia al Cono Sur). Mimeo
- Gómez, Gerson y Pérez, Antonio 1979 “El Proceso de Modernización de la Agricultura Latinoamericana”, en *Revista de la CEPAL* (Santiago de Chile: CEPAL), N° 8.
- Gómez, Marcial 2002 Entrevista realizada por el autor a Marcial Gómez, Secretario General Adjunto de la FNC, Asunción, Paraguay.
- González, Carlos Alberto, Gladys Casaccia, Mirna Vázquez, y Celso Velázquez, 1987 *Organizaciones Campesinas en el Paraguay* (Asunción: Centro Interdisciplinario de Derecho Social y Economía Política. Universidad Católica).
- González Casanova, Pablo (comp.) 1985 *Historia Política de los Campesinos Latinoamericanos* Cuatro Tomos (México: Siglo XXI).
- González Parra, Claudio y Violeta Montero 1998 *La Globalización y los Desafíos de la Educación Intercultural Bilingüe: El caso de las Escuelas de Collico y Lleu Lleu* (Mimeo) Ponencia presentada al V Congreso Latinoamericano de Sociología Rural.
- González Sierra, Yamandú 1994 *Los Olvidados de la Tierra. Vida, organización y luchas de los sindicatos rurales del Uruguay* (Montevideo: FESUR/CIEDUR/NORDAN).
- Gonzalez Vera, Roque 2/6/2002 “Entrevista a José Parra dirigente de la MCNOC”. Diario *La Nación*. Asunción, Paraguay.
- Grupo de Investigaciones Agrarias 1983 *Historia del Movimiento Campesino* (Santiago de Chile: Academia de Humanismo Cristiano).
- Grzybowski, Cândido 1987 *Caminhos e descaminhos dos movimentos sociais no campo* (Brasil: Vozes de Petrópolis) 3ª ed.
- Guerra Cunningham, Lucía 1992 “Alternativas ideológicas del feminismo latinoamericano”, en *Revista Feminaria* (Buenos Aires), N° 8.
- Instituto del Tercer Mundo 1988 “Una visión desde el Sur”, en *Guía del Mundo* (Montevideo: Editorial Iter).
- Hobsbawm, Eric 1959 *Primitive Rebels. Studies in Archaic Forms of Social Movement in the 19<sup>th</sup> and 20<sup>th</sup> Centuries* (Londres: Norton & Company).
- Hobsbawm, Eric 2000 (1994) *Historia del Siglo XX* (Buenos Aires: Editorial Planeta).

- Ianni, Octavio 1994 "Agricultura e Mundialização" en *Cadernos de Sociologia. A Pesquisa Social na Agricultura do Sul do Brasil. Número especial* (Porto Alegre: UFRGS).
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) 1999. Censo Experimental de Pergamino. Buenos Aires, Argentina.
- Instituto de la Mujer 1998 "Género y ruralidad. Las mujeres ante el reto de la desagrarización", en *Serie Estudios* (Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales), N° 47.
- Jelin, Elizabeth 1985 "Los nuevos movimientos sociales en la Argentina contemporánea: una introducción a su estudio" en Jelin, Elizabeth (comp.) *Los nuevos movimientos sociales. Mujeres. Rock nacional. Derechos Humanos. Obreros. Barrios* (Buenos Aires: CEAL).
- Jelin, Elizabeth 1987. "Ciudadanía e Identidad. Una reflexión final", en Jelin, Elizabeth (comp.) *Ciudadanía e Identidad: las mujeres en los movimientos sociales latinoamericanos* (Ginebra: UNRISD).
- Jelin, Elizabeth 1999 "Diálogos, encuentros y desencuentros. Los movimientos sociales en el Mercosur", en *Serie Cuadernos para el Debate* (Buenos Aires: IDES), N° 10.
- Jenkins, James 1994 "La teoría de la movilización de recursos y el estudio de los movimientos sociales", en *Zona Abierta* (Madrid) N° 69.
- Knott, John William 1984 "Land, Kinship and Identity: the Cultural Roots of Agrarian Agitation in Eighteenth and Nineteenth Century Ireland", en *The Journal of Peasant Studies* (Londres: Frank Cass & Co. Ltd.), Vol. XXII, N° 1.
- Krugman, Paul 1991 "Regional Blocs: the Good, the Bad and the Ugly", en *International Economy* nov/dec. 1991 (Nueva York).
- La Arena* 7/10/1997 "Enfrentamiento del MMAL con el gobernador Marín", Santa Rosa, La Pampa.
- Lara Flores, Sara María 1994 "Las mujeres: ¿nuevos actores sociales en el campo?", en *Revista Mexicana de Sociología* (México), Año LVI, N° 2.
- Laraña, Enrique 1999 *La Construcción de los Movimientos Sociales* (Madrid: Alianza Editorial).
- Laurnaga, María Elena 2000 "Agenda Política de las Mujeres Rurales", en *Informe de Asesoría a la ANGRMU y FESUR* (Montevideo: Fundación Friedrich Ebert).
- Laurnagaray, Gustavo 30/4/1999 "Liberaron a una dirigente del agro", en *Clarín digital*, Buenos Aires, <<http://www.clarin.com.ar>>.

- Llambi, Luis 1994 "Globalización y Nueva Ruralidad en América Latina: una agenda teórica y de investigación", en *Revista de ALASRU* (Valdivia: UACH), N° 2.
- Lopes, Eliano Sergio Azevedo 2000 Comentario sobre "o Novo Mundo Rural" ou "A Nova Reforma Agraria" do Governo FHC en <<http://www.dataterra.org.br>>.
- Mariátegui, Jose Carlos 1991 (1928) *7 Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana* (Lima: Biblioteca Amauta).
- Martine, George 1991 "A Trajetoria da Modernização Agrícola: A Quem beneficia?", en *LUA NOVA. Revista de Cultura e Política* (San Pablo) N° 23.
- Martins, Jose de Souza 1985 "Los campesinos y la política en el Brasil", en Pablo Gonzalez Casanova (Coordinador) *Historia Política de los Campesinos Latinoamericanos*. Siglo Veintiuno Editores.
- Martins, Jose de Souza 1997 *Exclusao Social e a Nova Desigualdade* (San Pablo: Paulus).
- Martins, Jose de Souza 2000 "As Mudanças nas relações entre a sociedade e o Estado e a tendência a anomia nos movimentos sociais e nas organizações populares" en Jose de Souza Martins, *Reforma Agrária o impossível diálogo* (San Pablo: Editora de la Universidad de San Pablo).
- Max, Jutta 1992 *Mujeres y partidos políticos. De una masiva participación a una escasa representación. Un estudio de caso* (Buenos Aires: Ed. Legasa).
- Massollo, Alejandra 1998 "Defender y cambiar la vida. Mujeres en movimientos populares urbanos", en *Revista La Aljaba, Segunda época. Revista de Estudios de la Mujer* (Universidad Nacional de Luján, Universidad Nacional del Comahue y Universidad Nacional de La Pampa), Vol. III.
- Mc Adam, Doug, Mc Carthy, John y Zald, Mayer N. (Eds.) 1999 (1996) *Movimientos Sociales: perspectivas comparadas* (Madrid: Ediciones Istmo).
- Medeiros, Leonilde Servolo de 1993 *Reforma Agraria: concepções, controvérsias e questões* en <<http://www.dataterra.org.br>>.
- Melucci, Alberto 1982 *L' Invenzione del presente: Movimenti, Identità, bisogni individuali* (Bologna: Il Mulino).
- Melucci, Alberto 1991 "La acción colectiva como construcción social", en *Estudios Sociológicos de El Colegio de México* (México), Vol. IX, N° 26.
- Melucci, Alberto 1994 "Asumir un compromiso: identidad y movilización en los movimientos sociales", en *Zona Abierta. Movimientos Sociales, Acción e Identidad* (Madrid), N° 69.
- Melucci, Alberto 1996 *Challenging Codes. Collective action in the information age* (Reino Unido: Cambridge University Press).

- Methol Ferré, Alberto 1959 *La Crisis del Uruguay y el Imperio Británico* Colección La Siringa (Buenos Aires: Editorial Peña Lillo).
- Mires, Fernando 1991 *El Discurso de la Indianidad. La cuestión indígena en América Latina* (San José: Editorial DEI).
- Morley, Samuel y Vos, Rob 2000 "Pobreza y Crecimiento Dual en Paraguay", en *Revista Paraguaya de Sociología* (Asunción), Año 37, N° 107.
- Movimiento de Mujeres Agrarias en Lucha 1995 Plataforma al gobernador Rubén Marín. Documento interno del MMAL.
- Müller, Geraldo 1990 "Modernización y Pequeña Producción", en *Revista Paraguaya de Sociología* (Asunción), Año 27, N° 78.
- Navarro, Zander 1996 (Org.) *Política, protesta e ciudadanía no campo* (Porto Alegre: Editora de la Universidad UFRGS).
- Navarro, Zander 2002 "Mobilização sem emancipação- as lutas sociais dos sem-terra no Brasil", en Boaventura de Sousa Santos (Org.) *Reinventando a emancipação social. Produzir para viver: os caminhos da produção nao capitalista* (Río de Janeiro: Ed. Civilização Brasileira).
- Novaes, Regina Reyes 1997 *De corpo e alma: catolicismo, classes sociais e conflitos no campo* (Río de Janeiro: Graphia).
- Nun, José 2001 *Marginalidad y Exclusión Social* (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica).
- Uruguay. Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Valor Agregado Bruto del Sector Agropecuario. Información preparada por dicha oficina a requerimiento del autor. No publicada.
- Ortiz, Ricardo M. 1974 *Historia Económica de la Argentina* (Buenos Aires: Editorial Plus Ultra).
- Ostrovsky, Silvia 1997 *Desarrollo rural con enfoque de género: La experiencia del Proyecto Mujer Campesina* (Buenos Aires: Dirección de Desarrollo Agropecuario SAGPYA).
- Palau Viladesau, Tomás 1995 *La Promoción de Organizaciones Campesinas, ONGs y la Cooperación para el Desarrollo* (Asunción: Base-IS).
- Palau Viladesau, Tomás 1996 *Las Organizaciones Campesinas Paraguayas y el Desarrollo Rural Sustentable* (Asunción: Base-IS).
- Palau Viladesau, Tomás 2002 Entrevista realizada por el autor a Tomas Palau, Base-IS, Asesor de la MCNOC. Asunción, Paraguay.
- Panizza, Francisco 1988 "Poder Estructural y Hegemonía: Estado y Ganaderos en la década del 60", en *Revista de Ciencias Sociales* (Montevideo: Fundación de Cultura del Uruguay) N° 3.

- Pastore, Carlos 1972 *La lucha por la tierra en el Paraguay* (Montevideo: Ediciones Antequera).
- Pérez Ledesma, Manuel 1994 “Cuando lleguen los días de la cólera (Movimientos Sociales, teoría e historia)”, en *Zona Abierta* (Madrid), N° 69.
- Perrier-Cornet, Philippe 2002 *À Qui Appartient L'Espace Rural? Enjeux publics et politiques* (Francia: Éditions de l'aube/datar).
- Petras, James y Veltmeyer, Henry *La dinámica social del movimiento de trabajadores sin tierra: diez hipótesis sobre un liderazgo exitoso* (Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo), en Internet <<http://www.rebelion.org/>> (traducción de María Luján Leiva).
- Picerno, Alfredo 1998 “Informe sobre el endeudamiento bancario del sector agropecuario” en Oficina de Programación y Planeamiento Agropecuario, *Anuario 1998* (Montevideo: MGAP).
- Piñeiro, Diego E. 1984 “Gremialismo Rural y Transición Política: ¿Estancieros versus Agricultores Familiares?”, (Montevideo: CIESU), Documento de Trabajo N° 78/84.
- Piñeiro, Diego E. 1985 “El Plenario de Pequeños y Medianos Productores: un intento de crear un movimiento de agricultores familiares” en Filgueira, Carlos (comp.) *Movimientos Sociales en el Uruguay de Hoy* (Montevideo: CLACSO/ CIESU/ Ediciones de la Banda Oriental).
- Piñeiro, Diego E. (Editor) 1991 *Nuevos y No Tanto. Los Actores Sociales para la Modernización del Agro Uruguayo* (Montevideo: CIESU/Ediciones de la Banda Oriental).
- Piñeiro, Diego E. 1995 “El Impacto del MERCOSUR en la Agricultura Uruguaya” en Cloquell, Silvia y Santos, Eduardo (comp.) *Argentina frente a los Procesos de Integración Regional. Los efectos sobre el Agro* (Facultad de Ciencias Agrarias UNR/REDCAPA: Homo Sapiens Ediciones).
- Piñeiro, Diego E. 1996 “Desafíos e Incertidumbres para la Sociología Agraria en la Transición hacia un nuevo Modelo de Desarrollo” en Piñeiro, Diego E. (comp.) *Globalización, Integración Regional y Consecuencias Sociales sobre la Agricultura* (Montevideo: AUGM/UNESCO/Universidad de la República).
- Piñeiro, Diego E. y Fernández, Emilio 2002 *La Protesta Rural en el Uruguay* Serie Documento de Investigaciones N° 28 (Montevideo: Departamento de Sociología).
- Píriz M., Ringuélet, R. y Valerio Ma. C. 1999 *Un movimiento social agrario de los 90: las Mujeres Agropecuarias en Lucha de la Región Pampeana* Serie Investigaciones (NURES/FCS/Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires).



- Quijano, Aníbal 1971 (1967) "Los Movimientos Campesinos Contemporáneos en América Latina" en Lipset, S. M. y Solari, A. E. *Elites y Desarrollo en América Latina* (Buenos Aires: Paidós).
- Quiroga, María y María Eugenia Díaz, 1997 *Enfoque de género en el Desarrollo Rural* (Buenos Aires: SAGPYA).
- Red Rural de Organizaciones Privadas de Desarrollo 1993 *Participación y Organización Campesina* (Asunción) Comisión de Trabajo N° 4.
- Revista Feminaria 1992 "Dossier especial: El feminismo en estos tiempos neoliberales", en *Revista Feminaria* (Buenos Aires), Vol. V, N° 8.
- Ribeiro, Darcy 1969 *Las Américas y la Civilización* (Buenos Aires: Centro Editor de América Latina).
- Riquelme, Quintín 2002. Entrevista realizada por el autor a Quintín Riquelme. CDE. Asunción, Paraguay.
- Rivarola, Domingo 1981 "Modernización Agraria y Diferenciación Campesina", en *Revista Paraguaya de Sociología* (Asunción), Año 18, N° 52.
- Rivarola, Domingo 1990 "Proceso Agrario, Descentralización Estatal y Participación Campesina", en *Revista Paraguaya de Sociología* (Asunción), Año 27, N° 79.
- Rivarola, Domingo y Luis Galeano 1998 "Los Pobres Rurales como Actores Sociales", en *Revista Paraguaya de Sociología* (Asunción), Año 35, N° 102.
- Rivera Cusicanqui, Silvia 1985 "Apuntes para una Historia de las Luchas Campesinas en Bolivia (1900-1978)", en González Casanova, Pablo (comp.) *Historia Política de los Campesinos Latinoamericanos* (México: Siglo XXI).
- Rodríguez, Juan Carlos 1989 "El gremialismo campesino", en *Informativo Campesino* (Asunción: CDE) N° 10.
- Rosanda, Rossana 1985 "Nuevo enfoque para un dilema", en *La Razón* Buenos Aires.
- Rosanvallon, Pierre y Fitoussi, J. Paul 1997 *La nueva era de las desigualdades* (Buenos Aires: Ediciones Manantial).
- Rosanvallon, Pierre 1998 *El pueblo inhallable. Historia de la representación democrática en Francia* (París: Editorial Gallimard).
- Rosencoff, Mauricio 1987 *La rebelión de los cañeros. Y los hombres del arroz* (Montevideo: Editorial TAE).
- Rueda, María Elisa 1996 "La globalización económica y su impacto en la mujer pequeña productora o campesina", en *Conciencia* (Catamarca), Año 1, N° 1.

- Santos, José Vicente Tavares dos, Alex Niche Teixeira, Becker Gonçalves, Fernando Tadeu 2000 “Conflitualidade e violência nos espaços agrários do Brasil contemporâneo”, en *Revista Critica de Ciências Sociais*, N° 57/58.
- Santos, José Vicente Tavares dos 1992 “Violência no campo: o dilaceramento da cidadania”, en *Reforma Agraria*, Vol. XXII, N° 1.
- Sauma, Pablo (1993) *La distribución del ingreso en Paraguay*. Departamento de Investigaciones Socio-Económicas (DIS). Universidad Nacional de Asunción.
- Schmitt, Claudia Job 1992 *Tempo do Acampamento: a construção da identidade social e política do “colono sem-terra”* (IFCH/UFRGS).
- Schuster, Federico y Pereyra, Sebastián 2001 “La protesta social en la Argentina democrática: balance y perspectivas de una forma de acción política”, en Giarracca, Norma (comp.) *La protesta social en la Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país* (Buenos Aires: Alianza Editorial).
- Scobie, James R. 1968 *Revolución en las Pampas. Historia Social del trigo argentino. 1860-1910* (Buenos Aires: Solar / Hachette).
- Scott, Jean 1990 “El género: una categoría útil para el análisis histórico”, en Amelang y Nash (comp.) *Historia y género: las mujeres en la historia moderna y contemporánea* (Valencia: Alfons El Magnánim).
- Scribano, Adrián 1998 “Argentina cortada: cortes de ruta y visibilidad. El contexto del ajuste”, en López Maya (ed.) *La lucha popular, democracia, protesta popular en América Latina en los años del ajuste* (Venezuela: Ed. Nueva Sociedad).
- Steckbauer, Sonja M. 2000 “La Situación del Guaraní en el Paraguay Actual”, en *Revista Paraguaya de Sociología* (Asunción), Año 37, N° 108.
- Stédile, João Pedro y Bernardo Mançano Fernandes 2000 (1999) *Brava Gente. A trajetoria de MST e a luta pela terra no Brasil* (San Pablo: Editora Fundação Perseu Abramo).
- Tadeo, Nidia y Marcela Fedele 2000 *Movimientos Ambientales de Mujeres. Espacios de Solidaridad* (Buenos Aires) Ponencia presentada al Seminario organizado por la Facultad de Filosofía y Letras, UBA.
- Taglioretti, Graciela y Canapale, Alicia 1981 *Diagnóstico sobre el trabajo remunerado realizado a domicilio por la mujer habitante de pequeños predios rurales del Noreste de Canelones* (Montevideo: CIESU/IPRU).
- Tarrow, Sidney 1997 *El Poder en Movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y política* (Buenos Aires: Alianza Editorial).

- Teubal, Miguel y Rodríguez, J. 2001 "Neoliberalismo y crisis agraria", en Giarracca, Norma (comp.) *La protesta social en la Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país* (Buenos Aires: Alianza Editorial).
- Touraine, Alain 1987 *El Regreso del Actor* (Buenos Aires: EUDEBA).
- Varela, Paula 2000 *Ciudadanía y alteridad* (Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Gino Germani).
- Vigorito, Raúl *Criterios Metodológicos para el estudio de los complejos agroindustriales* (México: CET).
- Villagra, María Susana, Casaccia, Gladys y Ayala, María Teresa 1989 *Organizaciones Campesinas en el Paraguay (II). La búsqueda de la Autoexpresión*. (Asunción: CIDSEP).
- Wolf, Eric 1969 *Peasants Wars of the Twentieth Century* (Nueva York: Harper Torchbooks).
- Wolford, Wendy *Creating an Alternative Political Community: O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra* (California: Universidad de California, Berkeley, Dep. de Geografía).
- Zarza, Olga María 1988 "Las Ocupaciones de Tierras en Paraguay. El lado oscuro de la propiedad privada", en *Revista Paraguaya de Sociología* (Asunción), Año 25, N° 71.

## PUBLICACIONES DE CLACSO

- Giarracca y Levy  
*Ruralidades latinoamericanas*  
*Identidades y luchas sociales*
- Fernández Retamar  
*Todo Caliban*
- Toussaint  
*La bolsa o la vida*  
*Las finanzas contra los pueblos*
- Revista N° 14 OSAL  
*Revista del Programa del Observatorio Social*  
*de América Latina de CLACSO*
- Golbert  
*¿Hay opciones en el campo de las políticas sociales?*  
*El caso del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires*
- Grimson  
*La cultura en las crisis latinoamericanas*
- Babini y Fraga  
*Bibliotecas Virtuales para las Ciencias Sociales*
- Boron  
*Nueva Hegemonía Mundial*  
*Alternativas de cambio y movimientos sociales*
- Ceceña  
*Hegemonías y emancipaciones en el siglo XXI*
- Sader  
*La Venganza de la Historia*  
*Hegemonía y contra-hegemonía en la construcción*  
*de un nuevo mundo posible*

- Boron, Gambina y Minsburg  
*Tiempos violentos*  
*Neoliberalismo, globalización y desigualdad*  
*en América Latina (reimpresión)*
- Gómez  
*América Latina y el (des)orden global neoliberal*  
*Hegemonía, contrahegemonía, perspectivas*
- Revista N° 16 Chiapas  
*Edición Argentina*
- Torres Ribeiro  
*El rostro urbano de América Latina*
- Guerrero Cazar y Ospina Peralta  
*El poder de la comunidad*  
*Ajuste estructural y movimiento indígena*  
*en los Andes ecuatorianos*
- Riquelme  
*Los sin tierra en Paraguay*  
*Conflictos agrarios y movimiento campesino*
- Seoane  
*Movimientos sociales y conflicto en América Latina*
- De Barbieri  
*Género en el trabajo parlamentario*  
*La legislatura mexicana a fines del siglo XX*
- de la Garza Toledo y Salas  
*Nafta y Mercosur*  
*Procesos de apertura económica y trabajo*
- Boron  
*Estado, capitalismo y democracia en América Latina*
- Sader y Gentili  
*La trama del neoliberalismo*  
*Mercado, crisis y exclusión social (reedición)*
- Boron  
*Filosofía política contemporánea*  
*Controversias sobre civilización, imperio y ciudadanía*
- Alabarces  
*Futbolologías*  
*Fútbol, identidad y violencia en América Latina*

- Ayerbe  
*O Occidente e o “Resto”*  
*A América Latina e o Caribe na cultura do Império*
- Mollis  
*Las universidades en América Latina: ¿reformadas o alteradas?*  
*La cosmética del poder financiero*
- Gadotti, Gómez y Freire  
*Lecciones de Paulo Freire*  
*Cruzando fronteras: experiencias que se completan*
- Briceño-León  
*Violencia, sociedad y justicia en América Latina*
- Levy  
*Crisis y conflicto en el capitalismo latinoamericano: lecturas políticas*
- Schorr, Castellani, Duarte y Debrott Sánchez  
*Más allá del pensamiento único*  
*Hacia una renovación de las ideas económicas*  
*en América Latina y el Caribe*
- Singer  
*Izquierda y derecha en el electorado brasileño:*  
*la identificación ideológica en las disputas presidenciales de 1989 y 1994*
- López Maya  
*Protesta y cultura en Venezuela:*  
*los marcos de acción colectiva en 1999*
- Mato  
*Estudios y otras prácticas intelectuales latinoamericanas en cultura y poder*
- Boron  
*Imperio & Imperialismo*  
*Una lectura crítica de Michael Hardt y Antonio Negri*
- Boron y de Vita  
*Teoría y filosofía política*  
*La recuperación de los clásicos en el debate latinoamericano*
- Alimonda  
*Ecología política*  
*Naturaleza, sociedad y utopía*
- Gambina  
*La globalización económico-financiera*  
*Su impacto en América Latina*

- Ceceña y Sader  
*La guerra infinita*  
*Hegemonía y terror mundial*
- Ivo  
*Metamorfoses da questão democrática*  
*Governabilidade e pobreza*
- de la Garza Toledo y Neffa  
*El futuro del trabajo. El trabajo del futuro*
- de la Garza Toledo  
*Los sindicatos frente a los procesos de transición política*
- Barrig  
*El mundo al revés: imágenes de la mujer indígena*
- Torres  
*Paulo Freire y la agenda de la educación latinoamericana en el siglo XXI*
- Lanzaro  
*Tipos de presidencialismo y coaliciones políticas en América Latina*
- Mato  
*Estudios latinoamericanos sobre cultura y transformaciones sociales en tiempos de globalización 2*
- Mato  
*Estudios latinoamericanos sobre cultura y transformaciones sociales en tiempos de globalización*
- de Sierra  
*Los rostros del Mercosur*  
*El difícil camino de lo comercial a lo societal*
- Seoane y Taddei  
*Resistencias mundiales*  
*De Seattle a Porto Alegre*
- Sader  
*El ajuste estructural en América Latina*  
*Costos sociales y alternativas*
- Ziccardi  
*Pobreza, desigualdad social y ciudadanía*  
*Los límites de las políticas sociales en América Latina*
- Midaglia  
*Alternativas de protección a la infancia carenciada*  
*La peculiar convivencia de lo público y privado en el Uruguay*

- Giarracca  
*¿Una nueva ruralidad en América Latina?*
- Boron  
*Teoría y filosofía política*  
*La tradición clásica y las nuevas fronteras*
- Boron  
*Tras el búho de Minerva*  
*Mercado contra democracia en el capitalismo de fin de siglo*
- Balardini  
*La participación social y política de los jóvenes en el horizonte del nuevo siglo*
- Boron  
*La filosofía política clásica*  
*De la antigüedad al renacimiento*
- Boron  
*La filosofía política moderna*  
*De Hobbes a Marx*
- Várnagy  
*Fortuna y virtud en la república democrática*  
*Ensayos sobre Maquiavelo*
- Torres Ribeiro  
*Repensando la experiencia urbana en América Latina:*  
*cuestiones, conceptos y valores*
- Gentili y Frigotto  
*La ciudadanía negada*  
*Políticas de exclusión en la educación y el trabajo*
- de la Garza  
*Reestructuración productiva, mercado de trabajo*  
*y sindicatos en América Latina*
- Alabarces  
*Peligro de gol*  
*Estudios sobre deporte y sociedad en América Latina*
- Lander  
*La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales*  
*Perspectivas latinoamericanas*
- Strasser  
*Democracia & desigualdad*  
*Sobre la “democracia real” a fines del siglo XX*



Este libro se terminó de imprimir en el  
taller de Gráficas y Servicios S.R.L.  
Santa María del Buen Aire 347,  
en el mes de diciembre de 2004.  
Primera impresión, 1.500 ejemplares.

**Impreso en Argentina**